



FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES

SEDE México

Doctorado de Investigación en Ciencias Sociales

VII Promoción
2008- 2011

**Identidades, Trayectorias y Organización en las Decisiones
Estratégicas de un Movimiento: La Lucha por la Soberanía
Alimentaria en México**

**Tesis que presenta Joaliné Pardo Núñez
para obtener el grado de Doctora en Investigación en
Ciencias Sociales con mención en Sociología**

Dirección: Dra. Ligia Tavera Fenollosa (FLACSO-México)

Lectores

Dr. Rafael Reygadas Robles-Gil (UAM-Xochimilco)

Dr. Peter Rosset (CECCAM-Vía Campesina)

Línea de Investigación: Instituciones, Políticas Públicas y Acción Colectiva
Seminario de Tesis: Problemas Ambientales y Procesos Sociales

México D.F., Agosto del 2011

Con agradecimiento al financiamiento otorgado por CONACYT para la obtención
del grado y la realización de la presente investigación

Resumen

Se analizan las diferencias y los motivos de separación entre dos movimientos sociales que pugnan por la soberanía alimentaria en México. Se revisa la historia de los actores sociales que los conforman: comunidades indígenas, movimientos sociales y organizaciones no gubernamentales, principalmente, que pese a estar unidos en un momento previo de la acción colectiva, definieron afinidades específicas para integrar uno u otro movimiento, basándose en las formas de ver el problema, las estrategias y las formas organizativas necesarias para entablar la lucha.

Las diferencias entre movimientos se entienden desde: 1. Las identidades y funciones sociales asignadas de cada actor colectivo, que definen configuraciones sociales específicas, 2. La estructura organizativa que los actores de cada movimiento han acordado para la toma de decisiones estratégicas, incluyendo la asignación de funciones internas y formas de decidir, y 3. Las decisiones estratégicas que orientan la acción pública y contenciosa de cada movimiento.

Se concluye que las diferencias en las configuraciones sociales y estructuras organizativas han marcado trayectorias que gradualmente han llevado a entender los objetivos del movimiento, así como sus estrategias aceptables de manera irreconciliablemente diferente.

Palabras Clave: ONGs, identidad, decisión estratégica, movimiento indígena, movimiento campesino, soberanía alimentaria, movimiento antisistémico

Abstract

I analyze the differences and the motives of division between two social movements struggling for food sovereignty in Mexico. I review the history of the social actors that conform each movement: indigenous communities, social movements and non-governmental organizations mainly, who despite being united in a previous moment for collective action, defined specific affinities, based on identities, framing processes and the social functions perceived for each social actor. These affinities allowed for the conformation of two movements with different strategic decisions for orienting their action.

Differences between movements are understood from: 1. Identities and their social functions, which result in specific social configurations for each movement, 2. The organizational structure that each movement has agreed for decision making, including who is in charge of deciding and how decisions are made, and 3. The strategic decisions that orient public and contentious action of each movement.

I conclude that the differences in social configurations and organizational structures have defined trajectories that have gradually derived in different ways of perceiving the objectives of the movement, as well as its strategic options and ideal solutions.

Keywords: NGOs, identity, strategic choice, indigenous movement, peasant movement, food sovereignty, antisystemic movements

Agradecimientos

Agradezco profundamente a la gente y organizaciones de la Campaña Sin Maíz No Hay País, que me permitieron estar en diferentes momentos del movimiento y me dieron siempre una fresca bienvenida.

Gracias también a la Red en Defensa del Maíz que me permitió asistir a reuniones y asambleas, en un ambiente cálido.

A toda la gente entrevistada, que con confianza me dio sus opiniones y perspectivas con respecto al México actual y a los problemas en materia de soberanía alimentaria; las entrevistas, además, fueron pláticas muy agradables e interesantes.

A mi directora y mis lectores de tesis, porque en todo momento fueron un cuerpo tutorial constructivo que me permitió hacer de esta una buena investigación: aprendí mucho de ustedes.

A mis compitas de doctorado que me enseñaron un montón con paciencia sobrenatural. Además hicieron de mi transición disciplinaria un proceso divertidísimo...gracias en serio.

A mis amigos, que saben quienes son y cuanto los quiero.

Al bicho.

A mis dos madres y a mi padre.

Índice

Introducción	1
Capítulo I	
Elementos Analíticos de los Movimientos Sociales	17
1.1. Configuración social de un movimiento	17
1.2. Movimientos sociales.....	19
1.2.1. Latencia y visibilidad	20
1.2.2. Trayectorias.....	22
1.3. Niveles organizacionales del movimiento social	23
1.3.1 Comunidad del Movimiento Social	24
1.3.2 Organizaciones del movimiento social (OMS).....	26
1.4. Identidad colectiva y emoción en los movimientos sociales	32
1.4.1. Sentimientos y emociones.....	35
1.4.2. Alianzas.....	38
1.5. Liderazgo	39
1.6. Decisiones estratégicas en los Movimientos Sociales: arenas, demandas y tácticas.....	43
1.6.1 Repertorios estratégicos	44
1.6.2 Estrategia.....	47
1.6.3. Emoción, identidad colectiva y estrategias	48
1.6.4. Demandas	50
1.6.5. Arenas	52
1.6.6. Tácticas	53
1.7. Orientación estratégica en los movimientos sociales.....	55
1.7.1 Movimientos sistémicos y antisistémicos	57
Capítulo II	
Organizaciones No Gubernamentales y Movimientos Sociales en México.....	64
2. 1. Introducción	64
2.2. Caracterización de las Organizaciones No Gubernamentales.....	66
2.3. Las ONGs en México.....	71
2.3.1 Las ONGs en la coyuntura de 1994	78
1.2.4. Los grupos de base ante las ONGs en la coyuntura de 1994	82
2.5 Formas actuales de vinculación entre ONGs y Grupos de Base.....	87
2.6. ONGs y movimientos sociales.....	88
2.6.1. Patrones de colaboración entre ONGs y movimientos sociales.....	90
Capítulo III	
Antecedentes del Movimiento por la Soberanía alimentaria en México.....	97
3.1. Introducción	97
3.2. El movimiento campesino en México.....	97
3.3. Movimiento Indígena.....	108
3.4. El movimiento por la soberanía alimentaria. Antecedentes.....	115
3.4.1. Antecedente común: Foro Nacional por la Soberanía Alimentaria	116

3.4.2. Biotecnología y Transgénicos: el nacimiento de la Red en Defensa del Maíz	119
3.4.3. El Nuevo Movimiento Campesino: El Campo No Aguanta Más	127
3.4.4. Ley de Bioseguridad	132
3.4.5. Campaña Nacional Sin Maíz no hay País	137
3.4.6. Red en Defensa del Maíz	141

Capítulo IV

El movimiento por la soberanía alimentaria en México..... 145

4.1. Introducción	145
4.2. Red en Defensa del Maíz	146
4.2.1. Comunidad del movimiento	146
4.2.2. Organizaciones del Movimiento Social (OMS).....	153
4.2.3. Percepciones de las OMS en torno al movimiento social	159
4.2.3. Organización Social del Movimiento.....	162
4.2.4. Latencia y visibilidad	164
4.2.5. Diferencias entre iniciativas.....	170
4.4. Campaña Sin Maíz no hay País.....	171
4.4.1. Comunidad del Movimiento Social	171
4.4.2. Organizaciones del Movimiento Social	176
4.4.3. Percepciones en torno al movimiento social	180
4.4.5. Organización Social del Movimiento.....	185

Capítulo V

Discusión 191

5.1. Recuento teórico.....	191
5.2. Trayectorias y Configuración Social en el Movimiento por la Soberanía Alimentaria.....	194
5.3. Identidades, Configuración Social y Organización Social.....	205
5.4. Identidad, Configuración Social y Decisiones Estratégicas.....	208
5.4.1. Demandas	209
5.4.2. Arenas	219
5.4.3. Tácticas. Lucha vs. Resistencia.....	223
5.5. Decisión estratégica y configuración social.....	232

Conclusiones.....237

Bibliografía.....246

Glosario.....257

Introducción

La presente investigación da cuenta de la historia y analiza las diferencias entre dos movimientos sociales en México, aquellos que como estandarte de lucha tienen conseguir la soberanía alimentaria en el país. Empleo la narrativa histórica para describir los momentos políticos y las relaciones entre actores sociales que fueron determinantes para la división de un conglomerado amplio de organizaciones, quienes en un primer momento, se perfilaban para constituir un movimiento sólido y unificado que conjuntara al contingente campesino y al indígena. Para analizar y entender las diferencias actuales, desagrego elementos referentes a las trayectorias, identidades, configuraciones sociales y estructuras operativas que constituyen a los actores de cada movimiento. Argumento que estas diferencias de corte ideológico, elaboradas y reforzadas a lo largo de trayectorias de activismo, devienen en decisiones estratégicas que impiden la construcción de un movimiento unitario, o incluso el establecimiento de alianzas entre ambos movimientos para momentos puntuales de lucha, pues ambos difieren en su forma de concebir las causas y de evaluar los éxitos.

Ambos movimientos comparten un pasado común que implica a actores sociales comunes en momentos de acción colectiva conjunta; sin embargo, algunos eventos en las relaciones sociales necesarias para definir las rutas de actuación, han detonado en rupturas graduales entre las organizaciones involucradas, teniendo como resultado dos movimientos con configuraciones sociales (actores y funciones), estructuras organizacionales (organización interna) y aproximaciones diferenciadas hacia el éxito en sus objetivos (decisiones estratégicas). Considero, junto con Sewell (1996) que los eventos son momentos decisivos en las relaciones sociales, en los cuales se requiere del consenso para la acción; el resultado de esta interacción puede ser un fortalecimiento en las relaciones o la generación de fracturas, graduales o permanentes para el movimiento. Estos eventos, con resultados de fractura o de unión, han sido constantes para el universo del movimiento por la soberanía alimentaria en México.

En general, hablar de un movimiento social es hablar de convergencias y de relaciones, entre personas y organizaciones con trayectorias de activismo que coinciden en la intención de lograr cambios específicos al interior de la sociedad, o en la relación de la sociedad con el gobierno.

Dos niveles son determinantes en las convergencias para que permitan relaciones sólidas al interior del movimiento: aspectos ideológicos que cohesionan, permitiendo consensos para enmarcar el problema y sus responsables, sus impactos sociales y sus posibles soluciones; así como aspectos prácticos que derivan de los consensos ideológicos para planear la acción colectiva de manera estratégica: tomar decisiones con respecto a las demandas que se plantearán, las arenas o ámbitos de actuación del movimiento, así como las tácticas que se emplearán para conseguir logros y avanzar las demandas. La concepción de causas, la aceptación de tácticas de protesta y de lucha y la decisión de las arenas de actuación no son elementos menores; debe de existir cierto consenso que permita la actuación efectiva y permanente, de acuerdo con los principios ideológicos e identitarios de quienes participan (Gamson, 1991; Polleta y Jasper, 2001).

Los consensos para la acción y las convergencias ideológicas subyacentes, implican diferentes niveles de interacción al interior del movimiento: personas, organizaciones del movimiento social, comunidad del movimiento social y movimiento social (McCarthy y Zald, 1977).

La estrategia -referente a las acciones visibles del movimiento para conseguir el cambio deseado- ante el Estado, la sociedad o ambos, es el resultado de convergencias (positivas), que permiten acuerdos entre varias personas que comparten formas de calificar al mundo y visiones con respecto a los cambios que son necesarios para su buen funcionamiento.

El movimiento por la soberanía alimentaria en México, en su forma actual, es el resultado de historias de activismo cargadas de emociones, convergencias –y divergencias- en torno a las intenciones y a las acciones del movimiento. A lo largo de estas trayectorias, han existido alianzas y rupturas en las relaciones que han llevado a la gradual formación de dos movimientos con pocos elementos en común además de su eslogan de lucha.

Los conflictos que analíticamente supone hablar de dos movimientos con aproximaciones estratégicas distintas en torno a un mismo tema, me obligan a precisar de qué forma emplearé los términos a lo largo de la presente tesis. Si bien se trata de dos movimientos que difieren en su configuración social, estructura organizativa y decisiones estratégicas, la mención eventual de ambos como un movimiento, atiende a la necesidad de hablar del universo de la acción colectiva por la soberanía alimentaria, sobre todo al hablar de momentos políticos o sociales que

repercuten en ambos movimientos provocando la movilización, no conjunta, pero simultánea. Hacer referencia al movimiento como unidad, implica la industria del movimiento social por la soberanía alimentaria en México, esto es, a todas las organizaciones que tienen como objetivo el conseguir las preferencias amplias del movimiento social (McCarthy y Zald 1977:1219).

Los actores que integran a un movimiento social tienen trayectorias y puntos de vista, que inyectan capacidades variadas para la acción. De esta forma, las personas dan vida y estructura a las organizaciones, normando su dinámica interna, formulando objetivos y dando una imagen exterior sobre sus ideales con sus formas de acción (Brewer, 2001). Las organizaciones a su vez, como entes con personalidad jurídica que agrupan a personas bajo ciertas normas de convivencia y objetivos de trabajo, vierten sus conocimientos, experiencias y estructura en los diálogos continuos con otras organizaciones y personas para construir y dar forma al movimiento, que a su vez tendrá dinámicas internas de funcionamiento y deliberación propias, capacidades diferenciadas, quizá aumentadas sobre las que tengan las organizaciones de manera individual, y una imagen exterior que se reflejará en sus decisiones estratégicas de acción.

Las personas y organizaciones buscarán atraer a sus contactos y conocidos (alianzas) al movimiento para tener mayor capacidad de movilización o de contención al contar con mas recursos para accionar, aunque sean éstos últimos de carácter temporal.

Todos estos elementos implican interacciones que producirán unidad entre quienes se asumen como parte del fenómeno empírico de acción colectiva que denominaremos movimiento social (Melucci, 1999).

En el presente trabajo, me concentraré en explicar la conformación de dos movimientos con amplias diferencias en la actualidad, pero con pasados comunes a las organizaciones y colectivos sociales que los integran. Las trayectorias compartidas de algunos actores y las graduales escisiones en las relaciones, derivadas de reacciones diferenciadas ante eventos comunes, hacen necesario dar cuenta de momentos de la las luchas campesinas e indígena que, hasta el momento, permanecen desiertos en la literatura académica en México.

El planteamiento constante en este trabajo, es pensar en el movimiento social como un agente dinámico cuyos actores y relaciones constitutivas cambian constantemente, redefiniendo-se y sus puntos de vista hacia la realidad y hacia los

otros actores sociales, de tal forma que, así como es importante dar cuenta de los cambios en los movimientos, es el hacer lo mismo respecto a los aspectos más emocionales que subyacen a las relaciones sociales, mezclando la historia de las luchas con las historias de sus actores, quienes aprenden y reflexionan sobre la acción contenciosa constantemente.

La hipótesis que dirige el análisis en la presente investigación, parte de pensar que las estrategias definidas por cada movimiento, son un producto directo de las relaciones sociales entre las organizaciones que lo constituyen, las cuales se desarrollan en redes con entramados específicos, con diferencias evidentes en su configuración social (identidades de los actores), así como en su estructura operativa. Cada entramado vincula a los actores reflejando aspectos culturales (Emirbayer y Goodwin, 2004), identitarios (Gamson, 1991; Polleta y Jasper, 2001), e ideológicos (Klandermans, 1993; Snow y Benford, 2000) que repercuten en los acuerdos operativos (Meyer y Staggenborg, 2008), tanto al nivel organizacional como en los consensos para construir al movimiento. Estos elementos permiten la vinculación en formas específicas, llevando al consenso para el establecimiento de jerarquías y la asignación de funciones para cada tipo identificado de actor social; entre estas funciones figura la toma de decisiones estratégicas que orientan la acción del movimiento y le dan una imagen hacia el exterior. Las diferencias en las relaciones sociales y en los actores que constituyen a cada movimiento, tienen un origen importante en las trayectorias de activismo de cada actor social, pues han permitido aprendizajes y reflexiones diferenciadas para ver soluciones concretas en la lucha por la soberanía alimentaria para México.

El campo organizacional en el que se inserta cada actor social no es un espacio neutral, sino político, atravesado por intereses, conflictos y alianzas con contenido normativo (Tavera, en prensa); esto resta libertad para la acción individual no consensuada en representación del movimiento a las organizaciones que la integran, bajo pena de violentar las relaciones o, incluso, de provocar una ruptura irreversible (Stoeckemer, 2009).

Los actores del movimiento, con trayectorias comunes, pero a la vez individuales de cada persona y organización, dotan de recursos diferenciados al movimiento, pues al mismo tiempo que las relaciones habilitan a la acción, aportan componentes restrictivos basados en formas de evaluar las acciones y orientaciones

aceptables, o las que no lo son, esto es: existen restricciones de acción dadas por las dinámicas de funcionamiento inherentes al movimiento (Freeman, 1982, 1999).

Para entender 1. La influencia de las trayectorias y las historias de los actores sociales en la definición de relaciones diferenciadas de colaboración (configuraciones sociales), 2. El papel que juega la identidad y la función de los actores sociales que conforman el movimiento en sus formas organizativas, 3. La influencia de las formas organizativas sobre las formas de enmarcar o definir los problemas, y 4. La influencia de las configuraciones sociales y las formas organizativas entre sí y sobre las decisiones estratégicas tomadas por cada movimiento, he estructurado la tesis de la siguiente forma:

En el primer capítulo, presento los elementos teóricos que me permitirán deconstruir al movimiento por la soberanía alimentaria. Estos elementos han surgido como un dictado del análisis en una contrastación constante entre teoría y realidad, de tal forma que atienden al planteamiento final de la hipótesis y me permiten ofrecer una integración novedosa de literatura, pues si bien aterrizo las diferencias de los movimientos en sus decisiones estratégicas, trazo estas decisiones a las variedad de actores sociales que confluyen en cada movimiento y a los arreglos normativos que definen su organización interna.

La literatura que permite entender las decisiones estratégicas desde una perspectiva que supera a lo meramente instrumental, esto es, como producto únicamente de las intenciones de tener logros políticos para el movimiento, es escasa, figuran autores como Jasper y Polleta (2001), Smithey (2002), Reger et. al (2008), quienes se concentran en entender a la identidad como un determinante, interno al movimiento, que opera para definir afinidades y permanencia en un movimiento, además de servir como filtro a los actores para aceptar o rechazar opciones estratégicas, dependiendo de aspectos ideológicos que se priorizan. De esta forma, cada movimiento filtra las posibilidades de acción para que las elegidas vayan de acuerdo con los postulados generales de la identidad colectiva que se resaltan.

En otro cuerpo de literatura, Marrullo (1998), Ganz (2001) Meyer y Staggenborg (2008), Reger (2006), Freeman (1982), permiten entender a las decisiones estratégicas como un derivado de las formas organizacionales, los recursos materiales e intelectuales del movimiento. Estos autores enfatizan las experiencias de los actores y sus marcos ideológicos como un filtro para definir las

formas de organización, lo que dota al movimiento de capacidades y recursos específicos para definir posibilidades en los repertorios estratégicos.

Benford y Snow (1998, 2000), enfatizan los marcos o delimitaciones que los actores hacen de los problemas, de su impacto en aspectos concretos de la vida social y las asignaciones de responsabilidad a otros actores. Estos autores, pioneros en el análisis de los marcos colectivos de significación, comienzan el análisis de los marcos discursivos empleados por los movimientos, sin embargo enfatizan poco el papel de las diferentes identidades que convergen en la planeación de la acción social; de igual forma, subestiman el carácter de construcción continua y reelaboración de los marcos, para lo cual Klandermans (1993) ofrece una perspectiva más constructivista.

La revisión bibliográfica que se realizó a lo largo de todo el proceso de investigación, reflejó un vacío importante en la literatura: las identidades propias de cada actor social dentro del movimiento como definitorias de una configuración social específica, determinante, a su vez, en la estructura organizacional mediante la cual se normará el funcionamiento interno del movimiento.

Coincido plenamente con los autores que afirman a la identidad como guía para la orientación estratégica, pero considero que es difícil hablar de una identidad colectiva del movimiento, es importante entender los diferentes niveles de identidad que convergen, y si bien existe una identidad de carácter más general que se ve reflejada en la imagen exterior, importante para definir afinidades de nuevos integrantes, las identidades grupales que convergen, basadas en afinidades específicas, permiten que cada actor colectivo se halle cómodo ocupando una función específica dentro del movimiento y asuma su papel. Polleta y Jasper (2001:291) definen a la identidad colectiva como la conexión moral, cognitiva y emocional de un individuo con una comunidad más amplia, pudiendo ser esta una institución o una categoría. Esta definición se complementa con la dada por Brewer (2001) desde la psicología social, que implica la percepción de un estatus o relación con otros en torno a identidades y normativas asumidas. Si bien la identidad se define en torno a atributos percibidos como específicos y compartidos por un grupo acotado, la identidad del grupo también está en función de su relación con otros y de su función social en esta relación. Las formas de organización interna, que implican jerarquías y normativas, son también producto de la confluencia de identidades; esta confluencia encuentra acomodos normativos específicos que están en función de las percepciones

y autopercepciones de la función social cada actor social. Esto es, si bien las formas organizacionales son determinantes para la toma de decisiones estratégicas, y éstas deben de estar acordadas y avaladas por las identidades que participan, es importante entender cómo estas identidades influyen y determinan a las formas organizacionales mismas, permitiendo que el movimiento funcione armónicamente.

Las decisiones estratégicas, que comunican el mensaje del movimiento hacia el exterior, encuentran una fuerte vinculación con los aspectos normativos, culturales e identitarios de los actores designados para tomarlas, por ello, la configuración social, entendida como la tipología de identidades y de actores sociales, es importante para entender el por qué de las formas organizativas, y éstas a su vez, permiten un análisis más fino de las decisiones estratégicas tomadas.

El movimiento por la soberanía alimentaria ofrece un caso de estudio único a nivel de los movimientos sociales en México: permite comparar a dos movimientos con una misma bandera de lucha, pero que difieren en el enmarcamientos del problema y en el diagnóstico de la solución, teniendo decisiones estratégicas distintas. El movimiento como caso de estudio permite, además, entender estas estrategias como resultado de relaciones específicas, diferenciadas claramente en funciones y jerarquías, entre actores con identidades similares. El movimiento en general, es pluricultural y multi-identitario, característica de los denominados nuevos movimientos sociales; sin embargo, a este movimiento no solamente lo caracterizan las identidades étnicas que sirven de marco de referencia a los diferentes actores que participan, sino las identidades más institucionales de las organizaciones que participan, una de ellas, las ONGs, con escasa, si no es que nula, caracterización en los estudios sobre movimientos sociales, como organizaciones del movimiento social. Las referencias y sistematizaciones que documentan la participación de ONGs en los movimientos sociales, encuentran a este tipo de actor como un aliado externo, mas no como un actor social constitutivo del movimiento mismo.

Por ello, en el segundo capítulo, reviso la historia de las ONGs en México como actores de la sociedad civil organizada con gran relevancia en distintos ámbitos de acción, pero también altamente controversiales. Las controversias que suscitan las ONGs atienden a perspectivas teóricas sobre sus funciones sociales, más que a los logros que han tenido; autores como James Petras, Saturnino Borrás y Luis García, consideran que se trata de actores con funciones de intermediación que confunden este papel con el de la representación de intereses, lo cual les lleva a interpretar las

necesidades y a definir objetivos para los actores de base, comprometiendo intereses cruciales a las agendas de las financiadoras, lo que únicamente les permite operar con proyectos cortoplacistas, en vez de impulsar procesos de cambio estructural profundo.

Otra mirada, que se concentra en ver la labor social y los logros de las ONGs, particularmente en México y Latinoamérica, resalta su labor como actores que contribuyen a la democratización del país y a modificar las agendas políticas en distintos ámbitos del desarrollo, con contenidos participativos elaborados en conjunto con distintos actores de la sociedad civil, organizada y no. Ninguno de estos cuerpos de literatura resalta el papel de las ONGs como organizaciones de los movimientos sociales, con papel activo y funciones diferenciadas de acuerdo con su constitución social, sus ámbitos de trabajo y sus trayectorias de activismo.

El capítulo 2 entonces pretende introducir la historia y las perspectivas de análisis sobre las ONGs, considerando particularmente aquellas de trabajo en el ámbito rural, que son quienes actualmente participan de manera importante en la construcción de los movimientos por la soberanía alimentaria. La presentación sobre la historia y las funciones de las ONGs de trabajo rural, estaría incompleta si no se presentan claramente los conflictos que, más allá de la academia, han estado presentes entre las ONGs mismas y que han contribuido, en gran medida, a definir la identidad organizacional que cada una asume. Estos conflictos se presentaron a nivel nacional a raíz de la emergencia pública del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en 1994, e involucraron a las ONGs en todo el país, quienes de manera interna, pero también en sus relaciones con los actores de base, experimentaron conflictos de identidad y función. A estos conflictos y cuestionamientos contribuyeron los actores sociales de base, principalmente el ámbito rural campesino e indígena, actores que ante los planteamientos del movimiento zapatista, también tuvieron que redefinir su papel en la sociedad mexicana, en muchas ocasiones dejando de lado un papel pasivo para unirse al movimiento que ponía a los indígenas y campesinos como actores centrales para la reconfiguración de los ideales de desarrollo del país.

Las ONGs, que hasta entonces habían asumido un papel de apoyo social que subsanaba los huecos dejados por el retiro del Estado¹, enfrentaron cambios en las

¹ A partir de la década de los ochenta, el papel del Estado como proveedor de servicios y seguridad social, comienza a desvanecerse, dando paso a la privatización de muchos servicios. En el ámbito

reacciones de los actores más locales con los que trabajaban, lo que les obligó a fortalecer o a redireccionar sus estrategias de trabajo. Lamentablemente, no existe una literatura que permita particularizar estos cambios y estos conflictos para las ONGs en el ámbito rural, que son aquellas en las que enfatizo mi análisis. La literatura disponible que documenta los conflictos de las ONGs ante la emergencia del EZLN, lo hace desde una perspectiva de sector a nivel nacional (González, 2002, 2005; Canto Chac, 1998, 2002; Rabotnikof, 2002; Villaseñor, 2006), o bien particularizando en las ONGs que participaron en los espacios para mediar entre el EZLN y gobierno (Reygadas, 1996). Canto Chac y González, además, documentan con claridad los conflictos que tuvieron las ONGs de Chiapas con los actores de base que constituían su respaldo social, pues también al nivel comunitario más local, se experimentaron conflictos de identidad, cuando los actores indígenas asumieron un papel activo y se redefinieron como agentes de lucha, con proyectos propios, dejando de lado identidades campesinas o de ciudadanía en espera de apoyo gubernamental o de la sociedad civil.

Lo especializado de la literatura, dificulta entender ampliamente el resultado social de momentos históricos como el surgido en 1994, que se vivieron de forma diferenciada para las organizaciones civiles en el campo y en la ciudad. Una literatura más sistemática sobre las historias y los dilemas de las ONGs en México, diferenciando sus ámbitos de acción, formas de trabajo y formas de relacionarse con diferentes actores, permitiría entender mejor las variantes en sus formas de trabajo actual, las diferentes percepciones de su función social, las diferencias en sus políticas internas de funcionamiento, de las alianzas que establecen con otros actores sociales y de las formas de relación que deciden establecer, para ultimadamente entender la variedad de su labor social y sus contribuciones. La presente tesis, si bien considera únicamente a las organizaciones que han estado y continúan presentes en el movimiento campesino e indígena, en su manifestación mas moderna que es aquel por la soberanía alimentaria, aporta elementos para poder entender los aportes que, con visibilidad variable, tienen las ONGs para los muchos proyectos de país y de campo que existen en México actualmente; de la misma forma, aporta elementos analíticos para entender las múltiples funciones y logros de este sector.

rural se eliminaron los precios de garantía y se desvanecieron gradualmente los apoyos para la producción a campesinos con escasos recursos.

Como había mencionado previamente, los dos movimientos comparten momentos históricos importantes, pero también actores que, habiendo convergido ideológica y estratégicamente en un pasado, comenzaron a experimentar diferencias en varios niveles ideológicos y prácticos, y actualmente se han definido como participantes de uno de los movimientos, eligiendo y siendo elegidos por la comunidad con base en evaluaciones de afinidad ideológica y estratégica.

En el tercer capítulo presento mi introducción al movimiento, haciendo un recuento histórico de las dos principales vertientes identitarias que lo conforman y lo dividen: el movimiento campesino, que en el periodo de 1950 y hasta mediados de los setenta, daba cobijo al sector indígena, el cual a partir de 1976, a raíz del primer Congreso Indígena (Bartra, 2000) comenzó a separar sus demandas de las campesinas apelando a su identidad étnica y generando nuevas exigencias en torno a proyectos de autonomía, dando lugar al movimiento indígena en México.

La divergencia en decisiones estratégicas que ocurrió entre movimiento campesino e indígena, repercutió en la formación, posteriormente, de dos movimientos por la soberanía alimentaria, que si bien, *grosso modo* pueden considerarse divididos por las identidades de los actores de base, tienen configuraciones sociales complejas, de las cuales la identidad étnica es sólo un componente. Esto es particularmente cierto para el caso de la Campaña Sin Maíz no Hay País, que cobija a gran parte de las organizaciones campesinas nacionales que existen, y que compartieron frente de lucha en 2004, con el Movimiento El Campo no Aguanta Más (MECNAM), última manifestación del movimiento meramente campesino en México. Estas organizaciones amplias con representación nacional, están conformadas por organizaciones campesinas estatales y locales, muchas de las cuales se consideran también indígenas y son parte del movimiento indígena, a título individual. La Campaña, que surge en 2007, es promovida por un contingente grande y campesino derivado del MECNAM, al cual se unieron ONGs con trayectoria de trabajo en derechos humanos y desarrollo rural con demandas y proyectos propios. La asistencia original a la convocatoria y la forma en que se tomaron las decisiones iniciales de operación, permitieron a cada actor social posicionar sus proyectos y generar un movimiento tan variado en sus demandas y opciones estratégicas, como los actores que lo conforman. Las organizaciones de la Campaña consideran que los campesinos deben de retomar un papel protagónico en su papel de productores de los bienes de consumo para el país, pero también consideran que la sociedad civil, como

consumidora y como ciudadanía, debe de tomar elecciones de consumo que favorezcan a los productores nacionales y restablezcan una economía nacional solidaria. Las arenas de actuación de la Campaña también son variadas e implican al gobierno como interlocutor y relaciones de igualdad en la importancia de quienes participan.

Muchos actores de la Campaña participaban, originalmente en la Red en Defensa del Maíz, el segundo movimiento que pugna por la soberanía alimentaria en México, sin embargo, eventos que marcaron diferencias de postura política entre las organizaciones, fueron dificultando las relaciones y, ante la emergencia del MECNAM, culminaron con la imposibilidad de reunir al movimiento de manera unificada. Eventos subsecuentes fracturaron, incluso, las relaciones extra-movimentales que existían entre algunas organizaciones y de esa forma, incluso los actores comunes tuvieron que tomar decisiones de participación.

La Red se asume como parte del movimiento indígena, y considera que son las comunidades, territorial y étnicamente delimitadas, quienes deben posicionar sus proyectos propios como objetivo y guía de las acciones del movimiento. Por esto, las demandas de la Red son más acotadas y las ONGs supeditan sus proyectos, dentro del movimiento, a las necesidades manifestadas por los actores indígenas.

El proyecto de autonomías étnicas que es propio del movimiento indígena, orienta la acción en dirección opuesta a la negociación con gobierno. Los pocos logros que ha obtenido el movimiento indígena ante gobierno para realizar proyectos territoriales autónomos reconocidos y respetados por el Estado, han hecho que las instancias de decisión, en particular el Congreso Nacional Indígena, hayan optado por emprender un movimiento de tipo antisistémico, esto es, renuente a emplear la vía de la incidencia política como una táctica válida. De esta forma, los procesos se orientan a la construcción de sociedad y de comunidades que reproducen el tipo de relaciones económicas y sociales que consideran ideales de facto, esto es, en los hechos y sin apoyos que condicionen las actuaciones a agendas externas a los actores del movimiento. Esto es válido también para los proyectos que persigue el la Red en Defensa del Maíz, que se ha conformado como un movimiento de corte antisistémico, es decir con acción unitaria hacia sectores específicos de la sociedad civil, rechazando elementos del sistema neoliberal en sus relaciones internas.

El análisis de las identidades, relaciones y decisiones estratégicas en movimientos antisistémicos es escaso, pues la literatura suele enfocarse en las

relaciones sociales que se establecen para construir y dar continuidad a este tipo de movimiento, y es que en efecto, existen elementos estratégicos que son inherentes a la acción antisistémica, que de hecho la definen: actuar con los recursos endógenos sin generar dependencias externas que en el corto, mediano o largo plazo condicionen la permanencia del proyecto de vida del movimiento. Dado que esta acción estratégica es general para los movimientos de tipo antisistémico, se ha dejado de lado el análisis fino de variables en las decisiones de corte estratégico, principalmente en una perspectiva comparada. Por ello, otro aporte de mi investigación es el entender y separar a las identidades que constituyen y construyen el movimiento, las cuales permiten entender los motivos y las decisiones estratégicas como producto de relaciones sociales específicas, entre identidades diferenciadas y con tensiones inherentes que reflejan las jerarquías y las contradicciones que algunos actores experimentan. La separación analítica de los componentes relacionales, estructurales y estratégicos en un movimiento antisistémico, es uno de los aportes que, además, considera a los procesos sociales que contribuyeron a la formación de los movimientos por la soberanía alimentaria y da cuenta de su estado actual.

El capítulo cuarto es la presentación de de los principales resultados del trabajo de campo. En este apartado, me apego a la información provista por los actores de cada movimiento para entender los motivos de la división, las afinidades que fueron determinantes para cada organización o comunidad en optar por un movimiento específico, las formas de organización interna, los roles asumidos o atribuidos a cada actor social y las decisiones estratégicas que les caracterizan.

En el capítulo sexto concluyo, resaltando los puntos más importantes del análisis y de la información empírica que me permite comparar ambos movimientos y afirmarlos como dos.

Para Dreiling (2001), se ha puesto poco énfasis en estudiar cómo es que las estructuras organizacionales permean a los movimientos y contribuyen a que éstos se dividan, pues el énfasis de las fracturas en los movimientos suele hacerse en los aspectos discursivos e ideológicos, dejando de lado las relaciones normativas que determinan el funcionamiento y por ende las estructuras de las organizaciones de la sociedad civil, quizá la unidad estructural básica del movimiento social.

Ciertamente, la estructura de una organización se define por el conjunto de gente que la integra, o por la persona que es determinante en el momento fundacional (Narayanan, 1982), respondiendo a las necesidades contextuales para las que surge la

organización, y aunque este es un elemento ideológico, la organización enfrenta siempre el dilema de establecer normas de comunicación para planear la acción, tomar decisiones, ejecutar decisiones y relacionarse con el exterior.

Las formas de organización al interior de la comunidad del movimiento social operan como restricciones y recursos (Ibarra, 2005). Las variantes organizacionales incluyen el tipo y alcance de la formalización o burocratización, profesionalización del liderazgo, participación de las bases en la planeación, centralización y jerarquía en las estructuras de toma de decisiones, vínculos entre niveles organizativos (oficinas regionales en caso) y espacios deliberativos. Estas características intrínsecas a cada organización, moldean las dinámicas del movimiento y afectan las decisiones estratégicas del movimiento, en lo que se refiere a arenas, tácticas y demandas.

En general, los estudios sobre movimientos sociales están de acuerdo en que las OMS alteran sus estructuras y objetivos según el momento político que se vive en torno al o los temas que son de su interés (Lofland, 1996, Staggenborg, 1991, Mc Adam, 1982), pero se ha puesto menos atención a cómo los factores internos a las OMS, es decir, los aspectos culturales, identitarios, funcionales y normativos, moldean a los movimientos sociales en organización y estrategias (Reger y Staggenborg, 2006). Son estos puntos de particular interés para concluir sobre los resultados de esta investigación y sus aportes.

La metodología empleada para la recopilación de información fue una participación activa y constante por parte mía, principalmente en la Campaña Sin Maíz No Hay País, lo cual fue posible gracias a la estructura de participación abierta al público que maneja el movimiento. Tras una solicitud para ser observadora de las reuniones privadas y eventos públicos, comencé mis asistencias en junio de 2008 con un papel pasivo. Sin embargo, gradualmente me involucré de manera más activa y la observación se convirtió, también, en un activismo ligero, esto es, realizando algunas intervenciones en las reuniones, apoyando durante los eventos públicos y conviviendo de manera estrecha con algunos participantes, hasta noviembre del 2010. Durante este periodo, también entrevisté a miembros de siete organizaciones campesinas (ANEC, CNPA, CONOC, CNOC, MAIZ, AMAP y el Barzón) y a seis organizaciones no gubernamentales (Semillas de Vida, Instituto Maya, Grupo de Estudios Ambientales, Red de Comunicadores Boca del Polen, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Greenpeace), quienes durante el periodo

mencionado integraban el equipo coordinador de manera más constante, retomando las discusiones de coyuntura política y tomando las decisiones estratégicas para orientar la acción del movimiento.

Las entrevistas abordaron los aspectos de corte ideológico (enmarcamiento del problema, responsables, percepción de logros y momentos clave, objetivos del movimiento, actores más importantes, papel de éstos en el movimiento) y las perspectivas organizacionales en torno a la participación, no fácilmente observables con la asistencia a las reuniones. Los aspectos referentes a estrategia y organización interna, fueron observados y documentados en un diario de campo de manera sistemática.

En el caso de la Red en Defensa del Maíz, con una estructura menos abierta para permitir la participación de agentes externos al movimiento, las asistencias a reuniones del movimiento –exclusivamente como observadora-, se limitaron a los eventos públicos en distintos lugares de la República, los cuales consistían en foros conjuntos con otros movimientos, para evidenciar leyes y políticas que afectaban distintos ámbitos de vida de las comunidades indígenas o rurales.

En este movimiento también realicé entrevistas, un tanto más extensas y de formato abierto, para compensar la falta de observables por una menor frecuencia de observación, y por el menor involucramiento que tuve, que no permitió conversaciones informales. Las entrevistas se realizaron a miembros de tres comunidades indígenas, tres organizaciones indígenas (ORAB, UNOSJO, GIPA), siete organizaciones no gubernamentales que participan de forma constante e impulsan a la Red (Grupo ETC, CENAMI, Colectivo COA, GRAIN, CECCAM, CASIFOP, Enlace Comunicación y Capacitación) y a un académico que forma parte de la comunidad del movimiento social.

El análisis de las entrevistas se realizó con el programa Atlas-ti, elaborando categorías que permitieran identificar: momentos coyunturales, enmarcamiento de los problemas confrontados, roles y funciones de los actores, jerarquías, diferencias entre movimientos, percepciones políticas y sociales, así como opciones estratégicas. Los aspectos correspondientes a configuraciones sociales, estructura organizacional y decisiones estratégicas se documentaron con la observación. También, se triangularon los observables con los datos obtenidos mediante el análisis de las entrevistas, para lograr mayor certeza en la coherencia y veracidad de la información.

Para explicar las relaciones entre los elementos identitarios, organizativos y estratégicos que entretejen a cada movimiento en su interior, a la vez que implican profundas diferencias en sus luchas; en el capítulo cinco profundizo en la forma como las trayectorias han definido las configuraciones sociales de cada movimiento, definiendo afinidades basadas en ideologías sociales y operativas de manera gradual. Las afinidades que permiten encontrar particularidades en la configuración social de cada movimiento, también atraviesan las formas organizativas que se definen para avanzarlas, pues las decisiones estratégicas dependen de los actores responsables de tomarlas. Identidad y decisión estratégica, son un binomio que ha sido ampliamente documentado por autores como Francesca Polleta y James Jasper (2000), Goodwin (2001) y Smithey (2002), entre otros; sin embargo, la forma en que la interacción de identidades permite construir las formas organizativas dentro del movimiento, para el establecimiento de funciones específicas y jerarquías consensuadas, ha sido menos estudiado. Enfatizo, entonces, la necesidad de entender a las configuraciones sociales como convergencias multi-identitarias que no rigurosamente llevan a la conformación de una identidad colectiva única, sino que encuentran distintas formas de interacción para, posteriormente, dar lugar a la toma de decisiones estratégicas. El análisis comparativo entre las configuraciones sociales, las estructuras operativas y las decisiones estratégicas diferenciadas en cada movimiento, me permiten enfatizar que las identidades convergen de distinta forma y dan lugar a relaciones que priorizan ejes ideológicos o funcionales diferenciados.

Si bien, el análisis comparado permite entender y ver cómo las decisiones estratégicas reflejan los ideales del movimiento, ésta forma de análisis también evidencia cómo los componentes emocionales a menudo pesan más en las decisiones sobre la acción, que la evaluación de su efectividad. Al interior de los movimientos hay emociones que ultimadamente detonan las acciones transformativas, estas emociones están ligadas a la forma como se enmarca el problema y las acciones que se consideran positivas, y son compartidas por la mayoría del colectivo (Sewell, 1996, Goodwin, 2001). Por ello, pongo énfasis en revisar la influencia de los aspectos de constitución social interna, sobre las decisiones que se toman para la acción, pues existe una amplia correspondencia entre ellos.

Un estudio de caso con múltiples puntos de comparación es particularmente útil para discernir los factores que determinan la toma de decisiones estratégicas, que

reflejan la orientación identitaria, emocional y política del movimiento social, y para entender los éxitos y fracasos en su contexto más relacional.

Capítulo 1

Elementos Analíticos de los Movimientos Sociales

1.1. Configuración social de un movimiento

En un movimiento social convergen identidades individuales y colectivas con intereses diversos de agrupación y de participación (Lofland, 1996). Para Meyer y Staggenborg (2008), esta convergencia se da en el marco de la comunidad del movimiento social, es decir, las redes de actores que apoyan y avanzan un movimiento, incluyendo organizaciones políticas, grupos culturales, organizaciones del movimiento social y personas simpatizantes que no son parte de una organización formal, pero que comulgan con las ideas generales del movimiento y participan en momentos diferenciados del mismo (Staggenborg, 1998).

El carácter, el sentido, los límites y las posibilidades que permiten actuar con congruencia y constancia a un movimiento social, dependen de las características de la organización interna (Reger y Staggenborg, 2006), de las jerarquías establecidas para la operación interna (Meyer y Staggenborg, 2008) y de las identidades colectivas que convergen en la construcción del movimiento (Goodwin, 2001).

Las reglas de operación del movimiento, aquellas que definen las dinámicas internas para la convivencia, las funciones y tipos de actores que participan, así como las jerarquías para la toma de decisiones, juegan un papel determinante en las decisiones estratégicas que guiarán el accionar (y reaccionar) público del movimiento (Tavera, en prensa).

Estos elementos se definen a partir de la convivencia entre organizaciones con formas culturales, ideologías, intenciones y causas diferenciadas que guían su participación en el movimiento. A través de estos elementos particulares de cada organización o actor social, se define la legitimidad de las distintas alternativas de elección para la acción y se conforman los marcos interpretativos a través de los cuales se determinarán las opciones aceptadas o rechazadas (Klandermans, 1992). En este sentido, será muy distinto un movimiento estudiantil de un movimiento campesino o de un movimiento obrero, lo mismo que diferirá un movimiento urbano popular de un movimiento indígena o de un movimiento étnico en general. Ya que no es igual la dinámica de un actor social que basa el sentido de su acción en una

identidad étnica, que la de un actor social que prefiere resaltar su labor productiva (Aguirre Rojas, 2010).

Stoecker (1995) identifica cuatro niveles en la estructura social, que interaccionan para dar lugar al movimiento: la comunidad del movimiento social, el movimiento social, la organización del movimiento social y el individuo. En cada uno de estos niveles operan marcos discursivos e ideológicos que delimitan el problema social o político que confronta el movimiento (McCarthy y Wolfson, 1996).

La organización del movimiento social se distingue de la comunidad del movimiento por una membresía estable y una identidad colectiva claramente especificada en torno a los objetivos y normas del grupo; en la formulación original del concepto, McCarthy y Zald (1977: 1218) identifican a las organizaciones del movimiento social como organizaciones complejas o formales que identifican sus objetivos con las preferencias de un movimiento social e intentan implementar estos objetivos. Las organizaciones del movimiento social (OMS) coordinan y guían la acción del movimiento, permitiendo la creación de identidades colectivas y formas de relación, resaltando la importancia de los temas por los que lucha el movimiento en sus ámbitos de trabajo e impacto y movilizándolo recursos, que pueden consistir en personas, tiempo, espacios físicos, recursos monetarios o alianzas (Freeman, 1982).

Las OMS pueden trabajar de manera individual, para dar forma y extensión al movimiento, o pueden además crear organizaciones “paraguas o sombrilla” (McAdam, McCarthy y Zald, 1996) que unan a los líderes locales o a personas de varias organizaciones para planear e integrar el movimiento en equipos coordinadores formados por representantes de varios niveles estructurales.

Los individuos que integran al movimiento son usualmente simpatizantes o voluntarios que comulgan con la causa colectiva; personas con intereses múltiples que concuerdan con el grueso de las demandas y tácticas empleadas por el movimiento (Stoecker, 1995). Los individuos también proceden de las OMS, cuando, por convicción, destinan más tiempo que sus horas laborales para actividades “extra”, necesarias para impulsar con fuerza el movimiento (Stoecker, 1995).

Desde mi perspectiva, para entender las decisiones de acción, momento y dirección de un movimiento, es importante entender las relaciones que se dan en su interior, en la interacción de personas y colectivos que estructuran al movimiento en su totalidad, participando cada uno desde identidades, culturas y marcos normativos

distintos, pero con intereses y perspectivas sociales similares que permiten la convergencia. En estas relaciones es esencial entender la función social de cada tipo de actor que participa, tanto desde la perspectiva propia como de los demás actores que les atribuyen papeles y capacidades específicos. Por ello, es esencial revisar distintas posturas teóricas en torno a los niveles organizacionales y los aspectos identitarios que permiten la continuidad de la acción colectiva.

1.2. Movimientos sociales

Gerlach (1999) caracteriza a los movimientos sociales como colectivos descentralizados, segmentados y reticulados en su organización. Desde su perspectiva, los movimientos consisten en múltiples líderes y grupos que se cohesionan mediante redes entre individuos y grupos, por su ideología y los rituales de funcionamiento que establecen. Fine y Stoecker (1995) también caracterizan a los movimientos como redes de pequeños grupos que conjuntan las necesidades expresivas de los miembros además de perseguir metas instrumentales. Melucci (1999) por su parte, ve a los movimientos como redes de individuos y grupos que comparten una cultura común y una identidad colectiva. Éste último autor argumenta que un movimiento no es un actor unificado, sino una “red de grupos sumergidos en la vida cotidiana” que sólo emerge en ocasiones para involucrarse y emprender acciones de corte político en público. Diani (1992:283) ve al movimiento como instancias de acción colectiva con orientaciones conflictuales claras hacia un oponente político, que se conducen en el contexto de redes inter-organizacionales, mediante actores que se vinculan por solidaridades e identidades compartidas que preceden y sobreviven a cualquier coalición o campaña específica.

Existen múltiples definiciones, que permiten entender de diferente manera a los movimientos sociales, sin embargo, he seleccionado las previas por su pertinencia como marco teórico para el presente trabajo. El común denominador de los autores presentados, nos permite ver al movimiento como un agregado de organizaciones y personas que se relacionan e interaccionan para dar una orientación consensuada al movimiento, definirlo y escenificarlo. Sin embargo estas personas y organizaciones poseen vida propia y proyectos diferentes al del movimiento, que ocupa sólo momentos definidos, considerados y evaluados como coyunturales para la reunión, la planeación y la acción de índole colectivo.

El concepto de redes es también importante para entender a un movimiento social, pues son las relaciones múltiples que entretejen a los actores que, de manera individual no tienen sino una perspectiva particular sobre la función y la orientación del movimiento, la red es el entramado de todas las identidades colectivas que convergen y construyen el movimiento como una acción multidimensional y cohesionada (Diani, 1992). La coordinación de iniciativas específicas, la normatividad interna del movimiento y la definición de estrategias dependen de las negociaciones e interacciones permanentes entre los individuos y las organizaciones involucradas, las cuales también dan lugar a rupturas en las relaciones, que constantemente modifican la configuración y, a menudo, también la organización del movimiento, haciendo del colectivo un agente dinámico en su interior, orientado al cambio exterior (Garner, 1996).

El movimiento social es la expresión pública de un conflicto social, que se define, delimita y discute entre actores comprometidos, de manera previa a su actuación social.

1.2.1. Latencia y visibilidad

Según Melucci (1999), la situación común de los movimientos en la actualidad, es ser una red de pequeños grupos inmersos en la vida cotidiana que exige que las personas se involucren en la experimentación y en la práctica de la innovación para lograr nuevos modelos culturales. La red inmersa, aunque compuesta de pequeños grupos separados, es un sistema de intercambio de personas e informaciones de manera constante. Estas redes tienen como características que 1. Propician la asociación múltiple, 2. La militancia es sólo parcial y de corta duración, y 3. El desarrollo personal y la solidaridad afectiva se requieren como una condición para la participación de muchos grupos (Gerlach, 1999).

Los movimientos tienen periodos de latencia o trabajo interno y de visibilidad o expresión pública colectiva (Melucci, op cit). La latencia permite la creación de nuevos códigos culturales, relaciones permanentes basadas en confianza y en aspectos personales, exploración de proyectos diferenciados e intercambios de personas al interior de la comunidad del movimiento; también permite que se generen lazos que van más allá de los que unen durante periodos de alta movilización.

La visibilidad refuerza las redes inmersas. Proporciona energía para renovar la solidaridad, facilita la creación de nuevos grupos y el reclutamiento de nuevos activistas atraídos por la movilización pública que ya fluye en la red inmersa.

En el modelo de Melucci (1999) los periodos de latencia y de visibilidad de los movimientos tienen funciones diferentes y relacionadas: 1. La fase de latencia permite experimentar directamente nuevos modelos culturales, favorece el cambio social mediante la construcción de significados y la producción de códigos diferentes a los que prevalecen en una sociedad. Esta clase de producción cultural con frecuencia implica un desafío a las presiones sociales dominantes. La latencia representa una especie de laboratorio sumergido para el antagonismo y de la innovación, 2. Cuando los grupos emergen, lo hacen para emplear los significados y formas confrontacionales definidas durante los periodos de latencia.

La movilización tiene una función simbólica que se plantea en diversos planos; por una parte, los movimientos proclaman su respuesta al fracaso institucional para responder a las demandas y necesidades de grupos y categorías sociales que suelen estar excluidos de la estructura política (Tilly, 1978); al mismo tiempo, la movilización opera como médium, es decir, indica al resto de la sociedad la relación existente entre un problema específico y la lógica dominante en el sistema; finalmente, muestra que son posibles modelos culturales alternativos, que la acción colectiva practica y difunde. La movilización también potencia la coordinación en el plano ideológico, las demandas de carácter conflictivo y el resto de los componentes estratégicos que se integran en la acción del movimiento (Goodwin, 2001).

La latencia hace posible la acción visible porque proporciona los recursos de solidaridad que se necesitan para producir los marcos conceptuales e identitarios en torno de los cuales surge la movilización. Durante las etapas de latencia, se facilita la reflexión sobre los éxitos –o fracasos- obtenidos durante la movilización, lo cual propicia la solidaridad entre sus miembros y permite la invitación a otros grupos afines redes (Benford y Snow, 2000). La latencia permite la reflexión y la construcción de momentos sucesivos para la acción, evidenciando con esto los eventos disruptivos en las relaciones entre actores, pues si bien la reflexión sobre la acción puede ir en el sentido de la solidaridad, también se pueden resaltar las diferencias en los referentes ideológicos o en la orientación buscada de la acción, lo

cual puede derivar en rupturas y en nuevos modelos diferenciados de acción (Smithey, 2002).

Para la efectividad del movimiento es indispensable la existencia de instancias y organizaciones con capacidad para garantizar las comunicaciones internas, especialmente durante la fase de latencia, y externas, principalmente en la fase de movilización (Regger y Stattgenborg, 2006).

1.2.2. Trayectorias

Las trayectorias son historias de activismo a lo largo de las cuales se definen identidades, afinidades y repertorios estratégicos que influyen, e incluso determinan, las acciones posteriores del movimiento y sus organizaciones (Stockemer, 2009: 38). A lo largo de las trayectorias se viven momentos de aprendizaje y reflexión con respecto a la acción, se definen afinidades y también se generan desacuerdos o rupturas que moldean en lo sucesivo al movimiento. Las trayectorias como líneas históricas de aprendizaje, son los caminos que se construyen para orientar constantemente al movimiento, y están constituidas de relaciones entre actores sociales que convergen y divergen constantemente en torno a aspectos ideológicos y por tanto también en los estratégicos.

En el movimiento confluyen personas y organizaciones con historias de activismo que dotan de sentido al movimiento, con base en expectativas e intenciones de participación. Las trayectorias permiten opinar respecto al momento y respecto a la acción, permiten la creación de expectativas y el compartir experiencias para la deliberación; para Melucci (1999), las expectativas se construyen sobre la evaluación de las posibilidades y restricciones del ambiente social y político que percibe un movimiento, con base en experiencias previas.

Los integrantes del movimiento social construyen sus orientaciones, hacen elecciones y adoptan decisiones basados en sus percepciones de los factores externos, en lo social o en lo político, y de sus emociones y significados con respecto a los objetivos deseados, para lo cual hacen uso analítico de su pasado activista, revisando continuamente los éxitos o los fracasos y reconstruyendo los elementos que permiten asignar estos calificativos a las acciones (Stockemer, 2009). La revisión es individual –al nivel de las organizaciones- y colectiva, y puede dar pie a reforzar las solidaridades o bien a terminar relaciones consideradas incompatibles. En ese

contexto, el concepto de expectativa es fundamental para entender la conexión entre los actores, las solidaridades que se forjan en torno a las ideas de éxitos y los medios adecuados para conseguirlos, así como los sentidos que se construyen en torno a la acción y la normativa interna del movimiento. No es raro atestiguar el fraccionamiento de movimientos ante la diferencia entre resultados y expectativas (Freeman, 1982; Carmin y Balser, 20002; Stoecker, 1995).

Las trayectorias no solamente operan en el análisis de lo externo, esto es, del contexto y las necesidades estratégicas para influenciarlo, sino en lo interno: al definirse afinidades que marcan continuidad en las historias conjuntas, se definen o redefinen también aspectos de normatividad interna, aquellos que en común acuerdo, permitirán establecer jerarquías o modificarlas. Las historias de activismo pesan en las decisiones organizativas internas del movimiento porque aclaran constantemente el panorama de las necesidades inmediatas y los aciertos o desaciertos que se han tenido con el estado de las cosas.

Las experiencias ganadas en cada ronda de acción, pueden llevar a repensar la pertenencia al movimiento, en la evaluación organizacional o personal de lo ganado o lo perdido. El resultado de estas evaluaciones puede ser un recorte de miembros para apoyar las acciones subsecuentes, o bien en la re-estructuración de la forma de funcionamiento; por ello, la convergencia en el plano ideológico de la orientación de la acción y de las tácticas que serán adoptadas es clave para la continuidad y el crecimiento en recursos del movimiento (Stoecker, 1995).

1.3. Niveles organizacionales del movimiento social

No todas las organizaciones que participan en un movimiento se involucran de la misma forma, ni con la misma intensidad. El grado de involucramiento puede verse como una elección de costo/beneficio (Narayanan y Fahey, 1982) ligada a la consecución de logros personales u organizacionales, afines pero independientes a los del movimiento, en este caso se destinan recursos importantes a la participación en el movimiento: tiempo, personas, espacios y recursos financieros. El involucramiento también puede estar ligado a elementos emocionales, de índole cultural y emocional, en donde, con la participación se persiguen ideales relacionados con la forma en que se contempla un mundo ideal, o un aspecto de la realidad que se concibe fallida en su forma actual; en este sentido, no todas las

acciones de un movimiento, o de una organización en un movimiento, persiguen conseguir logros políticos, pero sí sociales y sí un cambio en la realidad en la cual opera la organización o el movimiento social.

Las diferentes formas de vinculación y los grados de involucramiento, permiten ver al movimiento en diferentes escalas de agregación, tanto en los momentos de latencia como en los de movilización. Distingo, junto con Stoecker (1995), los siguientes niveles, que modifican la constitución social de un movimiento en los distintos momentos de su existencia, y dan cuenta de los grados de involucramiento y compromiso con los objetivos generales del mismo, por parte de los actores sociales.

1.3.1 Comunidad del Movimiento Social

Los movimientos no son entidades discretas formadas por organizaciones en su totalidad (Mc Adam 1995, citado en Staggenborg, 1998). Los movimientos incluyen comunidades culturales y aliados para la movilización además de las organizaciones que son constitutivas del movimiento social (McCarthy y Wolfson, 1996). Algunos de estos actores responden a las oportunidades de índole político para reaccionar y posicionar las demandas, mientras que otros responden a la formación de tejido común, cultural o identitario del movimiento (Staggenborg, 1998).

Los movimientos sociales rara vez tienen principios o finales claramente definidos e identificables, normalmente se sobreponen con otros movimientos de valores similares a manera de una “familia del movimiento social” (Della Porta y Rucht, 1995), y en estas sobreposiciones es crucial de entender el concepto de comunidad, pues si se intenta comprender al movimiento sólo como un conjunto de organizaciones, se corre el riesgo de pasar por alto algunas estructuras cruciales para su emergencia y supervivencia (Staggenborg y Reger, 2006).

La noción de comunidad del movimiento social nos permite concebir al movimiento como un agregado de grupos con ideologías e identidades propias, en interacciones variadas que no sólo se orientan a conseguir los objetivos del movimiento, sino a construir significados y colectivos que se identifican en distintos planos de acción (Stoecker, 1995; Staggenborg, 2008).

Las comunidades de movimientos sociales compatibles también se conectan entre sí a través de miembros y líderes, resultando en culturas compartidas,

estructuras organizacionales y repertorios tácticos (Meyer y Whittier, 1994; Staggenborg 1998).

Los tipos de conexiones de actores sociales en la comunidad influyen fuertemente a las opciones y decisiones estratégicas, puesto que constituyen canales de comunicación informal, redes de amistad y apoyo, intercambios de fuerza laboral y proveen de espacios para realización de reuniones, arenas para posicionar demandas, contacto con aliados estratégicos y la posibilidad de adherir a conocidos al movimiento. Las organizaciones o personas que son parte de la comunidad del movimiento social pueden en determinado momento involucrarse a tal grado que pasen a formar parte del mismo o sean gestores de organizaciones paraguas (McCarthy y Wolfson, 1996). Con su llegada, traen consigo a grupos sociales de base con preocupaciones e intereses diferenciados que se integran gradualmente al movimiento o se disipan (Meyer y Staggenborg, 2008). Cuando los líderes o equipos de liderazgo son capaces de incorporar grupos o activistas de movimientos compatibles, nuevos e importantes recursos se hacen asequibles para las estrategias del movimiento.

Para Buechler (1996) la comunidad del movimiento social (CMS) nos permite pensar en los movimientos como colectivos que incluyen tanto a organizaciones del movimiento social (OMS), como a redes informales de activistas que comparten compromisos con los objetivos del movimiento. Esto incluye a las organizaciones, individuos adherentes y simpatizantes, alianzas institucionales y grupos culturales que están asociados en torno a valores identitarios o morales.

Las OMS están explícitamente interesadas con cambios políticos o sociales y tienen públicos-objetivo externos, como autoridades gubernamentales. Otras organizaciones dentro de la CMS difieren en tanto que trabajan hacia el interior del movimiento, con servicios que sirven a las organizaciones o personas y que al hacer esto otorgan cohesión a las OMS y personas en momentos de calma política.

El término comunidad implica soporte mutuo entre personas que están conectadas por varios vínculos (Staggenborg, 1998) y dan lugar a la cultura del movimiento, en el sentido de símbolos, rituales, valores e ideologías compartidas que se crean al interior del movimiento y dan lugar a una identidad colectiva en torno a la causa y los temas del movimiento, en la forma en que se mira y se piensa la causa (Buechler, 1990).

Los grupos e individuos dentro de una comunidad del movimiento están vinculados por la cultura (y a través de ella por medio de la identidad colectiva), redes sociales y participación en las actividades del movimiento. Las comunidades hacen el medio en el cual se mueven e interactúan las organizaciones.

Las mismas organizaciones dentro de la comunidad del movimiento pueden tener sus comunidades internas, basadas en políticas comunitarias o personalizadas, de tal forma que una CMS puede estar compuesta de comunidades inter-conectadas. A veces, grupos comunales² dentro de la comunidad del movimiento social pueden enfocarse en su comunidad interna más que en la del movimiento amplio (Staggenborg, 1998). Es común que estos grupos retornen a aplicar los conocimientos adquiridos sobre temas del movimiento en sus ámbitos de vida y trabajo, con la posibilidad de generar organizaciones locales y no volver a activar su participación en el movimiento.

1.3.2 Organizaciones del movimiento social (OMS)

Una organización de la sociedad civil se forma en torno a un o una serie de problemas detectados por parte de un sector de la sociedad que, de manera colectiva, delimita el problema y acciona para resolverlo (Canto, 2001); los miembros de la organización se plantean objetivos programáticos para orientar su actividad, entablado acción contenciosa ante entidades políticas o difundiendo información para persuadir a sectores amplios de la población en torno al problema o los problemas detectados, o bien realizando proyectos de cambio gradual con sectores específicos de la población (Edwards y Foley, 2002).

Una organización puede adherirse a un movimiento social de manera posterior a su formación, al identificar que otros grupos de la sociedad plantean los mismos problemas y comparten perspectivas, o bien pueden formarse a partir del movimiento social ya instalado, como oficinas locales que buscan conseguir adherencias y membresías para aumentar la demografía del movimiento (Edwards y McCarthy, 2004).

En una organización de la sociedad civil existente de manera previa al movimiento social, convergen identidades individuales que se expresan oficialmente

² Los grupos comunitarios de una CMS son aquellos de índole comunitaria-local, organizados en base a normas e identidades propias, como grupos étnicos (Staggenborg, 1998).

en una acta consolidativa, en torno a un objetivo que justifica su constitución y con marcos normativos que definen aspectos de comportamiento, lineamientos para la acción social y parámetros laborales, normalmente definidos por los fundadores y asimilados por quienes se adhieren posteriormente (Stoecker, 2005).

Las formas normativas e ideológicas mediante la que se organizan y operan las organizaciones del movimiento social son relevantes para la morfología y dinámica interna del movimiento mismo, para el trazo de estrategias generales y para definir repertorios aceptables de acción, aquellos que guarden cohesión con los aspectos ideológicos de la organización (Mc Carthy y Wolfson, 1996). Las OMS locales que constituyen el movimiento, definen en gran medida la estructura operativa y los lineamientos para la acción de éste último, pues son las unidades ideológicas y funcionales que darán forma y ejecutarán lo que, ante la sociedad, será el movimiento social (Edwards y Foley, 2002).

Los aspectos ideológicos que regirán los criterios de accionar de una OMS, a la vez, son derivaciones del momento de su fundación (Morris y Staggenborg, 2002), y se profundizan o modifican a lo largo de su trayectoria de acción, a partir de aprendizajes y reflexiones sobre los resultados previos (Stockemer, 2009); los motivos de su formación, objetivos y la ideología del equipo fundador serán determinantes para generar una estructura operativa que funcione mediante poderes centralizados en una persona líder, o bien con un equipo de liderazgo, a cargo de analizar las potenciales oportunidades para la acción, gestionar alianzas, espacios o financiamientos, planear la acción y tomar decisiones estratégicas para la continuidad de la organización (Freeman, 1982). La estructura de la OMS para la operación puede ser poco formalizada o burocrática, con apertura para la participación de todos los miembros, de forma que el análisis de oportunidades, la división de actividades y ultimadamente la toma de decisiones se haga mediante asambleas o juntas amplias (Freeman, 1982).

El momento y las personas fundadoras de una organización, dan lugar a los procesos de enmarcamiento (Johnston, 1995), es decir, la delimitación de las formas mentales y colectivas con las que percibe el momento social o político en el cual se trabaja, así como el problema y sus dimensiones. La agregación de esquemas interpretativos en torno a un problema, permite emitir juicios sobre las formas más pertinentes de organización, normas de comportamiento y aproximaciones sucesivas a los fenómenos exteriores a la organización (Johnston, 1995).

La composición social, que se observa en las identidades mediante las cuales se definen los miembros de una OMS, es determinante también en la construcción de estructuras funcionales y dinámicas internas (Stoecker, 2005), pues si la membresía es voluntaria o abierta al público, es muy posible que se trate de colectivos o comunas, abiertas a la participación del público en general y que no están formalizadas en términos legales ante el gobierno o ninguna autoridad (Lofland, 1996), en este tipo de organizaciones la comunión de ideas en torno a la definición del problema y las opciones más pertinentes para la acción, determinan la permanencia de los miembros y por tanto la continuidad misma de la OMS, usualmente predomina la toma de decisiones democráticas y las problemáticas a atacar se enmarcan y definen de manera colectiva (Stoecker, 1995).

Cuando se trata de organizaciones que reclutan a sus miembros mediante convocatorias y buscando ciertas características en cuanto a su personalidad, habilidades e ideología para incorporarlos al equipo de trabajo mediante remuneraciones económicas periódicas, hay mayores posibilidades de que se trate de una organización con cierto grado de formalización, registrada ante el gobierno, que busca fondos ante instancias nacionales o internacionales y con un equipo centralizado en la toma de decisiones (Lofland, 1996), aunque puede funcionar de manera relativamente democrática con una asamblea general para generar consensos amplios en torno a las actividades más relevantes, de corte político de la organización. Aún en casos de organizaciones con membresía profesional y relaciones laborales, ser un agente colectivo implica ser parte de un “*nosotros que podemos hacer algo*” (Ibarra, 2005:131). El componente identitario en las organizaciones, requiere lograr agrupar a las personas que la integran, de tal forma que todos los miembros se sientan identificados con el grupo y sus objetivos, al mismo tiempo que se reconozcan como parte de algo con límites físicos, ideológicos y en la acción (Gamson, 1995), que diferencia al conjunto organizacional del resto de la sociedad.

Las identidades colectivas pueden nacer de enmarcamientos ideológicos, en torno a aspectos socioculturales que son características asignadas y auto-asignadas que distinguen por grupos sociales en base al color de piel, nivel de ingresos económicos, actividades económicas o ambiente social de desarrollo (Gamson, 1995). Las OMS y los movimientos sociales utilizan diferentes elementos para construir identidades colectivas que generen empatía y cohesión entre los

participantes, pero esto no exenta la construcción de jerarquías para el funcionamiento. Pese a que al interior de la OMS o del movimiento suelen convergir identidades diferenciadas que viven el problema que las reúne desde realidades distintas, no todos los individuos tienen igual grado de participación, sobre todo en lo tocante a tomar decisiones estratégicas. En realidad, depende de los marcos empleados para abordar la problemática social, los cuales permiten asignar prioridad para la toma de decisiones a los individuos o colectividades que se consideran protagónicas (Stoecker, 1995); las categorías empleadas para designar las diferencias entre personas, permiten establecer formas de vinculación a las relaciones que estructuran a las organizaciones. Estas categorías pueden estar basadas en identidades, funciones sociales o habilidades personales.

Es relevante conocer cómo se construyen las jerarquías de las organizaciones para establecer modelos teóricos que permitan relacionar el todo (movimiento) con las partes (OMS) y reconocer tipos de movimientos en relación con los tipos y formas de interacción que se dan en las organizaciones que lo forman.

Existen organizaciones basadas en actividades económicas que suelen ser organizaciones locales o comunitarias, formadas por personas de la comunidad más local que se ven afectadas por el problema que les llevó a consolidarse como grupo organizado (Veltmeyer, 2004), en este caso se trata de grupos de base, comunitarios o gremiales, solidarios en torno a una situación problemática que afecta a los miembros de la comunidad y reticentes a permitir la interferencia de personas o grupos ajenos a la comunidad como parte de la misma organización (Veltmeyer, 2004). En estas organizaciones, el componente identitario que cohesiona a las personas en torno a una demarcación territorial, actividad productiva o razón étnica, es determinante para definir la membresía (Smithey, 2010).

Otro tipo de organización, de corte profesional y con características parecidas a las de una Organización no Gubernamental (Veltmeyer, 2004), considera la participación de líderes procedentes de las bases sociales, es decir, personas que son de la comunidad y afectadas por el problema que generó la formación de la organización, pero el equipo operativo está constituido por profesionistas reclutados por convocatoria que comparten las causas de la organización, o cuyo perfil es ideal para llevar a cabo una parte de las actividades de la misma.

La organización puede estar constituida por un equipo meramente técnico, que aunque trabaja y busca mejorar las condiciones de vida de la población objetivo

para la que trabaja, no son parte de esa comunidad y se identifican sólo de manera empática, considerando, por un lado, la causa como valiosa para la sociedad, y por otro aplicar sus habilidades profesionales a cambio de un sueldo (Ganz, 2000), en este caso las bases sociales o actores comunitarios locales rara vez son parte de la organización.

La constitución social de la organización y el papel asignado al componente identitario son relevantes para las formas operativas, pues definen las formas y grados de involucramiento de los miembros en la toma de decisiones; son además importantes para conocer la estructura de la organización, pues los líderes interactúan de manera distinta en una organización centralizada que en una descentralizada (Reger y Freeman, 2006), lo cual implica distintas formas de burocratización y de interacción social. Normalmente, las organizaciones que se forman para contrarrestar problemas sociales que consideran producto del orden político actual, permiten una amplia interacción de las bases comunitarias para la toma de decisiones, considerándolas miembros de la organización, o definiendo sus objetivos y programas en función de ellas. Cuando estas organizaciones se integran a un movimiento social, consideran que su labor está en trabajar para mejorar las condiciones de los actores más locales o aquellos que sufren directamente el agravio confrontado, por lo que supeditan sus funciones y canalizan su fuerza para mejorar las condiciones de vida de terceros, considerando que el beneficio social se encuentra en la transformación de las relaciones de clase, de género o de balance de poder, de tal forma que la forma organizativa misma constituye un fuerte mensaje a la sociedad y a las autoridades políticas (Melucci, 2001; Ibarra, 2005; Reger y Staggenborg, 2006;).

Lofland (1996) identifica siete aspectos de las OMS que son relevantes para entender su influencia y participación en el movimiento social; estos aspectos también son determinantes de las dinámicas de funcionamiento, planeación y acción del movimiento, en tanto estructuran las comunicaciones y sus ejes:

- 1.** creencias o ideología fundacional y operativa, aquellas premisas por las cuales la organización está activa y en torno a las cuales funda sus objetivos, esto incluye la filosofía con la cual se aborda el problema, una postura con respecto a cuál es el problema, cuál es la solución y cómo debe esta operacionalizarse para que tanto los fines como los medios sean aceptables.

Las creencias de una OMS son determinantes para cohesionar a sus miembros en torno a identidades colectivas, es decir, definiciones compartidas que cohesionan a un grupo en torno a ideas, intereses, experiencias y visiones del mundo.

2. Estructura de la organización. Los aspectos normativos de funcionamiento, muy ligados a las creencias y, según Morris y Staggenborg (2002) al momento fundacional, pues la forma en que el colectivo piense que debe ser el mundo exterior social o político, será, la mayor parte de las veces, un ejemplo a seguir en las prácticas internas para planear, decidir y funcionar. La estructura está ampliamente vinculada con el organigrama y las políticas internas de funcionamiento de la organización.

3. Causas de la organización. Las formas tangibles o escritas en que la ONG traduce sus creencias en acciones. La elaboración de un discurso que engloba acciones vistas desde una ideología particular.

4. Membresía. Referente a los integrantes de la organización, desde aquellos que son parte formal del equipo de trabajo hasta los voluntarios, incluyendo a los líderes autodenominados o percibidos. Para conocer la membresía es importante conocer la perspectiva de los miembros de la organización en torno a quienes están incluidos como parte de la misma.

5. Estrategias. Las formas de acción que escoge la organización para actuar, desde las formas de entablar diálogo, los interlocutores, las alianzas y las vías empleadas.

6. Reacciones del público, sociedad o autoridades de gobierno, ante las organizaciones del movimiento social. Estas reacciones, aunque son externas a la organización, le dan retroalimentación para continuar con la línea ideológica, organizativa y de acción, o bien para cambiar rumbos, lo que sucede con cierta regularidad.

7. Efectos o logros de la organización, percibidos por sus miembros con respecto a sus objetivos.

Las estrategias del movimiento social se formulan frecuentemente por activistas que son parte de organizaciones del movimiento social, por lo tanto las estructuras organizacionales, los climas emocionales, recursos e ideologías de estas organizaciones moldean su visión de las opciones estratégicas y sus decisiones (Staggenborg, 2008). A menudo estas decisiones presentan dilemas que confrontan la misión y la visión de la organización con las de otras organizaciones que son parte

del movimiento social, y esto genera fracturas al interior de los movimientos (Stoecker, 2005).

1.4. Identidad colectiva y emoción en los movimientos sociales

Las redes, como estructuras de cooperación y negociación, potencian y extienden la acción colectiva. Son, en general, estructuras de cooperación no exentas de conflicto y competencia (Diani, 2003). Para autores como Hunt, Benford y Snow (1998), las personas con mayor capacidad de convencimiento y negociación dentro de estas redes, activistas u organizaciones con características de liderazgo, tienen como parte importante de sus tareas, convencer a organizaciones afines sobre la bondad de emprender la acción colectiva. Estas figuras de liderazgo, en esta línea de pensamiento, impulsan la movilización, buscan “alinear” la ideología y goles de sus organizaciones con las de otras organizaciones, construyendo significados que engloben problemas amplios y sean fáciles de identificar como propios por un conjunto de organizaciones afines, las cuales apoyen en lo sucesivo al movimiento.

En la construcción de significados para reclutar organizaciones al movimiento el enfoque se hace en la emergencia y preparación de la acción colectiva, pero se deja de lado el papel de la acción en si misma (Snow et. al., 1986; Benford y Snow, 2000; Hunt, Benford y Snow, 1994).

Indudablemente existe una importancia en la relevancia de lo que se comparte, el interés en cuidar los rasgos que definen lo común, en donde juega un papel primordial el filtro identitario a través del cual se ve la realidad y del cual depende la realidad colectiva. Dentro de una colectividad que se moviliza de manera organizada y relativamente constante, existe un “nosotros que construimos con los demás, conocemos a los otros con los que compartimos y conocemos lo que compartimos. Valoramos ese compartir y nos emocionamos con ello....nosotros somos iguales entre nosotros y diferentes frente a los otros” (Ibarra, 2005: 131).

La construcción de una definición de sí que englobe a todos los potenciales participantes, es esencial para impulsar un movimiento, pero la construcción de los significados comunes para motivar la continuidad de la acción, es posible también durante las acciones mismas, esto es, en palabras de Klandermans (1992:381): en la relación entre los momentos de la acción colectiva y los éxitos o fracasos de los movimientos, en la construcción de discursos que permean la motivación, así como

en la reflexión sobre los momentos anteriores. Existe, para Klandermans (op. cit) una relación dialéctica entre los momentos de la acción colectiva y los marcos de significación que motivan su acción.

La construcción constante de significados comunes, permite también la construcción de identidades colectivas que constantemente se negocian y que tampoco están exentas de conflicto, en tanto que implica, para los miembros, constantes afirmaciones y renunciaciones a las libertades y marcos de sentido que son inherentes a sí, negociaciones que implican ceder parte de la autonomía personal u organizacional para permitir la entrada de nuevos sentidos y lealtades a partir de las cuales actuar, o bien a partir de las cuales cuestionar y renegociar (Ibarra, 2005).

En la convergencia y negociación, el conflicto está siempre presente (Smithey, 2002), pues la construcción de significados para la acción y de la acción se da a partir de la interacción y la coalición de códigos culturales y normativos distintos, inherentes a las organizaciones que se comprometen (Kane, 1997); estos procesos incluyen la constante revisión de momentos en la acción colectiva, momentos que pueden transformarse en eventos al cambiar la importancia relativa que el colectivo asigna a los resultados o a las formas de actuar, y que dependen enteramente de la reflexión (Klandermans, 1992).

Para Ellingson (1995) y Sewell (1996), el momento de acción colectiva es importante para la construcción de significado, pero también para evaluar la continuidad de participación en el movimiento, pues los marcos individuales de cada organización, si bien son flexibles y resisten ciertas modificaciones, son también finitos y tienen límites definidos por criterios normativos e ideológicos que, al ser reforzados o retados por el colectivo, definen permanencia o ruptura. En este sentido, los marcos que sirven de referencia para aprobar o reprobar acciones concretas y asignarles significados, son variables para la colectividad, pero para las organizaciones participantes, existen límites entre lo que es negociable y lo que no es, y éstos están definidos por los criterios particulares que caracterizan la individualidad de la organización (Smithey, 2010).

Los eventos, para Sewell (2006), marcan momentos importantes y destacados en las trayectorias de los movimientos, y normalmente están asociados con éxitos o con fracasos o rupturas al interior del colectivo. Los eventos están definidos por prácticas sociales que se revisan, se reflexionan y se evalúan de manera constante en dos niveles: el nivel de la organización y el nivel del movimiento. Mientras ambos

ámbitos mantengan una coherencia, es viable continuar con la pertenencia y la continua definición de significados y de acciones en torno a estos, para solucionar el problema definido y confrontado. Pero las relaciones también están sujetas a rupturas, motivo de las diferencias en la significación de un momento particular de la acción, o de su resultado.

Los conflictos entre identidades son relevantes para dimensionar adecuadamente la importancia de la identidad colectiva del movimiento social (Smithey, 2010). Si bien las identidades colectivas son negociables, son también valiosas para los grupos de forma previa a la confluencia en un movimiento, tienen carácter sagrado y pueden potenciar conflictos importantes. La identidad permite crear marcos de significado para entender la realidad y los problemas que ésta presenta a los grupos cohesionados en torno a sus identidades (Kane, 1997). Los marcos de significado permiten construir evaluaciones para la acción social y organizar el comportamiento en función de lo que se considera adecuado y en torno a la definición de éxito, esto implica un componente ético y uno instrumental.

Incorporar el componente cultural de los movimientos sociales, permite entender la base dinámica de la construcción de identidad y los conflictos que se pueden suscitar en torno a esta (Ellingston, 1995; Kane, 1997).

Cada persona tiene un sentido de sí misma, o una identidad (Polleta y Jasper, 2001). La identidad se forma constantemente a través de la historia de vida y de las interacciones sociales en varias esferas de la vida, que incluyen múltiples papeles, como puede ser el de madre, hija, maestro, empleada, indígena, líder, técnico, etc. En la identidad influye una noción étnica y social de la persona, pero también un componente funcional, que permite establecer comparaciones y asignar papeles o lugares de acuerdo con los marcos culturales e ideológicos que acompañan a la noción de relevancia identitaria. Un individuo incorpora una serie de características en una noción única de ser (Ibarra, 2005). De igual forma, una identidad colectiva es el sentido de solidaridad grupal que permite la cohesión en torno a una serie de características mediante las que se definen las personas, pero también se definen las funciones; esto permite la construcción de un “nosotros” que reside en la gente con intereses comunes y evaluaciones similares en torno a las experiencias de vida, los ideales de sociedad y de mundo, que detonan en ciertas circunstancias la acción colectiva (Smithey, 2010), además de servir como filtro para definir alianzas y convergir con otros grupos que se cohesionan en torno a un “nosotros” similar.

La identidad colectiva es una abstracción que incorpora las historias de un grupo, experiencias, principios y creencias (Waddell y Cairns, 1986), y así como en un grupo étnico o en una organización de la sociedad civil convergen individuos que se adhieren a una identidad normativa y previamente establecida, en un movimiento se construye una identidad colectiva común a partir de afinidades en las identidades grupales que intervienen.

La identidad colectiva de un movimiento promueve el surgimiento de nuevas redes de relaciones de confianza entre distintos actores sociales. Estas redes generan información y conocimientos que a su vez influyen y refuerzan la construcción de la identidad colectiva.

1.4.1. Sentimientos y emociones

La identificación práctica con un movimiento implica experimentar sentimientos de solidaridad con gente nueva o ya conocida, con la que se comparten deseos y valores. Así, ese compartir un conjunto de valores y motivaciones da sentido a la acción, y viceversa, la acción colectiva refuerza ese sentido de pertenencia a una comunidad de valores (Stockemer, 2009). Cuando la identidad social colectiva es insatisfactoria, algunas organizaciones e individuos dejarán el grupo existente y buscarán uno que potencie su sentido de sí mismo a un mayor grado percibido (Turner, 1985).

Dado que un movimiento social es una red de organizaciones y grupos informales, la “fortaleza” identitaria puede variar en los diferentes puntos de la red. Puede ocurrir que las personas se sientan muy identificadas con una concreta organización del movimiento y, sin embargo, sus lazos y sentido de pertenencia al conjunto de la red sean débiles.

En no pocas ocasiones puede darse que los activistas que trabajan en una organización del movimiento social sólo tienen frente a la misma una actitud profesional y, sin embargo, es en el movimiento, en los momentos de participación conjunta con el movimiento, experimenten una fuerte emoción, compartiendo los principios y las acciones de manera personal (Ibarra, 2005).

A menudo la convivencia en el movimiento, aún entre organizaciones que parecen diferentes, se da por el impulso constante de individuos que superponen, comparten y en ocasiones mezclan distintas identidades colectivas que les son inherentes (Klandermans, 1992).

La dimensión identitaria en los movimientos sociales, los procesos de construcción de esa identidad colectiva de los mismos, cuestionan lógicas analíticas excesivamente racionalistas. En consecuencia, sólo es posible entender este proceso de construcción de identidad colectiva (permeada de conflictos entre varias identidades colectivas), si se niega el monopolio de la interpretación a la lógica de la acción racional ceñida a la relación costo/beneficio. Brevemente, algunas críticas a esta opción analítica, que me permitirán profundizar en otro aspecto indispensable de entender en los movimientos sociales: las emociones.

- Es discutible que los actores sociales siempre se muevan por principios racionales. Existen emociones, afectos y sistemas de valores que determinan los discursos, las acciones y, por supuesto, las identidades.
- Los actores en los movimientos sociales toman decisiones en virtud de la relación de interdependencia que tienen con otros actores. La relación de participar o no, viene determinada por las expectativas que tienen respecto a aquellos con los que previamente se comparten intereses o redes de colaboración (Jasper, 1998).
- Las satisfacciones también se encuentran en la acción, al mismo tiempo que se resignifican aspectos concretos de la realidad y perspectivas sobre la acción. Las emociones compartidas crean lazos que permiten la integración y la membresía, que pasa a formar parte de la identidad, de una nueva identidad compartida (Kokogianni, 2010).

Para autores como Jasper (1998), Jasper y Polleta (2001) y Kokogianni (2010), las emociones permean toda la vida social. No solamente las reacciones a eventos están cargadas de emoción, sino que moldean objetivos y constantemente nos permiten resignificar los acontecimientos.

Las emociones, como entendimientos cognitivos, son parte de la cultura, al igual que la identidad y la cohesión social (Jasper, 1998:398). Las emociones son el “pegamento” de la solidaridad, y lo que moviliza el conflicto (Collin, 1990:28). Mas allá de ser un simple conjunto de sensaciones internas, una emoción es una acción o estado mental que tiene sentido sólo bajo ciertas circunstancias. Averill (1980: 307) describe a las emociones “*como roles sociales transitorios, esto es, conjuntos socialmente definidos de respuestas para ser empleados en circunstancias específicas*”. Las emociones están atadas a valores morales, creencias y contextos

físicos, pero también son parte de debates en torno a la aceptabilidad de su ocurrencia en ciertos momentos: no todas las emociones son situacionalmente válidas, pues están sujetas al juicio social, lo que les aporta un componente cognitivo y emocional (Goodwin, 2001); las emociones están colectivamente moldeadas, dependen del contexto y dependen de entendimientos o racionalidad con respecto al contexto en el que son válidas o apropiadas (Jasper, 2001).

Jasper (1998) identifica diferencias en las emociones como roles sociales transitorios, definidos y moldeados de manera colectiva, y las emociones que atienden a las idiosincrasias, personalidad y lealtades afectivas individuales. Como parte integral de la acción social, las emociones personales y colectivas, afectivas y reactivas entran en juego en cada etapa del proceso de movilización. Permiten entender adscripciones, afinidades, convergencias y rupturas en las relaciones al interior del movimiento y las reacciones de éste a la realidad social o política que confronta.

Emociones e identidades van de la mano, y si bien no se determinan, sí se permean e interactúan al nivel individual y organizacional, permitiendo la convivencia en torno a normas establecidas, y detonando momentos de tensión y conflicto, que pueden terminar en la re-estabilización del colectivo social o bien en rupturas y formación de nuevos movimientos. Las emociones están presentes al evaluar los resultados de la acción y al planear nuevas actividades (Kokogianni, 2010). Para Jasper (1998) no habría movimientos sociales sin respuestas emocionales, condicionadas por los marcos de significado con los que se evalúan los sucesos que afectan nuestra vida.

Las emociones pueden influenciar la generación de acción colectiva de dos formas: la tendencia y la presteza para actuar, así como la decisión para hacerlo. Diferentes emociones corresponden a diferentes patrones de acción. Algunos psicólogos proponen que las emociones se pueden identificar con diferentes tendencias (Frijda, 1986). La sublevación de las emociones se relaciona con una evaluación del daño potencial o el beneficio de una situación para el grupo o el sistema de creencias al que se adhiere un individuo. Para Jasper (1998) y Goodwin (2001), es la evaluación grupal de la realidad social y el enmarcamiento que se hace de ella, la delimitación conceptual de la misma y su sentido de daño, lo que detona la acción; cuando esta evaluación se vincula con emociones que permiten calificar a las situaciones como injustas, a grupos sociales o políticos como culpables, a los “otros”

como inmorales o nocivos (así como delimitar quienes son “los otros), al “nosotros” como víctimas. Es decir, las emociones son agentes causales de la reflexión, así como elementos de los procesos de enmarcamiento que permiten la definición de identidades colectivas.

Las identidades se cohesionan en torno a sensaciones afectivas y positivas que posibilitan la membresía y la evaluación de pertenencia al grupo. La protesta como acción contenciosa, característica de los movimientos, es una forma de expresar sensaciones negativas y proponer su cambio hacia acciones positivas. Así como las identidades, las emociones también se trabajan colectivamente al interior del movimiento (Polletta y Jasper, 2001), y se refuerzan a menudo detonando la acción.

En el proceso de toma de decisiones para la acción, las emociones tienen un papel importante al filtrar las opciones alternativas (Donagan, 1987). La toma de decisiones es el proceso de escoger una opción considerada como adecuada a partir de un repertorio de posibilidades (Meyer y Staggenborg, 2008). La habilidad de tomar decisiones es un elemento esencial a la actividad humana y se crucial para el concepto de libertad (Donagan, 1987).

La creencia o convicción de que el participar en un movimiento puede contribuir a generar acción para el cambio del problema definido, conduce a la expresión de la intención para la acción, ya sea al nivel individual u organizacional. Este es el resultado de una actitud positiva que se opone a la aceptación pasiva de una situación negativa, que afecta la vida diaria de un grupo. La participación de un grupo con fuerte autodefinición identitaria, como en el caso de grupos étnicos o de grupos campesinos, es un fuerte aliciente para la adherencia de grupos identitarios afines en convicciones, conlleva una sensación de bonanza y de participación para la generación de ciudadanía activa (Kokogiannis, 2010) que refuerza los lazos de solidaridad mediante un componente emocional de bienestar.

1.4.2. Alianzas

La movilización implica la incorporación al movimiento de recursos disponibles al interior de la organización, además de la activación de redes externas de individuos y organizaciones, lo que trae al juego las distintas relaciones de los miembros del movimiento (Ganz, 2000) mostrando interés, compromiso y capacidad estratégica.

La posibilidad de incorporar al movimiento a contactos que a su vez arrojan información, ideas o visibilidad, implica fuerza estratégica y continuidad para el movimiento, aún si la presencia de estos contactos es eventual y ajena a la comunidad del movimiento.

Las alianzas se dan entre contactos de los integrantes de un movimiento, por medio de invitación o de procesos de reclutamiento, y aunque estas alianzas son parte de la comunidad del movimiento social, su entrada a las actividades del mismo es puntual en tiempo y espacio, implican un acuerdo en torno a los enfoques de la acción, similitud de intereses y de visiones del problema que se confronta, pues, por ejemplo, no puede haber alianzas terroristas entre grupos de corte pacifista (Lofland, 1996). Al grupo protagonista, aquel que representa al movimiento social, se le otorgan valores identitarios, que operan como esquemas interpretativos de las identidades que convergen en el movimiento, entre los grupos de la sociedad civil que están involucrados en el ámbito temático de incidencia del movimiento. Estas identificaciones hacen referencia tanto a los líderes como a los militantes del movimiento, y permiten a los potenciales adherentes, entender las formas operativas, la escala de valores y las identidades que enarbola el movimiento, pudiendo evaluar con base en múltiples puntos, la posibilidad de colaboración, o bien la de definirse como antagonista, empleando la diferencia para resaltar particularidades de un contramovimiento o movimiento diferenciado (Ibarra, 2005).

1.5. Liderazgo

Un líder es una persona con capacidad y legitimidad atribuidas dentro de un grupo, para tomar decisiones respecto a la estrategia y los momentos para la acción, además de inspirar a la participación y representar al colectivo en espacios públicos y en negociaciones ante terceros (Ganz, 2002; Morris y Staggenborg, 2002). El grado de participación de un líder es variable en la organización y el movimiento social, no siempre es evidente su presencia y su peso en las decisiones de las acciones del colectivo, lo cual se relaciona con la capacidad y voluntad de delegar las decisiones a otros, y con la estructura operativa que rijan las relaciones interpersonales u organizacionales (Morris y Staggenborg, 2002).

Un líder puede ser un “agente movilizador” dentro del movimiento, inspirando a los participantes a continuar y a tomar decisiones en colectivo para

hacer de la organización o del movimiento un espacio incluyente y democrático (Gusfield, 1966); puede al mismo tiempo ser un “articulador” externo, vinculando al movimiento o la organización con la sociedad, con agentes de gobierno o con alianzas estratégicas que pueden ser otras organizaciones de la sociedad civil, que persiguen objetivos afines (Gusfield, op cit). Los líderes son particularmente relevantes como parte del momento fundacional de una organización, puesto que inyectan las ideas y aprendizajes de su trayectoria en un proyecto colectivo naciente, y aunque posteriormente su actividad disminuya o su presencia salga de escena, la huella ideológica que dejan en una organización es difícil de borrar (Freeman, 1982), en tanto que moldean su estructura operativa y organizativa.

Los líderes pueden ser activistas sociales, que han estado involucrados en organizaciones o movimientos anteriores afines durante mucho tiempo, de tal forma que pueden identificar problemas, desmenuzarlos y proponer soluciones (Lang y Lang, en Morris y Staggenborg, 2002). También pueden ser personas de la academia, capaces de analizar teóricamente los problemas, relacionarlos con eventos históricos y dar una perspectiva integral a los participantes, para construir argumentos dirigidos a las audiencias de las arenas en que se pretende incidir (Morris y Staggenborg, 2002), además de emplear como referencia al movimiento en su trabajo académico. O pueden ser profesionistas que han mostrado gran capacidad estratégica y tienen el carisma suficiente para ser adoptados y postulados como líderes por el resto del grupo que forma la organización o el movimiento (Marullo, 1998).

Para Ganz (2000), los líderes dotan de capacidad estratégica al movimiento con base en: el acceso a la información externa y estratégica para el movimiento o la organización, esto es, acceso a información clave para convertirla en oportunidades de acción; uso de la información al interior del movimiento, la capacidad del líder de trabajar en equipo, recabar opiniones, tomar o delegar decisiones, y por último, la motivación del líder para trabajar y sacar adelante los objetivos del movimiento u organización, pues no es lo mismo un líder “contratado” para realizar un trabajo de índole gerencial, que un líder carismático, que proviene de la base social o de la población que identifica el problema, lo vive y transforma en demanda para después accionar socialmente buscando un cambio, al mismo tiempo que goza de influencias y de capital social necesario para obtener información clave.

Los líderes operan con base en formas organizativas específicas, en un proceso de relación con los integrantes del movimiento, con alianzas y con el público

de incidencia, a veces persiguiendo intereses propios en detrimento de la organización; sin embargo diferentes estructuras organizacionales también producen y requieren diferentes tipos de líderes, incluyendo a quienes prefieren avanzar un movimiento sobre sus intereses propios (Morris y Staggenborg, 2002). Diferentes líderes pueden estar presentes en diferentes momentos del movimiento y pueden proceder de las OMS o surgir en el accionar del movimiento mismo (Marrullo, 1988).

Cuando los movimientos nacen de historias de opresión o inequidad que generan que instituciones y movimientos sociales re-emerjan, los líderes y equipos suelen surgir de organizaciones pre-existentes (Marrullo, op cit). De hecho, cuando eventos que se precipitan crean situaciones pesarasas para individuos y comunidades, los líderes son las personas más activas, y suelen adquirir habilidades en el proceso de organización de los movimientos, pese a que no tengan mucha experiencia previa (Morris y Staggenborg, 2002), llegando incluso a crear oportunidades para la acción, en vez de simplemente detectarlas.

Lo anterior no implica que el líder sea el diseñador o estratega único de un movimiento, Oberschall (1973:174) identifica que en los primeros momentos de un movimiento, se da una “orgía de participación y charla” donde los participantes comparten historias, construyen significados e ideas en torno a lo que debe ser el objetivo, además de comenzar con el proceso de construcción de una identidad común que será empleada como estandarte posteriormente (Klandermans, 1992). Se comienzan a reunir y visualizar los marcos argumentativos para estructurar las demandas, las arenas de incidencia y las tácticas que serán aceptables; en estos primeros estadios hay una composición inestable de personas y organizaciones que, solo con el progresivo accionar se definen y consolidan como movimiento.

Cada persona y organización, aún antes de que se definan los líderes, aportan experiencias previas, tradiciones, normas de género, redes sociales y formas organizativas familiares. Son los líderes los que ayudan a asentar estas ideas y a hacer un movimiento u organización del desorden informativo que impera (Oberschall, 1973).

Una vez consolidado el movimiento, las decisiones operativas pueden evitar las figuras individuales de liderazgo; Ganz (2000) señala la importancia de los equipos formales o informales de liderazgo de las OMS. Argumenta que los líderes más creativos e innovadores trabajan en equipos que permiten la interacción, debate

y deliberación entre participantes, a la vez de facilitar el flujo de información desde varias fuentes, para crear amplios repertorios de acción, fomentar la cooperación inter-organizacional y el trabajo en grupo, además de permitir la formación de liderazgos jóvenes que vayan adquiriendo habilidades y empatía. Los equipos que consisten en gente “de base”, es decir, de los grupos directamente afectados, independientemente de sus habilidades para el trabajo especializado, con profesionistas o personas del equipo técnico, permiten fomentar distintos tipos de vínculos y por tanto flujos de información diferenciada, que permiten mayor capacidad estratégica al debatir entre todos los participantes y una participación incluyente (Oberschall, 1973).

Los movimientos que fomentan la participación incluyente de todos los participantes en los procesos de organización y planeación, suelen tener vida más larga, puesto que refuerzan los cuadros de liderazgo constantemente, además de tener mayor notoriedad y fuerza en los movimientos sociales y ante la sociedad en general, cuentan también con mas repertorios para la acción (Reger y Staggenborg, 2006).

Desde el exterior, se reconoce como líderes, a los voceros, quienes en público hablan por el movimiento, dando a conocer sus causas, motivos y argumentos para entablar la acción colectiva. Suelen tener carisma, aplomo y calidad argumentativa para construir discursos y principalmente defenderlos ante los medios de comunicación o el público opositor.

Los académicos o investigadores son otro tipo de personaje reconocido como líder, pues son personas que resaltan la importancia y las intenciones del movimiento en papel, para su publicación en medios impresos, ya sea revistas científicas o de difusión, o bien periódicos de reparto masivo o de circulación limitada. Aunque los organizadores y voceros también escriben (junto con otras personas del movimiento), lo hacen de manera más pragmática y para discursos particulares, pero no se dan a la tarea constante de documentarse para escribir, o de llevar un registro de aspectos del movimiento que son más profundos o más teóricos. Los académicos elaboran razonamientos complejos a partir de los elementos del movimiento, compilan datos, trabajan en organizar argumentos para contrarrestar a los opositores con datos duros y a menudo son investigadores reconocidos en el ámbito académico (Lofland, 1996).

1.6. Decisiones estratégicas en los Movimientos Sociales: arenas, demandas y tácticas

Los movimientos no son entidades que avancen con unidad de metas que, a menudo, le atribuyen los ideólogos. Son sistemas de acción, redes complejas entre los distintos niveles y significados de la acción social. Su identidad no es una esencia, sino el resultado de intercambios, negociaciones, decisiones y conflictos constantes entre diversos actores (Melucci, 1995). Los procesos de movilización, los tipos de organización, los modelos de liderazgo, las ideologías y las formas de comunicación, son todos ellos niveles significativos de análisis para reconstruir desde el interior el sistema de acción que constituye al actor colectivo (Melucci, 1999).

En los movimientos sociales convergen personas y organizaciones que desean lograr cambios en aspectos concretos de la vida social y política de su entorno mediato o inmediato (Tilly, 1999). Estos cambios los persiguen mediante acciones visibles y contenciosas que ponen de manifiesto los problemas que consideran relevantes y el ideal de una sociedad como la que proclaman necesaria (Carmin y Balser, 2002); tienen visiones –y emociones- compartidas sobre el tipo ideal de sociedad que persiguen, la cual es distinta al orden imperante en el funcionamiento actual de la sociedad y la política (Lofland, 1996); las acciones contenciosas también tienen como objetivo posicionar en público la gama de identidades colectivas que constituyen al movimiento, y que hacen extensivo a grandes grupos sociales el problema que se confronta (Gamson, 1995).

Las acciones contenciosas que realiza el movimiento son producto de decisiones sobre las formas de acción que son más adecuadas a sus objetivos y expectativas y sobre los lugares y públicos presentes en el lugar y momento en que se llevarán a cabo, de tal forma que las demandas se acotan o amplían dependiendo de estos elementos (Meyer y Staggenborg, 2008; Carmin y Balser, 2002). Una decisión se considera estratégica, en tanto define los patrones generales de acción que caracterizan al movimiento de forma identitaria, política y argumentativa (Staggenborg, 1998). Son decisiones que se toman en momentos considerados clave y que definen éxitos o fracasos en función de los objetivos establecidos (Meyer y Staggenborg, 2008). Las decisiones estratégicas reflejan la orientación social y política del movimiento, así como los métodos contenciosos que consideran

adecuados y según los cuales el público puede empatizar o sentir rechazo (Sharp, 1973).

1.6.1 Repertorios estratégicos

La estrategia es una forma de enmarcar decisiones específicas sobre el qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, ante quién y para qué, todo esto con el previo consenso sobre las formas y tipos de acciones que son aceptables, los recursos con los que se cuenta y los intereses que están en juego (Schelling, 1960 en Ganz, 2000).

La estrategia se delibera en niveles multi-organizacionales que comienzan con la interacción interpersonal y terminan en la deliberación y acuerdo colectivos (Reger y Staggenborg, 2006). Refleja parámetros de aceptabilidad para la acción que son comunes y permiten el consenso.

La estrategia está permeada por componentes ideológicos que operan en todos los niveles estructurales del movimiento, producto de experiencias previas con la autoridad o la sociedad por parte de las organizaciones del movimiento; estas experiencias, con los aprendizajes derivados, marcan trayectorias, permiten la reflexión que ayuda a reforzar lazos de solidaridad o bien provoca rupturas, pero de cualquier forma, se definen posibilidades aceptables para la acción, esto es, repertorios aceptables para la planeación de tácticas acordes con el objetivo del movimiento, la audiencia a quien se dirigen y con la dirección ideológica con que se estructura la argumentación de la demanda (Lofland, 1996).

A menudo los movimientos crean equipos coordinadores u organizaciones “sombrilla” (McCarthy y Wolfson, 1996), que están integradas por los líderes o por las organizaciones más participativas en el movimiento, éstos equipos son quienes toman las decisiones más importantes, pudiendo prescindir de gran parte de los otros niveles de participación la mayor parte de las veces, pero contando con su voto de confianza.

La habilidad de un movimiento de utilizar sus recursos, tanto ideológicos (capacidades intelectuales, argumentativas, experiencias y aprendizajes), como materiales (alianzas, personas, medios de comunicación, dinero), en pos de lograr sus objetivos se refiere a la capacidad estratégica que son capaces de poner en juego para lograr sus objetivos (Ganz, 2000). Esta capacidad está en estrecha relación con los

procesos de deliberación internos que se tienen para decidir y para evaluar las posibilidades (Smithey, 2010).

Los movimientos eligen de un catálogo de posibilidades de acción dadas por la evaluación de experiencias pasadas y delimitadas por filtros ideológicos, que son los aspectos que restringen las opciones disponibles-aceptables para un movimiento social (Freeman, 1982). Los filtros ideológicos incluyen valores, creencias, aspectos normativos y filosofías del mundo, altamente relacionados con las identidades colectivas que convergen y con las formas de enmarcar los problemas que aquejan a su realidad, además de permitir definir culpables o adversarios (Gamson, 1995), estos filtros, también condicionan las alianzas que forman las organizaciones del movimiento social para llevar a cabo sus objetivos (Ryan y Gamson, 2006), en tanto que se busca la mayor afinidad posible para construir el movimiento y sus momentos.

Para autores como Ganz (2000), la capacidad estratégica depende de la figura del líder, por el uso de la información y la motivación que tiene para trazar estrategias con base en la información a la que tiene acceso. Esta capacidad se hace extensiva a los equipos coordinadores, cuando la figura de liderazgo recae en ellos (McCarthy y Wolfson, 1992 y 1996).

Para Ganz (2000), la estructura organizacional se crea mediante compromisos entre los fundadores del movimiento, que establecen formas de interacción al interior del mismo y con actores externos, sean audiencias o público objetivo³. La estructura define patrones de legitimidad, poder y deliberación que establecen formas de trabajo basadas en formas organizacionales conocidas y aprobadas por los fundadores; así, pese a que la forma organizacional es una consecuencia de las opciones estratégicas de los fundadores (en el momento fundacional), una vez establecido, tiene una influencia profunda en la capacidad operativa y de innovación del movimiento (Ganz, op cit).

Una fuente común de problemas para varios movimientos es el intento frecuente por perseguir estrategias para las cuales su estructura general es inapropiada (McCarthy y Wolfson, 1996). La estructura, en tanto producto material de formas de relacionarse entre niveles del movimiento, delimita también sus

³ En una traducción de terminología para describir agentes externos al movimiento, las audiencias son los bystanders, aquellos que asisten a contemplar las actividades del movimiento y son potenciales adherentes, y el público objetivo son los agentes a quienes se dirige el movimiento, cuya conducta o políticas quiere influenciar para lograr la causa perseguida. (Zald y McCarthy, 1977; Lofland, 1996).

posibilidades estratégicas (Freeman, 1982). Para Zald y Ash (1996) entre otros, el movimiento social más viable es el que tiene varias organizaciones que pueden jugar diferentes roles y perseguir posibilidades estratégicas distintas en distintos momentos, lo cual sitúa a las OMS como recursos, además de integrantes, del movimiento.

Las organizaciones del movimiento interactúan constantemente con autoridades, opositores, medios de comunicación, aliados y simpatizantes, lo cual retroalimenta al movimiento y permite entradas críticas que se aprovechan y enriquecen o reducen el acervo de opciones (Staggenborg, 2008), moldeando el futuro.

La interacción de los individuos como personas y como integrantes de una OMS, da lugar a formas de imaginar y enmarcar o presentar a los demás el conflicto que enfrenta el movimiento (Snow y Benford, 1988), pero es todavía difícil comprender cómo estos marcos emergen de la acción colectiva misma, es decir, de la interacción social en la acción, y en cómo y cuáles niveles de interacción se generan las identidades que permiten enmarcar el conflicto y su potencial solución (Lofland, 1996; Gamson y Ryan, 2006; Meyer y Staggenborg, 2008). En esto es difícil decir concluyentemente cómo las construcciones ideológicas colectivas que permiten generar y continuar el movimiento interactúan para movilizar los recursos materiales y argumentativos en la construcción de una estrategia visible dirigida a un público objetivo (McCarthy y Wolfson, 1996; Stoecker, 1995).

La historia de las interacciones del movimiento, y las opciones estratégicas decididas en esas interacciones genera trayectorias de acción que afectan recursos, redes y opciones subsecuentes. Dicho de otra forma, las historias detrás del movimiento y sus organizaciones son determinantes en las formas que adopta estructural y estratégicamente (Freeman, 1982). Pero existe otro elemento determinante: los niveles o capas de identidades colectivas que confluyen: organizacional y la del movimiento, que pese a convergir oportunamente para la definición de la estrategia, también enfrentan momentos de choque, o eventos en la relación, que propicia el conflicto y la remodelación de un movimiento (Smithey, 2010).

Los repertorios estratégicos, entonces, consisten en los ámbitos o espacios aceptados para la acción, aquellos en los que se posicionan las demandas y se confronta a los adversarios, las demandas o narrativas argumentativas para

posicionar el problema que se confronta ante el público, sea este simpatizante o adversario, y las tácticas o acciones específicas que se emprenden en la búsqueda de modificar la realidad y solucionar los problemas que generan la formación del movimiento.

1.6.2 Estrategia

La estrategia es el patrón en la toma de decisiones; decisiones que revelan consistencia en el tiempo (Narayanan y Fahey, 1982). Es el plan total de acción, el conjunto de actividades con respecto a la movilización de recursos y la serie de acciones colectivas que los movimientos designan como necesarios para lograr los cambios sociales deseados (Jenkins, 1981; Meyer y Staggenborg, 2008).

Estudiar la estrategia es una manera de discernir patrones en las relaciones entre intención, acción y resultado, en medio de situaciones sociales o políticas confrontadas; la estrategia es una manera, una opción entre muchas, de enmarcar opciones sobre arenas, demandas y tácticas (Staggenborg, 2008).

La estrategia deriva de una serie de opciones que han sido depuradas o aceptadas con base en aprendizajes de etapas previas del movimiento o de las organizaciones que lo integran; de esta forma es, también, el producto de evaluaciones colectivas de momentos en las interacciones con autoridades, simpatizantes y oponentes.

Las estrategias pueden ser contenciosas, encaminadas a lograr los objetivos del movimiento, confrontando directamente a los opositores o posicionando las demandas ante el público objetivo, sea gobierno o sociedad (Gamson, 1995); pueden también ser estrategias de movilización, dirigidas a atraer participantes, simpatizantes o simplemente a reforzar el movimiento en momentos de “calma política” (Reger y Staggenborg, 2006), lo cual es común de las comunidades del movimiento social.

Las estrategias deben de ser coherentes con los objetivos del movimiento y pueden estar encaminadas a impactar en los medios de comunicación, educar audiencias o públicos objetivo, realizar investigación para construir argumentos que abastezcan de material para educar o impactar en los medios (o educar usando los medios) o incidir en la elaboración o modificación de políticas públicas mediante tácticas de cabildeo directo en espacios oficiales (Lofland, 1996).

Podemos pensar en las decisiones estratégicas por parte de las OMS como limitadas por ciertos factores: recursos disponibles, restricciones en el uso de esos recursos, estructura de las OMS y ambiente interno, así como expectativas y posibles audiencias (targets), estas restricciones son filtros que generan los dilemas estratégicos que enfrenta el movimiento al decidir. Más allá de los recursos materiales, otros factores limitantes para las estrategias del movimiento son la ideología⁴ de sus unidades organizacionales, los grupos de referencia, las expectativas y las relaciones con el grupo target (Freeman, 1982).

Las decisiones estratégicas se dan en tres esferas que exigen deliberación y acuerdo colectivo para su puesta en práctica, y en medio de dilemas estratégicos con respecto a los ámbitos o arenas en los cuales se operará, las demandas o discursos que serán presentados, y las tácticas o formas de acción visible que se emplearán para posicionar las demandas en las arenas. Los elementos sobre los que hay que discernir, las arenas, demandas y tácticas (Meyer y Staggenborg, 2008), a menudo se condicionan mutuamente para guardar una coherencia en la imagen exterior y la construcción interna del movimiento.

1.6.3. Emoción, identidad colectiva y estrategias

El repertorio estratégico, integrado por las opciones estratégicas que han sido empleadas y exitosas, ya sea por parte del movimiento o por uno afín y que es evaluado como compatible, es la gama aceptable de acciones que se pueden implementar, es la posibilidad de acción, implica ir acorde con los lineamientos políticos y sociales del movimiento (Meyer y Staggenborg, 2008).

La elección de tácticas y de arenas de incidencia, al igual que los motivos de existencia de un movimiento, pueden verse desde una perspectiva meramente instrumental, esto es, en función únicamente de los objetivos del movimiento (Lofland, 1996), pero también desde una perspectiva cultural. James M. Jasper (1997), comenta en su artículo “gustos en las tácticas”: “las tácticas son rara vez, si es que alguna, medios neutrales sobre los que los activistas no tienen opinión. Las tácticas –y los repertorios- representan rutinas importantes, emocional y moralmente

⁴ Para Carmin y Balsler (2002), la ideología está hecha de creencias sobre cómo debe de funcionar el mundo, facilitando comparaciones entre cómo debería y cómo funciona, motivando la acción promotora del cambio que impulsa a los movimientos sociales.

salientes y significativas para las vidas, las identidades y los posicionamientos de las personas y organizaciones en un movimiento” (p. 237). Las estrategias, en este sentido, están íntimamente ligadas a los sistemas de valores que dictan que tipo de acción se considera moral u honorable (Gecas, 2000).

La acción colectiva que emprende un movimiento social no se inicia en un vacío cultural. Swindler (1986; 1995), caracteriza la cultura en los movimientos sociales, como una caja de herramientas de recursos como experiencia, rituales y aprendizajes a partir de los cuales el grupo define sus posibilidades estratégicas. La relación entre identidad, cultura y acción es dialéctica y por tanto constante. La acción colectiva no está limitada a un único repertorio, pues siguiendo a Klandermans (1992), los procesos de construcción de significados y por tanto de validación para la acción estratégica, se dan en tres niveles o momentos: (1) el discurso público y la retroalimentación de adversarios o simpatizantes; (2) el debate interno para la toma de decisiones necesaria de manera previa a la acción; y (3) la revisión y reflexión en torno a los momentos del movimiento y los eventos que tienen lugar en las relaciones sociales que lo estructuran.

El conflicto y la convergencia, así como las emociones que permiten definir una situación como conflictiva o como empática, están siempre presentes en la toma de decisiones estratégicas (Kane, 1997). Dado que estas decisiones son determinantes, la identidad organizacional de cada OMS juega un papel determinante para definir la convergencia, ya que las decisiones se toman a nivel grupal, pero en el que cada organización, a la vez que propone, debe de tener en cuenta lo que está dispuesta a ceder y las implicaciones –instrumentales y emocionales- de aceptar o rechazar una opción.

Decidir las tácticas, las arenas de incidencia o confrontación así como los argumentos narrativos, implican un posicionamiento importante de los actores colectivos, por lo que las evaluaciones emocionales, aquellas que desde la cultura y la identidad propia permiten hacer un balance de aceptabilidad, están siempre presentes y confrontan la mirada instrumental que suele asociarse con la toma de decisiones estratégicas. Dado que la identidad colectiva se construye a través de definiciones compartidas de las situaciones por parte de los miembros del movimiento, es un resultado de la negociación y de ajustes constantes de diferentes elementos relacionados con los fines y los medios de la acción colectiva. Los procesos de interacción, negociación y conflicto sobre la definición de las situaciones

y los marcos de referencia del movimiento, se construyen las trayectorias y los eventos que constantemente redefinen al movimiento (Gusfield, 1994).

1.6.4. Demandas

Se refieren al nivel discursivo que emplea el movimiento para presentar sus motivos de existir ante la sociedad o al adversario. Las demandas constituyen los enunciados o exigencias de cambio que, de cumplirse, darían solución o cauce a mejoras en la vida de los miembros del movimiento.

La demanda es el matiz o enmarcamiento momentáneo que el movimiento dará a su tema de interés para provocar reacciones en las audiencias y requiere de consenso amplio entre todos los actores del movimiento, para poder escenificar de manera efectiva sus causas, generando simpatía de las audiencias (Lofland, 1996). Las demandas se pueden presentar como el tema amplio que el movimiento persigue, mediante manifiestos completos, o bien fragmentar para presentar puntos acotados y concisos, que reflejen aspectos parciales perseguidos por el movimiento, de acuerdo con la evaluación del momento en que se presentarán (Meyer y Staggenborg, 1998).

Las demandas son marcos que permiten al resto de la sociedad entender las dimensiones del problema que confronta el movimiento, se pueden argumentar en términos de justicia social, de derechos políticos, de igualdad de clases o en términos económicos, de tal forma que el impacto sobre el público objetivo sea mayor. Para Kokogianni (2010), los complejos narrativos que usa un movimiento permiten entender las dimensiones del problema en un contexto de identidad colectiva, es decir, tanto los argumentos en que se sustentan las demandas como éstas últimas, permiten entrever las partes de la vida que se ven afectadas y las dimensiones – sociales, emocionales, económicas o identitarias- que son transgredidas. Ibarra y Kitsutse (en Lofland, 1996), categorizan las demandas de acuerdo con el marco discursivo-apelatorio que el movimiento usa para presentarlas en:

1. Pérdida. Centrar el argumento de la causa del movimiento en la pérdida de valores, ideas u objetos materiales que representarían un vacío para la humanidad o para la sociedad a la que se dirige el discurso, en tanto que los humanos son custodios encargados de perpetuar ciertos valores (espirituales o materiales), que son arrebatados por sectores en el poder. La pérdida puede ser de elementos materiales o intangibles (culturales).

2. Derechos. Políticos y civiles o económicos, sociales y culturales, cuando se enmarca el tema como un asunto de derechos a los que los seres humanos (o vivos) deben de tener igual acceso, ya sea basándose en las leyes, acuerdos internacionales o valores morales.
3. Miedo. Al resaltar argumentos sobre el daño que el orden actual de las cosas o la parte fallida del sistema ocasiona a la sociedad o a una parte de la sociedad.
4. Desinformación. Señalar la falta de información o de información confiable por parte de las autoridades. Esto lleva a argumentar la manipulación que se ejerce sobre ciertos sectores de la población que se encuentran en riesgo al no conocer aspectos de la realidad que el movimiento desea modificar.
5. Calamidad. Se distingue por metáforas que evocan las consecuencias de un desastre. Este discurso puede funcionar como paraguas para otros argumentos y para cobijar varios movimientos.

El argumento y el marco que se dará a la demanda es un acuerdo interno al movimiento, y depende en gran medida del tipo de organizaciones que lo conformen, pues el discurso y los argumentos narrativos que cada organización emplee para su funcionamiento cotidiano se reflejarán en las demandas colectivas. Lofland (1996) identifica siete tipos de OMS de acuerdo con las posturas estratégicas y discursivas con las que trabajan:

- “trascendentales”, que promueven cambios rápidos en las conciencias mediante el uso de nuevas tecnologías
- Educadoras. Comunican hechos y argumentan mediante razones lógicas.
- Intelectuales. Producen información y razones con metodologías que permiten seguir todo el argumento.
- Políticas. Emplean el discurso político y argumentos legales.
- Protestantes. Uso de consignas violentas y acotadas.
- Profetas. Pretenden afectar mediante el discurso moral y de valores.
- Guerreros. Usan poco la narrativa, normalmente realizan acciones violentas

Un movimiento puede usar varios de estos argumentos con diferentes ángulos de la o las demandas, dependiendo del público y el espacio o arena donde se presentará. El empleo de distintos argumentos y posiciones políticas permitirá ampliar los ámbitos de incidencia y llegar a audiencias con diferentes espectros de impacto.

1.6.5. Arenas

Son los ámbitos para presentar las demandas, cada ámbito que el movimiento decida emplear dará lugar a diferentes audiencias de incidencia y contención (Meyer y Staggenborg, 2008). De igual forma, cada arena presenta diferentes reglas de comportamiento y permite una gama restringida de acciones o tácticas. Al momento de decidir arenas para la actuación, los activistas evalúan sus oportunidades y el impacto que tendrán sus acciones sobre el público, en tanto audiencia y objetivo, pero también se evalúan aspectos ideológicos, pues si bien el movimiento se plantea incidir ante audiencias de la sociedad civil o del gobierno, hacerlo en ambas puede contravenir principios ideológicos fuertes, como veremos en una sección posterior.

Las arenas se refieren al público que se pretende reciba el mensaje del movimiento, ya sea para lograr el cambio cuando se trata de confrontación directa con el adversario o causante del problema, o bien para conseguir adherentes o simpatizantes que amplíen la base social y demandante el movimiento, por lo que en gran medida las arenas definirán las tácticas de acción: el actuar en la vía pública bloqueando una carretera, o montar una exposición o un espectáculo en una plaza pública son acciones con audiencias similares pero con objetivos diferentes, el bloqueo de la carretera es una confrontación directa a las autoridades teniendo como espectadora a la sociedad civil, mediante la afectación de las actividades cotidianas de la población, mientras que el espectáculo en la plaza pública es una táctica dirigida a conseguir adherentes de manera educacional o de difusión, montado para la sociedad.

Las arenas más comunes para un movimiento son la sociedad civil y los espacios de la vida cotidiana, o los espacios de gobierno que son las oficinas de políticos, de secretarías de Estado o de los cuerpos policiales o militares encargados de vigilar el orden. Dependiendo del público objetivo se escogerán las arenas ideales para comunicar el mensaje o posicionar las demandas del movimiento.

La decisión de las arenas no debe de entenderse, tampoco, como una de carácter meramente instrumental, guiada por el impulso de avanzar el movimiento en torno a objetivos únicamente. Las arenas implican una postura emocional que permite ver, en gran medida, las actitudes contenciosas de un movimiento y sus organizaciones. El movimiento indígena en México, que funciona en torno a los acuerdos tomados en el Congreso Nacional Indígena, ha definido no emplear la

lucha política, la incidencia directa con autoridades gubernamentales para avanzar las causas del movimiento (Grammont y McKinlay, 2006). La historia de confrontaciones infructíferas para el movimiento indígena, negociaciones incumplidas por parte del gobierno y la continua falta de atención a las demandas de autonomía indígena, que atienden a la necesidad de tener reivindicaciones en el terreno cultural, han llevado al grueso del movimiento a tener un rechazo normativo hacia la actuación en la arena política nacional, rechazando la colaboración con organizaciones o instancias que pretendan emplear la vía del cabildeo⁵.

La discusión que lleva a definir las arenas de actuación, implican retomar aspectos identitarios profundos sobre los ámbitos considerados válidos y legítimos para la acción social, consideran historias conjuntas con actores sociales y políticos que provocan emociones y reacciones, en tanto que las arenas implican significaciones y representaciones sociales con respecto a los “otros”, y la inclusión de estos otros como objetivos (targets) del movimiento, implica validarlos como actores socialmente legítimos y dignos de ser considerados (Benford y Snow, 2000). Al mismo tiempo, el movimiento busca ser considerado válido al buscar incidir en cierta arena, por lo que la consideración de los “otros” como actores socialmente importantes, es asunto de primera mano dentro de las decisiones estratégicas de un movimiento.

Las arenas de actuación implican la significación del oponente o del simpatizante, por lo que, de tratarse de decisiones meramente instrumentales, orientadas a los fines, deben de entenderse los procesos de significación intrínsecos a la definición de éxitos y fracasos en el contexto de espacios y públicos (Smithey, 2010).

1.6.6. Tácticas

Son los medios específicos y visibles de implementar la estrategia, las formas de acción colectiva que emprenden los actores del movimiento después de procesos de deliberación (Meyer y Staggenborg, 2008). La elección de tácticas es crítica no solo por los resultados que se puedan conseguir para la causa del movimiento, sino porque de ellas depende la posibilidad de movilizar apoyo para el movimiento, en

⁵ Centro de documentación sobre zapatismo y movimiento indígena.
<http://www.cedoz.org/site/content.php?doc=407>

tanto que la comunidad entera decida cooperar por estar de acuerdo con las tácticas elegidas, e incluso invitar a más personas para hacer masiva la participación (Edwards y Mc Carthy, 2004).

La elección de tácticas tampoco es terreno neutral para las organizaciones de un movimiento, en tanto acción social que requiere de ser escenificada en público y que envía mensajes sobre las intenciones del movimiento (Goodwin, 2001), sobre las identidades del movimiento y sobre las formas de ver la realidad y sus problemas. Las tácticas implican aceptación de métodos contenciosos y conllevan aceptación o rechazo de otros sectores sociales o políticos, de tal forma que su elección es un proceso minucioso que involucra predecir las reacciones y emociones de aquellos a quien se dirigen (Ryan y Gamson, 2006; Smithey, 2010).

Las tácticas más comunes se insertan en los terrenos de la persuasión, la colaboración, la negociación o la coerción (Lofland, 1996), al interior de la sociedad o en la relación con autoridades, aunque a menudo se emplean distintas tácticas en momentos determinados, dependiendo del ambiente social o político en el que quiera operar el movimiento. Las tácticas de un movimiento dependen del repertorio de sus organizaciones y de la evaluación de experiencias anteriores del movimiento mismo, pues a menudo se descartan aquellas que no han sido exitosas o que han representado retrocesos para la causa o bien bajas para la membresía del colectivo.

Nos referiremos a las tácticas más comunes de acción no violenta que son emprendidas por los movimientos, en tanto que las tácticas que emplean acciones violentas pueden ser catalogadas como pertenecientes a grupos terroristas (Lofland, 1996). La acción no violenta se refiere a que no ocasiona daños físicos a personas, está cimentada ideológicamente en una serie de prácticas y hábitos que son socialmente aceptables, entrañan formas de dirigirse al público objetivo con niveles variables de contención y de contenido emocional que será exaltado, el cual puede ser tomado como “amable” o como “grosero”, por parte de terceros, y con base en esta potencial respuesta el nivel de aceptabilidad al interior del movimiento puede variar (Edwards y Mc Carthy, 2004).

Las tácticas de acción no violenta más comunes se refieren a la protesta pública, como demostraciones en masa, peticiones firmadas, caminatas, premios de burla, huelgas simbólicas de hambre, plantones, desfiles y marchas, eventos públicos simbólicos. Son quizá los métodos menos contenciosos, en tanto que son legales y

amables con las audiencias y los públicos objetivos, puesto que demuestran la disposición a negociar o cooperar para lograr las causas enunciadas en las demandas.

Tácticas menos cooperativas, pero tampoco violentas, implican rehusar a permitir que continúe el orden social normal sin logros para la causa. Estas pueden estar encaminadas a la negociación o bien a la exigencia de modificar el orden, y los más comunes son las huelgas, boicots económicos o sociales, obstrucción legal del paso (camino u oficinas), actos de desobediencia civil, no reconocimiento de figuras legales, eliminación de cuotas o pagos variados.

Las tácticas de intervención pueden causar interrupciones o incluso destruir ordenes construidos. Estas tácticas representan retos directos que afectan al orden establecido de manera radical, pues atentan contra aspectos normativos, relaciones o instituciones que son cuestionadas por el movimiento. Las más comunes son la ocupación de oficinas, hogares o espacios públicos, creación de instituciones paralelas, sabotaje, establecimiento de mercados alternativos, invasión de los sistemas informáticos.

1.7. Orientación estratégica en los movimientos sociales

Para Cohen y Arato (2001), en los movimientos sociales contemporáneos opera, orientando las decisiones estratégicas, una política dual de identidad y de influencia, dirigida tanto a la arena de la sociedad civil como al sistema de organización político (o la arena de la sociedad política). Para estos mismos autores, los actores colectivos contemporáneos luchan conscientemente por el poder, para construir nuevas identidades, para crear espacios democráticos tanto dentro de la sociedad civil como del sistema de organización política para la acción social autónoma y para reinterpretar las normas y reconfigurar las instituciones. Por lo tanto, la sociedad civil es, a la vez el objetivo y el terreno de la acción colectiva, donde se observan los procesos por los que los actores colectivos crean identidades y solidaridades que defienden, y donde se evalúan las relaciones entre los adversarios sociales y lo que está en juego en sus conflictos.

En las estrategias orientadas a la arena de la sociedad civil, los movimientos pretenden redefinir normas culturales, identidades individuales y colectivas de los papeles sociales, de los modos de interpretación y de la forma y contenido de los discursos mediante la “política de la identidad”. Sin embargo, como las instituciones

autoritarias frecuentemente son reforzadas por el control desigual del dinero y del poder, y como la colonización de las instituciones de la sociedad civil por estos medios impide continuar con su modernización, los actores colectivos contemporáneos también deben dirigirse a la sociedad política. Una “política de inclusión” se dirige a las instituciones políticas para obtener reconocimiento para nuevos actores políticos como miembros de la sociedad política y para lograr beneficios para aquellos a los que “representan”. También es indispensable una “política de influencia” dirigida a cambiar el universo del discurso político para que genere espacios para nuevas interpretaciones de necesidades, para nuevas identidades y para nuevas normas. Sólo con esa combinación de esfuerzos, resultantes en decisiones estratégicas orientadas a modificar aspectos identitarios-culturales, a influir en los discursos políticos y a provocar la inclusión de los temas del movimiento en la vida de la sociedad (civil o política), puede restringirse y controlarse la colonización administrativa y económica de la sociedad civil, gracias a la cual se mantienen las relaciones sociales de dominación y se crean nuevas dependencias (Cohen y Arato, 2001).

De acuerdo con Cohen y Arato, un último punto es esencial, la democratización adicional de las instituciones políticas y económicas (una “política de reforma”) también es central para este proyecto. Sin este esfuerzo, cualquier progreso dentro de la sociedad civil está en realidad tenue. Mientras que la democratización de la sociedad civil y la defensa de su autonomía frente a la “colonización” económica o administrativa puede ser considerada como el objetivo de los nuevos movimientos, la creación de “sensores” dentro de las instituciones políticas y económicas (reforma institucional) y la democratización de la sociedad política (la política de la influencia y la inclusión), que abrirían estas instituciones a las nuevas identidades y a las normas igualitarias articuladas en el terreno de la sociedad civil, son los medios para asegurar esta meta.

Cohen y Arato parten de pensar en la necesidad de influenciar a la sociedad política como parte del éxito, para ser rotundo, de un movimiento social. En esto cabe hacer la precisión de distinciones en la orientación de los movimientos sociales contemporáneos, lo que algunos autores como Wallerstein (2001) llaman movimientos sistémicos y antisistémicos.

1.7.1 Movimientos sistémicos y antisistémicos

Los movimientos sociales son el fruto de contradicciones que se han globalizado; según Alain Touraine (1999), para ser verdaderos actores colectivos necesitan cierta inscripción en la historia, una visión de la totalidad del campo dentro del cual se inscriben, una definición clara del adversario y, finalmente, una organización. Son más que una acción colectiva, más que un grupo de intereses, y más que una iniciativa autónoma del Estado. Los movimientos nacen de la percepción de objetivos como metas de acción, pero para existir en el tiempo requieren un proceso de institucionalización. Se crean roles indispensables para su reproducción social. Así nace una permanente dialéctica entre metas y organización, cuyo peligro potencial siempre presente es la posibilidad de que la lógica de reproducción se imponga por sobre las exigencias de los objetivos buscados (Touraine, 1999 Houtart, 2008).

Para Immanuel Wallerstein (2008) y Aguirre Rojas (2010), la dimensión temporal de un movimiento, vista como una etapa histórica, es indispensable para situar su significación de las estructuras sociales, económicas o políticas a las que a menudo confrontan. La etapa económica y política actual, llamada comúnmente “globalización”, para estos autores hace referencia a la mundialización de un sistema capitalista en lo económico, que permea, con base en relaciones de producción y de capacidad adquisitiva, a todos los círculos de la sociedad y la política, estableciendo estructuras de diferenciación de acceso al poder para tomar decisiones que afectan a la sociedad. El sistema mundial capitalista también tiende a homogeneizar a los seres humanos como iguales en cuanto a sus derechos y sus necesidades, estableciendo definiciones globales de bienestar, desarrollo social, participación y otros conceptos que rigen las relaciones a partir de un discurso homogeneizante y globalmente aceptado como parte de un régimen democrático –pero capitalista- (Aguirre Rojas, 2010).

Partiendo de la premisa de que los movimientos sociales son una forma de acción política colectiva que implica la preexistencia de un conflicto que trata de resolverse a través de la movilización, la protesta o la organización, hablar de movimientos sociales de resistencia antisistémica implica que los mismos constituyen una respuesta a un orden mundial percibido como injusto. Un orden mundial que genera profundas desigualdades, pobreza, degradación ambiental y

sobre todo, la destrucción de culturas autóctonas (Ibarra, 2007). El movimiento antisistémico tiene fuertes componentes identitarios que marcan una lucha cuyas demandas estarán asentadas en la etnicidad, en las culturas y en el territorio, como una respuesta contundente a las implicaciones de la globalización.

Los movimientos antisistémicos tratan de construir discursos diferenciados para contrarrestar un orden mundial que afecta negativamente a los aspectos más locales de la vida: las culturas, las identidades y el territorio. Este discurso tiene dos bases: la definición de una injusticia y de un enemigo que exige la acción unitaria, pero que requiere al mismo tiempo la exaltación de la diversidad de cada grupo desde lo cultural, desde lo identitario-ideológico y desde su espacio físico de vida y de producción, es decir, desde los sitios que se encuentran amenazados por un orden global. El recurso que se exalta es la cultura del localismo, la autonomía de los espacios naturales y diferentes de vida.

El hecho de que los movimientos que hoy luchan en contra del capitalismo mundial luchan contra esquemas sociales y económicos globales, hace que ellos se conviertan, si desean ser consecuentes y coherentes, en movimientos radicales antisistema. Lo que entonces no solo los lleva a profundizar y redimensionar de manera inédita el conjunto de sus demandas y arenas de acción, sino que también los conduce a formular nuevos, y más profundos replanteamientos de propuestas alternativas de sociedad que son para la reconstrucción y reorganización ante un inminente desastre global (Aguirre Rojas, 2010).

Los movimientos antisistémicos trabajan como redes de grupos locales que actúan en varios niveles, de manera conjunta y separada, pero permanente: por un lado convergen en grandes concentraciones contestatarias a reuniones políticas o económicas claves para el sistema capitalista mundial, de organizaciones, grupos o gobiernos que en cierto grado representan las estrategias dominantes de globalización política y económica. Por otro lado, el movimiento organiza foros sociales de debate y reflexión, además de promover la reconstrucción y el rescate de las formas culturales de producción y de gobierno local (Ibarra, 2007). Estos movimientos sociales son en cierto grado emancipatorios y van a contrapelo del tipo de articulación que se propone desde el Estado-academia-partidos; la articulación externa de un movimiento tradicional, como al propuesta por Cohen y Arato, busca vincular al movimiento con el Estado o con los partidos, pero en esto se pierde cierta autonomía (Zibechi, 2007). Por esto, los movimientos generan formas de acción

colectiva para trabajar, con las cuales también comunican y transmiten demandas a la sociedad, generando lazos fuertes de solidaridad e identidad entre sus miembros, y sobre todo, desafiando a los adversarios que se oponen a la localización del cambio – en oposición a la globalización y unidireccionalidad del mismo-.

Los contenidos del discurso común a los movimientos antisistémicos, están sustentados en tres marcos referenciales que operan como ideas-fuerza: indigenismo, pobreza y consumo (Buey y Riechmann, 1994 citados en Ibarra, 2007).

Desde la mirada indigenista, el globalismo tiende a la uniformización planetaria de los seres humanos, basándose en criterios organizativos utilitaristas de mercado, en pautas culturales propias de la sociedad moderna de occidente como el individualismo, la privatización, tecnificación, cientificismo y secularismo, además de conllevar una concepción política ideal basada en a democracia representativa, liberal, que atenta contra los modos organizativos, culturales y políticos de las distintas comunidades locales indígenas del planeta.

El argumento desde la pobreza es diferente. En esta visión, la globalización del neoliberalismo justifica el aumento de la desigualdad económica entre ricos y pobres, al permitir el poder político en manos de los más ricos económicamente hablando, disminuyendo las posibilidades creativas de formas de subsistencia por parte de los sectores más pobres y desempoderados.

El anticonsumismo afirma que la globalización es una ideología rechazable porque atenta contra la dignidad propia y natural del ser humano, al concebirlo como un sujeto al que se le pueden modificar las necesidades básicas mediante una oferta limitada de artículos producidos en serie, a costa de la diversidad propia de los sistemas naturales.

Para autores como Ibarra (2007), los movimientos antisistémicos no han sido hasta ahora capaces de ofrecer un modelo social y económico alternativo opuesto al sistema de mercado, pero sí son conscientes de que su alternativa pasa por romper con la lógica economicista que impera en las relaciones sociales y económicas mundiales, permeando a la esfera política y a las políticas de desarrollo. En todo caso, muchas de las organizaciones que se adscriben a movimientos de corte antisistémico, tienen programas específicos anticapitalistas, desde el sindicalismo agrícola francés (Bové, 2010) proponiendo un establecimiento de sistemas de propiedad y gestión cooperativa, al movimiento de ATTAC, que propugna la intervención política en los flujos financieros mediante la implantación de un

impuesto que permitiría gravar las transacciones de capital a nivel global, y destinar esos recursos económicos para financiar actividades económicas productivas para paliar las desigualdades sociales. Rosset (2010), ve en el movimiento indígena latinoamericano, al movimiento más netamente antisistémico, en tanto que los indígenas nunca recibieron nada del sistema y, por lo tanto, no ven en el mismo una alternativa real de desarrollo, sino el problema al que hay que confrontar para poder construir un mundo de iguales.

Una de las estrategias antiglobalistas frente al modelo capitalista neoliberal ha sido iniciar procesos encaminados a promover la figura del comercio justo, con un carácter ético y social antes que puramente económico (Harnecker, 1999).

Las tácticas más comunes corresponden a la defensa de los espacios propios, que al mismo tiempo se viven como diferentes, frente a lo que se entiende son pretensiones uniformizadoras y colonizadoras procedentes de un orden mundial impuesto por elites de poder económico. Se reivindica la democracia como el camino para resolver políticamente los problemas de la sociedad, pero no resulta evidente que ello implique una defensa incondicional de la política decisional del tipo representativo de las democracias formales, sino en procesos de participación amplia manejados de manera horizontal, basadas en la creación de plataformas cívicas y reuniones asociativas de tipo informal (Harnecker, 1999).

Los movimientos antisistémicos se alejan de formular propuestas grandes y cerradas, resistiéndose a ser una ideología y radical, que conduzca a dividir el mundo de acuerdo con los subordinados y los insubordinados (Aguirre Rojas, 2010). De esta forma, la mirada antisistémica es una serie de estrategias que comparten la idea de construir desde la acción, desde situaciones y prácticas concretas que aspiran a unirse y entrelazarse de manera horizontal (Alonso, 2010).

Para Zibechi (2007), existe una justificación clara para que los movimientos antisistémicos se rehúsen a emplear a la sociedad política como arena de incidencia, aún hablando de partidos políticos de izquierda, que comúnmente buscan aliarse con este tipo de movimiento, este divorcio parte de la convicción de que la construcción de autonomías ligadas a la emancipación sólo pueden hacerla *“los de abajo, con otros de abajo, en los espacios creados por los de abajo”* (pp.47).

Frente a las formas de dominación desde el progresismo estatista, Zibechi (2007) propone: 1) comprender las nuevas gobernabilidades en toda su complejidad como resultado de las luchas, pero además como un intento para destruirlas; 2)

proteger los espacios y territorios propios: 3) no sumarse a la agenda del poder, crear o mantener la propia agenda; 4) limitar campos, llamar las cosas por su nombre, lo que significa asumir la soledad respecto a los de arriba, y por lo tanto, la hostilidad de la izquierda institucional; 5) potenciar la política plebeya, la unidad en los hechos insurreccionales, en los modos de rebelarse, en poner en común las horizontalidades.

Según Rosset (2010), la aportación que están haciendo las resistencias autonómicas a la transformación revolucionaria de la región latinoamericana, pasa por fortalecer sus procesos desde la horizontalidad y radicalidad de sus luchas; desde la construcción de redes de comunidades, territorialidades y espacios urbanos y sectoriales en los que se impongan formas nuevas de hacer política; desde la autonomía en el mantenimiento de programas que no se plieguen a la lógica, tiempos y procedimientos de una democracia tutelada por los poderes fácticos.

En América Latina, crecientemente se han manifestado los movimientos basados en una política identitaria, principalmente cuando se trata de reafirmar identidades culturales específicas ante otras, como es el caso de los indígenas diferenciándose de campesinos aún en el ámbito rural, o barrios específicos dentro de ciudades urbanas. En estos movimientos se resaltan las nuevas territorialidades como el rasgo diferenciador más importante de los movimientos sociales latinoamericanos contemporáneos, y lo que les está dando la posibilidad de construir estrategias desde casa (Zibechi, 2007). A diferencia del viejo movimiento obrero y campesino (en el que estaban subsumidos los indios), los actuales movimientos están promoviendo un nuevo patrón de organización del espacio geográfico, donde surgen nuevas prácticas y relaciones sociales (Porto, 2001; Fernández, 1996: 225-246). En esta perspectiva, la tierra no se considera sólo como un medio de producción, superando una concepción estrechamente economicista.

El territorio es el espacio en el que se construye colectivamente una nueva organización social, donde los nuevos sujetos se instituyen, haciendo lo mismo con su espacio territorial, apropiándose material y simbólicamente (Rosset, 2010). De esa manera, los movimientos están empezando a convertir sus espacios en alternativas al sistema dominante en dos ámbitos: los convierten en espacios simultáneos de supervivencia y de acción sociopolítica, construyendo en ellos relaciones sociales distintas a las promovidas por el orden económico y social predominante, sin intención expresa de influir en el sistema político para ser incluidos en el mismo, sino de ostentar las diferencias organizativas y sociales que

dan parte a su identidad cultural y política, como un logro del movimiento ante el resto de la sociedad y del ámbito político.

Para Zibechi (2007), Alonso (2007) y Dussel (2007), cuatro características son determinantes en este tipo de movimiento, llamado antisistémico por su intención de mantenerse al margen de un sistema mundial en el que las relaciones económicas determinan el funcionamiento de las relaciones sociales y políticas, esto es, mantenerse al margen de políticas de influencia o de inclusión ante la sociedad política imperante. Estas características se ven en la procuración de cuidados a la salud, las formas educativas, la producción de sustento alimentario y la distribución de los alimentos.

La educación tiende a ser autoeducación; el espacio educativo no es sólo el aula escolar sino toda la comunidad, entendida como el colectivo de personas y organizaciones que integran el movimiento, haciendo de éste un espacio autoeducativo.

En la producción, se busca el autoabastecimiento y la diversificación para depender menos del mercado; se busca producir sin insumos químicos producidos por empresas trans o nacionales, para promover prácticas de comercio externas a los mercados capitalistas. Asimismo, se busca que las prácticas para la toma de decisiones, así como para la división de actividades sea de tipo técnico, para evitar la generación de jerarquías sociales.

En la salud, se buscan alternativas a través de la recuperación de saberes perdidos por el uso generalizado de medicamentos farmacéuticos de patente, apelando al uso de plantas medicinales o medicinas alternativas; se busca que el médico no se convierta en un poder separado sobre la comunidad, eliminando también la figura del paciente-dependiente-pasivo.

En torno a estos cuatro aspectos, se desarrolla un conjunto de actividades que se asientan en lazos sociales de nuevo tipo, que se registran de forma muy desigual en los diferentes movimientos. Pero es, sin embargo, una especie de barómetro para visualizar el grado de anticapitalismo de un movimiento. Es decir, el anticapitalismo ya no proviene sólo del lugar que se ocupa en la sociedad (obrero, campesino, indio), ni del programa que se enarbola, de las declaraciones o de la intensidad de las movilizaciones, sino también, no de forma exclusiva, también de este tipo de prácticas, del carácter de los lazos sociales que se crean (Zibechi, 2007).

La distinción entre movimientos de corte sistémico, aquellos que orientan su acción de manera dual y encaminan su acción hacia las autoridades políticas así como a la sociedad civil, y los movimientos antisistémicos, ha sido abordada de manera importante por Immanuel Wallerstein, y es importante de describir, pues si bien a su interior operan los elementos identitarios y emocionales que se han abordado a lo largo de este capítulo, no sucede lo mismo en aspectos estratégicos.

Con una apuesta clara de los movimientos antisistémicos en construir una resistencia de corte territorial, en la cual se recrea el tipo de sociedad buscada, el análisis sobre decisión estratégica ha sido poco abordado en la literatura, y sin embargo, en la conformación de un movimiento antisistémico y en la definición de su estrategia para implementar una resistencia efectiva, con una comunidad sólida y afín, intervienen actores sociales colectivos cuyas trayectorias e identidades no necesariamente han sido del mismo corte a lo largo de su historia, y cuyas identidades y aprendizajes tienen relevancia en los matices y las historias detrás de la construcción del movimiento.

Conclusión

Las decisiones estratégicas de un movimiento dependen de los actores sociales que lo conforman, cada uno con identidades e repertorios estratégicos que se han construido a lo largo de trayectorias de convivencia y de activismo. Son particularmente las organizaciones del movimiento social, interactuando constantemente para definir los marcos de definición del problema y buscando soluciones al mismo, las que vierten sus experiencias previas y sus posibilidades de acción, orientando de manera consensuada al movimiento.

Las identidades que rigen el ser y el actuar de los actores sociales del movimiento, deben tener un mínimo de afinidad para permitir la convivencia; sin embargo los actores pueden encontrar divergencias que condicionan la continuidad de la acción conjunta, al evaluar de forma diferenciada los éxitos o fracasos, o bien al momento de visualizar estrategias futuras. Estos eventos marcan cambios en las relaciones sociales y pueden dar lugar a rupturas irreconciliables.

En el capítulo siguiente revisaré la historia y algunas perspectivas teóricas sobre las organizaciones no gubernamentales en México, quienes han experimentado funciones y papeles cambiantes en los movimientos sociales, siendo objeto de controversia, pero también agentes de cambio social con alto protagonismo en los movimientos sociales, como el movimiento por la soberanía alimentaria.

Capítulo 2

Organizaciones No Gubernamentales y Movimientos Sociales en México

2. 1. Introducción

Las organizaciones no gubernamentales (ONGs) son actores básicos dentro de ambos movimientos por la soberanía alimentaria en México. Realizan los trabajos de coordinación, comunicación y logística para la continuidad del movimiento. Son las organizaciones que más claramente se identifican con el rol de organizaciones del movimiento social y aquellas que permiten entender las decisiones estratégicas del colectivo, por ser también las principales difusoras de las demandas en las arenas de actuación de cada iniciativa. El protagonismo que tienen, aún sin desearlo, así como las diferencias importantes en su función y forma de trabajo en cada movimiento, hacen indispensable una revisión de la historia y las funciones sociales que han jugado y juegan las ONGs en el ámbito de la sociedad civil en México, particularmente en los movimientos sociales.

El presente capítulo revisa el origen de las ONGs en México y las perspectivas teóricas que existen en torno a su labor como organizaciones de la sociedad civil y como actores que abren espacios y agendas de participación, además de revisar distintas aproximaciones que algunos autores asignan a su labor como integrantes de movimientos sociales y como agentes de cambio social.

A partir del material de análisis y documentación de estudios de caso, es posible ver dos tendencias de abordar el estudio de las ONGs en México: 1. Algunos autores se concentran en revisar su papel como impulsoras de temas y procesos de participación ciudadana en agendas de gobierno, destacando su papel como impulsoras de la transición democrática en el país (Reygadas2002, 2006; Villaseñor, 2007; Canto, 1998, 2002; Berrios, 2007 y ALOP, 2011), otros 2. Enfatizan su papel como organizaciones promotoras de las agendas de desarrollo impulsadas por agencias transnacionales que son producto de un orden globalizador, inserto en políticas neoliberales, lo cual imprime a las ONGs una marca de actuar como agentes desarrollistas que funcionan en torno a objetivos definidos por agendas externas y supranacionales (Bendaña, 2006; Petras, 2000 y 2007; Borrás, 2008), poniendo en duda las posibilidades de realizar o impulsar cambios estructurales en torno a las agendas ciudadanas.

Las diferentes visiones en torno a las ONGs como agentes de cambio o como instituciones de desarrollo no son simples debates en tinta y papel, sino una serie de posiciones por parte de actores de base, comunidades étnicas o bien movimientos sociales, que emplean distintos marcos analíticos y discursivos para entender y, principalmente, para asignar papeles a las ONGs dentro de sus particulares proyectos de desarrollo o de lucha, al entrar en procesos de colaboración con estas organizaciones. Las mismas ONGs, a menudo sufren confrontaciones internas al revisar su papel, sus funciones y verse obligadas a tomar una posición de índole político al emitir comunicados o establecer alianzas. La discusión teórica es igualmente llevada a cabo por académicos que, de acuerdo con sus particulares formas de visualizar la democracia y a la sociedad civil, destacan ciertos aspectos de la historia y las funciones de las ONGs.

En el presente capítulo retomaré parte de este debate, sin embargo, es muy importante anotar que si bien retomo parte de la discusión general sobre el papel de las ONGs como actores de la sociedad civil para avanzar procesos democráticos en México, el cual considero ha sido determinante, me concentro en revisar la historia y los puntos de vista de las ONGs que, de alguna u otra forma, han estado involucradas con el movimiento campesino e indígena en México, esto es, las ONGs con acción en el medio rural predominantemente. La discusión en torno a estas ONGs se da en otros terrenos, revisados desde la perspectiva de los movimientos sociales, no de la acción general de la sociedad civil en actividades organizadas de incidencia para avanzar procesos de democracia. La revisión del impacto y del papel de las ONGs, entonces, es hecha desde y para los movimientos sociales que han incluido a este tipo de organización como parte del movimiento, no como actores únicos ni como agentes separados de incidencia.

En este contexto, adquiere un lugar relevante conocer los momentos y los actores que han servido para posicionar a las ONGs de desarrollo rural dentro del debate nacional, junto con críticas que, si bien pueden parecer duras, han servido a la sociedad civil en general, a las ONGs y a los actores de base, para repensar el papel de estas organizaciones y el propio, en un marco de lucha para reflexionar y avanzar sus agendas, los proyectos sociales y las formas de lucha más pertinentes.

2.2. Caracterización de las Organizaciones No Gubernamentales

Según Canto (2007), las ONGs son asociaciones civiles⁶, que surgen de la libre voluntad de sus miembros, sin representarlos política o socialmente, sus objetivos no están en función de la defensa o promoción de los intereses de sus miembros, sino en función de terceros que normalmente son una población o sector poblacional “objetivo”; se reconocen, además, como instituciones privadas con fines públicos, pues normalmente se consolidan en torno a una serie de objetivos encaminados a mejorar aspectos de la vida social en materia de derechos humanos o desarrollo.

Para varios autores (Olvera, 2007; Ardití, 2005; Canto, 1998; Scholte, 1996) las ONGs son una de las posibles formas asociativas de la sociedad civil⁷, por lo que es pertinente agregar a la definición anterior un listado de características que, tomadas en conjunto, permiten diferenciarlas de otras organizaciones de la sociedad civil:

- Se crean para llenar una necesidad en la comunidad o entre sus miembros, y no con fines lucrativos; esto es, tienen una misión de índole social, que a menudo consiste en atender necesidades pasadas por alto por el Estado (Wyatt, 2004).
- La misión está ligada a un conjunto de valores básicos y sentidos que rigen la acción, los cuales se vuelven normativos para quienes colaboran en ella (Wyatt, 2004).
- Representan y defienden intereses de individuos y grupos ajenos al equipo técnico de la organización; sus objetivos son, en este aspecto públicos, situados más allá de los intereses privados de sus componentes (Ibarra, 2005).
- Se encuentran formalmente constituidas, ya sea jurídicamente o ante los miembros de la comunidad en que interactúan, y poseen reglamentos y estatutos que rigen también el establecimiento de alianzas para el trabajo. (Nelson, 2000)
- Poseen un cuadro directivo mínimo que da dirección y coordinación a las acciones orientadas a cumplir su misión (Nelson, 2000).

⁶ En tanto asociaciones de ciudadanos que no tienen intereses de tipo electoral en el ámbito político, ni objetivos lucrativos de tipo empresarial, como intereses de mercado. Su distinción de otro tipo de organizaciones de la sociedad civil se hará adelante en el texto.

⁷ Para Cohen y Arato (2002), la sociedad civil es “una esfera comunicativa de ciudadanos en el mundo de vida Habermasiano, contrapuesto con el sistema constituido por el gobierno, asociados en base a intereses de cambiar la relación y mecanismos del Estado para con la ciudadanía”. Es importante destacar que esta esfera ciudadana también se diferencia de la esfera empresarial o de mercado, en tanto que no tiene intereses lucrativos para su acción.

- Reclutan personal para cumplir su misión, normalmente gente que comparte las ideas y valores de la organización y que tiene oficios o profesiones necesarios para el trabajo de la ONG (Wyatt, 2004).
- Orientan su trabajo hacia el Estado, agentes de mercado o la sociedad, buscando siempre una serie de cambios que consideran necesarios para mejorar las condiciones de vida de la población o el grupo de gente “objetivo” (Nelson, 2000).
- Al ser no lucrativas, carecen de poseen capital propio, por lo que desarrollan sus actividades mediante la gestión de recursos financieros ante agencias de cooperación internacional, de la sociedad civil nacional o internacional, fondos empresariales, y crecientemente también de los gobiernos nacionales. Poseen otros recursos: capacidades técnicas, recursos humanos, experiencia, relaciones con la población objetivo a quien se dirigirán los programas o procesos realizados (Lister, 2003).
- Son autónomas, aunque realizan su labor interactuando con el Estado, gobiernos, organizaciones locales y otras entidades nacionales o internacionales.
- Son generalmente temáticas y presentan gran heterogeneidad en sus ámbitos de trabajo, lo que se observa en la diversidad de objetivos planteados alrededor de campos temáticos (salud, ecología, promoción del desarrollo, derechos humanos); en el tipo de población objetivo con la que trabajan (mujeres, niños, ancianos, comunidades indígenas, organizaciones gremiales); en su ámbito de trabajo (rural, urbano) y en el alcance local, estatal, nacional o internacional del trabajo que realizan, (Nelson, 1997).

Quizá la característica básica que permite distinguir a una ONG de otras agrupaciones de la sociedad civil, es la presencia de un cuadro técnico de profesionistas o especialistas técnicos en su cuadro operativo o administrativo, que si bien trabajan por la(s) causa(s) de la ONG, no son necesariamente parte de la población objetivo y perciben compensación económica. Las ONGs trabajan con base en proyectos financiados por agencias de gobierno o bien financiadoras de corte altruista, nacionales o internacionales (Lister, 2003).

Las Naciones Unidas acuñaron el término Organización no Gubernamental en 1949 (Zurita, 2006). Desde entonces, bajo ese nombre se ha agrupado una amplia

gama de organizaciones diferentes, además de que se han difundido numerosos términos cercanos al concepto de ONG empleados a menudo como sinónimos en el lenguaje cotidiano, como organizaciones u asociaciones voluntarias, asociaciones ciudadanas o cívicas, organizaciones de movimientos sociales, organizaciones de base, populares...etc (Zurita, 2006).

La utilización de distintos nombres para describir organizaciones similares o el empleo de un mismo término para hablar de organizaciones funcional y estructuralmente diferentes, atiende a perspectivas teóricas y escuelas de pensamiento que difieren en su aproximación a las organizaciones de la sociedad (Andrews y Edwards, 2004), imposibilitando el empleo “adecuado” del concepto ONG en el sentido de llegar a un acuerdo global, suscitando además debates sobre su papel como parte de la sociedad civil organizada. Esto se debe, en parte, a que los científicos sociales que estudian movimientos sociales, grupos de interés, tercer sector o democracia social, comparten cuestionamientos intelectuales sobre las causas y consecuencias de la acción colectiva y organizada en búsqueda de cambio político y social (Rabotnikof, 2002; Andrews y Edwards, 2004), pero describen de manera diferente a los actores, y por tanto analizan de forma diferente la función que estos juegan y el “debería ser” de su labor social (Andrews y Edwards, 2004).

En el presente estudio, emplearé la caracterización elaborada anteriormente, entendiendo que las ONGs pueden ser, también, organizaciones del movimiento social, en tanto “*organizaciones formales que identifican sus objetivos con las preferencias de un movimiento o contra-movimiento social, trabajando por implementarlos*”, según la definición seminal de McCarthy y Zald (1977: 1213). Sin embargo, para algunos autores (Bendaña, 2006; Veltmeyer, 2002), las ONGs no pueden ser parte integral de un movimiento social, es decir organizaciones del mismo, sino aliadas que participan en la comunidad del movimiento; el argumento en este sentido menciona que las actividades de estas organizaciones no se limitan a los temas o momentos de lucha del movimiento, puesto que se trata de organizaciones formales que trabajan en torno a objetivos con agendas y calendarios pre-definidos. Otro argumento es que las ONGs pueden cambiar periódicamente de áreas temáticas, re-estructurándose y modificando su posicionamiento político y su estrategia. En efecto, la acción de las ONGs es constante y no está acotada exclusivamente a los objetivos de un movimiento social, sin embargo los temas y las formas operativas de una ONG pueden estar en armonía con los objetivos del movimiento y sus formas de

actuar, aún si existe acción simultánea en otros frentes, siempre que ésta no contravenga las formas y los objetivos de la lucha, es decir, los principios operativos del movimiento. Por otro lado, para la caracterización de las organizaciones de un movimiento social, nadie mejor que los integrantes mismos del movimiento en reconocer a actores colectivos como parte de (OMS) o como aliados externos que integran a la comunidad (Lofland, 1996; Stoecker, 2005). La membresía es mejor definida por aquellos actores que determinan los lineamientos de participación y que definen los términos de inclusión o exclusión (Lofland, 1996). Dado que en el movimiento por la soberanía alimentaria, caso que me ocupa en el presente documento, las ONGs son consideradas, por las demás organizaciones como parte integral del movimiento, son también analizadas como organizaciones del movimiento social.

Es adecuado, también, reconocer una tipología de ONGs relacionada con su campo de acción, de acuerdo con Bebbington (2004) y Fowler (2000):

- ONG's de desarrollo. Aquellas cuya labor es mejorar condiciones de vida en el entorno inmediato de la población objetivo. Normalmente no intentan incidir en la reformulación de políticas públicas ni tener una relación con el Estado, sino proporcionar capacitación para elevar los niveles de vida de los actores sociales con y para quienes trabajan (apoyo para el mejoramiento agrícola, construcción de vivienda, mejoramiento o construcción de infraestructura básica). Su labor, de alguna forma, consiste en llenar "huecos" dejados por el gobierno en materia de atención para el desarrollo social.
- ONG's de derechos humanos y cultura cívica. Trabajan en la promoción de los derechos humanos de primera, segunda y tercera generación (civiles y políticos, crecientemente también económicos, sociales, culturales, ambientales e indígenas); normalmente están involucradas en redes de cabildeo e incidencia en políticas públicas y análisis de programas gubernamentales. Su labor es principalmente de promoción, realización de estudios de caso y acompañamiento para procesos de gestión ante instancias gubernamentales u organismos internacionales dedicados a la promoción y denuncia de violaciones en materia de derechos humanos.

- ONG's de investigación. Combinan el trabajo de base⁸ con formas diversas de investigación, publicación y generación de conocimientos en torno a aspectos problemáticos, ambientales o sociales (Lehmann, 1990). Las ONGs de investigación desempeñaron una parte importante en los procesos de democratización en América Latina, debido a su rol en la ampliación de tipos particulares de esfera pública, porque vincularon a ésta última con el ámbito académico de conocimientos especializados, además de que desarrollaron metodologías propias de investigación participativa (junto con las bases sociales) (Whaites, 2002). Su naturaleza privada, no lucrativa, les permitió vincular el compromiso directo y la producción de conocimiento, con medios y lenguajes diferentes de los académicos. Estas ONGs han permitido a los movimientos sociales contar con argumentos sólidos para modificar aspectos de su realidad inmediata o ejercer cabildeos fuertemente sustentados en evidencias (Fox y Hernández, 1992; Bebbington, 2007).

La principal función de las ONGs es servir de puente para sectores de la población que requieren mejorar aspectos concretos de su vida cotidiana en el nivel comunitario u organizacional, posicionando ante el gobierno y la sociedad demandas específicas en el terreno de derechos, o bien explorando aspectos relevantes de su realidad con un enfoque científico para determinar rumbos de acción o incidencia (Bebbington, 2004). Muchos de estos grupos sociales carecen de las habilidades sociales, recursos económicos o técnicos o bien se ubican en puntos geográficos remotos, de forma que no les es sencillo acceder a los espacios de negociación con gobierno, la recaudación de fondos por parte de instancias financieras para el desarrollo de proyectos específicos, o el difundir sus causas ante el grueso de la sociedad, de forma que las ONG son los canales más comunes para lograr estos objetivos (Bebbington, 2004).

La función de mediación y en muchos casos representación de amplios sectores de la población, organizados o no, que juegan las ONG, las coloca en el centro del conflicto entre actores de la sociedad civil (González, 2002). Cabe entonces hacer un breve recorrido teórico e histórico en torno a las funciones que han tenido y los conflictos que se han suscitado en torno a las ONG en México; de esta

⁸ Hablar de trabajo de base o con bases comunitarias en el trabajo de ONGs hace referencia la labor que se realiza en el campo con la población objetivo, a menudo considerada la base social que sustenta y justifica el trabajo de las ONGs, ante la sociedad civil, la sociedad política o las instancias que financian su trabajo (Villaseñor, 2006).

forma será más claro entender el papel que juegan en un movimiento social y los debates que hay en torno a su rol.

2.3. Las ONGs en México

Hablar hoy del conjunto de las ONG en México no es tarea fácil, ya que su universo en los últimos años ha crecido de manera acelerada. Según Villaseñor (2006) se habla de unas tres mil organizaciones en el territorio nacional, trabajando en distintas áreas sociales y temáticas, así como con diferentes perspectivas para abordar su labor social y ante el Estado (Bendaña, 2006).

Al igual que en Latinoamérica, en la génesis de las ONG en México fue muy importante la influencia de la doctrina social de la iglesia, principalmente de los documentos de Medellín, así como la concepción educativa de Paulo Freire, la experiencia de la Revolución Cubana y los procesos de lucha por la soberanía y justicia social de mediados de siglo en el continente (Fox y Hernández, 2006).

Las primeras ONG en México, en la década de los sesenta, nacieron básicamente como expresiones de la acción social que realizaban las iglesias adscritas a la teología de la liberación (jesuitas principalmente), quienes querían diferenciar la acción social de la acción evangelizadora, para alejarse de una concepción clientelar que diera pie a pensar que la adscripción religiosa era condicionante para el apoyo de la organización a comunidades de base no eclesiales, principalmente en el medio rural o semi urbano. Las ONGs complementaban aspectos de la vida cotidiana de los grupos de base como una función complementaria, pero no condicionada, a los trabajos de evangelización (Hernández, 1995), con la posibilidad de prestar apoyo técnicamente especializado.

En la década de los setenta y mediados de los ochenta, la legitimidad y plan de trabajo de las ONG se fueron gradualmente vinculando a las apuestas y los ritmos de las organizaciones populares o sociales de base, en una gradual pero amistosa separación de la iglesia. Las ONG en cierto modo fueron instrumentos del proceso de acumulación de fuerzas que iban adquiriendo los “sujetos” sociales para convertirse en protagonistas sociales (Hernández, 1995: 7), una especie de “mal necesario” puesto que su misión se centraba en acompañar y apoyar a los grupos populares para que se abrieran espacios de negociación con el gobierno para sus demandas inmediatas (ONGs de derechos humanos); crecientemente, en los ochenta fue

adquiriendo importancia el rol de las ONGs de desarrollo, enfocadas a apoyar comunidades u organizaciones rurales en aspectos de mejoramiento para la producción agrícola, o bien para gestionar mejoras en las condiciones de vida con la construcción de infraestructura, prestando servicios técnicos especializados para el desarrollo (Hernández Navarro, 1995).

Veltmeyer (2000) enfatiza la particularidad de las asociaciones entre ONGs con actores campesinos en México, pues a diferencia de América Central, donde desde los setenta surgieron alianzas entre movimientos indígenas y campesinos con ONGs, de manera casi constante, en México las alianzas inter-sectoriales no se hicieron evidentes hasta los ochenta, pues anteriormente el carácter clientelar corporativo de las organizaciones campesinas, les hacía depender directamente del Estado sin necesitar de alianzas en el ámbito de la sociedad civil, o incluso de financiamiento externo (Fox y Hernández, 1992). Aún así, las ONGs que trabajaron en ámbitos rurales, principalmente indígenas y comunitarios desde los setenta, apoyando a las iglesias locales jesuitas o dominicas, construyeron metodologías importantes para las evaluaciones y la definición de problemáticas sociales y productivas a nivel comunitario y de forma participativa, iniciando relaciones sólidas de colaboración y confianza (Fox y Hernández, 1992). Hasta este momento, las ONG no se planteaban ser un protagonista social; simplemente se concebían como un instrumento para dar un servicio a los procesos de los grupos populares u organizaciones sociales (Fox y Hernández, 1992), continuando una línea de trabajo que comenzó de esta forma.

Villaseñor (2006), reconoce dos vertientes de ONGs en los primeros quince años de su surgimiento en México: una con contenido más propositivo de estrategias de desarrollo rural, que colaboran con organizaciones campesinas independientes, como el Instituto Maya y posteriormente el Grupo de Estudios Ambientales, desde finales de los setenta; otra, con una perspectiva política y de trabajo urbano, como el Equipo Pueblo, que pretende “inculcar” cultura cívica y de participación en la ciudadanía, para ejercer los derechos humanos (Villaseñor, 2006)⁹.

En el caso particular de las ONG que se dedican a apoyar a contrapartes en el ámbito rural, su creciente participación e injerencia en apoyar a las necesidades de servicios para el desarrollo y solventar problemas agrícolas, inicialmente con

⁹ El presente estudio se concentra en el primer tipo de organizaciones, aquellas que trabajan directamente con comunidades u organizaciones indígenas o campesinas en ámbitos rurales.

organizaciones campesinas menores o independientes, así como con grupos indígenas, toma impulso creciente en el contexto de una gradual pérdida de apoyo estatal a la provisión de bienestar social, principalmente en el sector campesino y la desarticulación de sus organizaciones ante la emergencia de fuerzas del mercado (González, 2002), esto es, ante la llegada inminente del régimen neoliberal al país, que implicó el retiro del Estado de la asistencia pública.

Gradualmente, las ONG se ven y son vistas con la labor de compensar las brechas dejadas por el Estado y de atenuar la situación de desasosiego social, proporcionando una red de seguridad para los pobres y los menos favorecidos políticamente en el ámbito rural (Mirtaftab, 1997). Además, se comienza a intensificar la ayuda proporcionada por instituciones transnacionales como el Banco Mundial para las actividades de las ONG, a quienes conciben como redes de apoyo de la sociedad civil, encargadas de suavizar el periodo de ajuste estructural de los gobiernos en el tercer mundo, y quienes requieren de fortalecimiento externo para el cumplimiento de su labor (Domicke, 2008).

En la década de los ochenta, también, fue muy importante la convergencia de los movimientos sociales con procesos locales y regionales en esfuerzos de unidad de acción para evitar o minimizar los impactos del retiro del Estado (Rabotnikof, 2002) en varias expresiones, regionales y nacionales: el Frente Nacional contra la Represión, el Frente nacional de Defensa de los Recursos Naturales, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la Coordinadora Sindical Nacional; existía la convicción de que el proceso de construcción del movimiento de masas en México pasaba por un estilo de trabajo autogestivo, por una línea política de autonomía que constantemente experimentaba tácticas distintas de presión para abrir el diálogo con el gobierno, mediante tomas, movilizaciones e intentos –fallidos- de diálogo (Zarco, 2005). Las coordinadoras campesinas de corte independiente comenzaron en esta época, también, a aliarse de forma sólida con las ONGs en su oposición a continuar con el régimen corporativista, pero también a ser simples “beneficiarias” de los cada vez más reducidos apoyos al campo (Hernández Navarro, 1995).

En este contexto se realizó una especie de división tácita del trabajo: las ONG urbanas asumieron como tareas: a) fortalecer los espacios de encuentro entre grupos sociales para reforzar el tejido social; b) apoyar las formas de movilización social; y

c) compartir las propuestas que venían de la movilización con la negociación con las autoridades, tanto a nivel regional como nacional, empleando para ello a sus contactos y contrapartes internacionales, en un inicio de las actividades de corte más político y propositivo (Villaseñor, 2006). Las ONG de trabajo rural se enfocaron a un trabajo de base para la construcción de alternativas productivas, pero de manera separada al movimiento campesino, que entabló sus luchas mediante las grandes coordinadoras independientes formadas en los ochenta, en diferentes momentos de lucha que no incluían las alianzas con ONGs, a las que consideraba equipos técnicos para la colaboración local, no para la incidencia en materia de políticas públicas (González, 2002) o para colaborar en el movimiento campesino.

Hasta mediados de los ochenta, las ONGs de desarrollo rural e investigación en México tenían un papel débil en comparación con sus contrapartes en América del Sur (Fox y Hernández, 1992), que participaban activamente en movimientos sociales y no como organizaciones de acompañamiento en procesos concretos; esto a raíz de que el papel del Estado era fuerte y se tenía la imagen exterior de una sociedad civil igualmente fuerte, en camino rápido a la democracia, de tal forma que el financiamiento era escaso para México; esta situación permaneció hasta que, el terremoto de 1985 demostró a las instancias internacionales el error en que vivían (Reygadas, 2002). La rápida respuesta de la sociedad civil mexicana en contraposición con la incapacidad del Estado para mover recursos que permitieran el salvamento de personas y la reconstrucción, mostraron la fortaleza de la sociedad civil, las incapacidades del Estado y la necesidad de la primera por mayor apoyo económico exterior (Fox y Hernández, 1992).

Comienza entonces una visión –externa e interna- de las actividades de las ONGs como un servicio de la sociedad civil hacia el gobierno (González, 2002), mediante el cual enfocan su labor a la promoción de proyectos de educación popular o bien la provisión de servicios específicos, desconectados en gran medida de la posibilidad de construir y contribuir a los movimientos sociales propositivos (Fox y Hernández, 1992).

Con la creciente fortaleza que experimentaron ante la atención internacional en ellas y la llegada simultánea –e inminente- del orden neoliberal, que implicaba el retiro del Estado en materia de asistencia social, las ONG se vuelven un componente necesario de una agenda política con orientación de mercado, con la misión implícita de limpiar los problemas sociales creados por las nuevas políticas gubernamentales

(González, 2002: 35). Esta percepción se ve complementada con una intensificación gradual de la ayuda financiera proporcionada por instituciones como el Banco Mundial (BM) para las actividades de desarrollo y de promoción de los derechos humanos, a partir de los noventa (Petras, 2007). Financiamientos que, es pertinente decir, venían ya con línea temática y política de fondo, en los cuales, si bien se solicitaba a las ONGs concursar mediante proyectos escritos, estos debían guardar coherencia con la idea de desarrollo, así como con las líneas políticas y temáticas de las instituciones financieras (Petras, 2007).

A raíz del retiro del Estado de la provisión de servicios sociales básicos como los subsidios alimentarios y a la producción, las ONG mexicanas se vieron en la necesidad de desarrollar su habilidad de cabildeo, construir mecanismos de presión, incursionar en la elaboración de políticas públicas alternativas, formular proyectos de desarrollo a pequeña escala y promover la participación democrática en el ámbito comunitario, además de vincularse con la academia para contar con argumentos que sustentaran sus demandas, emergidas del trabajo con comunidades y organizaciones de base¹⁰ (Hernández, 1995). Cada uno de estos roles requería de diferentes habilidades y especialidades, que a su vez, resaltaban la necesidad de personal profesional o técnico, además del personal “político”, esto es, además de los líderes carismáticos que solían ser los fundadores de las organizaciones, a menudo ex-militantes de movimientos populares. Los nuevos cuadros profesionales que fueron gradualmente reclutados para reforzar las capacidades de la organización en áreas específicas de desempeño, permitieron ampliar la visión temática y las posibilidades de desarrollar capacidades sociales y políticas múltiples (González, 2002).

En el ámbito rural, las ONG logran cubrir cada vez más servicios y generan propuestas, en un contexto en que décadas de prácticas gubernamentales de “clientelismo” habían creado una fuerte cultura política de patronazgo entre los pobres o desatendidos por el sistema político (las llamadas minorías sociales, principalmente concentrados en el campo) (Miraftab, 1997). La idea profundamente arraigada del intercambio de lealtad política por servicios había sido reforzada tanto por los partidos políticos como por las organizaciones de corte gubernamental (González, 2002). El reto más importante para las ONG mexicanas, particularmente

¹⁰ Al hablar de organizaciones de base nos referimos a aquellas de índole gremial, donde los cuadros directivos y administrativos son parte de la población afectada por los factores estructurales contra los cuales pelean y por los cuales se formó la organización en un primer momento (Canto, 2006).

para las ONG en el terreno del desarrollo, se convirtió en evitar reproducir la relación patrón-cliente con las comunidades, organizaciones o grupos sociales con que trabajaban, aunque no se puede generalizar esta afirmación: algunas ONGs vieron en el esquema una oportunidad para centralizar los fondos sin rendir cuentas a las bases, para lo cual el esquema clientelar era adecuado (González, 2002).

Para Mirtaftab (1997), la nueva fuerza política de las ONG mexicanas en el desarrollo social y económico traía consigo retos organizacionales y programáticos, que consistían en alcanzar la autonomía financiera, reproducir sus experiencias locales a mayor escala, mejorar las condiciones de vida de los pobres sin ser contratistas del gobierno y comenzar a desarrollar actividades serias de investigación en sus ámbitos e intereses de trabajo. Villaseñor (2006) agrega el reto que implicaba entrar en terrenos de diálogo con el gobierno, sin ser absorbidas por esquemas corruptos de negociación que no permitieran modificar las causas estructurales por las cuales se luchaba. Ciertamente la transición política del país en lo nacional e internacional, obligaba a los actores sociales a reposicionarse y reexaminar sus roles con respecto a lo político y lo económico de manera constante (Rabotnikof, 1999).

En el período presidencial de Carlos Salinas (1988-1994), a falta de ayuda continua para el Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL), muchos de los grupos de base creados por este programa buscaron asistencia de las ONG para proseguir con sus actividades, convirtiéndose en algunos casos en grupos clientelares de las organizaciones, pero en otras estableciendo alianzas de colaboración importantes, en el caso de grupos de base de organizaciones campesinas independientes (Mirtaftab, 1997).

Para prevenir el desarrollo de una dinámica del patronazgo, algunas ONG emplearon una estrategia de formalización de sus relaciones con las organizaciones de base, en un esfuerzo por clarificar las responsabilidades (Rabotnikof, 2002). Esta mirada, que partía de considerarse como empleadas de sus beneficiarios para realizar tareas específicas, constituyó un paso para evitar la reproducción de la relación patrón-cliente entre las ONG y las organizaciones populares y también para prevenir tendencias competitivas entre las ONG (González, 2002). Una de las ideas que surgió era fortalecer a una organización popular o a una comunidad promoviendo su trabajo con varias ONG en diferentes proyectos, cada uno basado en una tarea específica y con un acuerdo contractual, para así evitar que los miembros de la comunidad dependieran de una organización para satisfacer todas sus necesidades, y

al mismo tiempo desarrollaran capacidades de gestión y “empoderamiento¹¹” (González, 2002).

En esta época se vuelve popular la defensa de la participación como herramienta o como parte de un método de diseño y ejecución. En términos metodológicos o técnicos, comienza a hablarse de opciones participativas que se contrastan con una posición tradicional basada en el conocimiento externo. La participación surge como una innovación metodológica que parece ofrecer resultados sustentables, aún a pesar de la resistencia de los gobiernos y a veces de los actores sociales (Rabotnikof, 2001; Reygadas, 2005). En Banco Interamericano de Desarrollo, promueve esta metodología, argumentando que la necesidad de participación se fundamenta en razones internas a la factibilidad de los proyectos, pero también en el fortalecimiento de los actores sociales. Es así que la participación: a) mejora la calidad y sustentabilidad de los proyectos, contribuyendo al desempeño; b) mejora el diseño reduciendo los costos de obtención de información; c) ayuda a manejar los conflictos, al incluir desde el comienzo a los afectados y reduce así los costos de supervisión posterior (Fisher, 1997). Pero también, una metodología participativa ayuda a fortalecer a los potenciales actores, en tanto genera aprendizaje, compromiso, sentido de pertenencia, movilización, y colabora a generar destrezas y actitudes favorables a la integración. Por ende, de manera indirecta, la participación colabora con el fortalecimiento de la estabilidad democrática y del buen gobierno, así como al desarrollo económico (Domike, 2008).

Si bien tanto el BID como el BM alentaban a las ONGs a presentar proyectos participativamente creados e implementados, éstos eran considerados exclusivamente cuando provenían de comunidades sumidas en pobreza o pobreza extrema, difícilmente si éstos implicaban la colaboración de ONGs con organizaciones gremiales consolidadas, como las sindicales o las campesinas. En ningún momento quedaba claro el papel y la importancia de las estrategias participativas en la definición de grandes decisiones macropolíticas ni el diseño y ejecución de proyectos que trascendieran las cuestiones locales (Wahl, 1997). Esto es, los programas participativos para el alivio de la pobreza debían detectarse y resolverse al nivel local, pues no serían considerados para la planeación del país.

¹¹ Término bastante controvertido, que hace referencia a la generación de capacidades comunitarias u organizacionales para adquirir fortalecimiento como actor político o social y no depender más de la intermediación de terceros para resolver necesidades específicas.

2.3.1 Las ONGs en la coyuntura de 1994

Para Reygadas (1998), González (2002) y Villaseñor (2006), la emergencia del EZLN en Chiapas marcó un momento decisivo de cambio en el hacer y relacionarse de las ONGs con otros actores sociales y con el gobierno.

A sólo una semana de la toma municipal en San Cristóbal de las Casas por parte del EZLN, manifestaciones nacionales de la sociedad civil que pugnaban por la resolución pacífica del conflicto armado, aceptaron formar un cinturón de paz en torno a la sede de negociación de la catedral de San Cristóbal de las Casas, entre el gobierno y el ejército zapatista “*con el fin de prevenir agresiones de una de las partes en conflicto hacia la otra*” (Reygadas, 1998:367). En el cinturón físico de paz, participaron muchas ONGs nacionales y locales con la firme convicción de que el diálogo y el acuerdo eran posibles. Este cinturón de organizaciones se configuró en un espacio de interlocución entre la sociedad civil, el EZLN y el gobierno, y se llamó Espacio de Paz o ESPAZ (Reygadas, 1998), el cual estaba integrado por ONGs internacionales y CONPAZ¹².

Pasada la necesidad del cinturón de paz y roto el diálogo con el gobierno, ESPAZ decidió continuar su tarea, en un encuentro nacional celebrado en el mes de abril, reorganizándose como una red que articulaba trece redes preexistentes¹³, cuyos representantes se distribuirían las tareas relacionadas con el restablecimiento de la paz en Chiapas.

ESPAZ y CONPAZ, como colectivos de ONGs, marcaron una división importante en las relaciones de las ONGs con las comunidades u organizaciones de base. Ambos conglomerados de organizaciones se consideraban como interlocutores civiles, sujetos autónomos que debían contribuir activamente a crear propuestas de

¹² CONPAZ (Coordinación de Organizaciones No Gubernamentales por la Paz) era una red de organizaciones no gubernamentales chiapanecas que existía previamente, a ella se sumaron la Convergencia de Organismos por la Democracia, la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio (RMALC), Produssepe, el Frente por el Derecho a la Alimentación, el Colectivo Mexicano de Apoyo a la Niñez y el Movimiento Ciudadano por la Democracia (MCD).

¹³ 500 Años de Resistencia India, Negra y Popular; Colectivo Mexicano de Apoyo a la Niñez (COMEXANI); Frente por el Derecho a la Alimentación (FDAL); Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio (RMALC); Grupo Rosario Castellanos; Promoción de Servicios de Salud y Educación Popular (PRODUSSEP); Movimiento Ciudadano por la Democracia (MCD); Red de Derechos Humanos "Todos los Derechos para Todos;" Sección Hábitat-México de la Coalición Internacional del Hábitat; Red de Mujeres "Ganando Espacios"; Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia (Convergencia); Autonomía Descentralismo y Gestión (ANADEGES) y Foro de Apoyo Mutuo (FAM).

paz en Chiapas, como parte de un sector de la sociedad civil que buscaba transformaciones más profundas en el conjunto de la sociedad mexicana (Reygadas, 1998). Por sus implicaciones cotidianas y por ser organizaciones no chiapanecas, lo que geográficamente les impedía estar en contacto directo con las comunidades y el ejército zapatistas, ESPAZ acentuó su trabajo en la creación de propuestas generales; CONPAZ por su lado, trabajó de manera limitada en el quehacer cotidiano en Chiapas y en propuestas de carácter más práctico para la solución de problemas en las comunidades Zapatistas (Reygadas, 1998).

La relación entre ESPAZ y CONPAZ no estuvo exenta de tensiones, pero ambas redes concibieron su trabajo como uno de apoyo a proyectos de autonomía indígena en formas de gobernanza y desarrollo autonómico local. Las ONGs que participaban en estos espacios experimentaron momentos de confusión en cuanto a su identidad como organizaciones, como integrantes de redes de organizaciones y como apoyo a un movimiento indígena y cultural que pugnaba por revisar las relaciones, tanto al interior de la sociedad civil organizada, como de las organizaciones y comunidades con el gobierno. En esto iban implícitas apuestas por la vía electoral o por “la otra vía”, aquella de las autonomías de facto que rechazaban el voto como mecanismo útil para el cambio social en México (González, 2005).

El punto nodal del trabajo de las ONGs en ambos colectivos trabajo fue el fortalecimiento de las autonomías indígenas, cuyo núcleo imaginario fundante fue la sociedad civil indígena, articuladora de la cultura de los pueblos indios en relación a su territorio, al cultivo de la tierra, a formas de gobierno tradicionales como ejercicio de ciudadanía, con acceso a la participación que posibilitara la inclusión de los pueblos indígenas, con pleno ejercicio de derechos consuetudinarios, en la conformación de la nación mexicana (Reygadas, 1998). Ante esto, los colectivos de ONGs enfrentaron distintas disyuntivas: el servir de apoyo para proyectos de desarrollo distintos al propio, con identidades colectivas diferentes, pues realmente ninguna ONG estaba conformada por gente indígena en ese momento; además tuvieron que decidir si apoyar la vía electoral o la vía de la autonomía; la gestión financiera ante instancias de apoyo internacional o de mercado, comprometiendo objetivos concretos difíciles de precisar de antemano, en un escenario social y político complicado, y principalmente en un contexto de conflicto político en donde el gobierno que bloqueaba la entrada de financiamiento para ONGs de apoyo al proyecto zapatista, e incluso el indígena (González, 2002). Todas estas disyuntivas

obligaban a las ONGs a reflexionar sobre su papel, su identidad y su posición política en momentos de alta efervescencia y confrontación de proyectos de desarrollo.

Estas disyuntivas también operaron al interior del ESPAZ y CONPAZ y, pese a que no tenían una solución única, obligaron a cada ONG participante a definir posicionamientos operativos claros para continuar trabajando, independientemente de su posterior deslinde del EZLN (Reygadas, 1998; González, 2002) y la disolución de las redes, lo que ocurrió en 1997.

CONPAZ posteriormente asumió un rol de sociedad civil independiente del Gobierno Federal y del EZLN. Para ello, se alió con la Asamblea Estatal del Pueblo Chiapaneco (AEDEPCH), de la que constituyó parte de su fuerza viva y pensante; con la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas colaboró estrechamente en múltiples tareas y responsabilidades; y sobre todo priorizó la alianza con las comunidades indígenas con las que trabajaban algunas organizaciones en promoción social antes del estallamiento del conflicto (Reygadas, 1998).

La reflexión en torno a las relaciones y la función de las ONGs alcanzó a todas a lo largo del país; independientemente del posicionamiento que tomaran con respecto al EZLN, el momento fue coyuntural en la reflexión interna sobre las formas operativas e ideológicas de cada ONG, las formas de relacionarse con otros actores sociales, su perspectiva en torno a la relación con el gobierno, el ideal de democracia y de participación en la construcción de sociedad y, muy particularmente, la importancia de su presencia y su papel en los movimientos sociales (González, 2002; Gordon, 1997; Petras, 2007).

Las ONG tuvieron divisiones políticas importantes, entre aquellas que impulsaron la Convención Nacional Democrática, en 1996, a la cual convocara el EZLN como la instancia alternativa para que la sociedad impulsara el cambio, buscando estrategias para combatir *“las condiciones que causaron la guerra... que siguen intactas y ninguna paz cierta puede firmarse sobre tales bases”* (Reygadas, 1998:219); estas ONGs concordaban con la idea de que los acuerdos de San Andrés y la ley para la concordia y la pacificación en Chiapas (Ley COCOPA) derivada, no permitían dar soluciones de base a los problemas que detonaron el conflicto armado, y que no se encontraban únicamente en Chiapas, sino a nivel nacional, siendo consecuencia del orden neoliberal que ponía al ciudadano en segundo lugar frente al mercado, y hacía de los indígenas ciudadanos de segunda con pocos instrumentos

para hacer con sus formas tradicionales de vida, un desarrollo económicamente sustentable y culturalmente adecuado (González, 2005).

Otro grupo de ONGs consideraba que la negociación y la ley COCOPA era suficiente como principio, ya que ésta reflejaba una apertura del gobierno hacia las demandas indígenas y el reconocimiento del país como nación pluricultural, de tal forma que una instancia de franca oposición al gobierno no permitiría la inclusión efectiva de las ONGs y los pueblos indígenas a los crecientes ámbitos de participación ciudadana en materia de planeación nacional y derechos humanos (Villaseñor, 2006).

Los eventos que marcaron la negociación del EZLN con el gobierno y que dieron pie a que las ONGs reflexionaran constantemente sobre su papel social y político, marcaron diferencias y posicionamientos importantes para una naciente –y creciente- división identitaria y funcional inherente a las organizaciones, que actualmente se describen y califican como reformistas, radicales, gobiernistas, independientes, etc, complicando la caracterización que de ellas se pueda realizar por su ámbito de acción (González, 2002), y que responde realmente a la posición que éstas toman en relación con los actores sociales y los actores políticos en y para sus ámbitos sociales de trabajo (Bebbington, 2008).

El alzamiento zapatista y las políticas violentas de retiro del Estado que dieron nuevos bríos al movimiento campesino, significaron una puesta a prueba de postura de las ONGs en relación con su visión de la construcción democrática en México (Beaucage, 2005). Un conjunto de organizaciones tendieron a identificarse más con prácticas movimentistas que institucionalistas, en un momento de la historia mexicana en que los movimientos sociales populares de los setenta y ochenta habían perdido su centralidad en el campo de la oposición social al régimen corporativo (Bartra, 2004). De ahí también un alejamiento en la literatura entre ONGs y movimientos sociales, que se enfocó al estudio y reflexión sobre las primeras en términos de la profesionalización y su relación con el Estado según ámbitos temático de trabajo, y en el lado de los movimientos sociales, al estudio de sus estrategias como colectivos de organizaciones de tipo gremial (Veltmeyer, 2002).

Las diferentes realidades organizativas agrupadas bajo el término ONG adoptaron distintas estrategias en relación con el gobierno surgido de las elecciones del 2000 (el popularmente llamado gobierno de la transición, pues el Partido Acción Nacional ganó las elecciones al PRI). Las diferencias tienen que ver con la distinta

percepción del alcance de la autonomía reivindicada en relación a los partidos y al gobierno, con sus filiaciones ideológico-políticas previas, con su capacidad de interlocución (y los interlocutores aceptables), con el alcance de sus respectivos públicos, con su consolidación organizativa, sus fuentes de financiamiento y con el mayor o menor radicalismo extrainstitucional de sus discursos (González, 2005), es decir, su posición ante la popularmente llamada “democracia naciente” y el papel que pensaban para las ONGs dentro de esta transición política.

En estas tendencias se manifiestan posturas altamente diferenciadas, desde aquellas organizaciones que deciden ser parte de las “nuevas formas de participación” del gobierno “de la transición”¹⁴, optando por presentar propuestas ciudadanas e insertando a personas o colectivos en los órganos colegiados del gobierno a manera de consejos ciudadanos en distintos ámbitos de gobierno¹⁵. Otra postura estuvo representada por organizaciones de corte antisistémico, apostando por la solución local organizada de los problemas ocasionados por el orden neoliberal y reiterados por una “democracia ficta” (Canto, 2007).

1.2.4. Los grupos de base ante las ONGs en la coyuntura de 1994

Los grupos de base, ya sea comunidades u organizaciones campesinas o indígenas que suelen trabajar con, además de constituir el respaldo social para las ONG en el ámbito rural, también experimentaron cambios en su forma de ver y pensar su relación con las mismas a partir de los sucesos de 1994. González (2002 y 2005) argumenta que a partir del impulso que tuvieron los procesos indígenas que convergieron (la CONAI, los congresos nacionales Indígenas y las convocatorias zapatistas posteriores) para definir a los sujetos rurales e indígenas como impulsores de su propio desarrollo, se redujo la necesidad de buscar apoyo en organizaciones de la sociedad civil para encontrar soluciones a problemas de desarrollo o de defensa territorial o identitaria. También para algunas instancias internacionales de

¹⁴ Como se llamó al gobierno de Vicente Fox, por ser el primero de venir de un partido de oposición al PRI, el cual llevaba más de setenta años en el poder.

¹⁵ Pese a que ya existían los consejos municipales y regionales para planear la asignación de gasto social, a los cuales eran invitados representantes de ONGs y organizaciones de base, desde el año 2000 se generaron consejos intersectoriales para la planeación en materia de desarrollo rural, agropecuario, forestal e hídrico. Estos consejos se decretaron a partir de la sectorización de leyes ambientales y se instituyeron en los niveles municipal, regional y nacional, para planear el uso presupuestal de manera participativa, validando la asignación de recursos con la presencia de representantes de la sociedad civil.

financiamiento se modificó la necesidad de intermediarios en el apoyo a proyectos de desarrollo o empoderamiento local, pues las organizaciones de base ya habían adquirido la capacidad de redacción de proyectos, ejecución y rendición de cuentas con base en diagnósticos organizacionales o comunitarios (Rabotnikof, 2001).

Las protestas indígenas a nivel Latinoamericano ante la celebración oficial por el V Centenario del Descubrimiento de América, que convergieron con la planeación del EZLN para su emergencia pública, brindaron un clima adecuado para que actores sociales como las mujeres y pueblos indios surgieran como sujetos activos con demandas propias, apartándose hasta cierto grado de luchas sectoriales como la campesina, a la que se habían unido desde su identidad campesina desde décadas atrás. Algunos autores señalan que el movimiento campesino independiente pasa a ser movimiento indígena en este particular momento (Ruíz y Burguete 2003)¹⁶. Para González (2002), la idea de hacer del movimiento indígena algo más que una reivindicación cultural, permitió que el trabajo de algunas organizaciones no gubernamentales buscara la mejor forma de articularse a ese proceso, pero también permitió a las comunidades y nuevas organizaciones de la sociedad civil de índole comunitario u organizaciones campesinas, revisar relaciones clientelistas con las ONGs y tomar distancia de procesos cercanos de acompañamiento y mediación de los que a menudo dependían para colocar sus demandas ante gobierno o agentes de financiamiento.

En 1995 se fracturó el inicio de las discusiones en San Andrés –la primera ronda formal de negociación entre el EZLN y el gobierno federal-, así como también el autonombrado Consejo de Gobierno, del también autonombrado Gobierno de Transición o en Rebeldía (González, 2005). A ello siguió el decreto casi simultáneo de municipios autónomos rebeldes zapatistas, o MAREZ, que, ante la emitida Ley COCOPA que no reflejaba las demandas reales de autonomía y reivindicación indígena en la constitución mexicana, intentaban reflejar una nueva territorialidad y formas de gobierno autónomo de facto en el territorio zapatista (Sánchez, 2001). La idea de los MAREZ o Aguascalientes era construir, con la sociedad civil, nuevas formas de gobierno y de convivencia social, declinando por completo la vía electoral, a la que anteriormente habían apostado para la elección del Gobierno de transición,

¹⁶ En el siguiente capítulo se revisarán a profundidad los momentos y actores de los movimientos campesino e indígena, enfatizando las instancias que cada uno formó para la toma de decisiones.

postulando a un candidato por parte del Partido de la Revolución Democrática y en la discusión de la convención nacional democrática (Sánchez, 2001).

Durante una parte importante del conflicto zapatista con el gobierno, el EZLN confió en las relaciones con ONGs para implementar proyectos de construcción y desarrollo comunitario, fomentando una relación importante de colaboraciones e intercambios ideológicos (González, 2005). Chiapas, de hecho, se convirtió en un fuerte punto de atracción para los financiamientos internacionales, que destinaron importantes fondos para garantizar la paz y el desarrollo de las comunidades indígenas afectadas por el conflicto (Lister, 2003).

Los Aguascalientes o MAREZ desaparecieron en 2003. La noticia se dio a conocer mediante un comunicado del EZLN, en el cual anuncia también una nueva relación con la sociedad civil, pero en particular lo hace desde una visión crítica a su relación con las ONG y la cooperación internacional. Nombrada esta crítica como el “síndrome cenicienta” (González, 2005):

Con la muerte de los “Aguascalientes”, mueren también el “síndrome cenicienta” de algunas “sociedades civiles” y el paternalismo de algunas ONG nacionales e internacionales. Cuando menos mueren para las comunidades zapatistas que, desde ahora, ya no recibirán sobras ni permitirán la imposición de proyectos dictados por la cooperación internacional y las necesidades del neoliberalismo. (EZLN, Julio 2003)

El anuncio hace clara referencia a la diferencia de proyectos entre las ONG y las comunidades zapatistas. Se apelaba a que *“en lo sucesivo, los profesionales de las ONG desarrollen sus proyectos con mucho ingenio y sobre todo a partir de la relación con las comunidades de manera participativa y consultando sobre las necesidades de las mismas antes de redactar los proyectos basados en supuestas necesidades de terceros¹⁷.”*

En un ambiente político acelerado fue profunda la sacudida que tuvieron los comunicados para las ONGs –principalmente aquellas laborando en regiones indígenas-, aunque existía ya una clara diferenciación al interior del mundo de las ONGs: aquellas que trabajaban “para” las comunidades, entendiendo por esto aquellas que formulaban sus proyectos en función de los dictados comunitarios, y aquellas que llegaban a implementar sus proyectos “en” las comunidades. Ello entrañaba un supuesto de fondo, que se relacionaba con las ideologías y

¹⁷ Comunicados del EZLN: Chiapas: la treceava estela, parte 2. Disponible en <http://palabra.ezln.org.mx/>. Consultada el 20 de noviembre de 2010.

posicionamientos de las ONGs en aspectos normativos y prácticos para el diseño institucional y la relación con actores de base.

En el caso del Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo, principales instituciones financieras, y principalmente, aquellas que definen los lineamientos internacionales para la cooperación y la filantropía, definiendo metas y ámbitos prioritarios de desarrollo (ALOP, 2009), la tradición de elaborar las agendas para el financiamiento “desde arriba”, en el momento en que se encontraban las políticas de ajuste estructural, hacían complicado para las ONGs entablar un diálogo efectivo encaminado a cambiar la agenda de financiamiento, y con ello la orientación de los proyectos, los temas a financiar y la rendición de cuentas (Rabotnikof, 2007). Esto permitía entender que, aquellas organizaciones que dependían de recursos emanados de estas instituciones, tendrían la tradición de implementar proyectos en las comunidades, no para ellas (Petras, 2007).

Pero más allá de esas consideraciones, la discusión de fondo era sobre las ONG “paternalistas”, es decir, las que imponían sus decisiones sobre las que decidían las propias comunidades, ajustando constantemente sus agendas temáticas, tanto con los actores de base como con las agencias financiadoras (Petras, 2007), atendiendo a los lineamientos para el financiamiento, más que a las necesidades de las bases. El llamado “síndrome cenicienta” al que alude al EZLN, pone en el centro del debate las relaciones de los sujetos sociales con la sociedad en su conjunto y en específico con sus expresiones organizadas.

Hay varios hechos que vale la pena poner en el centro para entender las complicadas relaciones entre las ONG y los actores sociales de base que se adherían a la lucha indígena reivindicativa; el mismo EZLN lo plantea en las consideraciones en torno al funcionamiento de las Juntas de Gobierno:

Ya no se permitirán que los donativos y apoyos de la sociedad civil nacional e internacional sean destinados a alguien en particular o a una comunidad o municipio autónomo preciso. La Junta de Buen Gobierno decidirá, después de evaluar la situación de las comunidades, adónde es más necesario que ese apoyo se dirija. La Junta de Buen Gobierno impone a todos los proyectos el llamado “impuesto hermano” (EZLN; Julio 2003)

No eran pocas las ONG que se habían desarrollado en la lógica de la autonomía, los derechos humanos y la educación popular y hubo una reacción interesante, una respuesta¹⁸ al comunicado del EZLN señala que:

Por fin se oye al EZLN con más claridad sobre las agendas sociales regionales, continentales y mundiales. Su silencio sobre muchos temas ha desconcertado cuando su análisis y tino político habían sido fuente de inspiración para la movilización de miles en todo el mundo. Algunas organizaciones, ciudadanos (as) o grupos de solidaridad llegaron a pensar en no participar en otros procesos sociales, en no movilizarse o manifestarse contra el ALCA, la OMC u otros conflictos indígenas y sociales de otros países por *miedo a estar “desobedeciendo a los zapatistas”* (subrayado mío). [...] El miedo a criticar los errores del EZLN ha marcado muchos silencios o generado desilusiones. Ha también puesto a varias ONGs en la coyuntura de optar por la vía electoral o abandonar esos ideales de democracia. (CIEPAC 362, Agosto 2003).

Esta posición pone el dedo en la llaga y genera nuevos debates por parte de los actores locales que dependían y se relacionaban con las ONGs en México, sobre todo aquellas en el ámbito rural y campesino.

El momento político que para el grueso de la sociedad implicaba un proceso recién iniciado de transición a la democracia, permitió a muchas ONGs tomar la decisión de desvincularse del EZLN, ya fuera por desacuerdo en la forma de ver la situación, o bien por sentir que su trabajo era desvirtuado y erróneamente calificado. La reflexión de las ONGs en torno a su labor, permitió que algunas optaran por continuar su trabajo con el EZ y con comunidades indígenas, considerando una relación de supeditación en torno a los proyectos y su implementación, mientras que otras organizaciones entendieron en este comunicado y nueva etapa del EZLN –y del movimiento indígena- como una ruptura en los proyectos y en la relación, ante la cual no permitirían injerencia externa en la definición de líneas temáticas ni en los lineamientos operativos de la organización.

¹⁸ El Centro de Investigaciones para la Acción Comunitaria (CIEPAC) es una ONG formada en 1998, comprometida con el movimiento zapatista. Su crítica se basa en análisis que cotidianamente realizan y que sirven de referencia mundialmente. Sus informes se encuentran en su sitio de Internet www.ciepac.org

2.5 Formas actuales de vinculación entre ONGs y Grupos de Base

Desde la perspectiva de Villaseñor (2006: 81), las ONG actualmente buscan horizontalidad en su toma de decisiones, y una relación de apoyo con las directivas de organizaciones sociales o de organizaciones de movimientos sociales, limitados por el cada vez más escaso financiamiento y por las instancias que vigilan sus tareas y el cumplimiento de sus compromisos.

Las modificaciones que hay en el hacer, relacionarse y constituirse de las ONG son constantes y necesarias para la continuidad y el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil en México, sin embargo la revisión constante de estos cambios es necesaria para la autorreflexión y el trazo de estrategias para la sobrevivencia y utilidad del sector (Reygadas, 2002).

Una relación particularmente importante es la que se ha cultivado durante mucho tiempo entre ONG y organizaciones sociales¹⁹ (OS), de carácter campesino-rural e índole gremial; esta relación ha sido cercana y por ello compleja y tensionada²⁰; es la relación en la que más se observan las tensiones del movimiento por la soberanía alimentaria en México, y por tanto aquella que merece una profundización en la presente exposición:

A partir del surgimiento público del EZLN, las relaciones ONG-OS sufrieron varias tensiones, entre ellas la querrela de unos y otros de ser instrumentalizadas para los fines de la otra parte, principalmente para conseguir recursos económicos.

Después de los noventa, en el escenario de transición hacia la democracia, el panorama que se observa en torno a las ONG y los grupos o actores que constituyen su base social, no es posible de ser estandarizado. Algunas de las formas de relación entre ONG y OS que se aprecian en la actualidad, según Canto (2002) son:

- Diferenciación orgánica y colaboración técnica. En la cual, la ONG apoya técnicamente a la organización social cuando es requerida. A menudo existen alianzas para entablar luchas comunes, como en movimientos sociales, pero no se

¹⁹ Las Organizaciones Sociales son organizaciones de índole gremial, en donde directivos y representantes comparten adscripción geográfica, cultural e identitaria con todos los demás miembros de la organización. En el caso del presente estudio, las organizaciones sociales son de índole campesino, y se consideran actores de base en tanto que se trata de actores que conocen de primera mano las problemáticas más locales relacionadas con el ámbito agrícola.

²⁰ Para un estudio a profundidad de estas relaciones ver Canto Chac, Manuel (2002). Interacciones de la sociedad civil. Documento de trabajo no. 5. Oxfam-Universidad de Santo Domingo.

entiende a la relación como simbiótica de por vida y menos aún se gestionan proyectos empleando a la otra parte como justificante social o destinataria.

- Desarrollo de ONG desde las OS. Muchas organizaciones sociales (como la UNORCA) ven la ventaja de tener una instancia de servicios profesionales para atender las necesidades técnicas propias, además de gestionar recursos para la organización. De esta forma el personal directivo de la organización social o gremial supervisa a los profesionales que formarán parte de la ONG subsidiaria, en el sentido de que estará subordinada a las necesidades operativas y los lineamientos políticos de la OS.

- Alianza política entre OS y ONG. El caso más claro es la colaboración en el terreno de los movimientos sociales, cuando se establece un contrato implícito por medio del cual se tomarán decisiones estratégicas conjuntas en torno de un fin que se detecta prioritario para ambas organizaciones en un contexto coyuntural. A menudo existe intercambio de personal y la formación de instancias intermedias de comunicación, para tomar decisiones que requieren de acuerdo inmediato y no es necesario someter a consenso organizacional amplio. La estrategia política compartida implica apoyo en distintos ámbitos del quehacer cotidiano para resolver problemas internos que debiliten la lucha.

2.6. ONGs y movimientos sociales

Para Borrás (2008) y Petras (1997, 2007), la inclusión de las ONG en movimientos sociales campesinos o indígenas es conflictiva, principalmente cuando la demanda principal gira en torno a aspectos de soberanía, pues para el movimiento es crucial mantener posturas de oposición ante el orden neoliberal²¹; ello contrasta con las estrategias de las ONGs, que suelen ser de cabildeo y negociación, para suavizar los impactos de la liberalización de mercados y para permitir la inserción de los campesinos en el nuevo orden global. La movilización por la demanda de reformas radicales al sistema, el derribo de instituciones financieras y la eliminación de tratados de comercio multilaterales que minan la posibilidad de supervivencia del sector rural no empresarial (Bello, 2002), contrasta con la posibilidad de negociar

²¹ Tanto Borrás como Petras consideran a la Vía Campesina como el ejemplo más evidente de lucha por la soberanía a nivel mundial. Esta lucha tiene una vertiente importante en lo tocante al tema alimentario.

términos medios y divide las posibilidades, tanto de las organizaciones que conforman al movimiento social, como de los movimientos sociales mismos, en estrategias de negociación contra estrategias de derrocamiento.

Para autores como Bendaña (2006) y Bello (2002), las campañas, formadas primordialmente por ONG deberían concentrarse en promover las prioridades estratégicas de los movimientos, que son finitos en recursos y energías, ante la sociedad y las instancias financieras con las que tienen interlocución, en vez de buscar vías alternas para la renegociación. Para estos autores las ONGs afectan a los movimientos campesinos fuertes promoviendo medidas de mitigación en sistemas políticos con democracias simuladas, en vez de permitir a los movimientos la planeación de estrategias que, por las características de la lucha, se oponen a toda ideología de negociación promovida por quienes financian a las organizaciones de la sociedad civil (Roy, 2004).

Los movimientos sociales actuales, con un fuerte componente identitario que motiva la lucha tienen una agenda amplia que va más allá de demandas por apoyos económicos o logros sectoriales, cada vez más son relevantes las alianzas políticas intersectoriales y de nivel nacional o transnacional, alianzas rural-urbanas o con sindicatos que permiten hablar de movimientos socio-políticos con intención de modificar las relaciones de poder al interior de la sociedad y de ésta con los gobiernos, normalmente contra las políticas de mercado, y que implican alianzas entre distintas formas organizativas de la sociedad (Ibarra, 2005), sin embargo esta no es la visión de todos los movimientos; por ejemplo, en el Segundo Congreso latinoamericano de Organizaciones del Campo (CLOC), que tuvo lugar en Brasil en 1997, delegados de toda Latinoamérica (con excepción de Uruguay y El Salvador), discutieron la necesidad de auto-determinación, esto es, la idea de que solo los trabajadores del campo, a través de sus propias organizaciones sociales pueden encontrar las estrategias para dialogar con gobiernos y modificar su situación de pobreza y escaso desarrollo en relación con la sociedad (Petras, 1998).

Los líderes campesinos y activistas de esta organización, parte de la Vía Campesina, han descrito el trabajo de las ONG como un impedimento, que divide comunidades y coopta a los líderes campesinos para desviar las estrategias hacia logros intermedios y no estructurales (Petras, op. cit), utilizando el conocimiento que tienen e interpretando la situación social que éstas viven para generar representaciones de la pobreza y del campesinado que no son las mismas expresadas

por las organizaciones sociales y las comunidades, empleando éstas representaciones para conseguir fondos y subsistir como ONGs en aras del “desarrollo local” (Bebbington, 2005).

Para los movimientos sociales es determinante el establecimiento de reglas empíricas claras de la forma de relacionarse entre los actores participantes. Dado que las ONGs participan promoviendo los objetivos del movimiento, pero también impulsando sus proyectos particulares de vida, las formas de convivencia entre las organizaciones que participan en el movimiento no siempre son iguales, y es común que se observen dos particulares formas de entender el papel de las ONGs: la supeditación o la cooperación (Sogge y Dütting, 2010). Las formas de colaboración atienden a las ideologías o supuestos que los colectivos desean reflejar y constituyen su eje ideológico, que moldea sus patrones de relaciones y de planeación para la acción (Staggenborg, 2008, 2010).

2.6.1. Patrones de colaboración entre ONGs y movimientos sociales

Ante las que parecieran ser evidentes contradicciones entre los movimientos sociales de índole campesino o indígena y las posibilidades de acción de las ONGs, algunos autores se cuestionan esta aparente imposibilidad de colaboración como organizaciones aliadas, hermanadas en la lucha social transformativa. Quizá la mayor claridad al respecto la presentan Sogge y Dütting (2010), al estudiar las posibilidades de interacción en la movilización. Estas formas de relación también atienden a las diferencias observadas entre ONGs y otros actores colectivos en el movimiento por la soberanía alimentaria, por lo que ameritan ser revisadas y explicadas de antemano. Estos autores reconocen dos formas en que las ONGs se insertan en los movimientos sociales: a) supeditación de la ONG a los intereses y planes de los actores que se consideran y a quienes consideran más relevantes para el movimiento, ya sean colectivos comunitarios u organizaciones sociales, o bien b) cooperación de las ONGs de manera horizontal, en la misma medida e igualdad de peso en la toma de decisiones para el movimiento, que los demás actores organizados. La primera relación es un resultado que se observa en México a raíz del debate iniciado por el EZLN, en cuanto a las formas operativas de las ONGs y la normatividad en tanto a la definición de proyectos, las ONGs que encontraron certeza en el debate iniciado por el EZLN, continuaron o comenzaron a tener este tipo de relación con los actores de

base; la segunda forma de relacionarse, atiende más a ONGs de acción urbana-popular, o bien a ONGs que entienden a la sociedad civil como una articulación de actores organizados en igualdad de condiciones y necesidades para encontrar en una multiplicidad de proyectos la solución a demandas e identidades variadas, todas ellas involucradas en una determinada lucha social.

2.6.1.1. La esfera de la supeditación

Para Petras (2003), en el escenario de los nuevos movimientos sociales, las ONG crean problemas para los movimientos y luchas campesinas: los financiamientos internacionales, procedentes de instituciones ligadas a la protección del libre mercado, el enfoque en los proyectos locales y no en los cambios estructurales, el énfasis en estrategias de supervivencia en lugar de la modificación de programas sociales, da lugar a un encuentro de intereses diferenciados para el accionar de las ONG y las bases campesinas, comunitarias u organizadas; por ello, las ONGs no pueden ser el núcleo del movimiento, sino organizaciones de apoyo técnico que ofrezcan servicios de acompañamiento y asesoría a las organizaciones de base. En este entendido, los proyectos que las ONGs concreten para su desarrollo propio, con instancias financieras, deberán ser ajenos y separados de sus objetivos en el movimiento, o bien ser exclusivamente para la realización de trabajos técnicos en un área definida de trabajo, sin una línea política subyacente, a no ser que ésta concuerde con aquella planteada por el movimiento (Borras, 2008).

Desde la perspectiva de Desmarais (2002), los movimientos campesinos son pioneros en establecer relaciones de supeditación con las ONGs; esta posición se sustenta en el supuesto de que los enemigos estructurales del declive del campo no son sólo los estados nacionales debilitados ya por las condicionantes del Banco Mundial (Desmarais 2002), sino las instituciones transnacionales de financiamiento internacional; en este entendido, un movimiento integrado por organizaciones que obtengan su financiamiento de agencias internacionales, podrían a lo más negociar beneficios posibles dentro del nuevo marco político nacional que correspondiera a cada movimiento u organización que los constituye (Petras y Veltmeyer, 2002).

Aunque los movimientos campesinos han estado presentes en América Latina, desde hace ya varias décadas, la nueva coyuntura política de libre comercio y globalización tuvo consecuencias en la forma de organizarse y en las ideas detrás del

organizarse: una nueva generación de organizaciones pugnó por ocupar los espacios de demanda y negociación que las viejas organizaciones, basadas en un esquema paternalista y de relación subsidiaria con el gobierno, ya no podían ocupar (Edelman, 2003).

Las nuevas organizaciones rurales en Latinoamérica se fundaron con principios de autonomía con respecto a partidos políticos, oficinas de gobierno, iglesias, y organizaciones no gubernamentales, en un abierto rechazo a subordinar sus intereses a los de actores sociales que no se identificaban como parte de la identidad colectiva del movimiento (Petras, 2002).

La Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC), nacida en 1989 en Colombia, por la reunión de organizaciones indígenas con la consigna “500 años de resistencia indígena”, planteaba una visión distinta y no contenta por la colonización Europea del continente. Fue el antecedente directo de lo que sería la Vía Campesina²² y tuvo como objetivo vincular a distintos grupos que, con intereses divergentes en lo local, concordaban a nivel continental en ver al orden neoliberal y las rápidas transformaciones en ámbitos de trabajo y de vida que conllevaba. SI bien la identidad no era un común denominador, si lo era el sentimiento de que a 500 años de la “conquista”, se permitía y perpetuaba un trato desigual e indigno para la población indígena y campesina (Edelman, 2003).

En Europa y Asia otros tantos colectivos se reunían y comenzaban a visualizarse como movimientos internacionales. Fue a partir de reuniones con la CLOC que en Managua, durante el segundo congreso de la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos, se declara la Vía Campesina para promover una “*globalización desde abajo*” (Edelman, 2001).

²² La Vía Campesina es un movimiento campesino altermundista que reúne a millones de campesinos y campesinas, pequeños y medianos productores, mujeres rurales, gente sin tierra, y trabajadores agrícolas. Está compuesto por 148 organizaciones miembro, activas en 69 países de Asia, África, Europa y América. Red internacional amplia de organizaciones sociales, ONG's, académicos y comunidades que rechazan la posibilidad de establecer alianzas con gobiernos mientras existan tratados de libre comercio y mecanismos agresivos de mercado. La definición de soberanía alimentaria de la Vía es: “*El derecho de los pueblos, los países y las uniones de estados, a definir sus políticas agropecuarias y de producción de alimentos sin imponer el 'dumping' a terceros países. Soberanía alimentaria es organizar la producción y el consumo de alimentos de acuerdo a las necesidades de las comunidades locales otorgando prioridad a la producción y el consumo locales domésticos. Incluye el derecho de cada nación para proteger y regular su producción nacional agrícola y ganadera, así como sus mercados domésticos del dumping de los excedentes agrícolas y de las importaciones a bajos precios de otros países. Campesinos, sin tierra, productores rurales deben tener acceso a tierra, agua, semillas y recursos productivos y servicios públicos adecuados. La Soberanía Alimentaria y la sustentabilidad son elementos altamente prioritarios ante las políticas de comercio internacional*”. Disponible en www.viacampesina.org/soberanialimentaria

En la declaratoria de Managua, documento fundador de la Vía Campesina, suscrita por las organizaciones presentes, se definió su identidad como constituida por “gente de la tierra” y composición social de “campesinos pobres y con poca tierra, con un trato discriminatorio por parte del gobierno” (Borras, 2008), asumiendo conjuntamente un trato poco digno para el oficio de campesino “*que debería considerarse el corazón del desarrollo, con los campesinos haciendo las políticas agrícolas, agrarias y alimentarias, que necesariamente impactan directamente en las comunidades rurales, indígenas o no*” (Desmarais, 2003:37).

Desde su nacimiento mismo, la Vía y las organizaciones que se unieron y que la conformaban, declaró su punto de vista respecto a la representación directa, con un rechazo total a la intermediación y la representación específica de las organizaciones no gubernamentales (ONG’s) para la comunicación de la Vía y sus organizaciones con el gobierno, la sociedad civil y al interior mismo de la red. La demanda se consolidó en una consigna que ha acompañado a la red desde entonces: “no a nuestro nombre sin nosotros” (Vía Campesina²³).

Pese a que fueron agencias internacionales como Oxfam que dieron los fondos para los encuentros que ayudaron a consolidar la Vía, ésta dejó claro que diferenciaba el papel de donantes que fungían como relaciones de solidaridad, sin las cuales sería difícil mantener un mínimo de trabajo institucional para mantener y consolidar el movimiento global y aterrizar campañas locales.

La Vía definió una serie de lineamientos que establecía el papel de las ONGs como apoyo técnico a las necesidades del movimiento o sus organizaciones (Borras, 2008), en una relación de supeditación mediante la cual se pretende eliminar la línea política y temática con la que suele llegar el apoyo a las ONGs. De esta forma las ONGs son parte del movimiento en tanto sus proyectos y estrategias sean compatibles con los de las organizaciones campesinas o indígenas y no funjan como mediadores sociales. Esta postura y forma de relacionarse con las ONGs es compartida por el movimiento indígena en México.

²³ Todas las citas referentes a la Vía Campesina han sido obtenidas de la página web www.viacampesina.org, principal instrumento de comunicación del movimiento con la sociedad, ya que se evita el uso de papel, salvo para ciertas comunicaciones internas, y de autorías específicas.

2.6.1.2. Esfera de la cooperación

Desde la perspectiva de Villaseñor (2006: 81), las ONGs que, después de la emergencia del movimiento indígena y el EZLN, lograron adaptarse al cambio y ver a sus anteriores bases sociales como aliados con identidad y proyecto propios, buscan horizontalidad en su toma de decisiones, además de relaciones de apoyo con las directivas de organizaciones sociales o de organizaciones de movimientos sociales, respetando las estructuras internas de planeación, gestión y toma de decisiones, o integrándose a los movimientos sociales con proyectos sólidos. Para este autor, las modificaciones que ha habido en el hacer, relacionarse y constituirse de las ONGs son constantes y necesarios para el fortalecimiento de la sociedad civil en México (Villaseñor, 2006).

Para autores como Villaseñor, Berrios y Canto (2007), las fortalezas de las ONGs radican en su capacidad argumentativa y mediadora ante el Estado, pues ven en el cabildeo la posibilidad de lograr avances democráticos por parte de las ONGs en los diversos temas que estos abordan. Ellos resaltan los aportes que las ONGs han hecho hacia los movimientos populares, mediante el accionar de equipos interdisciplinarios que han permitido interponer demandas, realizar actividades de cabildeo en los congresos locales y nacionales, organizar foros ciudadanos, tanto nacionales como internacionales en torno a los derechos humanos, temas alimentarios y temas ambientales, que han permitido discutir en torno a estrategias de la sociedad civil para incidir en las políticas nacionales. Para ellos, la tarea es caminar de manera colaborativa con las organizaciones sociales o asociaciones ciudadanas de otro tipo, de tal forma que sean varios y distintos los proyectos que se impulsan para dar mayor fuerza y diversidad de voces a los reclamos ciudadanos. Esta perspectiva implica la posibilidad de que las ONGs sean “unos actores más” que impulsan movimientos sociales-ciudadanos (Villaseñor, 2006), y se contrapone a la idea de que las ONGs deban de impulsar únicamente como gestores de recursos financieros, los proyectos de organizaciones o comunidades de base, como lo plantean autores como Petras y Borras.

Cuando la colaboración es vista como condición necesaria para la construcción del movimiento social, las organizaciones que participan, independientemente de su constitución social o figura jurídica, perciben la necesidad de manejar proyectos independientes desde los cuales dialogar entre sí, considerando

esta una opción más democrática para planear y decidir la acción colectiva (Sogge y Dütting, 2010). En este tipo de interacción son indispensables las relaciones de confianza que se relacionan con los aspectos “invisibles” de las organizaciones, esto es, sus financiadores, su posicionamiento político y la rendición de cuentas que llevan a cabo con respecto a los resultados de sus proyectos y de aquellos con quienes se relacionen (Sogge y Dütting, 2010).

Para Berkhout (2010), la colaboración incrementa la capacidad de las ONGs para incorporar nuevos temas y perspectivas sobre su trabajo, de tal forma que constantemente replantean la necesidad de incorporar sub-temas y ello permite generar alianzas más permanentes de colaboración entre distintos tipos de organizaciones, lo cual permite alargar la vida y los momentos del movimiento. Además, el autor menciona la posibilidad de dar mayor coherencia y consistencia social a las agendas de las ONGs, sobre todo en función de asegurar un financiamiento a mayor plazo.

Una función adicional de la colaboración entre ONGs y otras organizaciones en un movimiento social, es la posibilidad de tener distintos marcos conceptuales para la acción, lo que refuerza el potencial para la movilización al aportar mayores repertorios tácticos y alianzas en diferentes arenas (Sogge y Dütting, 2010), permitiendo moldear las demandas de acuerdo con la situación y apoyar a las organizaciones que se encuentran más debilitadas en determinados momentos.

Es importante destacar que las ONGs son sólo una dimensión organizativa en la dinámica de los movimientos sociales, y en muchas esferas, la colaboración con ONGs implica “construir el movimiento desde arriba”, por la doble responsabilidad que tienen: Compatibilizar la rendición de cuentas ante instancias financieras que tienden a apoyar proyectos de capacitación y promoción para insertar a los campesinos y población marginada en el sistema mundial de libre comercio, con la rendición de cuentas a los movimientos sociales, que buscan desestabilizar a un sistema liberalizado en materia económica y política, es decir, derrocar y revertir a este sistema mediante nuevas formas de organización social y participación política (Bendaña, 2006).

En el caso concreto de participación de la ONG en movimientos campesinos, que tradicionalmente estaban constituidos por organizaciones sociales, el reto es encontrar las formas de colaboración con actores de identidad y accionar diferenciados, de tal forma que ningún individuo o colectivo involucrado pierda su

autonomía, y cada uno contribuya de acuerdo con sus fuerzas particulares. Sin duda una tarea compleja, pero un paso indispensable para lograrlo es evitar el hábito de asumir representaciones en la planeación, por parte de las ONGs (Bendaña, 2006).

Conclusión

La historia de las ONGs en México ha estado vinculada a momentos clave de la sociedad civil y los movimientos sociales en el país. Una historia llena de coyunturas y de relaciones con actores civiles y políticos, que ha hecho indispensable que cada ONG tome decisiones en cuanto a su función social, sus formas y ámbitos de trabajo, y las formas de vinculación con otros actores, decidiendo con esto, también, arenas de actuación y repertorios tácticos que permiten reflejar su identidad, y que por lo tanto, condicionan el tipo de alianzas estratégicas que puede establecer con otros actores organizados.

La información presentada en este capítulo adquiere relevancia en tanto que son las ONGs el común denominador para ambos movimientos por la soberanía alimentaria en México; sin embargo, esto no indica similitudes identitarias ni estratégicas entre ellos, sino, como veremos en los capítulos 4 y 5, una diversidad importante que se refleja en orientaciones de la acción y en construcciones distintas de alternativas ante una realidad cuyos problemas son vistos de manera compartida. Las alianzas que se establecen con ONGs son diferentes en cada movimiento, y dependen de las trayectorias y las identidades que cada actor desea resaltar en el movimiento. Las diferencias resultantes, evidentes para el observador externo como estrategias diferenciadas, son producto de combinaciones sociales con distintas formas de vinculación para tomar las decisiones que permiten construir el movimiento y escenificar sus ideales de sociedad.

Sin embargo, antes de pasar a un análisis del movimiento contemporáneo, es importante rastrear su historia hacia las principales corrientes movimentistas que le dieron lugar: los movimientos campesino e indígena, cuyos actores más locales dan particularidades de identidad y de enmarcamientos del problema únicas a cada uno de los movimientos que reviso en la presente tesis, y que comienzo a introducir al final del siguiente capítulo.

Capítulo 3

Antecedentes del Movimiento por la Soberanía alimentaria en México

3.1. Introducción

En el presente capítulo haré una breve revisión del movimiento campesino y el movimiento indígena en México, desde los años setenta a la actualidad. Dado que el movimiento por la soberanía alimentaria es más reciente, el panorama previo tiene como intención dibujar los momentos históricos, así como los eventos sociales que hicieron que los actores sociales del movimiento campesino e indígena decidieran configurarse como separados, iniciando alianzas diferenciadas, así como estrategias divergentes para encausar sus luchas. El énfasis en los actores del movimiento actual por la soberanía alimentaria, con un recuento detallado de eventos, reacciones y alianzas, se hace a partir del año 2002, año a partir del cual existe información clara para entender al movimiento actual.

3.2. El movimiento campesino en México

La movilización rural es un hecho cotidiano a partir de la revolución mexicana; el conflicto del sector campesino, principalmente de autosubsistencia, ante el gobierno mexicano o con las empresas agroindustriales, nacionales o transnacionales, ha sido una constante. Sin embargo el conflicto ha tenido diferentes ejes rectores o periodos que han caracterizado la lucha, tanto en temática como en estrategia de avanzada por parte del sector campesino. Rubio (1993, 2006) considera que el movimiento campesino posrevolucionario comienza a finales de los años sesenta, distinguiendo tres periodos: El de carácter ofensivo en las luchas por dotación de tierras, con un carácter predominantemente agrario, abarca de 1970-1976; un segundo periodo con carácter defensivo y de transición de la lucha agraria a las luchas económicas y productivas, va de 1977-1983; y un tercer periodo que abarca de mediados de los ochenta hasta la fecha, con momentos de pasividad total, pero de corte predominante anti-neoliberal, defensivo, pero con marcadas diferencias en los actores sociales que entablan la lucha, las demandas que se persiguen y los ámbitos a través de los cuales se canaliza o instituye la lucha.

Como constante, desde los años setenta, el cambiante papel del Estado no ha sido de ayuda para sacar adelante al campo en materia productiva y económica. La década de los setenta marca el final del modelo de sustitución de importaciones²⁴, que no logró resolver la pobreza en el campo al nivel nacional, pues aunque planteaba resolver el abastecimiento de los mercados nacionales con producción interna, lo hizo manteniendo precios bajos en detrimento de los productores campesinos (Martínez y Rosset, 2010).

Durante los setenta y ochenta, los partidos políticos pudieron capturar recursos, mediante elecciones ganadas o negociando cuotas de poder en congresos locales, para proveer de “padrinaje” político a sus electores en áreas rurales, mediante la distribución clientelar de recursos y servicios (Martínez y Rosset, 2010). Para las áreas rurales esto significó que cada partido político en áreas urbanas, podía crear y/o mantener una organización campesina en el nivel estatal o nacional, canalizando recursos del Estado a esa organización a cambio de su lealtad política al partido (Fritscher, 2001).

El corporativismo²⁵ experimentó problemas a finales de los setenta por que no pudo contener un importante desempleo rural motivado por la crisis de ciertos productos comerciales de exportación, por el término de los convenios de braceros con Estados Unidos, que habían permitido hasta entonces la migración legal de miles de trabajadores agrícolas, y por el agotamiento del reparto agrario (Fritscher, 2001).

Ante este escenario las centrales oficiales, que eran organizaciones campesinas clientelistas del partido en el poder²⁶, encontraron cada vez mayores dificultades para ejercer su función de control político y contener las manifestaciones de descontento de los campesinos a quienes hasta entonces representaban y atendían (Bartra, 1985).

²⁴ Este modelo impulsaba la provisión de mercados nacionales con la producción nacional, en todos los rubros de producción agrícola y pecuaria.

²⁵ Que implica supeditación de las organizaciones campesinas a partidos políticos que les proveen de apoyos económicos, a cambio de votos para el partido. El corporativismo tiene dos funciones básicas: la representación de intereses en las cúpulas de poder y el control político mediante compromisos de voto (Grammont y Mackinlay, 2006).

²⁶ La más grande y permanente es llamada Confederación Nacional Campesina (CNC). creada por el PRI, aglutinó a muchas organizaciones locales y hasta la fecha es una de las organizaciones nacionales más grandes. Sin pretender fundamentar sus preferencias políticas, diremos que existe la percepción generalizada de otras organizaciones respecto a que opera bajo un esquema clientelista de lealtad al partido imperante en las cámaras legislativas, ocupando un número importante de espacios y votos en el actual Consejo Nacional de Desarrollo Rural, encargado de elaborar las propuestas presupuestales para los rubros relacionados con el desarrollo agropecuario.

El auge de la lucha por la tierra decaía ante las fuertes políticas gubernamentales que empleaban al ejército para reprimir, de forma que la lucha transitó de un ámbito agrarista, enfocado en el acceso a la tierra, a uno sustentado en el desarrollo económico de las unidades productivas campesinas. Con esto inició el impulso campesino por formar organizaciones independientes del sistema corporativo, lo que trajo como resultado un conjunto de organizaciones regionales, basadas en la ideología de izquierda de la época, con un común denominador que era el tajante rechazo al gobierno del Partido Revolucionario Institucional, pero también, gradualmente con otro corte de figuras asociativas, conformadas para la recepción de créditos (Mackinlay y Otero, 2004). Se buscaba ya un tipo de organización que permitiese mantener autonomía frente al gobierno y a la vez fomentara el apoyo y la coordinación entre campesinos para tener luchas por mayores y mejores apoyos a la producción.

En 1979 muchas organizaciones optaron por organizarse en forma de red y conformaron la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), la cual se definió como un “frente de organizaciones independientes” para destacar su voluntad de no entrar en tratos corporativos con el gobierno. En un primer momento sostuvieron una posición agrarista radical que les significó una represión constante, con numerosos muertos y encarcelados, a raíz de lo cual la coordinadora se debilitó a mediados de los años ochenta y varias de sus organizaciones se reagruparon en otros frentes (Robles y Moguel, 1990).

Otras organizaciones campesinas que se crearon durante los sesenta y setenta, aunque inicialmente de corte oficial (promovido por el gobierno o partidos políticos), con el paso de los años pugnaron por su autonomía de gestión frente al gobierno. De ahí surgió otro conjunto de organizaciones regionales que luchaban por la autogestión de las empresas económicas del sector social y que se agrupó en 1985, también en forma de red, en la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA). Estas organizaciones se definieron como autónomas para marcar que, a diferencia de las organizaciones independientes, no rehuían trabajar con el gobierno e incluso con el PRI, a condición de que esto no les impidiese crear organismos y empresas del sector social representativos de las bases campesinas (Fox y Gordillo, 1991). Durante la segunda mitad de los años ochenta,

centraron su acción en los precios de garantía²⁷ por lo cual se convirtieron en el eje aglutinador de numerosas organizaciones, tanto oficiales como independientes y autónomas.

Estos son sólo unos ejemplos del tipo de organización campesina que, durante los setenta y ochenta, se mantenía fuera de las relaciones corporativistas y reivindicaba el ejercicio de la democracia, lo cual se puede atribuir al agotamiento del corporativismo como modelo de representación social por su marcado autoritarismo, así como a la corrupción generalizada y la excesiva concentración del poder de decisión en las cúpulas partidistas (Grammont y Mackinlay, 2008). El impulso fue tal, que el gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988) optó por fortalecer su relación con la UNORCA, en detrimento del trato con otras organizaciones, como el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), el órgano de las grandes asociaciones agroindustriales creado en 1982.

Durante todo este periodo, que abarca las décadas de los setenta y ochenta, la lucha campesina aglutinada en torno a organizaciones y coordinadoras nacionales o estatales, disminuye su actividad contenciosa que incluía tomas de tierras, oficinas gubernamentales y bloqueos carreteros, en una lucha no constante, con periodos de latencia durante los cuales había actividad organizativa y planeación de estrategias para adaptarse a los cambios de estructura política y a las políticas cambiantes en materia agraria y agrícola para el país (Rubio, 1996).

En la década de los ochenta, se transforma profundamente la relación entre las organizaciones sociales, el sistema político y el Estado, debido las reformas que instrumentan el retiro de apoyos gubernamentales al sector campesino, para la instauración del modelo neoliberal-global, que aunque ya había comenzado, se hizo evidente con el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) (Rubio, 1996). El proceso de instrumentación neoliberal, junto con la transición democrática que, para algunos autores (Rubio, 1996; Bartra, 2004), culminó en el 2002, propicia el surgimiento, a partir de la segunda mitad de los años noventa, de nuevos actores sociales que se desempeñan en un contexto social, económico y político diferente a los periodos anteriores (Grammont y Mackinlay, 2008).

²⁷ Los precios de garantía sirvieron hasta mediados de los noventa para garantizar a los productores un pago seguro por sus cosechas por parte del Estado. El tabulador aplicaba por tipo de cultivo y cubría incluso pérdidas por siniestros naturales.

El modelo neoliberal se caracteriza por el predominio del capital financiero sobre el productivo, el establecimiento de bajos salarios y bajos costos de las materias primas agropecuarias, una fuerte concentración y centralización del capital, con mecanismos de inclusión de empresas transnacionales en la toma de decisiones políticas nacionales, la legislación de formas flexibles de contratación, y el aumento del grado de monopolios, (Dussel, 2007).

En el esquema neoliberal, el Estado reorienta su actividad con miras a facilitar el desarrollo de la nueva industria: reduce el gasto social y crea economías externas, productivas y financieras para abrir los mercados externos al capital industrial. El acceso a dichos mercados sólo puede lograrse a través de los canales manejados por transnacionales, por lo cual existe una tendencia a atraer capital extranjero como un rasgo consustancial al modelo (Dussel, 2007).

Para la implementación del modelo neoliberal en México, la política agropecuaria se orientó a promover las asociaciones entre campesinos comuneros y ejidatarios, entre ellos y con empresas. También otorgó numerosos créditos para la producción de bienes de exportación, creando endeudamiento de los campesinos y la búsqueda de trabajo como asalariados o jornaleros agrícolas en momentos en que la producción de básicos era reducida y en tierras deterioradas, ya por la ganadería o por el importante uso de agroquímicos que se había estado estimulando desde la revolución verde (Rubio, 2004).

En este periodo de implementación, el principal problema que enfrentaron las organizaciones campesinas fue el rápido decline de los precios para los productos agrícolas y pecuarios, principalmente debido a la globalización y a los programas de ajuste estructural mandados por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial como compromisos para pago de deuda externa (Martínez-Torres y Rosset, 2010). Adicionalmente, se requirió a México una política gradual de reducción a los subsidios agrícolas, reducir tarifas arancelarias y eliminar barreras no tarifarias. Estas prescripciones políticas no aplicaban a países industrializados, así que mientras México abría sus mercados a la competencia internacional, Estados Unidos y la Unión Europea incrementaron subsidios agrícolas y emplearon las barreras para mantener las importaciones cerradas (González, 2006).

Compromisos con instancias internacionales como el acuerdo general sobre aranceles aduaneros y comercio (GATT por sus siglas en inglés, ahora Organización mundial del Comercio u OMC) y el Tratado de Libre Comercio de América del

Norte (TLCAN) forzaron cortes en los subsidios al campo y liberación de aranceles para el comercio inter-regional (Barkin, 2003).

Los programas internacionales de asistencia para el desarrollo, inadvertida y progresivamente exacerbaron la polaridad económica en el campo, la inseguridad alimentaria y la degradación ambiental, promoviendo la producción agrícola de monocultivos (González, 2006) y por ende, modificaciones en los sistemas agrícolas tradicionales hasta el momento.

Los campesinos en México abandonaron gradualmente las técnicas de policultivo gracias a las cuales es posible obtener distintos productos por ciclo agrícola, combinando plantas como frijol, maíz y calabaza que no compiten entre sí por tener formas de vida y requerimientos distintos, por monocultivos de maíz, persiguiendo el acceso a apoyos y programas gubernamentales que promovían paquetes tecnificados, para plantar semillas híbridas, con fertilizantes químicos y pesticidas sintéticos manufacturados por corporaciones transnacionales, cuyas oficinas generales están en Estados Unidos y Europa (González, 2006).

La demanda campesina, a partir de este sexenio, no se atendió con tierra sino con inversión pública y creación de empleos temporales para la construcción de infraestructura y agroindustria. Los programas destinados a los campesinos, pese a ser numerosos, fueron modestos en términos de inversión real y estaban básicamente dirigidos a transformar la producción campesina en empresarial (Fritscher, 2001). En este marco se ubican los esfuerzos para reorganizar colectivamente a los ejidos²⁸ con terrenos de alto potencial productivo y promover la asociación entre el capital y los ejidatarios, sancionada anteriormente por la Ley de Fomento Agropecuario (Bartra y Otero, 2008).

Carlos Salinas de Gortari, en la búsqueda de alianzas para legitimar su mandato y poder negociar con los campesinos las reformas que proyectaba, impulsó la creación del Congreso Agrario Permanente (CAP) en 1989. La particularidad del CAP es que por primera vez un gobierno del PRI incorporó entre sus interlocutores formales a organizaciones no priístas, como la UNORCA y la CIOAC, de corte nacional, entre otras más locales (Mackinlay, 1996).

²⁸ El ejido es una forma de ocupación de tierra decretado por la ley de la reforma agraria, diseñado para tierras a ser redistribuidas entre campesinos mestizos, con derecho de usufructo sobre la tierra pero con propiedad del Estado. (Bartra y Otero, 2008).

La nueva alianza del Consejo, se basó en la promesa de brindar a las organizaciones económicas del sector social un papel protagónico en el proceso de desarrollo nacional, otorgándoles prioridad en la privatización de las empresas paraestatales, a condición de que fuesen capaces de administrarlas eficientemente. A raíz de algunas experiencias de “incapacidad” por parte de las organizaciones para administrar las empresas que les fueron entregadas (caso Comagro), se crearon las condiciones para que el gobierno promoviera las modificaciones legales en materia agraria más importantes desde la promulgación de la constitución de 1917, con las reformas al artículo 27 constitucional, que pusieron fin al reparto agrario, privatizaron la propiedad social agraria e incorporaron la tierra y los recursos naturales –forestales, hidráulicos, mineros, pesqueros- a una lógica mercantil (Mackinlay y De la Fuente, 1996).

Después de haber sufrido un importante desgaste, primero por su incapacidad de administrar empresas agropecuarias y luego a raíz de estos cambios legales de la legislación agraria, el CAP se incorporó a principios de 1994 a las negociaciones del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte con los Estados Unidos y Canadá, con una influencia totalmente secundaria en este proceso, al igual que las asociaciones de pequeños y medianos empresarios del campo, mientras que el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), el órgano de las agroindustrias, controló la representación del sector rural (Mackinlay y De la Fuente, 1996).

Una vez redefinidas sus alianzas, el Estado pudo disociar las políticas de fomento a la producción y la política social de combate contra la pobreza, estableciendo políticas focalizadas para cada sujeto social (Grammont y Mackinlay, 2006). Se estableció una distinción entre los productores con potencial productivo, merecedores de las políticas de fomento diseñadas con criterios empresariales, y los productores sin potencial, catalogados como pobres, receptores de los apoyos asistencialistas (Grammont, 2001). Por otra parte, los subsidios indirectos como los precios de garantía para granos y oleaginosas, fueron paulatinamente retirados con la entrada en vigor del TLCAN, para ser sustituidos por un sistema de subsidio directo, pagado en efectivo y en función de la superficie sembrada de granos y oleaginosas, llamado Procampo. Las organizaciones campesinas tuvieron un papel importante en la inscripción de sus agremiados en el padrón de productores, pero una vez concluido éste, su intervención dejó de ser necesaria y se limitó a la gestión de los pocos

programas de fomento que quedaron, cada vez más compartidos con las organizaciones representativas de pequeños y medianos productores de tipo empresarial y las grandes corporaciones (Mackinlay, 1996).

Bajo el TLCAN, la liberalización comercial abarcó la totalidad del sector agropecuario del país. En un tiempo récord el gobierno mexicano decidió eliminar prácticamente la mayoría de los mecanismos de protección arancelarios y no arancelarios vigentes. En el tratado se acordó la desgravación inmediata de muchos productos agropecuarios y se fijó un periodo de quince años para eliminar la totalidad de las barreras arancelarias, lo que significaba que para 2008 todas las importaciones agropecuarias de Estados Unidos y Canadá entrarían al país sin pagar aranceles. Se estableció también la eliminación de licencias y permisos previos a la importación, sustituidos por el mecanismo de arancel por cuota para el período que tardara la desgravación total de ciertos productos (Barkin, 2003).

Tan sólo en los primeros siete años de operación del Tratado el gobierno dejó de cobrar aranceles por sobrecuota importada de maíz equivalentes a 16.5 millones de toneladas y a 2,684 millones de dólares. Esa cantidad por sí sola hubiera financiado 81% de todo el gasto público destinado por el gobierno federal en 2001 para fomento agropecuario y forestal, incluido Procampo. En el caso del frijol, las exportaciones estadounidenses por encima de las cuotas pactadas significaron tan sólo en el año 1998 una pérdida fiscal de 41.7 millones de dólares, a la que se agrega 1.6 millones de dólares, producto de las exportaciones canadienses sin cobro de arancel. En este caso, el ingreso perdido hubiera alcanzado para financiar 39% del Procampo en ese mismo año (Concheiro et. Al, 2007). A la abrupta apertura comercial se sumó la severa reducción de la participación del Estado en el desarrollo económico del sector agropecuario. Esto implicó la privatización o desaparición de la infraestructura estatal de apoyo a la producción, financiamiento, almacenamiento, comercialización y distribución de productos agropecuarios (Yúnez, 2000). Junto a la privatización de los sistemas de riego y de toda la infraestructura de almacenamiento alimentario (ANDSA y BORUCONSA), desaparecieron Fertimex (paraestatal que vendía fertilizantes a precios subsidiados), el Inmecafé (institución pública que apoyaba la producción y comercialización del cultivo), Conasupo y Banrural. Además, se eliminó el otorgamiento de subsidios al agua, los precios de apoyo al productor o de garantía fueron restringidos sólo a maíz y frijol y se redujo el

otorgamiento de seguros subsidiados para ayudar a los agricultores a enfrentar los siniestros causados por problemas climatológicos (Yúnez, 2000).

Ante esto, en los noventa, nace una nueva generación de organizaciones campesinas y de productores empresariales familiares que, a diferencia de sus antecesoras que nacieron en el contexto del Estado benefactor, emergen a causa de la privatización y de la crisis motivada por el modelo neoliberal; aglutinan organizaciones campesinas decididas a participar en la comercialización directa y organizada de sus cosechas, como respuesta a la apertura comercial, la privatización y la desregulación de los mercados agrícolas (Grammont y Mackinlay, 2008). Es el caso, entre otras, de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOCA), que se creó a consecuencia del desmantelamiento del Inmecafé; el Frente Democrático Campesino de Chihuahua (FDCh) creado por pequeños agricultores familiares afectados por el desmantelamiento del sistema de precios de garantía; El Barzón, creado para defender a los agricultores endeudados con la banca, fue la organización que primero y mejor representó la ruptura con la tradición corporativista de buscar la solución de sus problemas exclusivamente con el Ejecutivo, concentrando su acción en el Congreso de la Unión con propuestas legislativas encaminadas a resolver la cartera vencida, así como en la Suprema Corte de Justicia con demandas legales en contra de la privatización de la banca y de la capitalización de los intereses moratorios, sin dejar de llevar a cabo movilizaciones callejeras (Mackinlay, 2004).

Hacia finales de los noventa se dio la descentralización llamada “nuevo federalismo”, gracias a la cual los Estados comenzaron a contar con mayor gasto presupuestal y con rubros para captar impuestos. Al introducir nuevas prácticas sociales, nuevos problemas surgieron para las organizaciones de productores campesinos no empresariales, pues los administradores locales comenzaron a canalizar los programas de fomento en forma arbitraria hacia los aliados políticos de los gobernadores en turno (Grammont y Mackinlay, 2006).

En estos años se creó otro nuevo tipo de organización que se encuentra a medio camino entre las campesinas y las organizaciones no gubernamentales, porque subsisten gracias a financiamientos externos provenientes de las fundaciones nacionales e internacionales, pero tienen también bases sociales conformadas por empresas campesinas y gestionan apoyos sectoriales con gobierno (Grammont y Mackinlay, 2006). Se denominan organizaciones económicas y tienen como objetivo

aglutinar a organizaciones locales para controlar toda la cadena productiva, desde el campo hasta el consumidor final, evitando a los intermediarios que negociaban con los Estados o con las centrales de abasto, para el acceso a programas de asistencia o de apoyo en esquema clientelar, o bien pagando precios ínfimos por cosechas que posteriormente revenderían en núcleos urbanos a más del doble o triple de precio (Suárez, 2008). De estas nuevas organizaciones, destacan por su permanencia y extensión: La Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras Campesinas (ANEC), dedicada a la comercialización de granos y oleaginosas; la Unión Nacional de Organizaciones de Forestería Comunitaria (UNOFOC) y la Red Mexicana de Organismos Campesinos Forestales (Red Mocaf); también se pueden conceptualizar como “coordinadoras de empresas campesinas”, según Grammont y Mackinlay (2008). Estas organizaciones, junto con la CNOC y la entonces debilitada UNORCA empezaron, a partir de 1997, a desplegar una activa campaña mediática denunciando en diversos foros las políticas neoliberales y la precaria situación en la que habían caído los pequeños productores. En octubre de 1999, aprovechando la discusión del presupuesto para el año 2000 y la cercanía de la campaña electoral presidencial, propusieron un proyecto de presupuesto alternativo para el campo a la cámara de diputados (Suárez, 2008).

Estas estrategias, de empleo organizado de las vías legales, aunque aún no institucionalizadas, representan una novedosa intención de las organizaciones por adaptarse a los contextos cambiantes y por entablar luchas diferentes, tácticamente, empleando tanto la arena política como la civil. En la planeación, confluía un amplio entramado de organizaciones campesinas que dan cuenta de un alto nivel de organización de la sociedad civil (Rubio, 2003).

Si bien las etapas anteriores se habían caracterizado por la formación de grandes coordinadoras de organizaciones locales que daban directrices al movimiento, la lucha sectorial de los años noventa es intensa en el número de organizaciones y estrategias, pero dispersa y coyuntural en las movilizaciones (Appendini, 2003). El movimiento en este periodo también se expresó en la lucha que organizaciones de frijoleros, maiceros, cafetaleros, cañeros, ganaderos, etc., impulsaron por incrementos de precios y en contra de las importaciones. Se tomaron casetas de peaje y carreteras, se vertieron litros de leche y toneladas de frijol frente a las oficinas de la secretaría de comercio, se quemaron trigales enteros para protestar por la falta de compradores de las cosechas, pero apareado con la construcción de un

amplio entramado organizativo que constituye la defensa más importante con que cuentan los productores ante el nuevo modelo de desarrollo y de hacer política (Rubio, 2006). Se comienzan estrategias de cabildeo con propuestas que, para su elaboración, han requerido de amplia colaboración de las organizaciones sociales con académicos y otras organizaciones de la sociedad civil, dado que los términos en los que han sido elaboradas son legales y coherentes con la idea de desarrollo nacional planteada por los planes sexenales (Suárez, 2008).

Diversos grupos de productores activaron sus protestas con la apertura de un nuevo frente de lucha en la esfera parlamentaria por medio del cabildeo, manifestaciones frente a la Cámara de Diputados y frente a las dependencias gubernamentales a las que presionaban para resolver sus demandas (Rubio, 2003). Este ciclo de lucha culminó con una movilización de considerable magnitud el 10 de abril del 2000, aniversario luctuoso de Emiliano Zapata, en el Distrito Federal y varias ciudades del interior de la república. Al calor de esta iniciativa El Barzón, la UCD, la Asociación Nacional de Ganaderos Lecheros y otras organizaciones de diversas ramas productivas, formaron ese mismo año el efímero Frente Nacional en Defensa del Campo Mexicano (FNDCM), como resultado del movimiento de productores, en protesta por la importación desleal de insumos agropecuarios (Grammont y Mackinlay, 2008).

En la primera década del 2000, el nuevo modelo consolida y el movimiento enfrenta una forma particular de exclusión que deriva de la desregulación y desestructuración a los campesinos de subsistencia, razón por la cual el enemigo ahora son las agroindustrias importadoras de insumos y los bancos, ante las enormes tasas de interés que cobran (González, 2006). A diferencia del movimiento de los ochenta que se da en el contexto de una agricultura todavía parcialmente protegida de la competencia externa, la desregulación comercial y el dominio financiero se convierten en los aspectos esenciales a enfrentar por los productores. Se trata de una lucha defensiva en la que más que integrarse productivamente y recuperar el rol productivo que habían tenido, se lucha por conseguir mercado para los productos y reducir las acrecentadas deudas (González, 2006).

Por otro lado, mientras en los años ochenta el movimiento estuvo comandado por campesinos medios, desde los noventa participan también de manera importante empresarios pequeños y medianos y en algunos casos grandes empresarios y terratenientes orientados a la producción de alimentos para el mercado nacional.

Desde esta perspectiva se observan tres demandas principales: La lucha contra la liberalización comercial y por aumento de los precios y los recursos productivos, la lucha por la negociación de las deudas y la lucha por la tierra. Principalmente en contingentes separados que se agrupan para las marchas, pero que presentan sus estrategias de demanda por región y por sector (Rubio, 2003).

El movimiento expresa la resistencia de los campesinos y empresarios ante las estrategias de las agroindustrias multinacionales y el dominio de las instituciones financieras; sin embargo, enfrenta directamente a las instituciones del Estado que conceden los permisos de importación, fijan los precios y establecen las políticas agropecuarias sin una participación real de representantes electos de manera popular por las organizaciones campesinas democráticas (Rubio, 2006).

Esta fase de las movilizaciones culmina con el Movimiento el Campo no Aguanta Más (MECNAM), pero antes de abordar este movimiento parteaguas para nuestro estudio, es importante conocer la lucha indígena por la tierra, que se da en paralelo al movimiento campesino hasta la década de los noventa.

3.3. Movimiento Indígena

Desde la década del cuarenta, los pueblos indígenas de México fueron sujetos del indigenismo burocrático, la política de un Estado paternalista implementada a través del Instituto Nacional Indigenista (INI), que buscó a los pueblos en una sociedad nacional, rescatando su cultura como folklore y, en el mejor de los casos, abordando sus necesidades políticas, económicas y sociales como ciudadanos, pasando por alto diferencias de identidad y los derechos que emanaban de ella. Así, si el campesinado creado por la revolución estuvo firmemente contenido en las instituciones corporativistas del Estado, los indígenas del siglo XX fueron inventados por el INI durante tiempos de paz (Bartra y Otero, 2008).

El nuevo indianismo comenzó a definir su perfil durante las décadas del setenta y ochenta, cuando varias comunidades en México central y occidental desarrollaron movimientos locales o regionales en defensa de las tierras, los bosques y el agua, contra los caciques y gobiernos municipales, principalmente en Oaxaca, Guerrero y sureste mexicano (Bartra, 2000). En estas luchas los indígenas no expusieron especificidades en torno a su identidad como etnias nativas de territorios específicos, con lengua y cultura propias y diferenciadas, entre sí y con la sociedad

mexicana que vivía en la capital y los mestizos de los centros urbanos. El centro de las demandas era la tierra, no por las raíces históricas de sus derechos y formas de posesión del ejido, ni la comunidad²⁹, sino la mayor cesión de tierras para su usufructo (Bartra, 2000).

De acuerdo con Bartra y Otero (2008), el primer neozapatismo explícito en la era posrevolucionaria estaba expresado en la Coordinadora nacional Plan de Ayala (CNPA), compuesto por veintiún organizaciones regionales, catorce de ellas indígenas con etnias diferentes (Náhuatl, Purhépecha, Otomí, Huasteca, Mazahua, Zapoteca, Chinanteca, Triqui, Amusga, Chatina, Tsotsil y Tseltal). Aunque con menos peso, la organización coordinante de los grupos regionales, UNORCA, tiene también una militancia importante de pueblos autóctonos. No obstante, hasta mediados de los setenta, ninguna de estas dos organizaciones convergentes postuló con fuerza a la cuestión étnica, sino la campesina (Bartra, 2004).

El primer Congreso Indígena en México se llevó a cabo en Chiapas en 1974. Con lenguas mayas rigiendo la comunicación, se hicieron diagnósticos y propuestas consensuadas en torno a la tierra, el comercio, la salud y educación en el campo, sin resaltar de manera importante la identidad indígena que unía a los participantes (Bartra, 2000). Sin embargo, en Oaxaca ya había comenzado un proceso de formación de organizaciones de corte indígena, que elaboraron una plataforma programática en torno al derecho a la autodeterminación comunitaria sobre el uso de las tierras, los recursos naturales y las formas organizativas, en lo social y lo político, propias de cada grupo cultural y lingüístico, oponiéndose al uso generalizado del término “desarrollo nacional” (Bartra y Otero, 2008).

El Congreso de Chiapas promovió dos iniciativas de organización: la formación de Consejos Supremos por grupo étnico y la formación del Consejo Nacional de los Pueblos Indios (CNPI), además de criticar la Ley de Fomento Agropecuario decretada por López Portillo (1976-1982), que promovía desarrollar el capitalismo agrario vía empresas conjuntas entre empresarios y ejidatarios, usando tierra ejidal (el antecedente directo a las reformas que se hicieron en los noventa al artículo 27 constitucional). Pese a que el CNPI se transformó en una confederación de corte oficialista durante y por acciones del gobierno de de la Madrid, detonó

²⁹ Comunidad agraria y ejido son figuras de ocupación de tierra decretada por la reforma agraria, diseñadas para uso colectivo por comunidades indígenas que podían probar un derecho sobre la tierra basado en documentos coloniales (Bartra y Otero, 2008).

procesos nacionales de formación de organizaciones regionales independientes, durante los ochenta y principalmente los noventa, en Oaxaca, Chiapas y Guerrero (Bartra, 2000).

Con el surgimiento de nuevas organizaciones (los consejos regionales) se sucedieron reuniones y encuentros masivos que, gradualmente, reforzaron el componente identitario de la lucha ante el Estado, encontrando en la diversidad cultural, carencias y demandas comunes que, aunque mantenían los reclamos campesinos, se cohesionaban también en torno a la necesidad de incluir otros términos, de índole cultural, para los reclamos ante el Estado (Bartra, 2004). El Primer Foro Internacional sobre los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas se realizó en Matías Romero, Oaxaca, en 1989, con participantes de noventa y seis organizaciones de catorce Estados y de veintitrés grupos étnicos, con la participación de delegados de Guatemala, Honduras, Perú y Bolivia, además de estudiantes, académicos y representantes de organizaciones no gubernamentales (Bartra y Otero, 2008). Esta reunión tuvo como resultado la Campaña Mundial de 500 años de Resistencia Indígena y Popular, que definió claramente una agenda indígena, cuyos objetivos fueron la lucha por el derecho a la autonomía y autodeterminación, el derecho a la identidad cultural, el derecho a la tierra y los recursos naturales, el derecho a determinar la condición política interna de las comunidades, de acuerdo con las formas tradicionales de organización, y el predominio de derecho consuetudinario tradicional indígena. También pidió “*alentar la unidad de pueblos indígenas con el campesino, trabajadores y sectores populares*” (Bartra y Otero, 2008: 35).

Este proceso de convergencia coincidió con los primeros años del sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), que trataba de atraer los movimientos independientes rurales al pliegue corporativista³⁰, además de procurar que, las tierras que habían sido devueltas o confirmadas a pueblos indígenas no fueran excluidas del mecanismo por el cual el gobierno procuró tener tierras de ejido y comunidad que adoptaran el título de dominio absoluto, ya sea por el programa PROCEDE, como por su equivalente, el programa de certificación de tierras comunales (PROCECOM) (Sánchez, 1998), lo que constituyó el paso anterior a la enajenación y la venta de tierras. Antes de la revisión de 1992 de la Ley de Reforma Agraria, las tierras de

³⁰ Como lo hemos mencionado, el CAP atrajo a organizaciones creadas de manera independiente a los partidos políticos como la UNORCA, CIOAC y CNPA.

ejido no podían venderse, sólo podían ser transferidas a herederos, puesto que la tenencia de la tierra era comunal, no había un dueño único, lo cual era necesario para modificar el artículo 27 constitucional.

Como parte del quinto centenario de la llegada de Colón a América, y en oposición a las grandes celebraciones planeadas por los gobiernos Latinoamericanos para tal fecha, se celebró en Quito, Perú, una amplia reunión de pueblos indios llamada “quinientos años de resistencia indígena”, en 1990; esta reunión, además de ser la base de lo que se convertiría en un movimiento campesino transnacional³¹ (Martínez y Rosset, 2010), fue un refuerzo latinoamericano para las organizaciones indígenas que asistieron en representación de México (Sánchez, 1999). Con la fuerza adquirida en este momento y el impulso movilizante contra las modificaciones al artículo 27 constitucional, se realizaron eventos y manifestaciones el 12 de octubre de 1992, tanto en el zócalo de la ciudad de México como en centros urbanos de toda la República. En estos eventos que además buscaban una reflexión distinta en torno al “Día de la Raza” demostraron el aumento del activismo indígena además de que conjuntaron contingentes en representación de una dispersa pluralidad de posiciones políticas: desde grupos culturales ritualistas y la asamblea del Consejo Mexicano de los 500 Años, hasta manifestantes religiosas camino hacia la Basílica de la Virgen de Guadalupe (Bartra y Otero, 2008). En estas demostraciones participaron también ONGs que desde su quehacer, algunas en el medio rural, apoyaban la idea de que no había nada que celebrar sino una idea de dominación y colonización, es decir, la versión oficial de la historia latinoamericana que ignoraba la resistencia que hubo a la conquista (Martínez y Rosset, 2010).

El terreno, sin duda, había sido preparado por casi veinte años de luchas étnicas para ganar la independencia del indigenismo institucional, pero el levantamiento de Chiapas transformó a un “grupo vulnerable” merecedor de asistencia en el emblema de la dignidad y la rebeldía (Bartra, 2003).

Poco después, el levantamiento zapatista, que salió a la luz el 1 de enero de 1994, fecha exacta de la entrada en vigor del TLCAN, desde el primer momento se pronunció en contra del neoliberalismo y los instrumentos de globalización económica. En un primer momento, el programa zapatista no fue particularmente indigenista, pues buscaba trabajo, tierra, habitación, alimentación, salud, educación,

³¹ La Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones Campesinas, antecedente latinoamericano directo de la Vía Campesina Internacional (Martínez y Rosset, 2010).

independencia, libertad, democracia, justicia y paz, pero su composición siempre fue indígena y su bandera también, pues nunca ubicó al actor campesino como primordial en sus discursos (Grammont y Mackinlay, 2008). Gradualmente se persuadió de que, hablar de identidad indígena como la primordial para la lucha, permitía ostentar también la idea de pueblos, de comunidades enteras cohesionadas, en vez de sectorizar al interior de las comunidades a los campesinos como idea de sector laboral (Bartra, 2003). También fueron indígenas las identidades enarboladas en las demandas, cuando la movilización nacional e internacional abrió el camino hacia la paz. En diciembre de 1994, durante la campaña de la Paz con Justicia y Dignidad que permitió al EZLN romper con el cerco del ejército, se publicó la conformación de treinta y ocho “municipalidades rebeldes” autónomas (Sánchez, 1999), en las cuales las decisiones políticas se tomarían según las formas de gobierno tradicionales, ignorando las autoridades emanadas del sistema de partidos políticos. Para la conformación efectiva de los Aguascalientes o MAREZ, se realizaron consejos amplios de deliberación, que resultaron en nuevas comunidades, pero también en desplazados.

El EZLN revitalizó el movimiento indígena nacional. Las numerosas reuniones que se organizaron para discutir las bases programáticas del nuevo movimiento indígena, sus estrategias de lucha, las formas de solidaridad para defender a los zapatistas chiapanecos frente a la ofensiva del gobierno después de romperse el pacto de San Andrés, sentaron las bases del nuevo movimiento autonomista indígena (Reygadas, 1996).

La primera convergencia de pueblos autóctonos expresamente llamada por el EZLN fue el Primer Foro Indígena Nacional en San Cristóbal, Chiapas, en octubre de 1996, con la Constitución del Congreso Nacional Indígena, que convivió con la Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía (ANIPA), creada un año antes para elaborar un proyecto de legislación autonomista (Bartra y Otero, 2008). Estas dos instancias crearon insumos para acuerdos amplios entre pueblos indígenas y gobierno, en la idea de llegar a un producto para proponer a la Comisión por la Concordia y la Paz, un grupo parlamentario encargado de redactar leyes que reconocieran las especificidades culturales y políticas de los pueblos indígenas, como actores del desarrollo nacional.

Sin embargo, pronto surgió una discrepancia en torno a la concepción de la autonomía que provocó una escisión en el movimiento entre la ANIPA y el Congreso

Nacional Indígena (CNI). La ANIPA reivindicaba ciertos derechos autonómicos a nivel regional, mientras que el CNI, más radical, retoma el concepto de autonomía y autogestión del EZLN aplicado a nivel comunitario y municipal (López Bárcenas, 2004). A su vez, en términos organizativos la ANIPA asumió una modalidad más centralizada, mientras que el CNI funcionaba como un espacio de discusión y coordinación de las luchas de los pueblos indios al estilo de la CNPA y de la UNORCA de los años ochenta. Es decir, un frente o una red “*alejada de una organización política o social jerarquizada*” (López Bárcenas, 2004: 45). Aún así, la ANIPA hizo una contribución significativa a la construcción de los Acuerdos de San Andrés.

En 1996, después de una larga negociación, el EZLN y una representación del gobierno de Zedillo firmaron los Acuerdos de San Andrés Larráinzar que preveían, entre otras cosas, cumplir con el principal planteamiento programático de los insurrectos: otorgar la autonomía a los pueblos indígenas. Estos acuerdos fueron plasmados en la Ley de Cultura y Derechos Indígenas por la Comisión para la Concordia y la Pacificación (Cocopa³²), pero el gobierno no ratificó la propuesta de ley, por lo cual no fue presentada a la Cámara de Diputados (Bartra y Otero, 2008), lo cual llevó al EZLN y en general al movimiento indígena a cerrar las puertas para posteriores negociaciones con el gobierno.

El CNI celebró a partir de entonces seis congresos en distintos Estados de la República, a nivel nacional y por regiones. Se ha constituido en el principal órgano de planeación y orientación para todos los pueblos indios que se asumen como parte del movimiento indígena, y anualmente celebra reuniones regionales.

La “marcha del color de la tierra”, como también se llamó a una caravana de zapatistas indígenas que, junto con varias ONGs marcharon de Chiapas al zócalo de la ciudad de México, fue el punto más alto de la fase del movimiento indígena que comenzó a mediados de la década del noventa, y se articuló con la demanda de reconocimiento constitucional de autonomía para los pueblos indios (Bartra, 2003).

Ésta no era una meta pequeña. En un país donde las demandas se pelean en términos muy específicos con la esperanza de que el gobierno las satisfaga, luchar por el reconocimiento de los derechos fundamentales era un gran paso. La caravana movilizó a una vasta mayoría de organizaciones indígenas que contaban con amplia

³² La Cocopa fue una comisión parlamentaria compuesta por diputados de los principales partidos.

simpatía del público en general. Por lo tanto, la posibilidad de que un proceso legislativo se iniciara desde las bases era percibida como viable (Bartra y Otero, 2008).

El camino legal parece haberse agotado en la perspectiva de los principales protagonistas. Cuando el Congreso amputó severamente la iniciativa Cocopa, y especialmente después de que la Corte Suprema se negara a arreglar el problema, tanto el CNI como el EZLN cambiaron el terreno de la lucha. Los indígenas en el CNI ratificaron su decisión de ejercer la autonomía en la práctica, y los zapatistas anunciaron la suspensión de todo contacto con el gobierno (Díaz-Polanco y Sánchez, 2002).

La implementación de estas decisiones ha sido un proceso tortuoso, largo y con problemas, ante gobiernos que expresan mediante la militarización su presencia y su intención de evitar a toda costa las propuestas de autonomía, y ante grandes retos económicos y pugnas intra-territoriales para conseguir consensos en torno a las decisiones comunitarias para la autosubsistencia y el autogobierno. El CNI, si bien marca lineamientos operativos importantes, no tiene una instancia de resolución de conflictos, y a menudo al interior de las comunidades surgen pugnas, impulsadas por condiciones de pobreza, en torno a las negociaciones con gobierno, pues los apoyos materiales durante épocas de elecciones, así como los programas de desarrollo social parecen ofrecer soluciones, aunque efímeras y paliativas. Los apoyos financieros de orden internacional se han retirado junto con las noticias mediáticas del conflicto armado, de tal forma que la implementación de autonomías se hace en un clima de hostilidad y precariedad económica, ante condiciones ambientales de degradación y cambio climático que hacen de la tarea toda una hazaña.

Particularmente, para la rama del CNI que participa en el movimiento por la soberanía alimentaria, la autonomía se expresa en la continuidad de los ciclos y las semillas nativas de siembra local, resistiendo los paquetes biotecnológicos de apoyo gubernamental.

Las organizaciones sociales y comunidades que siempre vieron con desconfianza la participación político-partidaria-electoral, encontraron en la consolidación del EZLN y del CNI un fundamento político-ideológico que les permitió legitimar su desempeño al margen del sistema electoral. Sin embargo, no todas las organizaciones indígenas concordaron con estas ideas ya que muchas de ellas siguieron participando en los procesos electorales en sus distintos niveles

(Viqueira y Sonnleitner, 2000). Tal es el caso, por supuesto, de organizaciones indígenas cercanas al partido gubernamental, que durante el gobierno de Zedillo sirvieron de dique de contención al zapatismo, pero también de organizaciones que actuaron en los niveles locales o de la ANIPA que, con base en un proyecto de autonomía más aceptable para el gobierno que el del CNI y del EZLN, se integraron a la administración de Vicente Fox (Grammont y Mackinlay y Otero, 2004), en las comisiones y dependencias para atender a la población indígena.

3.4. El movimiento por la soberanía alimentaria. Antecedentes

El precedente recuento de las particularidades y los diferentes momentos que han tenido el movimiento campesino e indígena, me permiten contextualizar los frentes de lucha de cada movimiento, sus demandas y las arenas en las que se han movido en la búsqueda de mejores condiciones de vida y para la producción agrícola, incluyendo la reivindicación de identidades particulares ante el gobierno mexicano.

El movimiento actual por la soberanía alimentaria se conforma por dos movimientos separados que, para llegar a su configuración actual, han retomado las experiencias y aprendizajes de sus relaciones pasadas con el gobierno y entre sí, para definir sus alianzas, organizarse y tomar decisiones estratégicas referentes a las demandas, arenas de lucha y repertorios tácticos aceptables. Un movimiento tiene claros antecedentes en el movimiento indígena, el otro más ligado a las luchas campesinas.

Revisaré ahora los antecedentes concretos del movimiento actual, que se remiten al capítulo agropecuario derivado del TLCAN y a la introducción de paquetes biotecnológicos de patente empresarial. Estos antecedentes nos permiten entender la inserción de organizaciones no gubernamentales en el movimiento actual, así como las alianzas que han establecido con el movimiento indígena o campesino. Los eventos en las relaciones sociales de todos los actores, son determinantes para entender la forma en que trayectorias similares de activismo resultan en orientaciones estratégicas diferenciadas al grado de una división interna irreconciliable para el movimiento. Los eventos en las relaciones y las alianzas que éstos han determinado, han moldeado las iniciativas y decisiones estratégicas de cada movimiento actual.

3.4.1. Antecedente común: Foro Nacional por la Soberanía Alimentaria

En agosto de 1996, organizaciones campesinas y ONGs³³ convocaron a la realización de un Foro Nacional por la Soberanía Alimentaria, con motivo de la realización en noviembre del mismo año de la Cumbre Mundial de la Alimentación, organizada por la Food and Agriculture Organization (FAO) en Roma, y retomando el concepto de soberanía alimentaria introducido desde los noventa por la Vía Campesina, en oposición al discurso oficial de seguridad alimentaria.

En la presentación de la memoria, el comité organizador escribía: *“La iniciativa surgió de un grupo de organizaciones sociales que desde diversas redes han participado en la discusión del tema y en las consultas organizadas por la FAO en distintas regiones del mundo. En noviembre se realizará en Roma la Cumbre Mundial de la Alimentación; la importancia del tema reunirá a los gobiernos y líderes sociales del planeta. Las principales políticas alimentarias del nuevo milenio serán definidas en esa reunión. ¿Cuál es el futuro de la alimentación en México? ¿Cómo podría ser una política de Estado en materia alimentaria? Son dos de los temas ampliamente discutidos durante el Foro. Aspiramos a convertir el tema de la alimentación en parte de la agenda política nacional, no es un tema exclusivo de los productos e investigadores, sino que todos los mexicanos tenemos algo que aportar (...) como toda iniciativa ciudadana, la organización y realización del Foro Nacional por la Soberanía Alimentaria sustituyó recursos financieros por recursos humanos, en una muestra clara de las posibilidades transformadoras que la diversidad y la tolerancia tienen para el futuro de México. Los resultados no pertenecen sino a todos los mexicanos, el mejor uso que puede hacerse de los mismos es impulsar acciones concretas en la vía de las aquí propuestas”* (Suárez, 2008). Asimismo el comité organizador afirmaba *“La situación de inseguridad, crisis y emergencia alimentaria por la que atraviesa nuestro país no es un producto de la fatalidad o la casualidad. Lograr la soberanía alimentaria es posible: 1. La soberanía alimentaria, concebida como la capacidad de producción y consumo de alimentos a nivel nacional, requiere condiciones de democracia, justicia, paz y*

³³ Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social (AMUCSS); Análisis, Gestión y Desarrollo (ANADEGES), Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras del Productores del Campo (ANEC), Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (CECCAM), Comisión Episcopal de Pastoral Social (CEPS), Foro de Ayuda Mutuo (FAM), Frente por el Derecho a la Alimentación (FDA), Fundación Friedrich Ebert, Grupo de Estudios Ambientales (GEA), La Neta, Transparencia A.C y UNORCA, entre otras.

dignidad social. La soberanía alimentaria incluye el derecho de los mexicanos a acceder a la alimentación (...) entendemos por soberanía alimentaria la libertad, la capacidad y el derecho de comunidades, regiones y naciones para decidir las estrategias productivas, de abasto, de comercialización y de consumo de alimentos. Para poder ejercer esta soberanía se requiere ante todo de autonomía política y económica y la existencia de suficientes reservas nacionales e internacionales y el libre acceso a ellas. En el caso de México, todas estas premisas son inexistentes, poniendo en riesgo la supervivencia de amplios sectores de la población. La soberanía alimentaria debe incluir autosuficiencia en la producción de los principales productos básicos: maíz, frijol, trigo, cebada, sorgo, soya y otras oleaginosas. El concepto de soberanía alimentaria resulta más adecuado y completo que el de seguridad alimentaria promovido por la FAO, el cual puede adecuarse indistintamente a estrategias de autosuficiencia y de ventajas comparativas de mercado, fomentando la dependencia de un mercado internacional de granos” (Suárez, 2008).

En este foro se estableció el acuerdo de impulsar una ley agrícola de seguridad alimentaria multianual para garantizar la soberanía alimentaria de México y emprender una campaña de orden nacional contra el hambre y por la soberanía alimentaria, con subcampañas para impulsar un paquete de iniciativas en el periodo de sesión del Congreso de la Unión, que incluyera la reforma constitucional para incorporar el derecho a la alimentación, ley agrícola multianual, ley de instituciones de ahorro y crédito rurales mutualistas y la revisión al artículo 27 constitucional (Suárez, 2008).

Al foro concurren 698 participantes³⁴, representando 350 organizaciones de la sociedad civil (sindicales, campesinas, no gubernamentales y académicas) y 140 ponencias; fue el primer evento que colocó a la soberanía alimentaria como bandera de lucha y proyecto de transformación de sector agroalimentario del país, e incluso a nivel internacional (de Ita, comunicación personal). En el foro convergieron organizaciones independientes como UNORCA, CNPA, con ONGs que laboraban en el ámbito campesino e indígena, como acompañantes o asesores de organizaciones de corte rural, en el acuerdo de oponerse firmemente a emplear el concepto de seguridad alimentaria promovido por la FAO, puesto que éste avala la importación

³⁴ Para una lista de los participantes, revisar Suárez, 2008.

de alimentos y el uso de transgénicos para cubrir las necesidades alimentarias desde el punto de vista nutricional de la población, sin atender a los aspectos económicos que permiten la subsistencia y el impulso a los productores nacionales, o los criterios de aceptabilidad cultural para los alimentos que son puestos a disposición del público; estos últimos aspectos son relevantes al asumir la soberanía alimentaria como una bandera de lucha. Por esto se realizó el evento a manera de alternativa a la Cumbre de la Alimentación de la FAO y entre organizaciones que se oponían a las políticas oficiales de seguridad alimentaria.

Es importante mencionar que el final de este foro marcó uno de los eventos más relevantes para entender porqué el subsecuente movimiento por la soberanía alimentaria experimentó diferencias que lo llevaron a conformarse en dos iniciativas con decisiones estratégicas diferenciadas, pues dio inicio a una serie de desconfianzas entre organizaciones campesinas y ONGs, que implicaron discusiones y reflexiones para acciones subsecuente, así como la toma de posturas respecto al evento, lo que a su vez permitió perfilar afinidades. El evento consistió en la invitación, por parte del dirigente de ANEC, a Beatriz Paredes, líder de la CNC en ese momento, para hablar en la ceremonia de clausura del foro. Esta invitación –no consensuada con otras organizaciones del equipo coordinador-, representó para muchas organizaciones campesinas y ONG, una traición consistente en decidir de manera unilateral algo que se había rechazado previamente por consenso: la intervención de actores de corte oficial, pues la CNC proviene de un corte oficialista desde sus orígenes apoyada por los partidos políticos. La CNC y su líder, Beatriz Paredes, además, reivindicaban las reformas al artículo 27 hechas por Salinas de Gortari, lo cual arrojaba elementos que deslegitimaban el conjunto del esfuerzo por iniciar la contienda anti-neoliberal y por la soberanía alimentaria (Ana de Ita y Luis Hernández, comunicación personal).

Las relaciones no se rompieron completamente en este momento, pero sí se trató de un evento que desestabilizó los vínculos de confianza y que a nivel de trato personal implicó rupturas importantes que, ante los eventos subsecuentes, fueron imposibles de restaurar.

3.4.2. Biotecnología y Transgénicos: el nacimiento de la Red en Defensa del Maíz

En la fase agroexportadora de mediados de los noventa hasta el presente, las agroindustrias han alcanzado una enorme co-dependencia con los productores que las abastecen de producciones selectas para el empaclado y etiquetado (Rubio, 2003). Debido al carácter de lujo de algunos productos, la demanda es volátil y fluctuante; además, la competencia de un conjunto de países tiende a saturar los mercados de cada producto. Por esta razón la producción está sujeta a fluctuaciones severas de la demanda, así como a los precios internacionales y a los cambios de “moda” en el consumo de productos, lo cual genera una gran inestabilidad productiva (Rubio, 2006). En consecuencia, solamente las empresas más fuertes y flexibles pueden adaptarse a condiciones cambiantes e impredecibles, profundizando el carácter excluyente de la fase agroexportadora y tecnificada en la agricultura.

Esta fase consiste, además en una tendencia a depredar el medio ambiente con resultados desconocidos para la población (Alvarez-Buylla, 2004), con el impulso a paquetes tecnológicos para el cultivo de alimentos, incluyendo el creciente apoyo al uso de la biotecnología y biogenética por la agroindustria exportadora para abastecer los mercados, introduciendo el uso de transgénicos³⁵ en la alimentación, cuyos efectos sobre el ser humano son todavía desconocidos pero sus demostrados efectos adversos sobre el medio ambiente y los agroecosistemas³⁶ son inquietantes (Alvarez-Buylla, De Ita, 1999).

Mientras los países europeos limitaron el uso de los transgénicos desde el año 2000, empresas como Monsanto están introduciendo su consumo generalizado en los países latinoamericanos, en cultivos como algodón, soya, canola y más recientemente el maíz, que se promueve como la solución contra plagas naturales (Serratos, 2009).

De los cultivos básicos que Estados Unidos exporta a América Latina, un alto porcentaje está siendo ya producido con semillas transgénicas sin regulación efectiva

³⁵ Una semilla transgénica es aquella cuyo material genético ha sido modificado con genes de otras especies, que confieren una configuración diferente al genoma de la planta que será producida por esa semilla, normalmente resistencia a temperaturas diferentes a las toleradas por las variedades nativas, resistencia a herbicidas específicos o a plagas. La semilla transgénica se considera propiedad privada por la modificación hecha a su genoma, y por ende es sujeta de patente.

³⁶ Una excelente compilación de artículos arbitrados que demuestra estos efectos adversos se puede consultar en www.sinmaiznohaypais.com, www.semillasdevida.org y en Marielle y Peralta (2007).

que permita a los consumidores conocer su origen³⁷. Los efectos de los transgénicos son múltiples, por lo que, pese a que no existan estudios concluyentes respecto a sus impactos sobre la salud, se ha demostrado que el polen de algunas variedades es tóxico para la fauna asociada a los cultivos como polinizadora, incluyendo mariposas y abejas (De Ita, 2004), lo que trae consigo la disminución de los cultivos y cambios en el ecosistema. Greenpeace ha reportado resistencia a la penicilina en humanos y cambios en la aceptación del cuerpo hacia diversos antibióticos, investigación respaldada por Sarukhan y Larson (1999)³⁸.

El gobierno de Estados Unidos liberó en 1996 la siembra comercial de maíz genéticamente modificado en su territorio sin segregarla del cultivo de variedades convencionales. Desde que el hecho se hizo público por la introducción a México vía importaciones del grano, aperturadas de forma masiva a partir de los acuerdos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el Comité Nacional de Bioseguridad Agrícola, una instancia de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, abrió foros para discutir con científicos calificados a nivel nacional e internacional, las posibles impactos del maíz transgénico en México (Marielle y Peralta, 2007). En este grupo se incluyeron también ONGs de investigación y desarrollo, consiguiendo una moratoria para la recepción de solicitudes de siembra de maíz genéticamente modificado por parte del gobierno mexicano, en 1999. Y aunque esta moratoria fue un paso relevante, resultó insuficiente para impedir la contaminación de los maíces nativos (Marielle y Peralta, 2007). La moratoria fue revocada en 2003 por la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM), sin consulta a su Consejo Consultivo Científico y el Consejo Consultivo Mixto, órganos de interlocución con académicos y con sociedad civil, respectivamente, en materia de bioseguridad.

En México se están importando transgénicos desde 1999 con en el maíz a granel y en alimentos procesados, lo cual se reglamentó hasta 2003 por insistencia de los comités consultivo y científico de la CIBIOGEM. De acuerdo con los Requisitos de Documentación para Organismos Vivos Modificados para Alimentación, Forraje o para Procesamiento, se permite hasta 5% de granos transgénicos en cargamentos de

³⁷ Uno de los puntos movilizadores para el movimiento por la soberanía alimentaria fue la pugna por el etiquetado, que se revisará posteriormente en este texto.

³⁸ Para una excelente síntesis de artículos científicos que reportan daños ambientales, económicos y a la salud por parte de transgénicos, ver Marielle y Peralta, 2007. La Contaminación Transgénica del Maíz en México. Editorial GEA. México.

maíz importado sin necesidad de ser documentado como tal. Este maíz es principalmente canalizado a través de las tiendas DICONSA, a través de los productos procesados de harineras como MASECA y MINSA, o bien en el procesamiento de botanas o alimentos compuestos (Rubio, 2006).

Los efectos que han tenido estos porcentajes mezclados con el grano que se reparte en paquetes de apoyo, han sido muy adversos, sobre todo en tanto que México es un centro de origen, diversidad y domesticación del grano, albergando más del 60% de genes nativos de los maíces que hay en el mundo, y cuna de su domesticación (Quist y Chapela, 2001).

Quist y Chapela reportaron la presencia de trans-genes en razas locales de maíz oaxaqueño en México, durante un estudio de campo para la universidad de Berkley en el 2001, lo cual fue confirmado por tres estudios posteriores (Ortiz-García et al, 2006; Serratos-Hernández et al, 2007; y Piñeryro-Nelson et al, 2009). Esto provocó alarma entre organizaciones de la sociedad civil: tanto ONGs como organizaciones campesinas e indígenas, pues afectaba al cereal más importante en la dieta mexicana en distintos ámbitos de la cadena productiva y a un elemento cultural básico para los pueblos indios (McAfee, 2008).

Tras estos sucesos, el subsecretario de agricultura se limitó a decir que no existía contaminación en los cultivos de maíz, sino “flujo genético”, mientras que cuarenta organizaciones de la sociedad civil, incluyendo organizaciones campesinas y comunidades indígenas se reunieron en un primer taller “en Defensa del Maíz”, en la Ciudad de México, para discutir los impactos del descubrimiento, las posibles acciones responsivas por parte de la sociedad y también previendo las respuestas del gobierno mexicano y las transnacionales responsables de las variedades transgénicas³⁹.

Los días 23 y 24 de enero de 2002, el foro En Defensa del Maíz convocó a más de 300 participantes de 120 organizaciones en una gama de personas y colectivos que incluyó a autoridades de comunidades de Oaxaca, Chiapas, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Morelos, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Colima, Chihuahua, Sonora, el estado de México y el Distrito Federal, organismos civiles, académicos,

³⁹ Monsanto, DuPont/Pioneer, Syngenta (Novartis y AstraZeneca), Aventis, Dow Agroscience, Bayer y BASF son las corporaciones agrobiotecnológicas que controlan a nivel mundial la obtención de semillas transgénicas, pues tienen todas las patentes y procuran que estas patentes estén vigentes y controladas por las autoridades fitosanitarias en cada país. En México comercializan sus productos mediante convenios con MASECA, MINSA, Cargill y Corn Products International entre otras (De Ita, 2003).

investigadores locales y extranjeros, e incluso representantes de algunas dependencias gubernamentales. La intención fue iniciar una discusión en torno a la defensa del maíz criollo o nativo, dilucidar las previsiones del gobierno en torno al problema y emprender un camino autogestionario, encarando un asunto para el que los funcionarios encargados no habían respondido contundentemente. Al momento del Primer Foro en Defensa del Maíz, tal discusión era incipiente y propia de expertos en la materia.

En este foro, la coordinadora de Gestión Ambiental de Técnicas y Análisis de la Comisión Nacional para la Biodiversidad (CONABIO), anunció los resultados preliminares de nuevos estudios en curso que indicaban rastros de material transgénico en muestras de maíz de 22 comunidades de la Sierra Norte de Oaxaca y en el Valle de Tehuacán y otros enclaves campesinos de Puebla (Vera, 2005).

Para Ramón Vera⁴⁰ de la ONG Grain, el logro más importante del primer foro en defensa del maíz, fue la discusión horizontal, interdisciplinaria y plural entre campesinos —“indígenas y no indígenas”—, investigadores, académicos, representantes de organizaciones de agricultores, ecologistas e incluso incipientes y potenciales redes de consumidores iniciado.

El foro tuvo conclusiones en dos frentes: Por un lado se reflexionó sobre el impacto de la dispersión de polen de maíz transgénico en el nivel más local de los sistemas de siembra de maíz: *“La amenaza real de los maíces transgénicos, se expresa de manera extrema en la variedad Terminator que, al cruzarse con las variantes nativas, las va inhabilitando para reproducirse, lo que en los hechos devastaría la diversidad del maíz y haría a los campesinos dependientes de las compañías diseñadoras y productoras de semillas (...).El sistema de cargos comunitario, núcleo del autogobierno en las comunidades, se vería directamente afectado cuando quien cumple un cargo como servicio no pudiera ejercerlo al no contar con las reservas de semillas nativas que le permitirían sobrevivir el periodo de su cargo”*⁴¹.

Por otro lado, se lanzó una denuncia popular, responsabilizando a la Secretaría de Economía, Agricultura y Medio Ambiente y a la Comisión

⁴⁰ Comunicación personal, 4 de marzo del 2010.

⁴¹ Relatoría del primer Foro en Defensa del Maíz. Disponible en www.endefensadelmaiz.org. Revisada el 29 de octubre del 2010.

Intersecretarial de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados⁴² por no haber enterado a la sociedad sobre la entrada de grano transgénico al país, violando el Convenio sobre la Diversidad Biológica y la Declaración de Río sobre Medio Ambiente, entre otras leyes nacionales.⁴³

Además, las comunidades oaxaqueñas perjudicadas por la contaminación solicitaron la intervención de la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte (CCA), entidad trinacional emanada del Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte, paralelo al TLCAN, para que se estudiaran las secuelas de la introgresión transgénica en las variedades de maíz criollo mexicanas (Marielle y Peralta, 2007; Gonzáles, comunicación personal).

La Comisión realizó un estudio de dos años, en momentos de alto descontento de sectores indígenas y campesinos ante los efectos de las políticas implementadas en el TLCAN y sus efectos sobre el maíz, particularmente ante la ya inminente entrada de transgénicos no controlados; La CCA diseñó el estudio no sólo para considerar “el riesgo potencial o los beneficios del maíz transgénico” con respecto a la diversidad genética y ecosistemas naturales, sino también los efectos sociales y culturales que ocasionaría su presencia sobre las viviendas de los pequeños y medianos productores. (Marielle y Peralta, 2007; McAfee, 2008).

Finalmente, el comité Consultivo Público de la CCA emitió una recomendación a los tres gobiernos involucrados en el TLCAN para que detuvieran de inmediato y en su totalidad la introducción de maíz genéticamente modificado a México y tomaran en cuenta los parámetros de la científicos, pero también la cosmovisión, palabra y cultura de las comunidades campesinas, reconociendo que tanto en los aspectos científicamente demostrables como en la dinámica social y económica, los efectos de la semilla transgénica serían adversos (Vera, 2005; Marielle y Peralta, 2007; McAfee, 2008).

El reporte también señala que a finales del 2001 las autoridades mexicanas debieron informar sobre la contaminación de variedades locales de maíz con secuencias transgénicas en comunidades de Oaxaca y Puebla, y recomienda mantener

⁴² Instancia reguladora de las políticas públicas en materia de bioseguridad, creada en 1996 a partir de los acuerdos del TLCAN.

⁴³ La Declaración de Río y el Convenio de la Diversidad Biológica, ambos tratados internacionales suscritos por el país dicen “con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”.

la moratoria en la siembra comercial de maíz transgénico en México, incluso fortalecerla minimizando las importaciones de maíz en grano viable, establecer un sistema de monitoreo, advertir a los productores sobre el grano distribuido por DICONSA (en su totalidad importado del país vecino), etiquetar el maíz procedente de Canadá y Estados Unidos, moler el grano que Estados Unidos y Canadá no puedan garantizar como libre de transgénicos, apoyar la conservación in situ de maíces nativos y proponer su siembra y uso como parte de los paquetes de apoyo al campo(CCA, 2004)⁴⁴.

El reporte fue rechazado por las autoridades mexicanas. La CIBIOGEM sostuvo que la CCA emitió sus recomendaciones “sin un análisis previo de su impacto económico y en la disponibilidad de alimento” y que para determinar la pertinencia del reporte había que incluir otros enfoques (Roudiño, 2004)⁴⁵. El presidente ejecutivo, además, declaró que México no se podía “quedar atrás y tener un conflicto muy grande (...) querámoslo o no, comercialmente tenemos una serie de compromisos y necesidades” (Enciso, 2005)⁴⁶.

Previamente, el foro en defensa del maíz del 2002 había tenido otra serie de conclusiones, relacionadas con emprender acciones autogestionarias, “*desde abajo y a contrapelo de las dependencias gubernamentales*”⁴⁷, planteando que el problema del maíz no se reducía a la contaminación con transgénicos, aunque esta fuera su punta más hiriente, y como su problemática tiene muchas aristas, debía abordarse la solución en toda su complejidad, asumiendo una visión integral de la defensa e importancia del maíz. Así, los participantes del Foro reflexionaron sobre las posibles propuestas de solución para detectar la contaminación del maíz en las regiones, las posibilidades de organización regional para defender y expandir los saberes tradicionales y contemporáneos locales; las posibles acciones legales en contra de las empresas y el gobierno mexicano, o de impugnación de los organismos de inversión y financiamiento de prospección, investigación, patente y comercialización ilícita o legal “oide” (Vera, 2005).

⁴⁴ El reporte de la Comisión de Cooperación Ambiental está disponible en www.ccc.org/maize/index.cfm?varlan=espanol. Accesado el 29 de octubre del 2010.

⁴⁵ Roudiño, Lourdes, 2004. “Descalifica la CIBIOGEM encomiendas ambientales. Sin sustento, la opinión de CCA”. El financiero, 18 de noviembre.

⁴⁶ Enciso, Angélica, 2005. “La siembra de transgénicos, cuando haya reglas claras”. La jornada, 17 de junio.

⁴⁷ Relatoría del Primer foro en defensa del maíz. Disponible en www.endefensadelmaiz.org

“Necesitamos abrir espacios”, declararon en las conclusiones “en donde se socialice, desde diferentes lados, información que de otra manera estaría dispersa y que no necesariamente los medios de comunicación masivos recogen. No sólo la información centralizada sino aquella proveniente de muchas fuentes y muchas luchas, que nos permitan conocer lo que está pasando a lo largo y ancho con los maíces y los campesinos del país. Parece importante que las propuestas vayan en muchos sentidos y no en uno solo. Se trata de abrir la perspectiva —del problema de los transgénicos o de la bioprospección que se emprende en el país— a toda la problemática del maíz (...) El problema que nos aqueja es integral. Requerimos de soluciones integrales”, plantearon Ana de Ita y Luis Hernández⁴⁸

Desde enero de 2002, en las diversas reuniones del Congreso Nacional Indígena, en particular en la Región Centro Pacífico, los pueblos y comunidades discutieron el problema de la defensa del maíz, con una perspectiva integral, y en los resolutivos se reivindicaron los resolutivos del Primer Foro en Defensa del Maíz: defender el maíz nativo, rechazar el maíz transgénico e iniciar discusiones para entender las mejores formas de cuidar su herencia milenaria (Vera, 2005).

Pero la diáspora de las conclusiones de este primer foro, fue de cierta forma selectiva: En las reuniones indígenas, por todo el país, comenzó entonces a gestarse un movimiento fuerte, invisible, para defender el maíz y entender las implicaciones de su contaminación. Los pronunciamientos se multiplicaron (Vera, 2005).

En el Foro Nacional en Defensa de la Medicina Tradicional de 2002, con la presencia de 800 médicos tradicionales, autoridades y delegados de comunidades y organizaciones indígenas pertenecientes a los pueblos tohono o’odham, mayo, rarámuri, cora, wixaritari, nahua, huachichil, tenek, chichimeca, purhépecha, mazahua, tlahuica, matlatzinca, hñahñu, tepehua, amuzgo, tlapaneco, mixteco, huave, zapoteco, mixe, mazateco, maya peninsular, tzeltal, tzotzil, c’hol, tojolabal, mame, zoque, chuj y mochó, de veinte estados del país, junto con organizaciones pertenecientes a la sociedad civil, después de exigir respeto a los territorios indígenas, a los recursos naturales, a la biodiversidad y a los saberes ancestrales y modernos propios de los pueblos indígenas; de negarse a permitir la denigración de la práctica médica tradicional por parte de las autoridades sanitarias del país, de reivindicar los Acuerdos de San Andrés, su autonomía y sus gobiernos propios,

⁴⁸ Relatoría del Foro en Defensa del maíz. Disponible en www.endefensadelmaiz.com

declararon, además, una moratoria de facto contra la bioprospección⁴⁹ en los territorios de los pueblos firmantes (Ribeiro, 2004).

Este fue el clima que propició el cumplimiento de uno de los principales acuerdos del Primer Foro en Defensa del Maíz: impulsar diagnósticos regionales, autogestionarios, que le dieran a las comunidades indicios sobre si su maíz estaba o no contaminado. A partir de octubre de 2002, comenzaron los talleres preparativos para que las comunidades asumieran diagnósticos en ese sentido. En el 2003, las comunidades, asesoradas por equipos técnicos de ONGs participantes en el foro y previas colaboradoras, hicieron pruebas propias, a contrapelo de las dependencias de gobierno que seguían sin emitir pronunciamientos claros en el tema (Vera, 2005).

En octubre del 2003, representantes de comunidades indígenas y campesinas de Oaxaca, Puebla, Chihuahua, Veracruz y las organizaciones no gubernamentales CECCAM, Cenami, Grupo ETC, Casifop, UNOSJO y AJAGI dieron a conocer los resultados de sus estudios y conclusiones sobre la presencia de contaminación transgénica en nueve estados del país: Chihuahua, Morelos, Durango, México, San Luis Potosí, Puebla, Oaxaca, Tlaxcala y Veracruz en milpas de los pueblos indígenas y campesinos. EN 33 comunidades (24% del muestreo) se encontró alguna presencia de trans-genes en el maíz nativo (Robles, 2007).

En 2004 estas mismas organizaciones junto con algunas campesinas e indígenas de Jalisco, Chihuahua, Durango, Puebla, Michoacán, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Guerrero se organizaron como colectivo “En Defensa del Maíz” para trabajar la defensa desde las comunidades indígenas y campesinas (Robles, 2007).

⁴⁹ Bioprospección es un término que hace referencia a las actividades de rastreo de recursos naturales silvestres o nativos para su uso posterior con fines comerciales. La bioprospección también se refiere a la intervención gubernamental que, sin respetar las formas de gobierno locales (en territorios indígenas), pretende realizar estudios o proyectos relacionados con los recursos naturales del territorio para modificar su genoma, abundancia o derechos de usufructo.

3.4.3. El Nuevo Movimiento Campesino: El Campo No Aguanta Más

A finales de 2002, doce organizaciones campesinas⁵⁰ que aglutinaban desde campesinos pobres hasta grandes centrales campesinas y agrícolas, emprendieron movilizaciones con una resonancia importante. El Campo No Aguanta Más (MECNAM) fue el nombre de la organización sombrilla que las agrupaba. Adicionalmente se sumaron, a título propio El Barzón, El Congreso Agrario Permanente, la Confederación Nacional Campesina y la Coordinadora Nacional Plan de Ayala. El movimiento adquirió su nombre del manifiesto inicial que se emitió en la prensa, con el encabezado ¡El campo no aguanta más!⁵¹, poniendo en el centro del debate demandas fundamentales para la defensa del maíz y de la soberanía alimentaria: renegociación del capítulo agropecuario del TLCAN, reorientación de la política hacia el agro bajo principios de soberanía alimentaria y revisión del artículo 27 constitucional. La mega-marcha campesina del 31 de enero del 2003 que, además de ser la más grande en la historia del movimiento campesino en México (Rubio, 2004), obtuvo el apoyo de amplios sectores de la sociedad urbana mexicana, consiguió abrir con el gobierno de Vicente Fox mesas de debate que concluyeron el 8 de marzo sin acuerdos básicos entre el gobierno y los productores rurales (Sánchez, 2004).

El 24 de marzo los bloques campesinos presentaron una propuesta de Acuerdo Nacional, donde plantearon la renegociación del TLCAN, la soberanía alimentaria como principio rector y eje de toda la política agroalimentaria y comercial, presupuestos multianuales, reforma estructural de las políticas hacia el

⁵⁰ Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social (AMUCSS), Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), Coordinadora Estatal de productores de Café de Oaxaca (CEPCO), Coordinadora de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (CODUC), Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC), Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), Frente Democrático Campesino de Chihuahua (FDCCH), Frente nacional en Defensa del Campo Mexicano (FNDCM), Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red Mocaf), Unión Nacional de Organizaciones en Forestería Comunitaria (UNOFOC), Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA).

⁵¹ Sus principales demandas fueron: una moratoria al apartado agropecuario del TLCAN para iniciar un proceso de renegociación del mismo; la asignación presupuestal de 1.5% con respecto al PIB para el desarrollo productivo y 1.5% para el desarrollo social y ambiental del sector rural en 2003; una política de inocuidad y calidad agroalimentaria para regular la importación y distribución de alimentos dañinos, transgénicos, contaminados y de desecho; la aprobación de programas de corto y mediano plazo para reactivar la producción agrícola, junto con una reforma financiera rural, y el reconocimiento a los derechos y cultura de los pueblos indios asentados en los Acuerdos de San Andrés (La Jornada, 2 de noviembre de 2002).

campo, cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés sobre derechos y cultura indígenas, defensa y valoración de los patrimonios territoriales de ejidos comunidades y pueblos indios y el fin del rezago agrario (Sánchez, 2004).

Es importante notar que este movimiento, no obtuvo el apoyo del EZLN ni del CNI a pesar de haberlo solicitado y de haber incorporado las reivindicaciones del movimiento indígena dentro de sus peticiones. La negativa se debió, por un lado, a las recientes traiciones del gobierno en torno a la elaboración y firma de la ley COCOPA (Grammont y Mackinlay, 2008); pero no solo esto: para las organizaciones campesinas, indígenas y el EZLN que convergían ahora bajo el nuevo movimiento indígena de México, la participación con el conjunto de dirigencias campesinas oficialistas (CNC y CAP principalmente) fue evaluada negativamente, considerando que la negociación no podía trascender las viejas formas de cooptación que solían preceder a los aumentos de montos presupuestales de manera clientelar, continuando con la tradición de este tipo de organizaciones corporativas (Serna, Valera y Díaz, 2010). Por otro lado vieron de manera negativa que tuvieran que pasar ocho años de haberse firmado el TLCAN para que las organizaciones campesinas reaccionaran intentando renegociar el capítulo agropecuario, lo cual era evidentemente una tarea difícil, si no imposible, de lograr (Serna, Valera y Díaz, 2010), esto se contraponía con la emergencia inmediata del EZLN y la reactivación del movimiento indígena el primer día de vigencia del tratado, en 1994.

Las intensas movilizaciones tanto en la capital como en las principales ciudades del interior, junto con la difusión en la prensa nacional de noticias, reportajes y entrevistas, realzaron momentáneamente la imagen de la sociedad rural frente a la sociedad urbana, que pocas noticias tenía de la problemática campesina, de manera similar a como había sucedido con la marcha del EZLN “del color de la tierra” (Bartra, 2004). El gobierno se vio obligado a escuchar las reivindicaciones provenientes del campo.

Para disminuir la presión, durante el mes de febrero la Secretaría de Agricultura organizó las mesas de Diálogo por una política de Estado y un acuerdo nacional para el campo⁵². El proceso culminó el 28 de abril con la firma del Acuerdo Nacional para el Campo (ANC). Entre otras cuestiones se pactó, en un texto por lo demás confuso e impreciso, la realización de una “evaluación integral de los

⁵² En estas mesas se presentaron más de 2 000 ponencias de organizaciones rurales de diversa índole, funcionarios públicos, académicos e individuos interesados.

impactos” del TLCAN, con objeto de justificar una posible puesta en marcha de mecanismos de defensa para prevenir la competencia desleal (dumping) y una eventual revisión del capítulo agropecuario del tratado; la promulgación de una Ley Federal de Planeación Agropecuaria con una “planeación, programación y presupuestación multianual”, que también promoviera la soberanía y seguridad alimentaria, el derecho a la alimentación y estableciera “un sistema de ingresos objetivo para los productos considerados como básicos y estratégicos por la Ley de Desarrollo Rural Sustentable”; suspender la asignación de cupos de importación de maíz *blanco*⁵³ por un periodo de cuatro años; iniciar una investigación contra prácticas desleales en el caso del frijol; un sistema de “inversiones estructurales, productivas y sociales para regiones atrasadas”; una reforma estructural de las instituciones y programas públicos relacionados con el sector rural, modificando las reglas de operación de los programas gubernamentales para hacerlos más accesibles a los campesinos y minimizar su atención en los grupos empresariales más privilegiados, y aumentar el presupuesto destinado al sector (Concheiro, Tarrío y Grajales, 2007; Grammont y Mackinlay, 2008).

Aunque todas las organizaciones destacaron las limitaciones de lo pactado en tanto que fueron sólo los elementos mínimos que se habían exigido para guiar el proceso de revisión y renegociación del capítulo agropecuario (que en los hechos tampoco se operacionalizaron), algunas organizaciones firmaron el acuerdo con el gobierno y otras decidieron no hacerlo, basadas en consultas internas y con asesores de confianza, tanto académicos como ONGs. Partiendo de la consideración de que se había alcanzado lo máximo que se podía lograr, por parte del MECNAM firmaron la CNPA, CIOAC, CNOC, Red Mocaf, ANEC, AMUCSS, CEPCO Y CODUC, y también las tres organizaciones que se sumaron al movimiento: El Barzón, la CNC y el CAP. No firmaron UNORCA, FDCh Y UNOFOC.

Posterior a la firma, todas las organizaciones participantes acordaron que la postura frente a la firma no debía afectar la unidad del movimiento; dicha unidad se vio mermada apenas seis meses después, ya que en octubre la CNC y el CAP aceptaron que se disolviera la Comisión de Seguimiento del ANC, donde tenían más representación las organizaciones rurales, para transferirse la supervisión al Consejo

⁵³ En cursiva porque la demanda era impedir la entrada de maíz. El gobierno sólo accedió a establecer la restricción con maíz blanco de una variedad particular, lo que ocasionó gran descontento para organizaciones como UNORCA y el FDCCh (De Ita, comunicación personal).

Nacional para el Desarrollo Rural Sustentable, derivado de la LDRS, donde el poder de decisión de la Secretaría de Agricultura es mayor (Barkin, 2003).

Después de meses de desgaste el MECNAM se disolvió, pero algunos de sus dirigentes aprovecharon las elecciones federales de 2003 para renovar parte de la Cámara de Diputados, con objeto de postular a una diputación y apoyar las demandas campesinas desde el legislativo (Grammont y Mackinlay, 2008), entre ellos el dirigente de la ANEC, en una acción que fue considerada como reprobable por las organizaciones no firmantes del Acuerdo, así como por las ONGs que formaban parte de la Red y que habían estado interactuando de manera directa o indirecta con las organizaciones campesinas durante el MECNAM. Este fue un segundo punto importante de ruptura en las relaciones de los integrantes de los movimientos, pues pese a que la Red no se sumó al MECNAM, existían relaciones entre las personas de las organizaciones en ambos lados.

En realidad, las posiciones en torno a la firma del ANC generaron un debate entre organizaciones y personas de sociedad civil, posiciones que hasta el momento habían sido relativamente unánimes se dividieron también entre intelectuales que apoyaban. Algunos consideraban que la firma constituía un avance, un paso más en la lucha por la dignificación de los productores, mientras que otros consideraban que las organizaciones habían traicionado sus objetivos (Rubio, 2004). Quienes no firmaron señalaron que las demandas centrales habían sido dejadas de lado: no se aceptó renegociar el TLCAN, la moratoria a la entrada de transgénicos ni se logró la firma de los acuerdos de San Andrés, y las medidas propuestas por el gobierno se redujeron a apoyos productivos, créditos y promesas de infraestructura; ninguna reforma en lineamientos políticos (leyes, reglamentos o revisión a los mismos) se logró.

Para Rubio (2001), posterior a la firma del ANC, el movimiento atravesó por dos etapas principales: una centrada en una tortuosa labor de cabildeo con el gobierno para exigir el cumplimiento de lo pactado y la segunda caracterizada por un endurecimiento del gobierno, que benefició solamente a los productores eficientes, excluyendo a los campesinos de subsistencia, prolongó los periodos de cumplimiento de acuerdos, metiendo a muchos líderes que no negociaron “por debajo de la mesa” en dinámicas burocráticas interminables, e inició campañas de deslegitimación de las organizaciones campesinas logrando dividir las, en resumen: el gobierno no cumplió los acuerdos, pero logró con el tiempo dividir al movimiento y diluirlo, de tal forma

que los logros políticos fueron mínimos pero los costos sociales elevados (Sánchez, 2004).

3.4.3.1. Cancún y la Cumbre contra la OMC

La quinta conferencia ministerial de la Organización Mundial del Comercio, celebrada en Cancún septiembre del 2003, marcó diferencias importantes entre firmantes y no firmantes, que serían relevantes para la continuidad y escisión del movimiento. La quinta conferencia ministerial de la Organización Mundial del Comercio, celebrada en Cancún septiembre del 2003, sirvió como escenario para que convergieran organizaciones internacionales, manifestándose contra el orden global, las corporaciones transnacionales y las medidas económicas coercitivas de la OMC para obligar a retirar subsidios al campo en los países “subdesarrollados” (De la Cueva, 2003).

Del 8 al 12 se organizó el Foro Internacional Campesino e Indígena, en sitios adyacentes a la cumbre “oficial” en donde representantes campesinos e indígenas, mujeres y representantes de ONGs expusieron sus puntos de vista en torno a sus problemas y demandas, el foro fue convocado principal y originalmente por UNORCA, aliado con la Vía Campesina, un movimiento campesino internacional, pluralista y autónomo que fue el primero en definir el término soberanía alimentaria e incluirlo como parte esencial de las demandas campesinas ante los gobiernos (Rosset y Martínez, 2004). Al foro asistieron representantes de Corea del Sur, África e India, junto con algunas organizaciones no firmantes del ANC en México: la UNORCA, organizadora del evento, el Frente Democrático Campesino de Chihuahua, y la CIOAC (firmante). A este Foro llegó el mensaje grabado de los dirigentes el Ejército Zapatista de liberación Nacional, apoyando la lucha de la Vía Campesina contra el orden neoliberal y la firma de mayores acuerdos de libre comercio en materia agrícola y biotecnología (Carlsen, 2004); llegaron también representantes de pueblos indios integrantes del Congreso Nacional Indígena (Hernández, 2004). En este foro participaron ONGs internacionales que eran aliadas estratégicas o asesores de algunas organizaciones campesinas, como el grupo de Acción contra la Erosión, Tecnología y Concentración (ETC), y el Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano, que participaban activamente en la

Red por la Defensa del Maíz, realizando pruebas de contaminación transgénica en comunidades y ejidos indígenas.

Por otro lado, la Red Mexicana de Acción contra el Libre Comercio fue co-organizadora del Foro de los Pueblos, que si bien fungió como cumbre paraguas para múltiples eventos de organizaciones y movimientos en resistencia contra el libre comercio, funcionó de manera separada con un foro campesino que no se identificó con el mencionado anteriormente, y en el cual participaron las demás organizaciones del MECNAM (Sánchez, 2004; De la Cueva, 2003), junto con ONGs como Greenpeace y Oxfam International (que además financió una parte importante de las actividades).

3.4.4. Ley de Bioseguridad

En abril de 2003 (coincidiendo casi con el Acuerdo para el Campo), la Cámara de Senadores aprobó la iniciativa de Ley de Bioseguridad, faltando discutirla en la Cámara de Diputados para convertirla en ley. Desde ese momento, diversas organizaciones campesinas, ambientalistas y no gubernamentales argumentaron que el proceso de redacción de la iniciativa de ley era completamente irregular, falta de consulta pública e ignorante del principio de precaución, fundamental para proteger la biodiversidad y los centros de origen de los cultivos (Marielle y Peralta, 2007).

Víctor Villalobos, subsecretario de Agricultura y presidente de la CIBIOGEM, además firmó un acuerdo con Estados Unidos y Canadá, donde los exceptuaba de cumplir con las exigencias del Protocolo de Cartagena y de pagar indemnización por contaminación con transgénicos, si las exportaciones de esos dos países a México “sólo” tenían un máximo de 5 por ciento de contaminación. “También los exceptuaba de declarar o pagar, si la contaminación no era intencional”⁵⁴(Vera, 2005).

Ya estaban entrando al país cantidades de maíz transgénico en contravención de los principios del Protocolo de Cartagena sobre la Seguridad de la Biotecnología referentes a la regulación de los movimientos transfronterizos de organismos genéticamente modificados, el cual había sido firmado y ratificado por México en 2002, sin embargo la presión que ejercía la sociedad civil desde que se detectó la

⁵⁴ Cinco por ciento es un porcentaje propuesto por las multinacionales. En ningún país del mundo se acepta un porcentaje tan alto para decir que algo ‘no’ es transgénico (Vera, 2005; de Ita, 2007)

contaminación de transgenes en maíces nativos y con el MECNAM llevaron a los legisladores a discutir una ley que normara lo que acontecía (Marielle y Peralta, 2007).

Los participantes de los foros En Defensa del Maíz, teniendo ya resultados de los muestreos comunitarios de maíz, publicaron una carta “a la opinión pública nacional e internacional” que firmaron 302 organizaciones civiles, ambientalistas, sociales y políticas de 49 países, incluyendo México, además de personas y académicos, con un total de cuatrocientas mil firmas (Vera, 2005). En dicha carta, se exigía al gobierno mexicano, entre otras cuestiones, mantener la moratoria a la siembra de maíz transgénico en México, centro de origen del maíz, detener de inmediato las importaciones de maíz transgénico o no segregado, descartar la Iniciativa de ley de bioseguridad, *“porque pese a su nombre, no está basada en el Principio de Precaución y no toma en cuenta que México es un país megadiverso, ni el punto de vista de los pueblos indígenas, los campesinos y las organizaciones ambientalistas en México”*. Se le exigía también resistir la presión extrema de la industria biotecnológica y los científicos financiados directa o indirectamente por ella, incluidos los que detentaban cargos en el sector público (Vera, 2005).

A las instancias internacionales se les exigía enfatizar el principio precautorio para prevenir mayor contaminación transgénica en las variedades tradicionales en cualquier parte del mundo. Los firmantes llamaron a retomar la moratoria inmediata contra la liberación de organismos genéticamente modificados, como semillas, para procesamiento en alimentos o piensos, o para investigación, particularmente en aquellos países o regiones que forman parte de los centros de origen y diversidad de los cultivos⁵⁵.

Finalmente, en marzo del 2005, el Senado de la República, con el apoyo de todos los partidos —al igual que había hecho con la Ley de Derechos y Cultura Indígena— aprobó contra las protestas de organizaciones civiles y campesinas, pasando por alto las recomendaciones de la CCA y la opinión internacional (Vera, 2005) la Ley de Bioseguridad de organismos Genéticamente Modificados (LBOGM).

La LBOGM no reflejó las recomendaciones emitidas por la CCA sobre el maíz, como la ratificación de la moratoria en la siembra de variedades genéticamente

⁵⁵ Carta disponible en www.endefensadelmaiz.org

modificadas y el freno a las importaciones del grano no garantizado como libre de transgénicos. Tampoco incorporó el principio precautorio asentado en la Declaración de Río de Janeiro, el Convenio de la Diversidad Biológica y el Protocolo de Cartagena, tres instrumentos normativos internacionales firmados por México⁵⁶.

En la ley se omitió el deber de los productores y comercializadores respecto a identificar los productos derivados de OGM destinados al consumo humano, así como la exigencia de señalar los campos sembrados con transgénicos. En el mismo tono, no se establecieron procedimientos eficaces para deslindar responsabilidades y reclamar indemnizaciones cuando cultivos convencionales u orgánicos resulten contaminados con transgénicos y cuando el consumo de alimentos derivados de OGM ocasione problemas de salud a los consumidores, pues sólo señalaron la responsabilidad para la comisión de ilícitos, es decir, de actos ilegales intencionados (McAfee, 2008). Además, frente a los efectos perjudiciales de la liberación de OGM, los particulares deben asumir la carga de la prueba, es decir, la persona afectada debe demostrar técnica y científicamente la verdad de sus argumentos, asumiendo los costos de los procesos (Mc Afee, 2008). La participación ciudadana y la consulta pública se hallan reducidas a los consejos de la CIBIOGEM, sin que exista la figura de denuncia popular y sin tomar en cuenta los derechos colectivos. La ley además admite la utilización confinada de transgénicos sin sujetarla a la evaluación de riesgo, la que pide para las liberaciones experimental, semicomercial y comercial, con lo cual viola el criterio de “caso por caso” contenido en la misma.

Las relaciones entre las organizaciones que participaban en el movimiento se fracturaron aún más cuando, sumando a los resentimientos producidos por la invitación al Foro por la Soberanía Alimentaria a Beatriz Paredes, por parte del director de la ANEC, al posicionamiento de ésta última organización para firmar el ANC y además, asumir una diputación de manera inmediata a la firma del acuerdo, existió una tercer escisión en un colectivo que, pese a tener dos iniciativas separadas, convivía constantemente para los eventos públicos y las reuniones en torno a la lucha por la soberanía alimentaria, particularmente contra los transgénicos. Esta última escisión fue ya definitiva; devino con la discusión de la sociedad civil en torno a las acciones a emprender ante la inminente publicación de la LBOGM; en una reunión

⁵⁶ Puesto que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce la supremacía de los tratados internacionales ratificados respecto a las leyes nacionales, la LBOGM debió de haber sido refutada por inconstitucional.

se discutió la posibilidad de participar en la comisión de discusión de la ley, convocada por la CONABIO y por el CIBIOGEM ya que había sido aprobada por los senadores, pero previamente a la aprobación por parte de la cámara de diputados; se abrieron comisiones legislativas a las cuales se invitó a las organizaciones de la sociedad civil que habían estado participando activamente en el movimiento contra los transgénicos, en el MECNAM y en el foro por la soberanía alimentaria de 1996, es decir, a las organizaciones activas en torno al campo y la alimentación en el momento.

El colectivo denominado entonces Red en Defensa del Maíz decidió no participar en las comisiones; si bien algunas organizaciones firmaron el documento de rechazo, no formaron parte de la discusión de la ley, pues a decir de varios de sus integrantes *“el discutir los contenidos de la ley era aceptar que entraran los transgénicos, y por las experiencias que habíamos tenido ya de los tratos con el gobierno, sabíamos que nada bueno podía salir de ahí, nosotros simplemente nos oponíamos a la entrada de maíz transgénico a México, no había más que decir, menos aún que discutir en un diálogo con una contraparte sorda, que sólo quería nuestra presencia para validar una ley pre-hecha”* (Ribeiro, comunicación personal). Por otra parte, Ramón Vera, de la organización GRAIN comenta *“La historia lo recuerda en la aprobación de la reforma en materia de derechos y cultura indígena aprobada en abril de 2001. En 2003 el Acuerdo Nacional para el Campo fue una muestra más que indigna de esto mismo. En lo tocante a esta Ley de bioseguridad se seguía la misma tendencia, no íbamos a jugar el juego nuevamente, de hecho ante esto se abrieron dos vertientes en la sociedad civil mexicana: quienes consideraban que se podía modificar, aunque fuera un poco la famosa ley, y quienes sabedores de las mañas del gobierno mexicano intentaban trabajar a contrapelo sin importar ya las negociaciones en las cúpulas”*.

El grupo que decidió participar en las comisiones, posteriormente en su mayoría como adherentes a la Campaña Sin Maíz no hay País, participaron en los consejos Consultivo Científico y Consultivo Mixto de la CIBIOGEM, con ciertas reservas, aunque asumen como un logro haber incluido el tema de los centros de origen y de diversidad genética para restringir de esos sitios la introducción, en cualquiera de sus modalidades (experimentación a campo abierto, siembra experimental o piloto y siembra comercial) la posibilidad de permisos para siembras de maíz transgénico, además de un Régimen de Protección Especial para el Maíz,

que constituyó un fundamento legal para impugnar las solicitudes de siembra experimental de maíz transgénico presentadas por las corporaciones (Marielle y Peralta, 2007). Como consecuencia de estas actividades, se hizo de los OGM un asunto de debate público, presente en los medios impresos y radiofónicos.

Pese a los esfuerzos por lograr una mejor ley y a los logros que se tuvieron en la redacción final de la misma, el reglamento para operacionalizar el Régimen de Protección Especial fue emitido hasta 2008, y según Aleira Lara de Greenpeace “es una burla que no ofrece un marco de bioseguridad real para resguardar las zonas de producción de maíz tradicional”.

Las organizaciones participantes decidieron abandonar la comisión previamente, al considerar que su presencia ahí era mera justificación para validar ante la sociedad civil la aprobación de un régimen pobre de contenidos y que favorecía a las transnacionales, al no establecer un periodo para comentarios por parte de los distintos sectores que se verían involucrados ante cualquier accidente devenido de la liberación de transgénicos al medio ambiente (Aleira Lara, comunicación personal).

La situación respecto al Régimen de Protección Especial del Maíz empeoró cuando, en 2009, el Ejecutivo Federal, por medio de un Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la LBOGM, relegó al Régimen a instrumento no jurídico y por tanto, no obligatorio para proteger las variedades del maíz⁵⁷. Según Alejandro Nadal⁵⁸, al eliminar el Régimen de Protección Especial al Maíz, el gobierno federal ignoró:

- La necesidad de una Manifestación de Impacto Regulatorio y evadió la consulta pública obligatoria en la que, en aras de llevar un proceso transparente, deben ser tomados en cuenta diferentes comentarios de la sociedad en general, de acuerdo a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
- Las 16 mil 139 peticiones de mexicanos que desde abril de 2008 exigieron a la SAGARPA y al Jefe del Ejecutivo que protegieran el maíz y evitaran que empresas extranjeras convirtieran el cultivo de este grano en un monopolio en manos de extranjeros.

⁵⁷ Diario oficial de la Federación, 10 de marzo del 2009.

⁵⁸ La Jornada, 11 de marzo del 2009. Disponible en <http://www.jornada.unam.mx/2009/03/11/index.php?section=opinion&article=029a1eco> Consultada el 4 de noviembre del 2010.

- Las recomendaciones de científicos mexicanos que alertaron sobre el riesgo de contaminación de los centros de origen del maíz en México.
- La existencia de una Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados vigente que prohíbe la siembra de maíz transgénico en México sin contar con un marco de bioseguridad en todo el territorio nacional.
- El mensaje de la reunión sobre compensación y seguridad del Protocolo de Cartagena de Organismos Genéticamente Modificados, que no ha determinado cómo deben de hacerse responsables quienes contaminan con transgénicos los cultivos tradicionales en un país.
- La necesidad de determinar cuáles son los centros de origen y diversidad genética a que hacen referencia los artículos 86 y 87 de la LBOGM; así como la expedición de las normas oficiales mexicanas mandatadas por la esta misma ley.

3.4.5. Campaña Nacional Sin Maíz no hay País

Retomando los compromisos asumidos en el Foro por la Soberanía Alimentaria de 1996 y el nombre de una exposición organizada en el Museo Nacional de las Culturas Populares en 2003, la cual estaba orientada a exponer las consecuencias de introducción del maíz transgénico en el país, organizaciones que participaron en el MECNAM y que se reunieron en el Museo de la Ciudad de México, decidieron unirse y lanzar una campaña por la soberanía alimentaria y la reactivación del campo mexicano, la cual inicialmente se manifestaba contra el aumento en los precios de la tortilla a inicios del 2007, retomaba la exigencia del MECNAM por sacar al maíz y frijol del TLCAN, pues la liberación de aranceles al comercio de estos dos granos estaba prevista para inicios del 2008 y bogaba por prohibir la siembra de maíz transgénico en México.

El conjunto de organizaciones que se unió para lanzar esta campaña en junio del 2007, tenía tres vertientes: por un lado organizaciones campesinas que habían convergido en el MECNAM, como el Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas (CONOC⁵⁹), la CNPA, el Barzón; a este contingente de organizaciones campesinas se unieron, en un primer momento la CNC, la UNTA (Unión Nacional

⁵⁹ Formado para dar seguimiento a los acuerdos del ANC y para formar un frente de organizaciones participantes en el Consejo Mexicano de Desarrollo Rural, proponiendo políticas e iniciativas para el manejo de los recursos asignados al campo. Se integra por AMUCSS, ANEC, CNOC, FDC, Red Mocaf y MAIZ.

de Trabajadores Agrícolas, organización de corte oficialista) y la UNORCA, como adherentes independientes de la Campaña Sin Maíz no hay País, pero sin considerarse integrantes de la misma. También se unieron el sindicato de electricistas, telefonistas y maestros, que conformaban el Movimiento por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas; un tercer cuerpo de organizaciones sumadas fueron ONGs de desarrollo, derechos humanos y cabildeo, como Oxfam, Comercio Justo México, el Grupo de Estudios Ambientales GEA, Greenpeace, Centro de Derechos Humanos Francisco de Vitoria, Instituto Maya de Estudios Rurales, Centro Nacional de Comunicación Social, Foodfirst Information and Action Network (FIAN) México, la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC).

Como parte de la campaña se sumaron las voces de académicos y líderes de opinión independientes que, sin representar el punto de vista de las instituciones donde trabajaban, decidieron colaborar a título personal en la elaboración y análisis de los puntos que cohesionaron en un primer momento a la Campaña.

Sus principales demandas eran: (i) la aprobación en el senado de la Ley para la Protección de la Seguridad y Soberanía Alimentaria Nacional; (ii) sacar al maíz y al frijol del TLCAN; (iii) prohibir la siembra de maíz transgénico en México; y (iv) luchar contra los monopolios y el alza en los precios de los alimentos. Estas demandas se consolidaron en un manifiesto el 31 de enero de 2008, posterior a una gran marcha campesina que culminó en el zócalo capitalino, donde se define a la campaña como *“la más reciente expresión del movimiento campesino en México por una nueva política hacia el campo, en el contexto de la lucha contra el TLCAN y su fase de liberalización agrícola total a partir del 1ro de enero del 2008: el movimiento campesino por la soberanía alimentaria, los derechos de los trabajadores y las libertades democráticas”* (Suárez, 2008:177).

La idea base que motivó las articulaciones con ONGs como actores nuevos y centrales, desde el documento de posicionamiento era que *“la situación del campo mexicano y los problemas que enfrenta atañen a toda la sociedad mexicana y no solamente al campesinado. Por eso la Campaña constituye un llamado a toda la población, hombres y mujeres del campo y la ciudad, para que se exprese y realice acciones, a favor de la protección del maíz mexicano, por la soberanía alimentaria y la reactivación del campo mexicano”* (jornada del campo, junio del 2007: 3).

Las acciones de la Campaña se dirigieron en gran medida a la arena de la sociedad civil, con estrategias principalmente informativas, para que la ciudadanía hiciera suyos los problemas del campo (Oxfam, 2008), de aquí se desprendieron acciones relacionadas principalmente con el consumo, por ejemplo concientización sobre la calidad, precio y disponibilidad de los alimentos, en particular el maíz y el frijol. Se organizó un concierto de rock en el Zócalo; en tanto que ferias de productos y exposiciones se orientaron relacionar a los campesinos como productores con la gente de las ciudades como consumidora. Las acciones tuvieron un marcado carácter mediático para lograr la atención y cobertura de los medios de comunicación, por ejemplo un ayuno en el ángel de la independencia, siembra de maíz en lugares públicos, conferencias de prensa, mesas redondas, conferencias y foros; estas estrategias permitieron establecer integrar al movimiento a centros académicos de investigación, pensando en colocar a la soberanía alimentaria en la agenda política y social de México (Suárez, 2008; Oxfam, 2008).

Desde el inicio, el posicionamiento político de la campaña fue tener una apuesta en la arena política, siguiendo la vía institucional para lograr modificar las políticas agroalimentarias y, durante 2008, impedir la siembra experimental de maíz transgénico en México⁶⁰. Esto implicaba la negociación y el diálogo con instancias de gobierno siguiendo la ruta definida por las leyes para modificar los aspectos que se identifican como negativos en la dirección de las políticas de Estado.

Pese al éxito mediático que tuvo la Campaña, medido en la asistencia a sus eventos públicos y las firmas recabadas para apoyar sus demandas, a inicios de 2008 las organizaciones sindicales y las adscritas a la CNC (junto con la CNC misma) se separaron del movimiento, pues estaban de acuerdo con la introducción de transgénicos y a negociar con gobierno nuevos paquetes de apoyo al campo, principalmente la ampliación de PROCAMPO (Oxfam, 2009). Ello implicó el retiro del elemento humano campesino en las marchas y eventos.

Las organizaciones urbanas encargadas de la planeación de la Campaña decidieron continuar, gestionando financiamiento para una nueva etapa. En esta segunda fase, un grupo de actores es el que se puede denominar como el “núcleo promotor de la Campaña”, integrado principalmente por ONG de residencia y trabajo en el Distrito Federal en su mayoría, así como académicos. Este grupo de actores

⁶⁰ Documento de trabajo, Sin Maíz no hay País, noviembre del 2009.

recoge propuestas, articula iniciativas y acciones y toma decisiones, siendo actor central la ANEC, que se ha constituido en la instancia coordinadora de acciones de comunicación, enlace y articulación (Oxfam, 2008), incluyendo la gestión de participación de las organizaciones que constituyen el CONOC. Las ONG han jugado un papel fundamental para la generación de ideas e iniciativas de trabajo, la divulgación de información y conocimientos y la definición de estrategias de trabajo.

Las organizaciones campesinas que integran la CONOC, son las que aportan legitimidad y le dan sentido a las acciones, especialmente a las movilizaciones, pues poco sentido tendría para las ONG exigir modificar las políticas agrícolas y la inclusión del campo en el desarrollo nacional sin una base campesina respaldando las demandas. Por su parte, las personas y académicos que se han vinculado de manera individual a la Campaña, son claves en formulación de análisis, documentos, propuestas y en la definición de acciones (Oxfam, 2008).

Otro grupo de actores está formado por las organizaciones responsables del lanzamiento y desarrollo de la Campaña en los Estados, fundamental en la ampliación del radio de influencia de la Campaña fuera del Distrito Federal; se trata de ONG o colectivos sociales sin figura asociativa formal que ya realizaban actividades relacionadas con los objetivos de la Campaña, por lo que adoptaron el nombre y enmarcaron sus actividades dentro de ella.

El tercer grupo de actores lo constituye el grupo amplio de más de 300 organizaciones y personas de la sociedad civil que se adhirieron –mediante firmas- a la convocatoria de la Campaña. Aquí también se encuentran personas relacionadas con el mundo intelectual y académico, espectáculos y medios de comunicación (Oxfam, 2008). Las organizaciones campesinas han jugado un papel central en la promoción de las acciones a nivel estatal y local y en la difusión de la Campaña, han sido claves para la recopilación de firmas y para la organización de las movilizaciones. Por su parte la presencia de personas vinculadas al mundo del espectáculo en diversas actividades de la Campaña han contribuido a atraer la atención del público y de los medios de comunicación. El papel de académicos e intelectuales ha sido central en la realización de foros, conferencias y documentos de difusión e información relacionados con los temas de la Campaña (Oxfam, 2008).

3.4.6. Red en Defensa del Maíz

Las organizaciones y colectivos que participan en la Red presentan diferencias constitutivas respecto a quienes integran la campaña, pues si bien participan académicos y ONG, hay una mayor presencia de comunidades y ejidos indígenas, considerados como los actores núcleo de la planeación, la acción y definición de estrategias y posicionamientos⁶¹.

Las organizaciones de la sociedad civil que se integran a la Red por la Defensa del Maíz se dividen en (i) organizaciones sociales, aquellas de índole gremial cuya directiva y bases operativas comparten la misma problemática y perfil cultural, principalmente rurales y campesinas⁶², y (ii) organizaciones no gubernamentales, cuya participación consiste principalmente en apoyo técnico para los objetivos y acciones planteadas por el grupo núcleo y las organizaciones sociales, con poca participación en la planeación y operación del movimiento⁶³.

Se suman a la red también académicos a título personal. Ellos aportan fundamentos a las demandas y documentos de posición de la Red, así como contactos para participar en espacios amplios multidisciplinarios a nivel nacional y mundial, pero tampoco participan en la planeación y definición del movimiento.

Al decidir no participar en la comisión para la elaboración de la LBOGM, la serie de organizaciones que conforman la red decidieron consolidar grupos locales de trabajo al nivel comunitario y anclar la toma de decisiones en el Congreso Nacional Indígena, impidiendo el paso de maíz transgénico y de cualquier instancia de monitoreo por parte gubernamental a las comunidades. Esto implicó tomar distancia de las acciones emprendidas por la Campaña, en la lógica de seguir una estrategia de defensa orientada a la construcción local de reglamentos comunitarios que permitan conservar la semilla nativa, los métodos tradicionales de siembra, recuperar sentidos culturales del maíz en comunidad, tomar acuerdos comunitarios para cuidar el maíz,

⁶¹ Estas comunidades indígenas son: Pueblo Wixárika, de Jalisco, Durango y Zacatecas; Pueblo Rarámuri de la Sierra Tarahumara, Chihuahua; Comunidad Nahua de Ayotitlán, Jalisco; Comunidad Ñañhu, de Atlapulco, Estado de México; Comunidad Totonaca de la Sierra Norte de Puebla; Comunidades Campesinas de Los Tuxtlas, Veracruz; Comunidades Campesinas del Sur de Veracruz; Comunidades Zapotecas de los Valles Centrales de Oaxaca; Comunidad Chontal de Centla, Tabasco; Comunidad Tlapaneca, de Tlapa, Guerrero, comunidad mixteca de San Juan Mixtepec, Oaxaca. (<http://endefensadelmaiz.org/Conclusiones-del-primer-seminario.html>)

⁶² Entre las que se incluyen: Organización de Agricultores Biológicos, AC, Oaxaca; Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto AC, Oaxaca; Grupo Indígena de Protección Ambiental (GIPA), Jalisco; UNOSJO.

⁶³ De manera más constante: Grupo ETC, CECCAM, Colectivo Coa (Antes AJAGI), Enlace, Capacitación y Comunicación, GEA, GRAIN, Centro Nacional de Misiones Indígenas (CENAMI).

compartiendo saberes y prácticas culturales, rescatar la milpa y continuar monitoreando y desarrollando métodos de detección de contaminación transgénica en las milpas de los integrantes de la red (Robles, 2007).

Para la red, la lucha por la soberanía alimentaria es una guerra contra la conquista en forma de leyes neoliberales para la privatización y el despojo de tierras, aguas, biodiversidad y recursos genéticos; de programas de gobierno perversos que muestran un profundo desprecio a la gente y a su cultura, así como el problema serio de la contaminación transgénica de maíces nativos⁶⁴.

El segundo Foro en Defensa del Maíz, que tuvo lugar en diciembre del 2003 se decidió una estrategia a seguir, que rigió las actividades de la Red en lo sucesivo, y se resume, según Ramón Vera del grupo GRAIN, así: *“si asumimos que la contaminación está muy generalizada y que el gobierno mantiene vigentes las fuentes externas de contaminación, se considera que sería desgastante y sin sentido continuar con los diagnósticos de contaminación pues sería una sangría permanente de los escasos recursos con los que se cuenta. En cambio, habría que confiar en el proceso de prevención y curación natural, propio del proceso milenario de relación mutua entre el maíz y los humanos, circunscribiendo el diagnóstico preciso para los casos de maíces deformes u “otros que las propias comunidades decidan”. Aunque no se pide detener la investigación científica, es claro que la solución al problema de contaminación del maíz transgénico, por su extraordinaria complejidad, sólo puede ser resuelta (si es que tiene solución) en el largo plazo, siendo los principales actores de la descontaminación los propios pueblos campesinos e indígenas. Para lo cual se requiere escuchar al maíz y a la tierra, a los saberes y las necesidades de los pueblos del maíz y a nuestro corazón.*

A nivel de las comunidades y territorios indígenas, sigue siendo prioridad reforzar la autonomía, la organización comunitaria, resaltando la lucha por la defensa del maíz con la lucha por el territorio y el autogobierno. Así, cuando la asamblea es la máxima autoridad, pueden impulsarse políticas agropecuarias propias. Es evidente, según plantearon los participantes, que en sus estatutos comunales y reglamentos ejidales puede establecerse la prohibición de la siembra de transgénicos, lo que conduce a una moratoria de facto decretada por los pueblos indios y campesinos en torno al consumo, la siembra y el trasiego de maíz

⁶⁴ Eutimio Díaz Bautista ante el Consejo Nacional Indígena en 2005.

transgénico. Una previsión adicional implicaría no permitir la entrada de semillas forrajeras al tiempo de evitar comprar en las tiendas de Diconsa, propiciando de paso la comercialización propia, en las regiones que se pueda.”

Algo que se consideró crucial, y que refuerza uno de los acuerdos del primer Foro en Defensa del Maíz es centrar la campaña en defensa del maíz en “el cerco a los pueblos del maíz y no sólo en la contaminación transgénica.

Otro acuerdo vital fue *“tender puentes con los consumidores de las ciudades, que reconociendo su propia historia, comienzan a entender el papel de los campesinos y los indígenas en alimentar a la gente de la urbe, por lo que habría que promover y realizar un sabotaje a los paquetes de ayuda alimentaria elaborados con transgénicos (Maseca, maíz regalado) y otro a todas las gaseosas endulzadas con jarabe de maíz transgénico. Buscar además alternativas de alimentación rural y urbana y profundizar la organización específica de los consumidores⁶⁵”*.

En el nivel nacional se recalcó el rechazo a la Ley de bioseguridad, exigir que se mantenga la moratoria a la siembra de maíz transgénico estableciendo alianzas para fortalecerla. Exigir y detener las importaciones agrícolas, exigir y realizar análisis químicos de los granos importados, fortalecer el tejido de redes entre organizaciones indígenas, de campesinos y de productores, para crear un piso que barra todos los niveles de la problemática que cerca al maíz y otros cultivos. Profundizar el encuentro con organizaciones independientes de migrantes, con el objetivo de dialogar sobre los problemas de sus comunidades, la importancia del maíz y la gestión de las remesas.

En el nivel internacional, desarrollar alianzas para defender los maíces locales y nativos como patrimonio de la humanidad, impidiendo (y luchando contra) la posibilidad de ser patentado.

Conclusión

Los eventos que dieron lugar a los dos movimientos actuales, fueron el resultado de desacuerdos entre actores sociales y de la gradual definición de afinidades en las relaciones sociales entre organizaciones campesinas, indígenas y no gubernamentales que compartieron un pasado común y frentes de lucha en distintos momentos del

⁶⁵ Minuta del segundo Foro en Defensa del Maíz. Proporcionada por la Red a la autora.

movimiento campesino. Sin embargo, conforme se presentaron coyunturas políticas y sociales que obligaron a cada organización a tomar decisiones estratégicas acordes con sus identidades y objetivos, las posibilidades de continuar siendo parte de un movimiento conjunto se agotaron. Las evaluaciones de aceptabilidad de las diferentes opciones estratégicas fueron tomadas en distintos niveles organizativos e identitarios: campesinos e indígenas, así como ONGs evaluaron sus posibilidades de acción, pero también evaluaron las decisiones de las demás organizaciones, y definieron con esto las afinidades que permitirían continuar una lucha acorde con sus principios operativos y sus opciones estratégicas.

La definición final de actores que permitió dibujar en cada movimiento una configuración social particular, facilitó definir las mejores estructuras operativas para construir el movimiento de acuerdo con sus objetivos y criterios. En el siguiente capítulo revisaré con mayor detalle la configuración social y operativa, con un énfasis en la relación de co-determinación que existe entre estos elementos y con las decisiones estratégicas que permiten visualizar dos movimientos claramente diferenciados.

Capítulo 4

El movimiento por la soberanía alimentaria en México

4.1. Introducción

El presente capítulo describe la configuración social, la estructura operativa y las percepciones que las OMS tienen sobre el movimiento en el que cual participan, tanto para la Red en Defensa del Maíz como para la Campaña Sin Maíz no hay País. La información vertida en este capítulo parte de las entrevistas y notas de campo tomadas durante la asistencia a eventos y reuniones del movimiento. El periodo para la recopilación de datos de la Red en Defensa del Maíz fue de febrero del 2010 a abril del 2011; en el caso de la Campaña, el periodo abarcado para recopilar información a partir de asistencia a reuniones y de entrevistas, fue de septiembre del 2009 a abril del 2011.

La intención de este capítulo es meramente descriptiva, para entender la configuración social del movimiento, su estructura operativa, las percepciones que las diferentes organizaciones del movimiento tienen sobre el mismo, sobre su función y la de otras organizaciones, así como la relevancia del movimiento para la sociedad. Esta información me permitirá, posteriormente, analizar las diferencias estratégicas y las divisiones formales que impiden la consolidación de un movimiento único.

Las identidades organizativas que confluyen en el movimiento (configuración organizacional) y las formas en que éstas se vinculan al interior del movimiento para construirlo y orientarlo, son elementos que posibilitan la toma de decisiones estratégicas, pero al mismo tiempo restringen las condiciones en las cuales se decide efectivamente (Meyer y Staggenborg, 2008). El tipo de vínculos sociales que dan estructura organizativa y jerárquica al movimiento son resultado de formas de pensar las relaciones sociales que se tejen en a lo largo de las historias de activismo; al mismo tiempo escenifican, o intentan escenificar, el ideal de sociedad que se persigue (Melucci, 2000). De esta forma el movimiento tiene dinámicas sociales internas específicas, que definen a los actores más importantes y aquellos que toman las decisiones que orientan al movimiento estratégicamente, dándole continuidad y elementos para evaluar éxitos o fracasos.

Considero importante abundar en los tipos de organización que conforman a cada movimiento, resaltando los aspectos que les dan cohesión interna y aquellos con base en los cuales cada OMS define su función social. Esto me permitirá entender las configuraciones sociales de cada movimiento como resultados de afinidades en las formas de ver la acción social, la acción colectiva, los objetivos del movimiento y el ideal de sociedad que se persigue con éste.

4.2. Red en Defensa del Maíz

4.2.1. Comunidad del movimiento

La comunidad del movimiento está compuesta por iniciativas o movimientos aliados, grupos culturales que aportan ideas y participan de manera irregular en la red e intelectuales que escriben, reflexionan y teorizan sobre las líneas de acción del movimiento.

El común denominador para toda la comunidad de este movimiento por la soberanía alimentaria, es la noción de que las políticas neoliberales están destruyendo las posibilidades de vida para las comunidades indígenas, al intentar privatizar todos los recursos naturales y generar empresas y microempresas para conducir todos los aspectos productivos. En particular, para este movimiento, la soberanía alimentaria depende de impedir la entrada de variedades transgénicas de maíz para ser cultivadas en México, que para su producción conllevan un paquete tecnológico de insumos agroquímicos que simplifican el sistema de milpa tradicional⁶⁶.

Para la Red, las modificaciones que se hacen a la legislación ambiental, agrícola y agraria desde 1994, con la modificación del artículo 27 constitucional, es un paquete legislativo que parte de convenios entre las grandes empresas agrícolas transnacionales y el gobierno mexicano. Esta legislación ha permitido individualizar las parcelas agrícolas, eliminando la propiedad colectiva, y se ha acompañado de la posibilidad de comprar bosques y sistemas hídricos para generar cultivos empresariales.

⁶⁶ La milpa tradicional conlleva la siembra de varios productos necesarios para la dieta tradicional, y aunque varía a lo largo de las regiones en México, implica diversidad en los alimentos que aporta a las unidades de subsistencia. El paquete tecnológico implica la eliminación de plantas diferentes al maíz, lo que convierte a la milpa en un monocultivo.

La culminación de estas políticas ha sido la liberación de permisos para sembrar maíz transgénico de manera experimental, pero a cielo abierto, en Estados del norte del país. Para 2011, se tiene previsto permitir la siembra piloto, ampliando hacia el centro, el rango geográfico de los permisos, lo que implicaría un gran riesgo de polinización accidental de las variedades de maíz nativo.

La Red, desde 2001 ha comenzado a monitorear las parcelas de sus miembros indígenas y campesinos para detectar contaminación genética, documentando que ésta existe desde entonces; sin embargo, la liberación de permisos implicará que los genes transgénicos (trans-genes) que se encuentren en lo sucesivo en milpas tradicionales, hagan del campesino o ejido un sujeto de demanda, a menos que se compruebe que se trata de polinización accidental. Esto se haría posible debido a que los trans-genes están patentados.

La noción cultural del maíz como cultivo básico y eje articulador de las sociedades indígenas y como alimento básico de México es otro eje común de pensamiento, pues en su mayoría son comunidades y organizaciones indígenas del centro y sur del país quienes integran a la Red y ven sus formas de vida incluidas y reflejadas en los ejes discursivos de esta iniciativa.

De manera constante se pueden identificar a algunos movimientos y colectivos como alianzas indispensables para la Red en la construcción de su estrategia a futuro, y como tal, son parte relevante de la comunidad del movimiento:

4.2.1.1 Movimientos aliados

Vía Campesina

Quizá el movimiento más amplio que es a menudo aliado de la Red es la Vía Campesina Norteamérica, quien originalmente construyó el concepto de soberanía alimentaria, como una respuesta al de seguridad alimentaria emitido por la FAO como estrategia internacional para combatir el hambre, y el cual tiene como fondo una intención asistencialista de abastecimiento de alimentos importados a las regiones pobres, para ofrecer paquetes alimenticios o de cultivos poco adecuados al ambiente de cada región y a los gustos culturales de los pueblos. El concepto de soberanía alimentaria implica colocar las decisiones agrícolas y alimentarias en la gente, la decisión y opción de cultivar localmente las variedades más adecuadas y

aceptadas, abastecer con producción nacional los mercados locales internos y exportación de excedentes. La soberanía alimentaria no se opone a las importaciones, siempre y cuando sean de productos inocuos a las economías y ambientes nacionales, sobre todo aquellos cuyo cultivo no es apropiado para los suelos locales.

La Vía campesina está conformada por 148 organizaciones campesinas, procedentes de 69 países de Asia, África, Europa y el continente Americano. Existen oficinas y representantes regionales, un hombre y una mujer campesinos por región.

Pese a que el equipo técnico incluye a profesionistas y académicos, ellos no toman decisiones estratégicas, pues en la Vía impera una política de construcción del movimiento y de alternativas “desde abajo”, que implica que las decisiones más importantes sean tomadas por los afectados, los campesinos que viven los impactos de las políticas agrícolas y sociales de cada país.

La Vía se opone contundentemente al orden neoliberal, pero las estrategias de lucha de cada país participantes son variadas, así por ejemplo Brasil acepta negociar con el gobierno porque ha establecido canales efectivos de comunicación y tenido logros significativos.

El caso de México es peculiar, en tanto que existe una división interna, dada por diferentes visiones en torno a las estrategias adecuadas para conseguir la soberanía alimentaria, y también se relacionan ampliamente con las posiciones e historias personales de interacción de los líderes organizacionales, quienes han convergido a lo largo del movimiento campesino en México. Estas visiones afectan el funcionamiento democrático de la organización en el país, -algo que no ocurre en otras partes del mundo⁶⁷ - .

La Vía Campesina México está coordinada por la UNORCA, pero integrada por ANEC, CIOAC, CODUC, CNPA y FDCCh, organizaciones que han tomado decisiones estratégicas diferenciadas a lo largo del movimiento campesino. En el caso del movimiento por la soberanía alimentaria existe una confrontación directa relativa a las iniciativas que lo integran y que son parte de la Vía Campesina, pues si bien UNORCA, que tiene la coordinación nacional de la Vía, es una organización amiga y afín a la Red por la Defensa del Maíz, ANEC es una de las principales impulsoras de la Campaña Sin Maíz no Hay País, con poca participación en la Vía, lo cual atribuye a que percibe “una fuerte exclusión por parte de la representación de

⁶⁷ Entrevista con miembro del equipo técnico de la Vía Campesina. 19 de septiembre del 2010.

la Vía, debida a diferencias personales del líder nacional para con la ANEC. Estas diferencias se relacionan con momentos anteriores del movimiento y la idea de que la ANEC se vende fácilmente al gobierno, cuando no hay nada más distante de esa realidad, quizá tiene que ver con Víctor Flores aceptando una diputación local poco después del MECNAM, pero eso es absurdo, la UNORCA también negocia con gobierno, también está en el Consejo para el Desarrollo Rural...en realidad ninguna organización es verdaderamente independiente ni debe serlo, debemos ocupar espacios para exigir un nuevo papel para el campo y los campesinos” comenta Enrique Pérez, de la ANEC.

Pese a que casi todas las organizaciones de la Campaña son parte de la Vía Campesina México, y no participa ninguna de la Red, es con ésta última iniciativa con quien se observan colaboraciones importantes como el Foro contra los transgénicos, un evento alternativo dirigido a la sociedad civil ante una conferencia de la FAO en Guadalajara, en donde este organismo internacional evaluaría, junto con el gobierno mexicano, la importancia y los beneficios de introducir mayor cantidad y variedad de cultivos transgénicos al campo, la participación en la 6ta Asamblea de Afectados Ambientales en Oaxaca y el Foro por la Vida, la Justicia Social, Ambiental y Climática en Cancún, evento alternativo a la Conferencia de las Partes ante el Cambio Climático no. 16.

Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA)

La primera asamblea se llevó a cabo el 31 de agosto de 2008. En ella personas, agrupaciones vecinales y comunidades de distintas partes de México convergieron para intercambiar experiencias sobre los problemas ambientales ocasionados por las políticas de desarrollo e industrialización y la forma en que estos problemas afectan a las comunidades a lo largo de la República. Se particularizó en ver los vínculos existentes entre las diferentes luchas y entre las dinámicas campo-ciudad.

En dos años se han celebrado seis asambleas a las cuales se adhieren cada vez más movimientos o grupos con el objetivo de “detener la destrucción social y ambiental del país que llevan a cabo sistemáticamente el gobierno y las empresas privadas nacionales y extranjeras; luchar pacíficamente por reconstruir las condiciones ambientales que permitan a los pobladores de todo México tener una

vida digna y sustentable⁶⁸”. Para la asamblea es central la necesidad de fortalecerse como espacio de resistencia y lucha comunitaria contra más proyectos de industrialización en áreas de riqueza biológica con población.

En la ANAA convergen representantes de luchas socio-ambientales locales, regionales y nacionales “contra un creciente grado de simulación oficial, donde el gobierno declara por un lado su “compromiso” con la preservación del ambiente, mientras que, por el otro, difama, desconoce, golpea y criminaliza todo intento de crítica y defensa colectiva de los derechos de los pueblos a su autonomía y a una toma de decisiones informada y verdaderamente democrática sobre el uso de sus territorios y recursos comunitarios⁶⁹”.

Una de las principales reivindicaciones de la Asamblea consiste en la demanda de que en México se realice un diagnóstico que haga visibles las afectaciones ambientales y a la salud humana derivadas de más de 15 años de libre comercio y se reconozca, dentro y fuera del país, la situación de colapso ambiental en México.

Igualmente, la Asamblea trabaja desde su creación en la articulación regional de las luchas locales con el fin de sacarlas de la invisibilidad. Trabaja a través de procesos de autoformación, para fortalecer su propia comprensión sobre la conexión entre cada lucha local, enfatizando la importancia de alternativas autogestionarias y convergentes.

Intenta demostrar la pertinencia de sus demandas y acciones para que formen parte de un movimiento social más amplio, dirigido a detener y revertir la destrucción general del país. La ANAA tiene como ejes: el respeto común a la autonomía de las luchas locales y el apoyo solidario y pacífico de todos sus participantes a la defensa de causas comunes de escala nacional.

Entre las luchas que conforman la ANAA se encuentran: la instalación de granjas industriales en todo el territorio nacional, con subproductos que contaminan agua, suelo y aire dañando a los pobladores y su entorno, la aplicación del Programa de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques (REDD), la continuación de proyectos de minería a cielo abierto, construcción de

⁶⁸ Manifiesto 6ta asamblea de Afectados Ambientales. Disponible en : www.anaa.org

⁶⁹ Andrés Barreda, ponencia de en la 6ta Asamblea de Afectados Ambientales. Magdalena Ocotlán, Oaxaca, octubre del 2010.

represas que obligan a desplazar a las comunidades y a devastar el medio por proyectos cuya duración es menor a los cien años.

La Red en Defensa del Maíz se unió a la ANAA de forma oficial en la sexta asamblea llevada a cabo en octubre del 2010 en Oaxaca. De esta forma se convirtió en un actor más del movimiento amplio de los afectados, quienes tienen un eje importante de derechos humanos para estructurar sus demandas de atención y retiro de mega-proyectos en las comunidades por parte del Estado. La asamblea ahora incorpora la demanda de impedir la entrada de transgénicos a México y reconoce a la Red como parte de la comunidad. La Red y la ANAA han convergido además, con la Vía, en el Foro contra los transgénicos en Guadalajara y en el Foro por la Vida, la justicia social y ambiental, alternativa a la Cumbre de las Naciones Unidas por el Cambio Climático, en diciembre del 2010.

Congreso Nacional Indígena

Si bien el CNI no es un movimiento propiamente, sino una instancia cultural de reunión y deliberación, muchas comunidades indígenas que participan en la red, como es el caso de los wirarikas o huicholes de participación constante, los mixes, o los yaquis y mayos de manera intermitente, son parte del congreso y se adhieren a sus declaraciones y formas operativas.

El CNI como órgano de la sociedad civil indígena prioriza las formas de trabajo y de gobierno según las formas consuetudinarias (usos y costumbres) que son culturalmente tradicionales, por tanto la instancia máxima para la toma de decisiones es la asamblea que está integrada por todos los miembros del colectivo. El CNI, por la historia de relación con el gobierno federal, ha optado por tomar acuerdos de asamblea dirigidos a fortalecer las formas de gobierno y autonomía en aspectos productivos y normativos de las comunidades y ejidos indígenas, de forma que la orientación de sus tácticas es a la sociedad indígena, queriendo visibilizar su esfuerzo en la sociedad civil nacional en general y la sociedad civil internacional.

A partir de la reunión en Vicam, Sonora, en 2007, el CNI ha incorporado como parte de sus postulados la oposición a siembra de maíz transgénico e impulsa la toma de acuerdos de asamblea para normar el cultivo de variedades de maíz nativo, impedir la entrada de transgénicos y de paquetes tecnológicos que impliquen

modificar las condiciones tradicionales de cultivo, tanto social como ambientalmente.

El CNI es parte de la comunidad del movimiento social de la Red en tanto que:

- Varias comunidades indígenas participan de manera constante en ambas instancias
- Rige formas de planeación e interacción al interior de la Red misma, en las cuales las decisiones son tomadas por los actores indígenas y campesinos, directamente afectados por las políticas que ocasionaron la formación de la Red
- Ha retomado los postulados de soberanía alimentaria de la Red, reivindicándolos como parte de su programa de trabajo y suscribe las posturas de la misma.

4.2.1.2. Comunidades y grupos culturales

A las reuniones y eventos de la Red asisten, de manera intermitente, representantes de comunidades indígenas o de organizaciones campesinas o civiles, sin que su presencia en el futuro esté garantizada y pasen a formar parte de ella a manera de organizaciones del movimiento social. A menudo asisten cuando los eventos se realizan en su ciudad o provincia, manifestando sus intereses de participar y tomando notas para comunicar a las demás personas de su grupo sobre la existencia, acuerdos y tácticas de la Red, de esta forma comulgan (o no) con el movimiento, sin que esto implique compromisos de participación a largo plazo.

Estos grupos a menudo manifiestan preocupaciones locales y los problemas con los que se vive la introducción de transgénicos en su lugar de origen o vivienda, aportando temas o reflexiones nuevas a la Red, de tal forma que su presencia es importante y sus intervenciones enriquecen al movimiento.

4.2.1.3. Intelectuales y medios de comunicación

La Red como colectivo tiene pocas publicaciones; son las ONGs que participan en el movimiento, quienes realizan investigación sobre el impacto de las políticas en los sistemas productivos o culturales. Estas organizaciones escriben en distintos medios sobre los temas de interés del movimiento: efectos de las políticas neoliberales sobre las culturas indígenas, avances de la privatización de recurso naturales y genómicos, impactos del paquete tecnológico que conlleva el uso de transgénicos y los efectos de éstos sobre los maíces nativos y las culturas locales. Asimismo, los investigadores

académicos que participan en el movimiento, son fundamentales para aportar los argumentos que legitiman las demandas de la Red como una necesidad para la sociedad en general; los argumentos empleados apelan a datos estadísticos y cualitativos que muestran el impacto de los transgénicos en las condiciones económicas, productivas y ambientales de países que han adoptado su uso extensivamente; otros argumentos son de índole ético, o biológico, resaltando la importancia de la diversidad cultural y biológica que está amenazada por la comercialización y estandarización de la agricultura.

Uno de los principales medios de difusión usados por la Red para manifestar sus inquietudes y posturas por la soberanía alimentaria es la sección “Ojarasca” del periódico La Jornada, empleado también, de manera amplia, por integrantes del movimiento indígena para dar a conocer sus novedades y avances.

La Red también cuenta con una Página de Internet (www.endefensadelmaiz.com) que, pese a actualizarse de manera poco frecuente, permite al público conocer la historia, manifiestos y actividades principales realizadas por la Red. Esta página contiene también enlaces con grupos de comunicación independientes (indymedia) que preparan programas de radio con entrevistas ante momentos coyunturales referentes a los transgénicos, en un marco de lucha contra el neoliberalismo.

4.2.2. Organizaciones del Movimiento Social (OMS)

Se consideran como Organizaciones del Movimiento Social aquellas que constantemente impulsan a la Red y asumen las decisiones estratégicas como principios rectores de su trabajo diario. El corte antisistémico de la resistencia que lleva a cabo la Red, permite incluir a las comunidades indígenas como OMS, pues las formas de autogobierno que se siguen en éstas, aplican como principios para el funcionamiento interno del movimiento: La asamblea general es el máximo órgano para la toma de decisiones, se trabaja en torno a los acuerdos de asamblea, sólo los integrantes tienen voz y voto, se generan reglamentos para la operación y la convivencia, para ingresar debe de pedirse permiso a la asamblea. En este sentido, pese a que una comunidad no es una organización, el hecho de que sean las formas de gobierno comunitarias las que inspiren el funcionamiento del movimiento y sean consideradas como las unidades sociales más importantes, tanto para la toma de

decisiones como para ampliar la base social del movimiento, se consideran como OMS.

Las OMS se cohesionan en torno a su función social (ONGs), identidad étnica (comunidades indígenas) y labor productiva (organizaciones indígenas).

Organizaciones no gubernamentales

Las organizaciones y comunidades indígenas coinciden en señalar que, si bien las ONGs son un apoyo técnico para dar seguimiento a los acuerdos de la Red, sin estas organizaciones el movimiento no existiría.

Esto debido a que las funciones de las ONGs en este movimiento son múltiples, e incluyen mantener la comunicación entre todos los actores organizados y realizar actividades de difusión para integrar a más participantes y difundir las demandas y argumentos de la Red.

Dos tipos de ONGs participan activamente: ONGs de investigación (CECCAM, ETC, GRAIN, CASIFOP) y ONGs de desarrollo (Colectivo COA, CENAMI, Enlace Comunicación y Capacitación A.C y CECCAM).

Grupo ETC (Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración) y GRAIN (Genetic Resources Action International) son organizaciones internacionales, enfocadas a documentar y difundir los impactos de las políticas de privatización, concentración corporativa y privatización sobre las comunidades más vulnerables, con particular énfasis en la erosión de conocimientos, culturas y biodiversidad que conllevan estas políticas. GRAIN se concentra más en el ámbito de diversidad biológica y aspectos agrícolas, incluyendo la concentración de la tierra o desplazamientos de comunidades para el establecimiento de plantaciones o cultivos comerciales, mientras que ETC abarca investigación sobre distintas tecnologías, incluyendo energía nuclear. Ambas organizaciones, a nivel mundial, trabajan cercanamente con movimientos sociales, a quienes consideran debe servir la información que generan, visión a la que, desde lo nacional se une CASIFOP (Centro de Análisis Social, Información y Formación Popular).

En cuanto a las ONGs de desarrollo, todas llevan a cabo sus proyectos de trabajo con las comunidades u organizaciones indígenas que integran la Red, esto es, existe una colaboración constante que excede los límites definidos por la relación al interior del movimiento. CECCAM fue formada como un anexo técnico para

UNORCA, de la cual ya se ha independizado pero mantienen relaciones muy cercanas; CENAMI (Centro Nacional de Misiones Indígenas) es una ONG católica, de adscripción ecuménica sin embargo, que trabaja con pastorales de base en varios Estados de la República; Colectivo COA se dedica a la defensa integral del territorio, incluyendo aspectos jurídicos de las comunidades indígenas Wirárikas con las que trabajan, en Nayarit y Jalisco, apoyando en la definición de planes de desarrollo integral; Enlace Comunicación y Capacitación tiene diferentes áreas y proyectos. Todas las ONGs tienen en común el concebir su función social como una de apoyo y refuerzo a las necesidades expresadas por la población más local con la que colaboran, elaborando los proyectos que someten a financiamiento en estricto apego a los acuerdos que se tienen al nivel comunitario, sin comprometer como parte de los resultados, información que sea considerada delicada o privada por las comunidades indígenas.

Estas ONGs consideran que su papel debe de ser de supeditación para el desarrollo de proyectos que no sean de investigación, y la investigación debe de cubrir necesidades informativas para apoyar los procesos sociales de las comunidades más vulnerables, sin que éstas generen dependencia de las ONGs en ningún momento.

Esta concepción de su función social y las formas de trabajo que se estructuran alrededor de las necesidades de las bases, generan afinidad con los lineamientos de las comunidades y organizaciones indígenas que suscriben el CNI, pues permiten a las comunidades mantener una autonomía para la toma de decisiones que es principio activo del Congreso.

Las ONGs tienen múltiples funciones en y para la Red:

- Recopilación de información relevante para el movimiento. Las investigaciones de las ONGs sobre los avances e impactos de las políticas de libre comercio sobre los ecosistemas y grupos vulnerables, son el insumo principal para la discusión estratégica, sin embargo, estas organizaciones también deben contar con información actualizada sobre técnicas para detección de trans-genes y nuevos aportes para el mejoramiento de los sistemas tradicionales de cultivo. Gracias a las variadas formas de comunicación con que cuentan las ONGs y su universo de contactos nacionales e internacionales, también proveen al movimiento con información sobre otros movimientos o iniciativas sociales que pueden fungir

como alianzas estratégicas o espacios para ampliar la membresía de la Red, incluyendo la posibilidad de realizar eventos conjuntos, como sucedió con la Vía Campesina en el foro alternativo contra el cambio climático, en diciembre del 2010.

- Apoyo técnico. Las ONGs son responsables de aportar al personal profesional para realizar los monitoreos de transgénicos en las milpas, organizar y reportar los resultados. En esta función también se documentan las características de todas las variedades de maíz que siembran las comunidades de la Red, documentando todos los eventos y aportando la información en momentos pertinentes para la discusión estratégica.
- Gestión de recursos financieros y planeación. Las ONGs trabajan de forma constante con las comunidades y organizaciones indígenas, gestionando recursos financieros para sus proyectos particulares, sin embargo a menudo destinan parte de esos fondos para costear los encuentros o asambleas de la Red. Cuando se trata de eventos especiales, las ONGs deben de asumir los costos, ya sea desviando partidas de sus propios fondos o bien sometiendo proyectos específicos, por ello, son también las responsables de planear los mejores momentos y lugares para las reuniones.
- Organización de la agenda de la Red. Las asambleas se realizan una vez al año, a menos que existan eventos o circunstancias que permitan reuniones especiales, como la asistencia a eventos de otros movimientos para dar a conocer el trabajo de la Red y conseguir adhesiones, o ampliar la comunidad del movimiento. En los últimos dos años, eventos conjuntos con la ANAA y la Vía Campesina han permitido a la Red salir del D.F y celebrar reuniones públicas.
- Elaboración de la agenda. Las ONGs, que cuentan con la mayor parte de información relevante para la discusión estratégica, además de tener comunicación constante entre sí, más de la que se tiene con las organizaciones indígenas, se encargan de hacer las agendas o calendarios para seguir durante las reuniones, incluyendo los puntos que consideren más relevantes a ser tocados y discutidos entre todos. Si bien la agenda se abre a participaciones cuando todos los miembros están presentes, rara vez hay modificaciones sustanciales.

Organizaciones indígenas

Se trata de organizaciones locales, ninguna de las cuales se extiende de los límites de un municipio o Estado. Pese a que existen muchas organizaciones que son parte de la comunidad, de manera constante, en los eventos y asambleas de la Red, participan con constancia cinco, de las cuales tres (UNOSJO⁷⁰, Radio Huayacocotla y ORAB⁷¹ A.C, Colectivo Peninsular Ko'one'ex t'aan) enfocan gran parte de su labor a la promoción de agricultura orgánica y la generación de acuerdos comunitarios para impedir la privatización –o individualización- de la propiedad o el uso de los recursos naturales. Estas actividades incluyen difundir información sobre los impactos de la privatización de los recursos. El Grupo Indígena de Protección Ambiental (GIPA), es una instancia comunitaria para la vigilancia de los acuerdos comunitarios en materia ambiental, manteniendo comunicación constante con Colectivo COA para desarrollar una defensa integral del territorio Wirarika o huichol, al nivel comunitario, sin embargo se promueve la formación de “GIPAs” en las comunidades adyacentes de Jalisco y Nayarit. La última organización, el Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto A.C, se enfoca a promover la exigencia de los derechos indígenas.

Todas estas organizaciones comparten entre sí y a su interior, un sentimiento de cohesión en torno de la identidad indígena, más que campesina, de sus miembros, pues la participación activa que tienen en el Congreso Nacional Indígena ha contribuido a que vean la labor agrícola como *“una actividad que no sólo nos sirve para dar de comer a la familia o a la comunidad, sino que nos da identidad y nos permite hacer comunidad, pues intercambiamos semilla, nos ayudamos entre nosotros, y vemos a la milpa como parte de un todo, que no se puede separar de la tierra y del territorio. La milpa tiene ciclos que nos dan vida a humanos y animales, y a la tierra misma; cuando no hay maíz hay alimento en el bosque, que puede darse porque hay agua y animales que se alimentan de la milpa misma...si, la milpa o la siembra no son solo una actividad mas, son la vida y necesitan del territorio, no nomás de la tierra y el agua”*⁷².

⁷⁰ Unión de Organizaciones de la Sierra de Juárez.

⁷¹ Organización de Agricultores Biológicos de Oaxaca.

⁷² Entrevista con Eutimio Díaz, del Grupo Indígena de Protección Ambiental, 14 de julio del 2010.

Todas estas organizaciones, además, funcionan al nivel comunitario o intercomunitario, celebrando asambleas cuyos acuerdos se intentan siempre llevar a los reglamentos comunitarios que rigen el comportamiento social de las comunidades.

En general, las organizaciones indígenas han optado por *“luchar haciendo, en vez de exigir al gobierno que haga, lo que en realidad tendría que hacer pero ha preferido venderse y dejarnos la tarea de conservar...por eso mismo no se puede confiar en el gobierno, porque lo que le interesa es que los indígenas dejemos de fastidiar, para que nos convirtamos en mano de obra o en campesinos simplemente, eliminar la cultura del maíz”*⁷³, esto es, rechazan la negociación con autoridades, aunque no todas rechazan los programas gubernamentales de apoyo, lo cual a veces es un punto de tensión.

Comunidades indígenas

Las comunidades participan mediante un representante, o bien firmando adhesiones, principalmente desde que el CNI reconoció a la Red y sus demandas como un principio de lucha a ser asumido por todos los pueblos indios de México. Normalmente, se trata de comunidades que rechazan apoyos gubernamentales y funcionan para su autogobierno con mecanismos de usos y costumbres. Entra las más frecuentes asistentes a la Red y signatarias, se encuentran: Pueblo Wixárika, de Jalisco, Durango y Zacatecas; Pueblo Rarámuri de la Sierra Tarahumara, Chihuahua; Comunidad Nahua de Ayotitlán, Jalisco; Comunidad Ñañañhu, de Atlapulco, Estado de México; Comunidad Totonaca de la Sierra Norte de Puebla; Comunidades Campesinas de Los Tuxtlas, Veracruz; Comunidades Campesinas del Sur de Veracruz; Comunidades Zapotecas de los Valles Centrales de Oaxaca; Comunidad Chontal de Centla, Tabasco; Comunidad Tlapaneca, de Tlapa, Guerrero, comunidad mixteca de San Juan Mixtepec, Oaxaca; comunidad mixteca de San Juan Mixtepec, Oaxaca, Comunidades campesinas del sur de Tamaulipas.

Las OMS coinciden en que es la presencia cada vez más numerosa de comunidades indígenas lo que legitima y mide los avances de la resistencia de la Red.

⁷³ Entrevista con Aldo González, 17 de junio del 2010.

4.2.3. Percepciones de las OMS en torno al movimiento social

Esta sección aborda las percepciones manifestadas por los entrevistados de la Red en torno a sus motivos de ser, sus formas operativas y las diferencias que impiden formar un solo movimiento junto con la Campaña.

4.2.3.1. Soberanía alimentaria

Para la Red, el problema principal actual en materia de soberanía alimentaria, es la tendencia a industrializar la agricultura en monocultivos de maíz transgénico, en contravención con varios tratados y dictámenes –nacionales e internacionales- que habían ayudado a establecer una moratoria. Los impactos económicos y ecológicos de permitir la siembra a cielo abierto en cualquier región de México, devendrían en un mayor empobrecimiento para los campesinos de subsistencia, que son en su mayoría los campesinos indígenas de México, pues por un lado implicarían la compra cíclica de semilla patentada y paquetes tecnológicos (insumos agrícolas) acompañantes; por otro lado, el polen del maíz transgénico puede transportarse vía aérea varios kilómetros y polinizar variedades locales de maíz, lo cual generaría maíz transgénico que, además de ser rechazado por los campesinos indígenas, arraigados a las características de sus variedades locales, podría implicar demandas de las transnacionales hacia los campesinos por “robo de germoplasma patentado”, situación que se ha dado de manera frecuente en Canadá y Estados Unidos.

La introducción de transgénicos también implica que los paquetes de impulso tecnológico agrícola faciliten la expansión de cultivos transgénicos al incluir este tipo de semilla y los insumos acompañantes que son parte del paquete ofertado por las compañías, obligando por un lado a los agricultores a dejar de lado sus variedades de maíz y los sistemas tradicionales de cultivo y contaminando a los vecinos que no deseen sembrar transgénicos. El paquete de agroquímicos que acompaña a los transgénicos, incluye herbicidas específicos, que permiten el crecimiento del maíz, pero no el de plantas acompañantes; de esta forma, la diversidad de la milpa se reduce y pasa a ser un monocultivo.

Para la Red, la principal amenaza contra la soberanía alimentaria se encuentra en los impactos que tiene la introducción del maíz transgénico y el paquete acompañante, sobre las formas tradicionales de la siembra y sobre las formas de vida

comunitarias, basadas en el intercambio de semilla y un aprovechamiento integral del territorio.

Pero el peligro visualizado por la Red no afecta únicamente a las comunidades indígenas; pese a que son ellas el foco de atención en el movimiento, en realidad, de penetrar la semilla transgénica en las milpas indígenas, se perdería toda la diversidad de maíz que tiene México, lo que ocasionaría una situación irreversible de dependencia que afectaría la dieta de toda la población, pues al perderse gradualmente la gama de semillas nativas de los cereales básicos, los precios y la oferta alimentaria se encontraría en manos de las transnacionales y los agricultores empresariales que puedan pagar por el paquete, lo cual incrementaría la actividad de especulación que, de por sí, existe en torno a los alimentos básicos a nivel mundial.

4.2.3.2. La Red En Defensa del Maíz

Las OMS coinciden en afirmar que la Red no se trata de un movimiento social, sino de un proceso de resistencia que se ha gestado ante la ineficacia y el maltrato del gobierno para con el sector campesino indígena. Pocas organizaciones manifestaron sentir las actividades que se realizan como un movimiento, en tanto que uno de los postulados para la acción consiste en no realizar actividades de cabildeo, que impliquen participar en espacios establecidos por el gobierno, pues *“la experiencia en más de una ocasión, como pasó con la COCOPA o con la ley Monsanto, entre otras, nos dice que realmente usan nuestra participación, la firma de listas de asistencia, para validar que hubo un diálogo y que las leyes o modificaciones que están introduciendo en los programas para el campo o en la semilla transgénica y paquetes tecnológicos cuentan con la aprobación de la sociedad civil, entonces invitan a ONGs y a organizaciones sociales a ir, sentarse y finalmente validar lo que ya tienen planeado, porque acá se trata de privatizar el campo y los recursos naturales, por lo tanto cualquiera que se oponga va a intentar ser neutralizado, y no importa si después la sociedad civil intenta por todos los medios comunicar que no estuvo de acuerdo con el resultado, los medios están al servicio del Estado, los masivos...eso neutraliza la posibilidad de acción de las OSC, y pasó ya con la Campaña y el comité consultivo para la CIBIOGEM”* comenta Evangelina Robles, de Colectivo COA.

La Red ha enfocado sus esfuerzos a difundir entre las comunidades indígenas campesinas el peligro de la semilla transgénica y las alternativas para evitar que éstas entren a las milpas tradicionales: *“es la manera más certera de construir una sociedad que evite que entren los transgénicos, porque el debate no es cómo y dónde pueden sembrarse estos, en realidad es un NO rotundo, porque no se puede y no se debe, menos aún el maíz y menos aún en México, es importante entender que si entran a México con la semilla de maíz transgénica y logran imponer su uso para mercantilizar también la agricultura, entonces pueden hacer cualquier cosa...las empresas y los gobiernos....ésta lucha, por el maíz en México es una lucha por la soberanía alimentaria pero también por la soberanía cultural y la identidad de los campesinos indígenas”* comenta Silvia Ribeiro del grupo ETC.

Para Álvaro Salgado del CENAMI, la actividad de la Red se resume así: *“Promovemos la milpa, y lo hacemos entre quienes pueden hacer milpa, porque no se trata sólo de sembrar maíz, hacer milpa es tener seguridad alimentaria, estar en equilibrio con la biodiversidad, la salud y la cultura milenaria. A la sociedad en general debería de interesarle, pero no es posible con un grupo tan acotado como es la Red el tener varios frentes de lucha, por eso tenemos que concentrar nuestros esfuerzos en conservar las prácticas y las semillas milenarias que han permitido no sólo diversificar el maíz y varios otros cultivos en México, sino ser el país tan diverso que somos y tener estrategias de supervivencia adaptadas al medio, a los distintos medios que hay en cada región del país”*.

La Red considera que los gobiernos y las políticas agrarias que apoyan a las corporaciones que ostentan la patente de las semillas transgénicas y los paquetes tecnológicos para su cultivo, han buscado desestimular la producción campesina y fomentar a través de subsidios la producción industrial de maíz, intensiva en capital e insumos químicos, la dependencia del campesino a los mercados de agricultura industrializada. La alianza de gobierno con las empresas agroindustriales se convierte en un contubernio mutuamente reforzado y avalado por una economía global de libre mercado, de tal forma que, más allá de modificar leyes nacionales, se trata de intentar cambiar el sistema político y económico neoliberal, que valida la destrucción de formas locales de entender y defender el bienestar.

La intención –inexistente para la Red- de incidir ante instancias de gobierno es un desgaste de tiempo y de recursos, pues *“desde el decreto de la ley de semillas del 2007, que hace ilegal el intercambio y la siembra de semilla “no certificada”*

(refiriéndose con eso a semilla no patentada”, quedó claro que aquí se trata de hacer del país un gran mercado de granos para las cinco transnacionales que acaparan las patentes, por ello decidimos que se trata de resistir desde las formas de cultivo y de cultura más tradicionales que se encuentran en la comunidad, para que éstas no se pierdan y permitan conservar la posibilidad de tener soberanía alimentaria en el futuro” comenta Elías Velasco de la ORAB.

La Red ha optado por una resistencia de corte antisistémico, que implica llevar los términos de la lucha a reforzar las relaciones sociales, de producción y de gobierno que, desde la perspectiva de los actores más importantes del movimiento, las organizaciones y comunidades indígenas, son mejores. En esto, se evidencia una lucha de corte antisistémico, que si bien se focaliza en un grupo social acotado: los indígenas, pretende comunicar al resto de la sociedad, que la soberanía alimentaria está en la conservación y el refuerzo de los alimentos y los sistemas productivos tradicionales. Esto se opone contundentemente a la dirección de la legislación actual en materia ambiental, agrícola y agraria promovida por el gobierno, que fomenta el carácter empresarial de la actividad agrícola. Por ello, es contra las políticas de corte neoliberal, que se implementan de forma global, que la Red resiste y a las que, por encima de todo, responsabiliza de la situación de opresión y amenaza que enfrentan las comunidades indígenas en México.

“Los campesinos e indígenas que cultivamos el maíz le estorbamos al sistema, porque el que siembra comunitariamente se nutre con lo que cultiva, pero ellos quieren que no seamos autosuficientes en nuestra alimentación para volvernos dependientes de las empresas y sacarnos del campo. El territorio y el maíz que para nosotros son sagrados, para ellos son una cosa que se compra y se vende. Quieren que olvidemos que el territorio con el maíz y la comunidad es la vida de los pueblos. Quieren que nos rindamos por completo a la cultura del dinero. Y si no lo hacemos, pretenden desaparecernos como pueblos y como campesinos.” Dice Eutimio Díaz del Grupo Indígena de Protección Ambiental.

4.2.3. Organización Social del Movimiento

Las OMS coinciden en afirmar que la Red se trata de una comunidad amplia, en la cual operan ciertas jerarquías, siendo las comunidades y colectivos indígenas los

actores más importantes, pues son ellos quienes toman las decisiones estratégicas para la continuidad del movimiento

La Red no se trata de una comunidad abierta a la participación de cualquier persona u organización: *“debe de haber una invitación directa de una organización participante o bien una solicitud de entrada a la cual se responderá según se discuta en asamblea, en particular para las ONGs, pues tenemos un proceso lento basado en la confianza y en el diálogo constante, con la postura clara de que sean las comunidades quienes definan los pasos a seguir, y esto a menudo entra en conflicto con la forma de trabajo de las ONGs que quieren llegar a imponer su propio ritmo por los compromisos que llegan a tener con financiadores”* comenta Aldo González de la UNOSJO.

Pese a las múltiples funciones de las ONGs, su papel se considera necesario pero no protagónico; son, en palabras de Álvaro Salgado del CENAMI, *“las articuladoras del proceso llamado Red, pero no las tejedoras del mismo”*. Aunque la mayor parte de comunidades y grupos indígenas que integran la Red han llegado por invitación de alguna ONG conocida o con la que han colaborado desde hace ya tiempo, todos coinciden en señalar que las ONGs deben de asumir un papel de supeditación o apoyo a las necesidades de quienes son los actores más importantes, las comunidades y organizaciones indígenas, de tal forma que éstas puedan continuar reflexionando y definiendo estrategias de oposición y resistencia a las políticas que merman la soberanía alimentaria en México.

Las decisiones estratégicas con respecto al movimiento se toman en las asambleas de la Red, que se realizan de manera anual y en las cuales son las comunidades indígenas quienes toman las decisiones sobre la continuidad o inicio de acciones estratégicas. En estos espacios se discute el programa operativo de la Red, aquellas actividades que serán prioritarias para el hacer de cada organización en aras de conseguir el objetivo de *“construir comunidades fortalecidas en sus usos y costumbres, con capacidad y posición de definir su ideal de desarrollo y con ello contribuir a preservar el patrimonio genético y cultural de México”*⁷⁴. Las decisiones que requieren de respuesta inmediata, por surgir ante una coyuntura política o social importante, se toman a la distancia vía correo electrónico o

⁷⁴ Aldo Gonzáles, UNOSJO.

telefónico, principalmente por parte de las ONGs que, cuando pueden, consultan antes con los grupos de base antes de accionar.

La capacidad de las ONGs de establecer comunicación rápida y efectiva entre sí y con otros grupos de la Red, las posibilidades que tienen de elaborar proyectos para permitir la continuidad de la iniciativa y la red de alianzas con que cuentan para mantenerse y al movimiento actualizados con respecto al acontecer en México y el mundo de la regulación que afecta al maíz (incluyendo y primordialmente en materia de transgénicos), les otorga un papel más relevante que el que cualquier miembro de la Red esté dispuesto a aceptar, pues si bien se asume un rol de supeditación y se niega la existencia de liderazgos en personas de las ONGs o incluso organizaciones, es de notar que sin estas OMS la Red tendría un proceso más lento y diluido, quizá como punto de asamblea o de reunión en el Congreso Nacional Indígena, lo cual de poco serviría ante los rápidos cambios en la legislación y procesos políticos concernientes a los transgénicos.

Es interesante notar cómo entre las ONGs hay acuerdo con respecto a que las comunidades son los actores más importantes y no existen líderes, mientras que los integrantes de organizaciones indígenas y los representantes comunitarios que asisten sí identifican líderes representativos de la Red, particularmente a los personajes más públicos de organizaciones campesinas o a las personas de las ONGs más cercanas.

4.2.4. Latencia y visibilidad

Podemos considerar a la red como un movimiento antisistémico que funciona mediante procesos de acompañamiento, entre organizaciones que colaboran para entablar una resistencia integral desde el territorio, construyendo y asegurando la permanencia, en los hechos, de formas de producción agrícola y de gobierno, autónomas.

La Red en Defensa del Maíz trabaja como una red de relaciones sumergidas a lo largo del año, pues cuando no existen momentos movilizadores que propicien la reunión espacio-temporal de sus integrantes, se trabaja en el monitoreo de trazas de trans-genes en las milpas; esta actividad surgió como acuerdo de asamblea cuando, como respuesta a la denuncia de la sociedad civil por la contaminación transgénica en Oaxaca, el gobierno mexicano comenzó a hacer monitoreos en comunidades indígenas para verificar los alcances de la mezcla de transgenes con variedades

nativas de maíz. La Red se opuso contundentemente a que el gobierno entrara a las comunidades a tomar muestras, pues consideraron que podía tratarse de una estrategia de muestreo y robo de germoplasma para ubicarlo en bancos de germoplasma, nacionales o internacionales, sin embargo acordaron realizar un monitoreo interno, el cual estaría a cargo de operacionalizar por las ONGs con capacidad técnica y financiera.

De esta forma, las ONGs de la Red están en constante contacto entre sí y con las comunidades para realizar los monitoreos. Además, ONGs y comunidades u organizaciones indígenas colaboran en proyectos conjuntos diversos, que van desde aspectos de defensa legal, organización de eventos o asesorías agrícolas, lo que implica constancia en el trabajo a lo largo del año. Para las ONGs que no son exclusivamente de investigación (Grupo ETC y GRAIN), las comunidades de la Red son los actores sociales para quienes gestionan recursos y con quienes desarrollan sus proyectos.

Pese a que los momentos de visibilidad no consisten en eventos de amplia difusión a la sociedad en general, ni de ejercer presión mediante grandes movilizaciones para conseguir cambios en materia política, la Red sí considera que ha tenido momentos de visibilidad importantes para difundir su actividad y sus objetivos a la sociedad civil.

Estos momentos, considerados como decisivos o coyunturales por los integrantes del movimiento son importantes para conocer, por un lado, las circunstancias sociales y políticas identificadas como relevantes y activadores para el movimiento, además de permitir entender en ese contexto las decisiones estratégicas que se han tomado. Entre ellos se cuentan, como más relevantes:

- Momento fundacional de la Red. En 2002, el primer taller llamado “en defensa del maíz”, si bien la Red se formaría dos años después, este taller dio a conocer a una amplia gama de organizaciones de la sociedad civil el problema de la introducción clandestina de transgénicos cuyo polen se mezcló con el de variedades nativas, dando lugar a una contaminación del germoplasma en milpas de Oaxaca. Este hecho y el ambiente que se generó a partir del primer taller por los acuerdos tomados y la solidaridad encontrada, dieron lugar a la conformación posterior de la Red.

- Informe de la Comisión de Cooperación Ambiental para América del Norte. Fueron principalmente organizaciones que después participarían con la Red quienes solicitaron a la comisión trinacional de medio ambiente en 2002. El reporte, como se ha mencionado en el capítulo III recomienda negar la introducción de maíz transgénico en México, más que por aspectos científicos de efectos de los transgénicos en la salud humana y ambiental (no conocidos en el momento), por el efecto desestabilizador que podía traer la entrada de variedades homogéneas y patentadas sobre los métodos tradicionales de cultivo como la milpa y otros aspectos socio-culturales basados en el maíz (ceremonias rituales, intercambio de semillas y autosubsistencia). El dictamen del informe (no vinculante) coincidió con los análisis que habían hecho de la situación en los talleres en defensa del maíz, sin embargo al ser ignorado por los tres gobiernos firmantes del TLCAN, dejaron claro a las organizaciones del movimiento que no modificarían su postura para comenzar la introducción de semillas transgénicas, por lo que la Red confirmó la imposibilidad de intentar razonar con argumentos, incluso aquellos con fundamento científico, con el gobierno para posicionar el tema de soberanía alimentaria como incompatible con la entrada de transgénicos.
- Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados. También llamada ley Monsanto porque permite la entrada de transnacionales con semillas transgénicas para ser sembradas y comercializadas en territorio nacional. Se publicó en el 2005, aunque el debate y los intentos para impedir que sucediera iniciaron con el taller inicial. La emisión de esta ley tuvo dos implicaciones para los integrantes de la Red: Por un lado la separación definitiva de organizaciones que posteriormente pasaron a formar la Campaña Sin Maíz no hay País, pues éstas estuvieron de acuerdo en participar en el consejo consultivo mixto para elaborar el reglamento y modificaciones a la ley. La postura de las organizaciones de la Red era de total oposición a la emisión de la ley, por lo tanto participar para implementarla era contravenir los principios articuladores del movimiento y validar mediante la participación, la intención del gobierno por introducir transgénicos al país.
- Ley de Semillas. Publicada en 2007, constituyó, según el CECCAM y Grupo ETC, la compleción del plan privatizador del gobierno mexicano. La ley prohíbe prácticas culturales antiquísimas para los campesinos mexicanos: la

selección, guardado, intercambio, venta o resiembra de semillas de la cosecha anterior. La ley opera prohibiendo a los campesinos poner en circulación libre semillas que no estén certificadas, es decir, semillas que no sean comerciales, exigiéndoles además que si no compran semillas paguen a las compañías un porcentaje por re-sembrar semillas propias.

- Foro “en Defensa del Maíz: los transgénicos nos roban el futuro”. Realizado en febrero-marzo del 2010. Se trató de un evento paralelo a la Conferencia sobre Biotecnologías Agrícolas en los países en Desarrollo (ABCD-10) impulsada por la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). “La discusión en la conferencia era un pretexto para validar ante los ojos del mundo la introducción de transgénicos, con argumentos débiles y falsos” comenta Elías Velasco de la ORAB. La Red realizó un evento alternativo en el museo de la ciudad de Guadalajara, en donde por primera vez, de manera pública y colectiva, organizaciones de la Vía Campesina y la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales convergían en un foro, de manera previa a formar una alianza más definitiva, y encaminándose a una táctica conjunta: la presentación de un caso ante el Tribunal Permanente de los Pueblos.
- 6ta Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA). Durante esta asamblea, realizada en Oaxaca en octubre del 2010, la Red se sumó a la Asamblea con el caso de transgénicos, reforzando una alianza considerada como prioritaria.

Además de los momentos clave, que han sido definitorios para emprender acciones contenciosas de difusión ante la sociedad civil, las ONGs de la Red reconocen eventos puntuales que definieron la dirección de la lucha hacia una resistencia encabezada por grupos indígenas. Estos eventos se pueden considerar como momentos clave en las relaciones sociales del movimiento, que definieron la permanencia o la ruptura con otros actores colectivos, moldeando la configuración social, y con esto, permitiendo a las OMS que permanecieron, definir la estructura operativa y la orientación estratégica del movimiento.

En un primer momento, la convocatoria para la Red fue apoyada por organizaciones campesinas que, un año después, construyeron el Movimiento El Campo No Aguanta Más, de corte totalmente campesino (aunque participaban

organizaciones indígenas locales que se adherían con su membresía a las grandes coordinadoras campesinas). Para la configuración de la Red, la salida de las organizaciones campesinas y la permanencia de las indígenas, implicó una reconfiguración que tuvo influencia en los temas de análisis interno y en las demandas, pues el comunicado que emitió la Red después de la primera reunión, incluía demandas contra la liberación de aranceles para maíz y frijol en el TLCAN, así como demandas por mejores presupuestos de apoyo al campo y contra el retiro de subsidios a productores de bajos recursos y productividad. Estas demandas fueron impulsadas como prioritarias por el MECNAM, que sumó la exigencia de reivindicar los Acuerdos de San Andrés, aunque de manera secundaria.

Al no apoyar este movimiento de corte campesino el EZLN ni el CNI, se definió un punto de ruptura –más- entre movimiento campesino y movimiento indígena. Para la Red era importante mantener la demanda que en primer lugar articuló a los actores que la integraban, que era la oposición contundente a la entrada de transgénicos, por lo que, aunque algunas organizaciones participaron a título individual en el MECNAM, el colectivo no lo hizo. Sin embargo, tampoco estuvo tan ajeno el movimiento a los acontecimientos: muchas ONGs, principalmente CECCAM, en su calidad de asesora técnica de la UNORCA, participaron como grupos de análisis para entender a fondo las propuestas que hacía el gobierno en la construcción de los acuerdos del ANC.

De esta forma, las diferencias entre las organizaciones campesinas en torno a la decisión de firmar o no el ANC, trascendieron a otros ámbitos organizacionales: las ONGs, que habiendo estado al corriente del trasfondo de las negociaciones, hicieron una evaluación propia de las decisiones y formas operativas de las organizaciones campesinas participantes.

Particularmente, la ANEC fue un actor controversial, pues no sólo fue firmante, sino que *“decidió firmar sin haber consultado a sus bases”*, comenta una persona del CECCAM. A esto, se sumó la candidatura y posterior elección, del director de la ANEC por una diputación local en el Distrito Federal. Para varias ONGs de la Red, esto fue *“la gota que derramó el vaso”*, pues consideraban esta acción como un oportunismo político para conseguir beneficios para la organización, no para el movimiento.

A estos dos eventos se sumó una calificación negativa de las organizaciones campesinas que, poco después de la firma del ANC, decidieron convocar a un foro

público en Cancún, para protestar contra la reunión institucional contra la Quinta Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio, que se reunió en Cancún durante 2003, para definir lineamientos políticos para la comercialización y producción agropecuaria, ante los tratados de libre comercio a nivel mundial. Los acuerdos implicaban pactar la eliminación de subsidios en un periodo de tiempo.

Los desacuerdos en torno a las demandas que se ostentarían en el Foro, además de pugnas por el uso de los recursos financieros obtenidos para la realización del mismo, ocasionaron disputas importantes al interior de la Vía Campesina, y resultaron en la realización de dos eventos públicos: por un lado el Foro Indígena, y por otro el Foro Campesino. En cada uno participaron organizaciones campesinas, pero el MECNAM solamente en el campesino. Nuevamente en estas disputas, la ANEC tuvo un papel protagónico, pues pugnaba por una posición de negociación, en contraposición a la marcada por la Vía Campesina Internacional, y la directiva nacional de la UNORCA, que era una total oposición a la posibilidad de aceptar los tratados de libre comercio y sus lineamientos políticos derivados. Cada visión estratégica tuvo aliados, sin embargo, el posicionamiento inicial surgió de estas dos instancias.

La evaluación sobre las rutas de acción de la ANEC y su director, en lo tocante a participar en lo sucesivo con esta organización, por parte de la Red, correspondieron a las ONGs, que hicieron una evaluación mas integral, al estar presentes en los momentos de deliberación entre las organizaciones campesinas, tanto en el MECNAM como en la preparación del foro contra la OMC.

Cuando, tres años después, el CONOC, conglomerado de organizaciones campesinas derivado del MECNAM, convocó a la sociedad civil amplia para conformar la Campaña, que posteriormente sería llamada Sin Maíz no Hay País, las ONGs asistieron, con reservas para hacer compromisos de continuar participando: *“básicamente fuimos a ver qué proponían y cómo iba a estar la cosa, pero nos dimos cuenta de que ellos ya tenían su agenda, sólo nos invitaban a sumarnos, pero no a construir desde ceros una agenda”* comenta Álvaro Salgado del CENAMI.

Si las ONGs informaron a la asamblea siguiente de la Red sobre la Campaña, es algo que las organizaciones indígenas no recuerdan, por lo que afirman que no se abordó ese punto, aunque, de cualquier forma, hubieran decidido no participar, pues sus tácticas –las de la Campaña– incluyen la negociación política, que se encuentra fuera del repertorio táctico avalado por las orientación estratégica de la Red.

4.2.5. Diferencias entre iniciativas

La Red y la Campaña difieren en configuración social, en su organización social y en las decisiones estratégicas que toman; sin embargo, a menudo reaccionan ante los mismos eventos políticos, aunque de manera diferenciada.

De esta forma, por ejemplo, en Guadalajara como respuesta a la conferencia de la FAO “Biotecnologías agrícolas en los países en desarrollo: opciones y oportunidades en cultivos, silvicultura, ganadería, pesca y agroindustria para hacer frente a los retos de la inseguridad alimentaria y el cambio climático”, que se llevó a cabo en marzo del 2010, cada iniciativa organizó un foro alternativo abierto al público, pero pese a que algunas organizaciones de ambos movimientos dialogaron para explorar las posibilidades de hacer algo único conjunto, no se llegó a un acuerdo.

La Red hizo el foro público en alianza con la Vía Campesina de Norteamérica y la ANAA; la prioridad del evento fue dar el micrófono a los investigadores que son parte de estos movimientos, así como a los campesinos e indígenas que constituyen la base social, para que compartieran las experiencias que les llevaron a formar parte de cualquiera de estos colectivos. Los campesinos de Canadá y Estados Unidos compartieron las demandas de que han sido sujetos, por parte de Monsanto, cuando sus cultivos fueron polinizados por un trans-gen cultivado por vecinos. Ellos mismos hablaron de las rupturas que su decisión de no sembrar transgénicos significaron en la relación con sus vecinos, en ocasiones amistades de décadas o generaciones familiares; las fracturas se debieron: 1) a la contaminación con los genes, y 2) a la invasión de las “malezas” que provenían de semillas de los cultivos no transgénicos, pues al no controlar con agroquímicos el crecimiento de plantas asociadas, la invasión de flora y fauna es inevitable, afectando a los campos vecinos. Estas rupturas en las relaciones vecinales o comunitarias, hicieron evidente al público y a otros integrantes de la Red, cómo la introducción de transgénicos afecta al tejido social, y no únicamente a la producción o a la economía.

De esta forma, el espacio de la Red, aunque abierto al público, sirvió para que toda la comunidad del movimiento, conociera las experiencias en torno a transgénicos que están viviendo los demás. Estas experiencias se documentaron y se

expusieron el último día en una audiencia pública, un tribunal simulado en el cual se enjuiciaba a las transnacionales por dañar las comunidades.

El foro de la Campaña, fue un espacio al que se invitó a múltiples académicos y algunos activistas, para exponer a la sociedad en general, argumentos científicos que subyacen a la publicidad sobre transgénicos, enfatizando los efectos sobre la salud y los niveles falsos de productividad que, según las transnacionales, son el principal beneficio de su siembra en comparación con la de semillas nativas.

Mientras que para la Red lo importante era ampliar el conocimiento sobre los transgénicos y sus efectos a la comunidad del movimiento, para la Campaña era de máxima importancia difundir a la sociedad en general información de la misma índole, sin embargo, en ambos casos se necesitaban ponentes distintos para validar sus argumentos: poco habrían servido los científicos en el espacio de la Red, cuando lo necesario era escuchar las experiencias por parte de quienes las habían vivido; mientras que la sociedad en general era más propensa a legitimar información que procedía de científicos cuyo currículum validara los datos duros que se presentaban al consumidor.

Una vez más, las arenas de incidencia fueron diferentes, mientras que la Red procuraba material para su táctica de cabildeo ante instancias internacionales, reafirmando sus demandas y su resistencia entre la comunidad amplia del movimiento, la Campaña buscaba adhesiones de la sociedad civil, principalmente como consumidora, para tener apoyo en sus demandas contra los transgénicos ante el gobierno mexicano, principalmente.

4.4. Campaña Sin Maíz no hay País

4.4.1. Comunidad del Movimiento Social

Desde la creación de la Campaña en 2007, a partir de una convocatoria inicial emitida por el CONOC y otras organizaciones campesinas y ONGs, ante el aumento en los precios de la tortilla y la próxima liberación total de aranceles para maíz blanco y frijol por el TLCAN, se adhirieron a la organizaciones campesinas amplias de índole nacional, el sindicato de electricistas, la CNC y múltiples ONGs de diferentes Estados de la República, además de personalidades públicas del mundo artístico y la academia, a título individual.

Esto le daba a la Campaña un carácter muy amplio, pero también representaba dificultades para la planeación y la toma de decisiones, lo cual se discutió ampliamente durante las primeras reuniones, a las que asistía una amplia gama de organizaciones e la sociedad civil. Una vez descartada la estructura centralizada, con directivas rotativas y comisiones de trabajo que son típicas de las organizaciones campesinas, se pensó, de forma colectiva en tener un equipo coordinador integrado por representantes o comisionados de todas las organizaciones que pudieran asistir a las reuniones de planeación, con una invitación abierta a la participación de todos los sectores de la sociedad.

Pese a que se realizaron también lanzamientos estatales de la Campaña en siete Estados de la República, el grupo coordinador se centralizó en la Ciudad de México por ser la ciudad donde más organizaciones tienen oficinas de dirección o coordinación.

El documento de posicionamiento y adhesión de la Campaña fue firmado por 300 organizaciones de la sociedad civil, incluyendo organizaciones campesinas, no gubernamentales, colectivos juveniles, además firmaron a título personal doscientas personas, ciudadanos, académicos y personajes del medio artístico⁷⁵. Estos adherentes, si bien no se integraron al equipo coordinador ni participan de manera activa y constante en la construcción de la Campaña, reiteran su adhesión en los eventos públicos, como voluntarios, firmantes, ponentes, representantes o embajadores, acompañantes en las marchas, y de varias formas en los múltiples eventos que organiza la Campaña.

El universo de organizaciones y personas que, pese a no participar activamente en la Campaña se adhieren y apoyan en momentos puntuales, constituyen la comunidad del movimiento, a manera de alianzas y simpatizantes que, cuando lo consideran necesario, o ante un llamado de la Campaña, manifiestan su apoyo. Su presencia es intermitente, interactuando de manera personal o vía Internet, con sugerencias e intercambios de información relevante para la continuación del movimiento.

En la comunidad del movimiento, las organizaciones campesinas estatales son las más numerosas y apoyan a la Campaña en momentos clave de movilización y en la realización de eventos estatales o regionales. Estas organizaciones asisten a las

⁷⁵ Documento de posicionamiento y adhesión de la Campaña, disponible en <http://www.sinmaiznohaypais.org/?q=node/69>

reuniones del equipo coordinador cuando la visita de algún dirigente coincide con una fecha de reunión, y de esta manera se mantienen al corriente del estado actual del movimiento, manifestando inquietudes o aportando ideas. Sin embargo la falta de participación en las decisiones del equipo coordinador, ocasionan inconformidades difíciles de resolver.

Entre las organizaciones campesinas entrevistadas, CNOC, MAIZ, CNPA y El Barzón, concordaron en sentirse inconformes por el grado de centralización que se ha generado, lo que les impide posicionar constantemente sus demandas concretas, pues *“son principalmente las ONGs las que han pasado a estar siempre presentes, porque están aquí y porque pueden darse el tiempo, ellas no tienen que estar trabajando en el campo y dedican sus fuerzas a la planeación y a las reuniones, pero no al apoyo de acciones en los Estados”⁷⁶*; aunque también ONGs que suscriben a la Campaña, pero que se encuentran fuera del D.F comentan un *“sentimiento de exclusión, pues si bien queda claro que no podemos estar en todas las reuniones, la falta de relatorías o comunicaciones de las reuniones de coordinación, aumenta cada vez más el abismo y no permite una continuidad en el seguimiento”* comenta Claudio Figueroa, de Enlace Comunicación y Capacitación, Chiapas.

La Campaña simpatiza con otros movimientos sociales, ninguno de los cuales se ha constituido como aliado permanente, aunque la participación conjunta sea considerada relevante en determinados momentos de efervescencia política, como fue el caso del Movimiento Nacional por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas⁷⁷, del cual se desligó por la aceptación de expresa de éste último movimiento hacia las semillas transgénicas; la alianza duró la primera etapa del movimiento y dio lugar a una movilización de cerca de un millón de campesinos desde varios estados de la República hacia el zócalo capitalino. Ante la disolución del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) en 2010 por parte del presidente Felipe Calderón, el movimiento emprendido por los ex -empleados sindicales, ahora de manera independiente, contó con la simpatía recíproca de la Campaña y volvió a haber una convergencia para la movilización.

Además de invitar a representantes de otros movimientos sociales en eventos públicos, para mostrar solidaridad hacia situaciones indignantes por parte de

⁷⁶ Entrevista a Pablo Gómez, coordinador nacional del Barzón 23 de julio del 2010.

⁷⁷ En este movimiento participaba la CNC y los sindicatos de electricistas, telefonistas y maestros.

gobiernos o de sectores empresariales, no se han generado alianzas permanentes para desarrollar estrategias de lucha conjuntas con otros movimientos, por lo que no se consideran parte de la comunidad del movimiento.

La comunidad de la Campaña es muy amplia gracias a la convocatoria inicial que tuvo, a la que se adhirieron organizaciones internacionales como Greenpeace y Oxfam, quienes por acuerdo del equipo coordinador inicial, convocaron a su base de contactos con personalidades del medio artístico y motivaron a las demás a hacer lo mismo con su base de contactos “notables⁷⁸”. De esta forma las personalidades públicas, principalmente actores y académicos que se han adherido, hacen referencias eventuales a la Campaña y a sus demandas, consiguiendo ampliar constantemente el espectro de público que se siente identificado y simpatiza con el movimiento.

Los eventos mediáticos, principalmente los de carácter artístico que ha organizado la Campaña, han permitido ser reconocida entre grupos de estudiantes y de jóvenes activos se sienten identificados y participan constantemente del espectro de actividades de la Campaña, anotándose como voluntarios en la página de Internet o incorporándose a la lista de correos por lo que existe con ellos un intercambio o flujo constante de información, sin que esto implique una participación constante y activa.

En la comunidad del movimiento, hay organizaciones de consumidores, u ONGs que fungen como espacios de información sobre calidad de los alimentos industrializados o importados; son también redes de comercio para vincular la producción de alimentos etiquetados como parte del mercado justo o ambientalmente amigable, con los consumidores que buscan este tipo de sello en sus alimentos.

4.4.1.1 Intelectuales y Medios de Comunicación

Para la Campaña es particularmente importante la presencia en la comunidad de académicos simpatizantes, pues el constante intercambio de información aporta argumentos científicos que son empleados para respaldar las demandas que se ostentan.

⁷⁸ Término empleado para referirse a personalidades académicas, artísticas, activistas o públicamente relevantes por algún motivo.

Además de académicos independientes que participan con regularidad a título personal en la Campaña, es relevante la presencia de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS), una agrupación de investigadores interdisciplinarios de distintas universidades del país (principalmente UNAM y UAM pero también de instituciones gubernamentales), que tienen entre sus ejes de investigación los impactos sociales, económicos y ecológicos de los transgénicos y las políticas de apertura comercial y disminución de subsidios en materia agropecuaria. Con los académicos e intelectuales existe un constante intercambio de información para construir el archivo de argumentos científicos que emplea la campaña para sustentar sus demandas, estos argumentos son de índole científico y permiten justificar la oposición a los transgénicos, a la importación de productos básicos y alimentos industrializados, a la disminución de apoyos al campo y las demandas en materia legal para exigir políticas de apoyo a los mercados internos y a la producción campesina, no tecnificada.

Para la Campaña es importante mantener una presencia constante en los medios de comunicación, para conservar niveles importantes de incidencia en la arena de la sociedad civil, e indirectamente, en la sociedad política. Por ello, apuesta fuertemente a emitir comunicados constantes en diferentes medios de comunicación que, además, sirven para convocar a la sociedad a los eventos públicos que organiza.

Con el fin de tener una comunicación constante y efectiva en la arena de la sociedad civil, organizaciones y personas de la campaña coordinan y ocupan constantemente el suplemento mensual “*La Jornada del Campo*”, del periódico *La Jornada*; las acciones de la Campaña se difunden ampliamente en las revistas o publicaciones periódicas y páginas de Internet de las OMS, además de contar con una página propia: www.sinmaiznohaypais.org, constantemente actualizada.

La Campaña también tiene una fuerte apuesta por emplear espacios radiofónicos, tanto a nivel comunitario, para lo cual uno de los proyectos que impulsa fuertemente es la formación de comunicadores rurales comunitarios, que emplean estaciones locales de radio para comentar temas relacionados con los ámbitos de acción de la Campaña (entre otros); también se cuenta con invitaciones a los programas de radio que tienen algunas OMS de manera constante en la radio pública de la Ciudad de México (GEA en Radio educación, RMALC en Radio Ciudadana de manera constante), en estos se difunden actividades y se invita a la gente a sumar sus firmas en los documentos de posicionamiento político.

4.4.2. Organizaciones del Movimiento Social

Como se ha mencionado, son muchas las organizaciones que integran la campaña, y variable el papel que juegan en la planeación y actividades de la misma, dependiendo de las prioridades organizacionales y las convergencias de los proyectos de cada OMS con los temas impulsados por la Campaña en un momento dado. De esta forma la participación de las organizaciones en el equipo coordinador es intermitente, combinando etapas de presencia constante con otras de abandono temporal, dependiendo de las prioridades de cada organización. Como la Campaña es *“una caja de resonancia en donde todos los proyectos organizacionales encuentran un eco para promover visiones diversas en torno a la soberanía alimentaria⁷⁹”*, cada organización ocupa, de manera estratégica, el espacio.,

Se consideran organizaciones del movimiento social aquellas que, siendo convocantes desde el inicio del movimiento, han estado constantemente activas en las reuniones de planeación y decisión estratégica a las que asistió la investigadora en el periodo antes mencionado; éstas organizaciones contribuyen a la construcción de las demandas y dotan al colectivo de repertorios estratégicos, pues cada una aporta elementos de su experiencia previa al momento de discutir las rutas de acción. Las OMS del movimiento social son organizaciones campesinas y ONGs.

Organizaciones Campesinas

Todas ellas de índole nacional, con presencia en más de cinco Estados de la República, pues agrupan a pequeñas organizaciones o grupos de productores a nivel regional, impulsando las cadenas productivas o la comercialización en directo, evitando los intermediarios. Pese a que El CONOC fue convocante, no todas las organizaciones que lo integran participan activamente, destacándose la presencia constante de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras (ANEC), cuyo cuadro administrativo-técnico, que radica en la Ciudad de México y funciona como una ONG, por estar compuesta de profesionistas. La ANEC representa a 219

⁷⁹ Catherine Marielle, Grupo de Estudios Ambientales

“empresas económicas” que suman 50, 000 pequeños y medianos productores de granos básicos en 17 Estados de la República.

MAIZ (Movimiento Agrario Indígena Zapatista) es la otra organización del CONOC que participa activamente en la Campaña, una organización que agrupa a grupos indígenas y campesinos en 7 Estados de la República.

El CONOC participa mediante su secretaria ejecutiva, basada en el Distrito Federal, quien intenta compaginar los objetivos de incidencia en materia de políticas y presupuestos participativos para el campo, con los temas que maneja la Campaña, sin embargo resalta que es difícil lograrlo, pues implica resolver distintos niveles de dirección y toma de decisiones para posicionar efectivamente todos los intereses involucrados en la Campaña, y hacer del movimiento un espacio de lucha adecuado a las necesidades de cada organización. El CONOC funciona con una asamblea de socios, integrado por los representantes de cada una de las seis organizaciones que lo integran, las cuales a su vez funcionan con asambleas generales integradas por representantes estatales. Cada organización amplia del CONOC tiene subsidiarias en varios Estados de la República, por lo que cada instancia de representación implica una generalización de los temas más importantes que constituyen lineamientos generales para la acción de cada organización.

Los niveles de generalización que se manejan para hacer manejable la convivencia y los acuerdos para incidir en políticas y presupuestos de apoyo al campo, principal motivo que aglutina a las organizaciones, provocan fricciones en torno a la ocupación del espacio Campaña, pues no todas tienen oficinas en el Distrito Federal (FDCh) y no todas agrupan a productores de maíz o granos básicos (CNOC, AMUCCSS, Red MOCAF), esto implica que no todas vean a la Campaña como un espacio útil para posicionar los temas que afectan a sus asociados, e incluso que sean temas controversiales al no ser inclusivos pues “*no todos somos ni maiceros ni milperos*” comenta Víctor Quintana del FDCh; esto se puede leer como un sentimiento de exclusión al no sentirse incluidos en un movimiento que tiene como estandarte al maíz y que promueve la milpa como sistema productivo; para Gustavo Sánchez de Red Mocaf, la participación en la Campaña se hace muy desgastante, pues “*las organizaciones de base no ven un beneficio para estar participando, y sí es muy desgastante hacerlo a título personal, sobre todo cuando los compromisos organizacionales son tantos*”. Entonces, en la Campaña participa el CONOC como

conglomerado, pero sin que esto implique un compromiso real de las organizaciones individuales, regionales o estatales.

Para la secretaria técnica del CONOC tampoco es sencillo, pues *“si bien la Campaña toca uno de los ejes centrales de trabajo del CONOC, la soberanía alimentaria, es difícil tratar de involucrar a las organizaciones, o justificar la participación siempre, a menudo el tema ni se toca en las asambleas generales, porque son de poco tiempo y una amplia agenda...aún así yo participo con gusto porque me parece súper importante no dejar el movimiento”*.

Las otras organizaciones campesinas que no son del CONOC, CNPA y AMAP (Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos), también experimentan tensiones a su interior, pues las agrupaciones locales no ven un apoyo real de la Campaña a las necesidades del campo y sienten que se trata de un movimiento centralizado en manos de las ONGs.

Todas las organizaciones campesinas de la Campaña participan como conglomerado en el Consejo Mexicano para el Desarrollo Sustentable, en donde anualmente presentan propuestas de presupuestos y modificaciones programáticas, tema que coordina a las organizaciones de forma más constante que la Campaña misma.

Organizaciones No Gubernamentales

En la Campaña convergen ONGs de Desarrollo (Instituto de Estudios para el Desarrollo Maya, A.C, Grupo de Estudios Ambientales A.C, Red de Comunicadores Boca del Polen), ONGs de Derechos Humanos (CDH Fray Francisco de Vitoria, Red Todos los Derechos para Todos) y ONGs de investigación (Greenpeace, Semillas de Vida A.C). Cada una de estas organizaciones trabaja desde perspectivas distintas el tema de alimentación y soberanía alimentaria, por lo que, desde ópticas laborales diferenciadas, ven al movimiento como un espacio para dar resonancia a sus demandas y proyectos institucionales.

Cada ONGs participa en el movimiento una con sus proyectos particulares, y no colaboran fuera del espacio en actividades conjuntas, salvo en contadas ocasiones que son pertinentes para los respectivos proyectos, por ello, el trabajo que se ha acordado en la Campaña, en ejes temáticos, es ideal para que cada organización colabore en el que es más afín a la perspectiva organizacional.

El común denominador para las ONGs es considerar que su función en el movimiento es el de colaborar con su experiencia y especialización para construir un proyecto colectivo diverso en temas, en tácticas y en frentes de lucha, por lo que su relación con las organizaciones campesinas es de horizontalidad, de colaboración en la Campaña y para los objetivos del movimiento. Si bien existen colaboraciones puntuales para apoyo técnico o para apoyar a la organización en eventos especiales, las ONGs no tienen relación con las organizaciones más locales representadas por las grandes coordinadoras nacionales en la Campaña, pues los proyectos de las ONGs de desarrollo, con excepción de Boca del Polen, que capacita a comunicadores jóvenes de las organizaciones campesinas, no involucran a los actores que constituyen la base social del movimiento, desvinculando su papel en la Campaña de su función social para promover o desarrollar actividades de desarrollo rural.

Las ONGs de derechos humanos enfocan su participación a la promoción del derecho a la alimentación, y a dar sustento a las demandas de la campaña, empleando su amplio conocimiento de los tratados internacionales firmados por el gobierno en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

Una función particularmente importante de las ONGs, es la de aportar un vasto repertorio táctico y argumental para discutir y decidir las estrategias que son adoptadas en cada momento político relevante para el tema de soberanía alimentaria en México. Sin embargo, esta función no deja de ser controversial al interior de la Campaña, principalmente para las organizaciones campesinas; la constante participación de las ONGs en el equipo coordinador, presentes de forma activa a lo largo del año, lleva a que sean consideradas también como organizaciones que monopolizan y centralizan la toma de decisiones, enfocando éstas a resolver sus temas y objetivos de trabajo; la centralización de la Campaña ha sido un importante tema de debate interno, pues de acuerdo con representantes de organizaciones campesinas, el equipo coordinador parece ser la Campaña misma *“y es que falta coordinación para que las ONGs salgan a apoyar las actividades en el campo, aunque no haya recurso (monetario), habría que buscarlo para que no nada más estén decidiendo por todos, sino que apoyen las acciones estatales, son actores necesarios, pero no para coordinar, sino para acompañar, la Campaña debería de ser su proyecto y no sólo un proyecto”* comenta Pablo Gómez, del Barzón.

Las ONGs hacen de la Campaña parte de sus proyectos de trabajo, ya sea incluyendo formalmente los temas de la Campaña como aspectos de su trabajo

sometido a financiamiento, o bien incluyendo a la Campaña como parte o componente de uno de sus proyectos. Esta presencia constante de las ONGs dentro del equipo coordinador o de liderazgo no siempre es bien visto por las organizaciones campesinas y da lugar a conflictos, pues *“hacen de la Campaña un proyecto de trabajo que no es compartido ni usado para enriquecer a las organizaciones campesinas...falta que las ONGs no nada más se metan a la discusión de estrategia política, sino que le entren al trabajo de campo, que parte del financiamiento que tienen y que usan para la Campaña lo empleen para acompañar los proyectos de las organizaciones campesinas”* dice Fernando Celis de la CNOC.

Los proyectos de cada organización convergen en la Campaña, pero no en la acción, es decir *“no existe un caminar conjunto de ONGs y organizaciones campesinas fuera de los acuerdos de Campaña...y eso no está bien, no es de beneficio para el movimiento porque no lo fortalece”* considera Carlos Beas de la UCIZONI.

4.4.3. Percepciones en torno al movimiento social

Esta sección recupera las percepciones de las OMS y algunas organizaciones de la comunidad en torno a la Campaña como movimiento, su papel como actor social, político y objetivos de lucha. La información se presenta a partir de las entrevistas con representantes de diecisiete organizaciones que son parte del equipo coordinador (diez de ellas) o de la comunidad del movimiento (siete).

4.4.4.1. Soberanía Alimentaria

Los ejes de trabajo de la Campaña reflejan con precisión la integralidad que el conjunto de OMS da al concepto de soberanía alimentaria. Estos ejes son: Política pública, transgénicos, derecho a la alimentación, agricultura sustentable y comunicación.

Para las OMS (campesinas y ONGs), la soberanía alimentaria es un concepto multidimensional que necesariamente requiere de políticas públicas de apoyo al campo, en materia productiva y de apertura de mercados nacionales e internacionales para los productores campesinos de México, priorizando el consumo de alimentos

nacionales, producidos con sistemas orgánicos o con insumos químicos de bajo impacto para la diversidad del sistema de cultivo o con el entorno ambiental. El primer lema de la Campaña “alimentos campesinos para todos” expresaba con claridad la necesidad de fomentar la producción nacional para abastecer el consumo, priorizando esto sobre la importación de alimentos procesados o altamente subsidiados por los gobiernos del Estados Unidos y Canadá, cuyos costos son menores justamente por eso. En materia de políticas agrícolas, la firma del TLCAN implicó una competencia desleal para los productores de granos básicos, liberando los aranceles que igualaban los precios de compra por implicar un cobro de importación para los países exportadores. A raíz del TLCAN se redujeron drásticamente los subsidios a los productores campesinos, y se incentivó la producción asociada con agroindustrias, empleando el paquete tecnológico provisto por estas, que implica un uso intensivo de insumos químicos, además de convenios en los que el agricultor compromete su producción final a la empresa por un precio fijado de antemano. Estas prácticas fueron nocivas para los agricultores campesinos, pues ante la falta de apoyos para la producción, la única alternativa viable era rentar su tierra o venderla a las agroindustrias, cambiando métodos de siembra y cultivos tradicionales por los paquetes tecnológicos.

Los transgénicos, defendidos principalmente por ONGs son otro elemento que transgrede las posibilidades de soberanía alimentaria, por tratarse de semillas no nativas, cuyo germoplasma es propiedad de la compañía que lo vende, por lo que no se puede usar el grano de cosecha para el siguiente ciclo de cultivo, bajo pena de ser demandado. Los transgénicos están acompañados de un paquete legislativo que implica graves restricciones para las formas tradicionales de cultivo campesinas: además de pagar por la semilla, se tiene que comprobar que la semilla que se cultiva está registrada en una base nacional de grano certificado, con permiso para ser cultivado, con este fin, cada productor que desee sembrar sus variedades tradicionales, debe de certificarlas ante la SAGARPA. De encontrarse trans-genes en los cultivos campesinos, corresponde a los productores demostrar que se trató de polinización accidental, y no de un uso ilegal (no pagado) de semilla sin haber realizado el correspondiente pago de derechos a la empresa que ostenta la patente. Los cultivos transgénicos implican el uso de paquetes tecnológicos que convierten a la milpa en monocultivo de maíz, pues de no aplicarse los herbicidas que acompañan a la semilla, se pierde la garantía de productividad que otorga la compañía que vende la

semilla. Para las ONGs, que son las OMS que impulsan constantemente este tema, un argumento determinante, es la alta incertidumbre científica que existe respecto a los impactos a la salud derivados del consumo de ingredientes transgénicos, una vez que se han demostrado los efectos que su siembra tiene sobre las poblaciones de fauna edáfica asociada a los cultivos⁸⁰.

Para el conjunto de OMS, las políticas públicas de libre mercado atentan contra las formas campesinas tradicionales de producción, al convertir a las instituciones que en otro momento vigilaban por el desarrollo rural, en instancias de vigilancia del orden para una agricultura empresarial, a la cual sólo pueden entrar productores con cierta capacidad económica, pues los apoyos para campesinos de subsistencia no existen. La soberanía alimentaria entonces implica integralidad para apoyar la producción tradicional, con semilla tradicional que permita a los campesinos vivir de su trabajo, y a los consumidores del país acceso a los alimentos que producen estos campesinos. Por ello, el eje de derecho a la alimentación trabaja para que éste sea reconocido constitucionalmente, lo que cerraría el ciclo de garantizar a los mexicanos acceso a alimentos culturalmente adecuados, apoyando así el círculo productivo y de consumo que va “del campo a la mesa”.

El eje de agricultura sustentable promueve, entre las organizaciones campesinas prácticas para reducir los insumos químicos, que además de tener impacto sobre los suelos y por ende sobre posteriores ciclos de cultivo, implica costos adicionales para su aplicación. Este eje aporta a la idea de soberanía alimentaria la necesidad de disminuir la dependencia de insumos externos a la unidad campesina para la producción, sobre todo cuando esos insumos son producidos por las mismas agroindustrias transnacionales ocasionan el gradual empobrecimiento de los suelos y la cada vez creciente acaparación de terrenos y formas de cultivo.

El eje de comunicación se concentra en trabajar para que todos los temas de la campaña tengan espacios de difusión hacia la sociedad civil, pues además de una producción sustentable y políticas de apoyo, es necesario, en esta visión de soberanía alimentaria, una sociedad que apoye y refuerce la producción campesina, para integrar al sector como parte activa de la sociedad nacional.

⁸⁰ Saxena, D, S. Flores y G. Stotzky, 1999. Insecticidal toxin in root exudates from Bt corn”. *Nature*, 402 (6761):480. Entre otros artículos. Para una recopilación de información al respecto, consultar Marielle y Peralta, 2007.

Las OMS comparten la visión de que todos estos temas deben de trabajarse con la sociedad civil, para incidir en sus opiniones como ciudadanía y como consumidores, pero también deben de llevarse a la participación en espacios de gobierno, con la intención de posicionarlos como demandas.

Pese a que todas las OMS comparten la visión en torno al uso de la vía de negociación política, ésta es una condición indispensable para las organizaciones campesinas, cuyo objetivo es mejorar las condiciones de vida y de mercado para los campesinos que son parte de la organización.

Para las ONGs, conseguir el respaldo de la sociedad civil para maximizar el refuerzo a sus demandas, además de hacer extenso el ideal de sociedad que en primer lugar llevó a la organización a constituirse como tal, buscando cambios específicos en el funcionamiento de la sociedad, consiste una condición indispensable de éxito para lograr su función social.

4.4.4.2. Campaña Sin Maíz no hay País

Para las organizaciones que participan en la Campaña, ésta se trata de un movimiento social nacional que juega un papel protagónico en la exigencia por la soberanía alimentaria nacional: el reposicionamiento del papel del campo en la vida económica y social del país y la lucha contra los transgénicos.

Al inicio de la Campaña, la decisión colectiva fue no generar un organigrama, designando directivas o coordinaciones específicas en manos de algunas organizaciones, para así evitar liderazgos y estructuras rígidas, y permitir el libre flujo de ideas y personas en la construcción y ejecución de los planes estratégicos.

La Campaña se constituyó como un espacio plural con invitación abierta para las organizaciones de la sociedad civil, campesinas, personas o funcionarios de gobierno que quisieran integrarse, ya sea a actividades particulares o al equipo coordinador, para lo cual era suficiente estar presente en las reuniones y aportar ideas que fueran evaluadas por el conjunto del equipo como valiosas para la orientación del movimiento, en una dinámica democrática para el aporte y selección de opciones estratégicas.

Para el equipo coordinador, formado actualmente por diez organizaciones, pero de constitución constantemente variable, es tema importante de reflexión la centralización de acciones y toma de decisiones de la Campaña, pues es constante la

ausencia de representantes campesinos en las reuniones de coordinación y planeación; si bien cuatro organizaciones campesinas participan en el equipo, la comunicación de los representantes en el Distrito Federal con los grupos de base en los Estados respecto a los temas referentes a la Campaña es escasa: *“es muy difícil que con las formas de comunicación que tenemos con las organizaciones de base, que son el teléfono y el correo electrónico, podamos abordar todos los pendientes, entre ellos la Campaña, porque a las organizaciones les interesa más ver cómo van las gestiones de proyectos o de recursos que las actividades de la Campaña...de esta solo hablamos cuando se trata de algo muy importante como una movilización o la reacción a un problema específico”* dice Alejandro Cruz de MAIZ.

Uno de los papeles que se ha pensado para el equipo coordinador ante la falta de comunicación con los grupos y organizaciones campesinas simpatizantes de los Estados del interior de la República, es constituir un “cono de resonancia” o enlace para difundir las necesidades y posturas de las organizaciones estatales rurales, *“pero eso también anularía nuestros proyectos como organizaciones, que son valiosos y son los que en gran parte ayudan a posicionar la Campaña como actor social relevante”* comenta Rosario Cobo del Instituto Maya.

Existen opiniones diversas en torno al equipo coordinador, mismas que han sido abordadas de manera abierta y frontal en las reuniones, pero si bien todas las organizaciones y personas de la comunidad son consultadas vía correo electrónico sobre las fechas de reunión, pocos contestan, y pocos son constantes. *“Si no están presentes, es muy difícil que se toquen sus puntos de interés, y en ese sentido la Campaña es de quien la trabaja”* comenta Víctor Suárez de la ANEC.

Para organizaciones simpatizantes, principalmente en el norte del país, el problema es concentrar el tema de la campaña alrededor del maíz y querer usar a la milpa como estandarte, *“pues en el norte tenemos agricultores grandes que si bien son maiceros, no se asumen ni como milperos ni como campesinos, entonces no sienten que la campaña sea un espacio ni que los represente ni con el cual se identifiquen”* comenta Pablo Gómez del Barzón; Víctor Quintana dice *“habría que hacer de la campaña un espacio que defienda la agricultura campesina como algo diverso, algo que abarca a varios tipos de productores y de productos, pero para esto hay que regionalizarla, sacarla del D.F y darle un tono distinto, en el que haya más acompañamiento y difusión estatal para que se reflejen las problemáticas en los Estados”*.

Por ser un espacio tan diverso en actores y regiones, los conflictos o divergencias surgen frecuentemente en torno a temas de inclusión y dirección de la Campaña, sin embargo la dificultad para lograr comunicación efectiva que se refleje en la re-modelación del espacio de toma de decisiones del movimiento (por excelencia, las reuniones del equipo coordinador), dan lugar a alejamientos por parte de organizaciones que sin manifestar sus inconformidades, dejan de responder a las comunicaciones, sin que esto implique una desvinculación de la organización con el movimiento.

Durante 2008, segunda etapa de la Campaña se realizaron asambleas estatales encaminadas a la Gran Asamblea Nacional por la Soberanía Alimentaria, en estas cada organización mayor impulsó la reunión de las organizaciones locales para discutir la pertinencia y posibilidad de apoyo de la Campaña como movimiento nacional a la labor local. Además, comitivas de 13 Estados de la República asistieron a la asamblea y discutieron en mesas temáticas el programa de trabajo que debería de seguir la Campaña para apoyar efectivamente en la lucha las necesidades de las organizaciones más locales. *“Este fue el único momento de reflexión colectiva y realmente inclusivo que ha tenido la Campaña, sin embargo los resultados fueron muy pobres, las conclusiones muy grandes y no se han operativizado, todo se quedó en el papel”* según Martín Velázquez de AMAP. Este momento fue el único de reunión entre las grandes y pequeñas organizaciones de la Campaña, pues asistieron comisiones de todos los niveles de las organizaciones, y junto con las ONGs se discutieron los principales temas de la Campaña.

4.4.5. Organización Social del Movimiento

He mencionado ya que la Campaña trabaja y se reúne constantemente mediante un equipo coordinador que funciona también como equipo de liderazgo, en tanto que toma decisiones importantes ante momentos coyunturales, discute las decisiones estratégicas y ejecuta gran parte de las actividades acordadas, procurando mantener la comunicación con el resto de organizaciones que son parte de la comunidad.

Las relaciones al interior de la Campaña, particularmente entre ONGs y organizaciones campesinas, no son siempre armónicas, las actividades propuestas por el equipo coordinador a menudo constituyen *“una agenda extra para las organizaciones de base”*, puesto que no siempre es orgánica con el programa de

actividades de cada organización local, lo que ocasiona que algunas organizaciones mandaten a sus representantes asistir por cuenta propia o dejar de hacerlo, según Emilio García de CNPA. Esta situación da como resultado una lucha ideológica al interior de las organizaciones campesinas en torno a la participación en la Campaña, la cual se traduce en una participación escasa que se cristaliza en apoyo logístico pero no en solidaridad ideológica constante.

Si bien el equipo coordinador está plenamente convencido de la ausencia de liderazgos, algunas organizaciones campesinas ven en Víctor Suárez, director de la ANEC y en la ANEC misma, un liderazgo *“tenue pero evidente ...que hace que las decisiones se tomen de manera unilateral, con mucho peso en las ideas y propuestas que salen de esa organización”* comenta Pablo Gómez de ANEC y otras organizaciones que han preferido permanecer anónimas, *“esta situación deriva del hecho que Víctor Suárez ha ocupado posiciones en la cámara de diputados, tiene mucha influencia y alianza con políticos y además la posibilidad de conseguir recursos importantes para las actividades de la Campaña”* comenta una persona del CNOC.

La diferencia de opiniones respecto a lo que la Campaña es y lo que “debería ser”, lleva a que muchas organizaciones campesinas no participen activamente, de tal forma que en realidad, pese a que el espacio del equipo coordinador se encuentra abierto a la participación, el conjunto de organizaciones dispuestas a usarlo, sean menos que las que se adhieren. En este sentido, las divergencias en torno a la función de las ONGs y el papel de las organizaciones campesinas, resultan en distanciamientos, más no en nuevas opciones estratégicas para orientar al movimiento hacia el ámbito de la colaboración interna para la construcción de alternativas sociales locales.

4.4.5.1. Latencia y visibilidad

Los momentos decisivos permiten ver la óptica colectiva en torno a los componentes de la realidad que detonan la acción, la ideología y el posicionamiento que como movimiento se ha tenido y entender las decisiones estratégica que se revisan más adelante.

Las OMS de la Campaña no reconocen momentos de latencia, pues al tratarse de un movimiento conformado por múltiples proyectos organizacionales, existe

actividad constante, tanto colectiva como individual a la que se agrega el logo de la Campaña Sin Maíz no hay País y se asume como parte del movimiento. La actividad es constante y las reuniones del equipo de coordinación también, por ello son pocos los momentos que los entrevistados reconocen como clave o detonadores: *“es más sencillo considerar las etapas de la política que los momentos, porque la Campaña se fue construyendo durante procesos largos de cambios en la política agroalimentaria, y tuvo significados diferentes para los distintos actores que participan, en distintos momentos”* comenta Adela San Vicente de Semillas de Vida A.C. *“Quizá los momentos los hemos generado, y han sido respuestas constantes y mantenidas a acciones irresponsables del gobierno coludido con las empresas; desde que nos formamos como Campaña hemos tenido actividad constante”* comenta Rosario Cobo del Instituto Maya.

Los momentos percibidos por los integrantes de la Campaña como importantes en cuanto a las reacciones del movimiento, aquellos que han requerido de decisión estratégica y ante los cuales se han tenido logros o fracasos, pero que han activado la movilización conjunta de organizaciones de la comunidad del movimiento, son:

- Momento fundacional. Junio del 2007, detonado por el alza en los precios de la tortilla y la próxima liberación total de aranceles para maíz y frijol en el TLCAN.
- Enero del 2008. Entrada en vigor del TLCAN sin restricciones para importaciones agropecuarias de maíz y frijol.
- 2008. Crisis alimentaria mundial. Bajas considerables en cultivos de granos básicos, inicio del “boom” masivo de biocombustibles y el alza sostenida en el precio de las materias primas. Esta situación propició tratos importantes del gobierno con transnacionales de alimentos y de insumos para la agricultura, bajo la justificación de incrementar la seguridad alimentaria de México. Esto implicó una crisis para los campesinos nacionales, que perdieron cosechas y mercados para las pocas que podían comerciar, abriendo aún más nichos de mercado para las transnacionales, ganadoras únicas de la crisis.
- 2009. Liberación de permisos para “siembra experimental” por parte del gobierno mexicano, levantando de manera ilegal la moratoria que se había impuesto desde 1998.

- Conferencia Biotecnologías Agrícolas en los Países en Desarrollo: Opciones y oportunidades en la agricultura, la silvicultura, la ganadería, pesca y agroindustria para hacer frente a los desafíos de la inseguridad alimentaria y el cambio climático, que organizó la FAO en Guadalajara para avalar la introducción de transgénicos al país.
- Visita de Barack Obama y el presidente de Canadá a México, para discutir avances y perspectivas del TLCAN. La Campaña establece contacto con organizaciones nuevas que se adhieren y se realizan actividades y marchas en Guadalajara.
- Lanzamiento del Día Nacional del Maíz como día de celebración por el maíz y lucha contra el maíz transgénico, para realizar actividades en todo el mundo. Se trata de una iniciativa que salió de la Campaña y ha logrado ser reconocido en las constituciones de seis Estados de la República.

Estos momentos han significado decisiones estratégicas para entablar tácticas contenciosas contra el gobierno, pues han sido momentos coyunturales para introducir nuevas políticas o leyes que han sido evaluadas como perjudiciales, tanto por ONGs como por organizaciones campesinas.

4.4.5.2. Diferencias entre iniciativas

Cada movimiento surgió a raíz de sucesos políticos concretos; sin embargo, existen historias de trayectorias comunes entre varias organizaciones del movimiento social, previas a la consolidación de cada iniciativa. Estos eventos, que marcaron la imposibilidad de entablar relaciones de colaboración para construir un solo movimiento han sido contados en el capítulo previo, sin embargo es importante detallar algunas perspectivas por parte de OMS de la Campaña, específicamente.

Las ONGs conocen la existencia de la Red y las diferencias que las organizaciones tuvieron, previamente, con respecto a las decisiones estratégicas tomadas por la ANEC, y su director en particular; sin embargo, muchos han sido los intentos de estas organizaciones para reunir al movimiento, procurando acercamientos en momentos evaluados como coyunturales por cada movimiento. Pese a estos intentos, que han resultado en actividades simultáneas, pero nunca conjuntas, existía la esperanza para algunas ONGs de la Campaña, de tener

momentos de convergencia que potenciaran la acción por la soberanía alimentaria. Esta intención llegó a su fin en el primer semestre de 2011, ante una diferencia de análisis elaborado a partir de leyes estatales para la protección del maíz nativo, evento que marcó una división contundente para el movimiento: “marca una división definitiva, pues si no se ven estas leyes como una ganancia de espacios, una posición tomada y que puede ser la mejor defensa contra el maíz transgénico, las posibilidades de entendimiento mutuo en lo sucesivo ya son nulas”.

La división y los antecedentes de la misma, tanto por los eventos que marcaron las relaciones personales y organizacionales, como por las diferencias estratégicas entre movimientos, son claras para las ONGs y organizaciones campesinas que participan activamente en el equipo coordinador, sin embargo son desconocidas para las organizaciones locales que se participan indirectamente, por ser parte de las grandes coordinadoras que se adhieren en lo nacional, pero que no participan en lo local. Representantes de organizaciones locales: UCIZONI, CACTUS, Grupo Vicente Guerrero, RASA, manifestaron no entender las divisiones, pues no conocen las historias previas de los dirigentes de las organizaciones, además de considerar que la unión entre ramas sería de beneficio. Para Carlos Beas de UCIZONI, *“la Red ofrece un buen espacio para que la gente de las comunidades entable una defensa integral del territorio, es indispensable saber qué hacer para prevenir la entrada de transgénicos, que es el trabajo de la Red, pero no es suficiente, se necesita también tener fuerza social para entablar otras luchas fuera de la comunidad, la movilización y la presión política ...entre las dos iniciativas habría un paquete muy completo, si tan solo la Campaña se enfocara más a apoyar también en lo local”*, también reconoce que *“el aislamiento de las luchas, el divisionismo y la falta de información se han convertido en los puntos débiles de los pueblos en la defensa de su patrimonio”*.

De esta forma, las diferencias y divisiones se entienden al nivel de directivos de organizaciones campesinas y ONGs, pero no al nivel de las bases u organizaciones más locales, quienes consideran la división en detrimento del movimiento. Muchas de estas organizaciones, subsidiarias de MAIZ y AMAP principalmente, son de corte indígena, es decir, apelan a la identidad campesina cuando ostentan demandas por apoyos financieros o modificación de las políticas de apoyo al campo, o a la identidad indígena en las luchas que conciernen a un nivel agrario-comunitario. Estas organizaciones a menudo participan también en las

convocatorias de la Red, ya sea para el monitoreo de transgénicos en parcelas, o bien en las ferias campesinas para el intercambio de semilla criolla. La división, en estos ámbitos, puede o no ser conocida, pero ciertamente no es reproducida y no representa un impedimento para entablar acciones conjuntas y tener, al igual que la campaña, ámbitos de incidencia y acción diferenciados: sociedad política y sociedad civil, pero también local y nacional, lo cual amplía las posibilidades de obtención de éxito para estas organizaciones, sin participar en la reproducción de la diferencia, al no participar en las toma de decisiones estratégicas.

Capítulo 5

Discusión

5.1. Recuento teórico

Las decisiones estratégicas que permiten conocer los motivos de ser y luchar del movimiento, son el resultado de una serie de interacciones entre actores, principalmente colectivos, que coinciden en evaluar uno o varios aspectos de la vida social como problemáticos. En la deliberación colectiva se buscan y discuten las mejores formas de presentar el problema al resto de la sociedad –civil o política-, los momentos más adecuados para hacerlo y las formas que se consideran adecuadas para modificar la situación de injusticia que aqueja a los integrantes del movimiento.

Las decisiones estratégicas, como resultado final de los procesos internos de discusión, nos permiten ver un consenso general en torno a: 1. el motivo de ser del movimiento, esto es, el o los aspectos definidos como problemáticos y que detonan la lucha (demandas) 2. Entender los marcos conceptuales o argumentos que escoge presentar para sustentar las demandas; 3. Conocer los actores o sectores a quienes se responsabiliza por el agravio (arenas contenciosas) 4. Los públicos a quienes se dirige el movimiento buscando respaldo o respuesta para solucionar sus demandas (arenas de acción o incidencia); y 5. Las acciones o actividades específicas que decide emprender para solucionar los agravios o comprometer al agravante a enmendarlos (tácticas). Cada uno de estos elementos parte de construcciones de la realidad que se discuten al interior del colectivo antes de convertirse en decisiones de acción; estas construcciones iniciales parten de inquietudes y de visiones que cada organización del movimiento social (OMS) tiene institucionalizadas y que guían su actividad a manera de principios operativos. Para que exista una cohesión entre los actores del movimiento, es importante que exista compatibilidad en torno a estos principios, de tal forma que el resultado, la presentación al público del movimiento, tenga una congruencia discursiva.

Los procesos de deliberación que se requieren para alcanzar consensos y tomar decisiones estratégicas son a menudo controversiales y, así como cohesionan al movimiento, pueden significar rupturas en las relaciones entre organizaciones –o personas-. Por esto, los momentos coyunturales, aquellos que requieren de decisiones

importantes, a menudo reconfiguran el movimiento, decidiendo permanencias o separaciones. Las separaciones refinan al movimiento, es decir, permiten que sean las OMS más afines quienes permanezcan en el mismo.

La configuración social del movimiento es resultado de historias comunes entre los actores del movimiento, esto es, de trayectorias que permiten definir afinidades en las formas de entender los conflictos y sus soluciones, esto es, en el enmarcamiento del problema o el paquete interpretativo que emplean los activistas para definir la forma como se presentan, al mundo y a sí (el movimiento y sus organizaciones) los alcances definidos del problema, los elementos y actores que constituyen el conflicto y el ideal de solución que refleja el “deber ser” en torno al cual se argumenta (Polleta y Jaspers, 2001).

A lo largo de las historias o trayectorias de activismo, se dan eventos coyunturales que transforman las relaciones sociales en formas que no podrían haber sido predichas con base en la historia anterior (Sewell, 1996). Estos eventos pueden ser acciones o reacciones diferenciadas ante situaciones sociales o políticas, que provocan una reconfiguración al interior del movimiento mismo, provocando nuevas alianzas, divisiones, reflexión, aprendizajes, y a menudo nuevas direcciones para la acción.

Cuando los eventos resultan en rupturas, hay cambios en los esquemas culturales y en las relaciones sociales, normalmente reconfigurando el movimiento (Sewell, 1996). A menudo los eventos que marcan rupturas se dan por batallas estratégicas al interior del movimiento, cuando las decisiones consensuadas se tornan imposibles por diferencias ideológicas que detonan ante un particular momento político o social (Polleta y Jaspers, 2001).

Los procesos sociales y las decisiones tomadas en determinado momento, pueden cambiar cuando las diferentes interpretaciones de las OMS impiden la convergencia y se modifican las relaciones; las trayectorias entonces divergen, se modifican acuerdos y se generan historias de relaciones que moldean constantemente al movimiento.

Las trayectorias y sus aprendizajes son elementos que posibilitan y orientan la configuración del movimiento, pero también su forma organizativa, al permitir hacer evaluaciones de próximos aliados con base en experiencias previas, depurando las opciones.

Los procesos deliberativos que subyacen al enmarcamiento de los problemas y soluciones presentados por el movimiento, implican interacción entre actores colectivos que a menudo experimentan fricciones entre sí; conllevan relaciones y una mínima organización para que exista el consenso buscado, y principalmente un orden jerárquico según el cual todos entienden quién o quiénes tomarán las decisiones importantes en los momentos que juzguen adecuados. Esto es, las decisiones estratégicas, si bien reflejan un consenso general que permite conocer los supuestos en los que se basa el movimiento, además de su idea sobre cómo debe de ser el aspecto de la sociedad civil o política que desea modificar, no se toman por parte de todos los participantes en condiciones totales de equidad, a menos que ésta sea una condición operativa y acordada de antemano (Freeman, 1989); existe siempre un grupo de liderazgo, o una persona que tiene la autoridad para dar la palabra final sobre el qué hacer, cómo y cuando (Ganz, 2001). El líder o equipo de liderazgo es quien toma las decisiones finales para dar forma y dirección al movimiento.

La organización del movimiento para la toma de decisiones permite conocer a los actores considerados más importantes y entender la configuración en términos de tipos de actores organizados y su relevancia para la construcción del movimiento. Evidentemente, son los actores más involucrados aquellos que definirán la dinámica interna del movimiento (Gamson, 1988), también definirán los términos discursivos o identitarios-culturales con los cuales será identificado el movimiento desde el exterior (McCarthy y Wolfson, 1996). La forma de organización de los movimientos sociales no es exactamente “instrumental” hacia sus objetivos (Melucci, 1995). Es un objetivo en sí misma. Como la acción está centralizada en los códigos culturales, la forma del movimiento es un mensaje, un desafío simbólico a los patrones dominantes; sienta las bases para la identidad colectiva interna del sistema, pero también para un enfrentamiento simbólico con el sistema, que envía un mensaje directo con respecto al “debería ser” buscado (Touraine, 2000). El medio, el movimiento mismo como medio, en su estructura, es el mensaje también, redefiniendo el significado de la acción social para el conjunto de la sociedad (Melucci, 1999).

5.2. Trayectorias y Configuración Social en el Movimiento por la Soberanía Alimentaria

En el caso del movimiento por la soberanía alimentaria, la confluencia de colectivos sociales que definen su participación en una u otra rama en torno a su identidad étnica, su función social y su labor productiva, permite observar en cada movimiento configuraciones sociales diferenciadas, que resultan de trayectorias y relaciones con un pasado común, fracturadas a lo largo de historias de convergencias y divergencias, permitiendo que los actores colectivos definan afinidades y construyan movimientos con dinámicas internas y decisiones estratégicas visiblemente diferentes.

Las historias entre las organizaciones del movimiento, marcadas por controversias en las decisiones de acción ante momentos políticos específicos, principalmente en materia de arenas y tácticas, han ido fracturando gradualmente la posibilidad de unión para ambas iniciativas, marcando caminos y rutas de acción totalmente diferenciados, producto de aprendizajes y de la definición de afinidades a partir de estos aprendizajes; gradualmente las OMS, particularmente ONGs, han tenido que definir su participación en una sola iniciativa ante la imposibilidad de convivir armónicamente en ambas.

La posibilidad de revisar la influencia de la configuración social de cada movimiento sobre sus formas operativas internas y sobre sus decisiones estratégicas, existe por las evidentes diferencias en las composiciones identitarias de cada uno: la evidente adscripción indígena de la Red y la participación predominantemente campesina en la Campaña, además de tipos distintos de ONGs activamente participantes en cada movimiento.

Sería imposible entender la configuración social de los movimientos, su organización para la toma de decisiones y las decisiones mismas, sin antes revisar las historias comunes que los actores colectivos vivieron. Estas historias se pueden entender a nivel de las diferencias entre el movimiento indígena y el movimiento campesino, cuyas trayectorias comunes y particularidades se han revisado en el capítulo III, y en el nivel de las organizaciones no gubernamentales que, con una participación constante en ambos movimientos, han terminado por definir su pertenencia a uno de los movimientos, definiendo con esto los términos de la función social que la organización tiene y persigue en el colectivo.

Pese a que en la oposición hacia los transgénicos y las políticas de apertura comercial en el ramo agropecuario, inicialmente convergieron varias organizaciones campesinas, indígenas y ONGs, fueron decisiones y acciones organizacionales los eventos generadores de rupturas para que cada movimiento se entendiera y se viera como independiente. Los eventos, para Sewell (1996) son momentos decisivos en las relaciones sociales, en los cuales se requiere del consenso para la acción; el resultado puede ser un fortalecimiento en las relaciones o la generación de fracturas, graduales o permanentes para el movimiento.

A continuación retomo un poco de historia para entender claramente las diferencias en la configuración social de cada movimiento y, a partir de los eventos que marcaron las relaciones, explicar los elementos sociales que las diferencian en configuración, decisiones y organización.

La formación de la Red en Defensa del Maíz fue anterior a la Campaña, a partir de la detección de maíz transgénico en Oaxaca. La configuración social de la Red se definió gradualmente, pues aunque la convocatoria inicial se dio a sugerencia de ONGs de investigación que permanecerían en esta rama, como ETC, CECCAM y CASIFOP. Cada ONG invitó a organizaciones relacionadas con actores de base⁸¹, priorizando a los actores marginados en comunidades aisladas, pues el maíz transgénico que había contaminado⁸² al nativo, procedía de las tiendas de abasto DICONSA, que repartían el maíz en los paquetes de apoyo alimentario y agrícola. CENAMI, otra ONG convocante que trabaja con pastorales católicas de base y tiene una participación activa apoyando al Consejo Nacional Indígena (CNI), invitó a participar a representantes de los diecisiete Estados de la República en los que trabaja mediante sus cuatro áreas. La convocatoria también fue emitida por organizaciones indígenas de Oaxaca, particularmente la UNOSJO, que invitó a participar a comunidades indígenas, cuya presencia y participación era relevante por su cercanía geográfica con el sitio donde fue detectada la contaminación, esto definió en gran parte el carácter social de la Red en su primera fase. De esta forma fueron principalmente comunidades y organizaciones locales indígenas, muchas de ellas

⁸¹ Al mencionar a actores de base, me refiero a las organizaciones o personas que viven, de primera mano, los problemas por los cuales se construye el movimiento; en este caso, campesinos o indígenas que habitan en el medio rural y se ven directamente afectados, en su labor social y productiva, además de sus opciones de consumo, por las políticas agrícolas que confronta el movimiento.

⁸² Se considera contaminación porque el trans-gen polinizó a variedades de maíz de manera incidental y contraria a los deseos de los agricultores en cuya parcela se detectó la variación genética.

integrantes del CNI, como UNOSJO misma, quienes asistieron a los primeros encuentros de la Red.

También lo hicieron organizaciones campesinas nacionales, la ANEC; FDCh, UNORCA, CNPA y el Frente Nacional para el Campo, que posteriormente entrarían a la Campaña. La intención de los primeros foros-seminario, cuya intención era comentar, conocer y difundir los posibles efectos de los transgénicos. A estos foros se invitó a Secretarías de Estado como la SEMARNAT y la CONABIO, al igual que a académicos, para tener información multisectorial sobre los transgénicos, sus posibles impactos y las causas de su entrada a México.

Las formas de organización para el trabajo se definieron gradualmente, junto con la estabilidad de los participantes, sin embargo los sucesos del MECNAM, en 2003, fueron determinantes en la fractura de algunas relaciones que ya se consideraban problemáticas por algunas OMS. La aglutinación de las grandes centrales y coordinadoras campesinas en un movimiento amplio con un pliego petitorio diverso, pero en su mayoría de índole económico, al cual sumaban la firma de los acuerdos de San Andrés sin contar con el apoyo del EZLN o del CNI, evitó que comunidades y organizaciones indígenas identificadas con el movimiento indígena y participantes en la Red, decidieran ser parte del MECNAM.

Organizaciones campesinas como la ANEC, el FDCh y el Frente en Defensa del Campo Mexicano, al que se sumó en un primer –y breve- momento la Red, decidieron entablar la lucha campesina y abandonaron el espacio iniciado poco tiempo atrás para la discusión sobre transgénicos. En ese momento, la lucha por incentivos económicos y espacios de negociación política para el campo eran más importantes para estas organizaciones, no así para las comunidades indígenas que no se integraban a ninguna organización campesina, o bien lo hacían desde un nivel muy local y veían la contaminación de sus variedades nativas de maíz como un problema más inmediato.

De cualquier forma, el MECNAM no fue completamente ajeno para la Red, le implicó una reflexión importante sobre sus prioridades y posicionamientos, como veremos más adelante.

El MECNAM implicó una serie de relaciones entre las organizaciones campesinas, las ONGs y las comunidades, que serían de peso en lo sucesivo. En retrospectiva, para las ONGs que participan en la Red, sólo tres organizaciones que consultaron realmente a sus bases antes de decidir si firmar o no el ANC, y fueron

justamente las no firmantes, podrían haberse adherido a la Red, aunque decidieron no hacerlo. Las demás organizaciones campesinas, por una dinámica calificada como centralizada, carecían de principios de supeditación al mandato de las bases que terminó siendo definitorio para la organización social de la Red.

Para la Red, la cooperación con ONGs de la Campaña, de Derechos Humanos o de desarrollo, hubiera sido posible únicamente si éstas hubieran suscrito sus programas de acción a las necesidades manifestadas por los actores de base, comunidades y organizaciones indígenas locales, adecuando también sus tiempos de acción a los mecanismos de consenso propios de las comunidades indígenas, que necesariamente implican consulta a las asambleas, y por ende, periodos amplios para la deliberación final. La imposibilidad de hacer de la Red un espacio para incorporar la variedad temática y de posiciones de las ONGs y de las organizaciones campesinas con dinámicas diferentes de trabajo, definieron a los actores y a la tipología de actores que actualmente conforman cada movimiento.

Una característica común para las ONGs que permanecieron trabajando con la Red, es tomar sus decisiones operativas en función de las necesidades manifestadas por las comunidades u organizaciones con las que trabajan. Estas organizaciones consideran que el papel de las ONGs es servir de apoyo técnico e informativo a las bases sociales, los actores locales que conocen de primera mano los problemas que enfrentan y quienes deben definir las soluciones, esto es, son ONGs que consideran que su papel debe de ser de supeditación a las necesidades de los actores locales. Estas ONGs se dedican principalmente a la investigación en materia de políticas y producción agrícola. Sólo dos ONGs pueden ser consideradas de desarrollo (CENAMI y Colectivo COA), y su forma de trabajo es el desarrollo de proyectos de acuerdo con las necesidades manifestadas por los actores de base (comunitarios en su mayoría), mismos a quienes acompañan en la Red en Defensa del Maíz, esto es, existe un acompañamiento y trabajo conjunto constante entre los actores de base y las organizaciones de desarrollo: La Red es un espacio conjunto más, con objetivos concretos, pero que no representa el único espacio de relación entre ellos.

En la declaratoria del segundo seminario en defensa del maíz (2003), se establece *“Las comunidades indígenas y campesinas, apoyados por las organizaciones que nosotras mismas decidamos, tomaremos acciones específicas para parar y revertir la contaminación. Invitamos a que todas las comunidades*

*indígenas y campesinas se sumen al proceso en defensa del maíz*⁸³”. Esto tenía ya implicaciones para la forma de trabajar y de relacionarse que podían esperar las ONGs y organizaciones campesinas que decidieran continuar en la Red: tendrían que supeditar sus proyectos y sus decisiones estratégicas a las necesidades –y tiempos– marcados por los actores de base, respetando los principios de autonomía para la toma de decisiones de autogobierno decretadas por el CNI. Esto implicó algunas salidas de ONGs que encontraban difícil compatibilizar sus tiempos y proyectos a este mandato de asamblea: Greenpeace y organizaciones de derechos humanos optaron por no continuar en el colectivo.

Ante el abandono de este espacio por parte de las organizaciones campesinas amplias que se integraron al MECNAM, la Red se configuró con ONGs de investigación y desarrollo, comunidades indígenas y pequeñas organizaciones que se definen como indígenas antes que como campesinas, que además suscriben los principios de autonomía y las formas de trabajo definidas por el CNI. El trabajo es de colaboración constante, atendiendo a los acuerdos que anualmente se toman en las asambleas, siendo las ONGs los apoyos técnicos e informativos para la toma de decisiones.

Este papel no es, como parece a simple vista, tan técnico: pese a que quienes toman las decisiones estratégicas son las comunidades y organizaciones indígenas, y pese a que se niega que exista una intervención de las ONGs en estas decisiones, las funciones que en los hechos tienen estas organizaciones orientan de manera importante las decisiones, al ofrecer marcos concretos de interpretación ante los eventos políticos que se analizan y condicionando la evaluación que los actores indígenas hacen sobre las posibles alianzas para la Red.

La primera función que las ONGs realizan en la Red, es la de mantenerse documentadas e informar a las comunidades y organizaciones indígenas sobre las tendencias mundiales y nacionales en materia de políticas agrícolas y agrarias. Estas organizaciones, principalmente las de organización, aportan los temas que consideran más importantes a las asambleas, instancia máxima para la toma de decisiones de la Red. Al hacer esto, necesariamente dirigen la discusión hacia los temas que previamente han identificado como más importantes, y establecen la agenda de la discusión en materia política.

⁸³ <http://www.endefensadelmaiz.org/La-contaminacion-transgenica-del.html?artpage=6-6>. Consultado 06 de abril del 2011

Una segunda función es la de realizar los monitoreos de contaminación transgénica, en las milpas de las comunidades y organizaciones indígenas, cuyos resultados se comunican en cada asamblea, para reforzar el trabajo o bien conocer los avances en la eliminación de trans-genes no deseados. Esto se hace como mandato de la asamblea, para conocer el avance de los transgénicos y contar con argumentos científicos que avalen el hecho de que, en efecto se trata de una contaminación, y no un uso ilegal de genoma patentado⁸⁴. El monitoreo, además, permite depurar los cultivos que se encuentran contaminados.

Una tercera función de las ONGs es definir fechas y agenda para la asamblea anual, instancia colectiva para la toma de decisiones estratégicas. Esta función también está, necesariamente, acompañada de una cierta injerencia en la toma de decisiones, pues si bien la agenda se abre a modificaciones de los participantes, esto rara vez sucede, y los planteamientos de temas a tratar proceden de la discusión previa entre las ONGs.

Un cuarto papel que se observa para las ONGs dentro de la organización para la toma de decisiones en la Red, es el de emitir comunicaciones a nombre del colectivo en momentos clave, así como el escoger estos momentos. Dado que la comunicación con comunidades y con organizaciones indígenas no es tan ágil por la falta de Internet o bien de líneas telefónicas en el ámbito rural, son las organizaciones no gubernamentales quienes tienen mayor capacidad de comunicarse, dialogar y accionar; en realidad, pese a que las mismas ONGs suelen afirmar que al emitir comunicaciones o realizar actividades a nombre de la Red lo hacen en estricto acuerdo a los resolutivos de asambleas pasadas, las actividades más contenciosas son producto de ideas y de intercambios surgidos a partir de información y discusión de la información por parte de las ONGs, como el caso de participación en la ANAA, el Foro por la Vida y la Justicia Climática en Cancún y la idea de posicionar los transgénicos como un caso de crimen de lesa humanidad ante el Tribunal Permanente de los Pueblos. Actividades que, evidentemente, fueron respaldadas por las comunidades indígenas y asumidas con entusiasmo, pero cuya propuesta no nació de estas comunidades (Eutimio Díaz, comunicación personal).

⁸⁴ Como aún no se ha liberado la semilla para su venta comercial, documentar antes de que ésta se permita, que existía desde antes, de manera incidental, en cultivos de maíz criollo, podría contar como argumento ante los embates de las transnacionales, que en otros países han emprendido demandas millonarias contra granjeros cuyos cultivos se encontraban, en realidad, contaminados.

En el caso de la Campaña, la convocatoria, lanzada en junio del 2007, surgió a partir de la reflexión colectiva del CONOC, El Barzón, AMAP y otras organizaciones campesinas y ONGs, que se reunían para planear la segunda etapa de “La Jornada del Campo”, suplemento mensual del diario La Jornada, que en lo sucesivo se constituiría en un órgano de comunicación importante para miembros de la Campaña. Esto sucedió casi cuatro años después del MECNAM, siendo principal convocante el CONOC, conglomerado de organizaciones campesinas nacionales que se formó para dar seguimiento a los acuerdos firmados con el gobierno en el ANC, por lo que la agenda planteaba temas derivados del MECNAM. La convocatoria incluía participar en la Jornada Nacional de Movilizaciones por la Defensa por Soberanía Alimentaria, la Reactivación del Campo Mexicano y el Presupuesto Rural 2008.

Las ONGs de la Red, entre ellas el CECCAM, que fungía como consultora técnica para la UNORCA, habían revisado y comentado el Acuerdo Nacional para el Campo (ANC) previamente a su firma, concluyendo que se trataba de un mal acuerdo, que implicaría ganancias escasas para un movimiento tan importante y desgastante para las organizaciones campesinas, razón por la cual la UNORCA decidió no firmar. Estas ONGs evaluaban que la actuación del director de la ANEC como oportunista ante las mesas de negociación con el gobierno, pues contaban con la información de que esta organización había decidido firmar el ANC sin consultar de manera extensiva a sus bases de apoyo, en 15 Estados de la República; para ellos, esta acción y la firma de un acuerdo que menguaba la fuerza del movimiento sin tener logros reales para sus demandas más sustanciales (renegociación del TLCAN y la expulsión total del maíz y frijol del mismo), eran altamente reprobables. A esto se sumaba otra situación: a pocos meses de la firma del ANC, el director ejecutivo de la ANEC fue candidato y ganador para una diputación delegacional en el Distrito Federal. De esta forma se juntaban tres decisiones reprobables para las ONGs de la Red: firma del ANC, sin consultar a las bases, y postulación para una diputación. La impresión general era de una negociación turbia en detrimento del movimiento, lo cual generó un amplio rechazo hacia la ANEC como organización. No se trataba de la decisión de firmar, sino de acciones particulares que rodeaban a la firma para esta organización y que le dotaban de un carácter particular enfocado a una persona clave para el MECNAM: el director ejecutivo de la ANEC, cuyo actuar implicó una evaluación que se extendió a toda la organización: *“Nosotros, como asesores de*

UNORCA, no tuvimos bronca con otras organizaciones que firmaron...el problema no era el hacerlo o no, sino el cómo, y el usar una situación política coyuntural para beneficios personales o de la organización, eso sí fue un golpe bajo que además dejaba en entredicho un funcionamiento realmente democrático de la ANEC...nos llevaba a pensar mal de su funcionamiento interno” declara una persona del CECCAM⁸⁵.

Previo a la existencia del MECNAM, en 1996 había ocurrido ya un incidente controversial entre algunas ONGs y organizaciones campesinas con respecto al director de la ANEC, cuando éste último invitó a Beatriz Paredes, dirigente nacional de la CNC, al estrado en la clausura del Primer Foro por la Soberanía Alimentaria, evento que marcó las relaciones y reservas con respecto a la forma de ejercer liderazgo de este personaje, pero no implicó una ruptura en las colaboraciones laborales de las organizaciones que integraban ya un colectivo incipiente en la demanda de soberanía alimentaria.

De acuerdo con los elementos de estos eventos, para la Red la reserva con respecto a la Campaña no se trataba de que la ésta última planteara acciones de negociación para los presupuestos agrícolas, pues la Red, en ese momento, no había rechazado por completo usar la vía legal, se trataba de la presencia de una figura de liderazgo calificado como alguien que tomaba decisiones unilaterales para un conjunto de actores, en beneficio personal o de su organización; de cualquier forma, estos eventos provocaron un abierto rechazo de las ONGs –y académicos participantes- de la Red hacia iniciativas surgidas de la ANEC, una de las principales convocantes para la naciente Campaña.

Es importante enfatizar que el rechazo inicial para participar en la Campaña se dio al nivel de las ONGs, pues las comunidades indígenas, por su lejanía con el D.F y con el acceso a la información de los sucesos en organizaciones geográficamente distantes, no contaban con los elementos suficientes para decidir. De hecho, fueron pocas las comunidades y organizaciones indígenas locales participantes en la Red quienes se enteraron de la convocatoria de la Campaña. En este sentido, las ONGs de la Red sirvieron como filtro para mantener inicialmente la división, pues no agendaron, como punto de asamblea del 2008 la posibilidad de unirse a la Campaña.

⁸⁵ Son varias las fuentes que al ser entrevistadas, permitieron reconstruir una historia de rechazos hacia decisiones concretas tomadas por el director de la ANEC, sin embargo, dado lo delicado de la información, decidieron permanecer anónimas.

La convocatoria también fue tomada con reservas porque *“tenía una agenda pre-definida que no estaba considerando a los transgénicos. De decidir sumarse, se asumían las demandas que ya habían sido preparadas...se trabajaba en base a un programa definido por las directivas, continuando con la tradición”* comenta Álvaro Salgado del CENAMI.

De esta forma, las organizaciones (ONGs) de la Red, asistieron a las primeras reuniones de la Campaña sin la determinación de integrarse y con reservas ante una evaluación negativa de acontecimientos y decisiones de acción de una organización que anteriormente era considerada aliada.

La idea inicial respecto a la Campaña, por parte de las ONGs de la Red, era que ésta funcionaría con esquemas de liderazgo altamente centralizado y atendiendo a las necesidades del equipo líder, con escasa consulta a las bases –campesinas o indígenas-, una forma operativa que era totalmente contraria a los acuerdos de la Red. La excepción, durante los primeros tres años de la Campaña, fue el Grupo de Estudios Ambientales (GEA), que participaba activamente en la Red en Defensa del Maíz y se sumó completamente a la Campaña; sin embargo, conforme la Red definió una postura de total oposición a emplear la vía gubernamental, fue gradualmente desplazada del movimiento⁸⁶.

La Campaña no se organizó con un liderazgo centralizado, sin embargo sí definió como arena de incidencia a la sociedad política, con la vía legal como una de sus tácticas, pues para las organizaciones campesinas, constituidas en torno a una necesidad común de conseguir espacios políticos y presupuestales para la producción y la comercialización de sus cultivos, la Campaña representaba un espacio valioso que necesariamente tenía que contemplar la incidencia en materia agrícola.

De forma contraria a la evaluación de la Red sobre los eventos concernientes al director de la ANEC, las organizaciones campesinas y ONGs de la Campaña, su experiencia en movimientos sociales, historia personal de activismo y trayectoria política, dotaban al personaje de una trayectoria ideal como recurso valioso para la definición estratégica del movimiento, incluyendo la amplia gama de alianzas con las que contaba, tanto en la arena de la sociedad civil como en la arena política, tras haber formado, durante su cargo como diputado, un centro de estudios rurales que

⁸⁶ Inclusive, al interior del equipo que participaba en GEA, había problemas por participar en ambas iniciativas, ya que algunas personas preferían una u otra iniciativa y pugnaban por adherirse por completo, abandonando la otra.

permanece aún hoy día en la cámara de diputados. El director de la ANEC constituye, para la Campaña un recurso valioso con cierto papel de liderazgo para los momentos decisivos, no solo por un aporte constante de ideas en cuanto a arenas, tácticas y enmarcamiento de las demandas, sino por el vasto capital social al que tiene acceso y sobre el cual puede ejercer un aliento movilizador.

Para las comunidades indígenas, la posibilidad de usar el cabildeo y la negociación directa con gobierno, era una opción descartada desde que el Congreso Nacional Indígena marcó como pauta para la acción las autonomías de facto, ante la traición en la firma de los Acuerdos de San Andrés en su forma original y su total desdibujamiento en la Ley Indígena decretada. Estas comunidades y las organizaciones indígenas campesinas-locales que participaban en la Red, consideraron que fue el posicionamiento político de apertura a la negociación por parte de la Campaña, lo que determinó que se constituyera como una rama separada, pues en realidad, ellas nunca estuvieron enteradas de historias ocurridas al nivel de las cúpulas de negociación del ANC, menos aún de situaciones ocurridas entre las organizaciones en décadas pasadas; los representantes comunitarios no manifestaron tener ningún problema con la presencia de la ANEC o las otras organizaciones de la Campaña, o con el movimiento mismo, pues desconocen gran parte de sus actividades. De hecho, en la asamblea de la Red realizada en 2010, un punto de agenda se dedicó al análisis de las diferencias entre los dos movimientos; la participación en este punto fue exclusiva de las ONGs, sin comentarios o retroalimentación por los actores indígenas, que no ocuparon el espacio de comentarios y se limitaron a escuchar. Esto permite observar un papel más activo de las ONGs de la Red, que al momento de transmitir la información de actualidad al movimiento, también moldean la opinión, al matizar los contextos afirmativos o negativos que rodean a la información misma.

Las comunidades y organizaciones indígenas llegaron a la Red a partir de su relación de colaboración con las ONGs, sin conocer aspectos de relaciones pasadas entre éstas y las organizaciones campesinas (con excepciones contadas). Pocas de estas organizaciones participaron activamente en el MECNAM, pues, o se encontraban en debates de autonomía y construcción comunitaria en oposición a movimientos para la negociación con gobierno (UNOSJO, ORAB, GIPA), o participaron desde lo local sin estar enteradas de los debates estratégicos entre las cúpulas organizacionales (colectivos locales).

Pese a que, en efecto, gran parte de la agenda estaba definida al momento de la convocatoria, la dinámica de funcionamiento para la Campaña se definió en las primeras reuniones entre todos los participantes, que valoraron la opción de funcionar con una estructura centralizada, como la mayor parte de las organizaciones que participaban, pero decidieron, en contraste, tener una organización abierta a la participación y exenta, lo más posible, de liderazgos y protagonismos. De esta forma el equipo coordinador se constituyó como el órgano de toma de decisiones en donde la deliberación se daría en torno a las ideas, no a las personas independientemente de su procedencia o nivel de involucramiento en el movimiento, bajo el lema “la Campaña es de quien la trabaja”.

En la Campaña, las organizaciones convocantes, tanto campesinas como no gubernamentales, se constituyeron como el equipo coordinador, por ser las que más perseverancia tuvieron en la elaboración de la agenda y en la asistencia a las reuniones. A este equipo se adhirieron otras ONGs de derechos posteriormente, que fueron dando consistencia al espacio, pues encontraron que parte de sus demandas y temas organizacionales, tenían cabida en la agenda temática del movimiento.

La Campaña funciona como una “adhocracia”, esto es, una forma de colectivo de organizaciones caracterizado por cambios constantes en los papeles que juega para el conjunto cada organización. Las adhocracias (Toffler, 1970; Wallerstein, 2003) son espacios de convivencia flexibles en donde los actores pueden ser temporales o permanentes y la toma de decisiones es tomada por un equipo de liderazgo fluctuante en su constitución, por lo tanto, pese a que este tipo de sistemas organizacionales son altamente adaptativos al sistema social o político en el que se mueven, sus decisiones y planes de acción no siempre se ejecutan o tienen los resultados previstos por la variabilidad interna que experimentan (Toffler, 1970; Wallerstein, 2003).

Las organizaciones de la Campaña la ven como un espacio donde caben los proyectos de cada una, “a manera de una caja de resonancia para varias líneas de trabajo y temas que se relacionan con la alimentación y la producción agropecuaria”, comenta Cathi Marielle de GEA. Cada línea temática y operativa tiene la posibilidad de insertar el proyecto dentro del cual el tema soberanía alimentaria es relevante, gracias al trabajo en torno a seis ejes temáticos, integrado cada uno por las organizaciones que encuentran afinidad en el eje con su trabajo particular. De esta forma, la Campaña es amplia y en ella colaboran actores colectivos en relaciones

horizontales, donde ningún proyecto es más importante que los demás, salvo en situaciones políticas coyunturales que exigen un mayor apoyo para un componente particular de la Campaña, como fue el caso de la liberación de permisos para el cultivo experimental de transgénicos, cuando toda la actividad de la Campaña se enfocó a trabajar para difundir y denunciar este hecho.

5.3. Identidades, Configuración Social y Organización Social

En la configuración de cada movimiento hay, como actores comunes ONGs, que si bien tienen en común la figura asociativa y esquemas operativos internos, se distinguen en la percepción de su función social para el movimiento, pues mientras que en la Red se trata principalmente de organizaciones de investigación que apoyan en la documentación constante de información relevante, en la Campaña participan más activamente organizaciones de derechos humanos y de desarrollo. En la Red los proyectos de las organizaciones de desarrollo se realizan de manera conjunta con las mismas comunidades y organizaciones indígenas que conforman la Red, mientras que en la Campaña las ONGs realizan sus proyectos rurales con actores ajenos al movimiento, impulsando los temas de la Campaña, pero sin una invitación expresa a que sean sus contrapartes campesinas quienes participen directamente en la Campaña, y sin que se conviertan en actores activos en la orientación de la acción.

La relación de las ONGs con los actores de base para su trabajo diario no es de interés menor para entender las diferencias organizativas entre movimientos, ya que el común denominador para las ONGs de la Red es entender su labor como un servicio para las comunidades, de tal forma que para gestionar los recursos necesarios para la operación, deben tener en cuenta las orientaciones políticas y sociales que rigen las acciones y proyectos emanados de la base, a fin de no comprometer información o posicionamientos políticos distintos. Esta forma de funcionar permite mantener un número acotado de temas y demandas, aquellas más importantes para los actores comunitarios, dándoles seguimiento constante, con una dinámica de trabajo en y para el ámbito rural, aquel en el que viven los actores más importantes para la Red; para las ONGs de la Campaña, el trabajo en el campo se trata de colaboración entre actores sociales de igual envergadura, cuyos proyectos convergen en algunos momentos pero sin relaciones de supeditación, sino de colaboración horizontal en el entendido de que cada quien, bases –organizadas o no-

y ONG tienen principios políticos y operativos propios. Esta dinámica de trabajo de las ONGs propicia que sean los temas generales, definidos de acuerdo con sus proyectos, los que dicten su agenda de participación, desde el ámbito urbano principalmente. Pese a que de manera constante, los representantes de organizaciones campesinas pugnan por mayor apoyo técnico de las ONGs en las regiones rurales, esta forma operativa no ha obtenido consenso, pues los acuerdos operativos que giran en torno al respeto por los proyectos individuales, impiden la gestión de proyectos para reforzar uno colectivo llamado Campaña.

Estos aspectos, tienen una profunda influencia en las decisiones estratégicas, tanto en quiénes toman las decisiones como en las decisiones mismas: en la Red, son los actores indígenas, con información proporcionada por las ONGs, quienes deciden. En la Campaña se decide en conjunto, en el seno del equipo coordinador. Cada forma organizativa se definió gracias a las afinidades colaborativas que se forjaron entre las ONGs y sus contrapartes indígenas o campesinas: difícilmente existiría un movimiento unido dadas las diferencias de percepción en su función social por parte de las (ONGs), y en la forma de vinculación que cada actor social permitía para construir un movimiento. Esto que atiende a aspectos de identidad: la autopercepción de una función social y la percepción de atributos culturales y étnicos que se consideran prioritarios en un proyecto social como la soberanía alimentaria.

Los actores de base presentan diferencias más evidentes para entender las diferencias estratégicas, pues mientras que en la Red son actores comunitarios que resaltan una etnicidad, su identidad indígena mayoría de bases sociales que activamente construyen el movimiento, en la Campaña son las organizaciones que resaltan la actividad productiva de sus miembros aquellas con participación activa. Estos dos tipos de actor, indígenas comunitarios y campesinos organizados a nivel nacional, trabajan en distintos niveles y ven los problemas relacionados con el campo de distinta forma.

Para las organizaciones campesinas, agrupadas en torno a intereses productivos y necesariamente comerciales, la lucha, y por tanto los logros, se dan en el terreno de políticas de apoyo para la producción y comercialización principalmente, pues ese es el principio aglutinador de todas las organizaciones que desde lo local se asumen como parte de la organización amplia, aún si algunas de estas últimas son organizaciones de corte indígena (como sucede con organizaciones locales de MAIZ y AMAP); en estos casos, dado que el representante en la Campaña

se ubica en México, representa los intereses de la organización amplia, y sólo en momentos coyunturales, posiciona luchas particulares y más locales.

Para las comunidades, cohesionadas en torno a la vida común en un espacio territorial que implica la vecindad entre todos los participantes, la lucha principal es la defensa del territorio y de los recursos naturales en torno a los cuales construyen formas de vida y ciclos de cultivo, particularmente el maíz, pues la producción para los actores comunitarios, se realiza principalmente para el abasto de la unidad familiar, y únicamente se comercian los excedentes; los actores comunitarios pueden entablar acciones de resistencia desde la comunidad misma, por estar ubicados en la misma demarcación territorial. Las organizaciones que participan en la red, si bien son actores similares en intereses a los de la Campaña, son organizaciones locales, o regionales-estatales, que tienen la posibilidad de tener acuerdos en el nivel comunitario, y no de organizaciones cuya amplia dispersión y diversidad de membresía impide que los acuerdos se tomen al nivel comunitario.

La historia detrás de la lucha campesina y de la lucha indígena, que les ha llevado a pensar en distintas formas de resolver los conflictos que les aquejan, ha sido revisada en capítulos anteriores, sin embargo baste recalcar que, a partir del MECNAM, evaluado como un movimiento oportunista y negociador por parte del EZLN y del CNI (Serna et al. 2010), las posibilidades de que movimiento campesino e indígena convergieran, se hicieron mínimas e impactaron las relaciones interpersonales e inter-organizacionales a partir de posicionamientos para la negociación con gobierno.

Justamente fueron eventos sucedidos en el MECNAM, que modificaron las relaciones entre personas a nivel de los directivos de ONGs y organizaciones campesinas, lo que propició que el colectivo formado hasta el momento, en especial las ONGs de la Red –a excepción de GEA que participaba en esos movimientos–, tomara la decisión de no participar en lo sucesivo en colectivos que implicaran a la ANEC; esto evidencia cómo, pese a que la Red no toma decisiones estratégicas en atención a la ONGs, éstas influyen la orientación del colectivo mediante la información proporcionada, y por tanto, a la configuración social, de manera directa y selectiva.

La Red, por ser un movimiento con cierta organización cuando el MECNAM emergió y finalizó, se configuró finalmente después de los eventos y las evaluaciones de estos eventos, del movimiento campesino, elaboradas principalmente por las

ONGs. Los actores que permanecieron, indígenas y ONGs establecieron a los primeros como actores principales y encargados de las decisiones estratégicas, con formas comunitarias de trabajo y en apego a los principios de autonomía decretados por el CNI.

La Campaña, convocada por el conglomerado de organizaciones campesinas formadas a raíz del MECNAM, definió una membresía abierta pero con base predominantemente campesina, que por primera vez colabora en colectivo con ONGs de temáticas variadas, con relaciones de colaboración horizontal y sin supeditación de ninguna de las partes. Aún así, existen organizaciones y comunidades indígenas que indirectamente participan en la Campaña, al ser parte de organizaciones amplias campesinas, esta participación indirecta no está exenta de tensiones por sentir que el equipo coordinador centraliza las decisiones atendiendo sólo a aspectos de legislación y de impacto en los consumidores, sin moverse al ámbito rural para entender y expresar las demandas y necesidades de los actores más locales.

De esta forma, cada movimiento se ha integrado por organizaciones afines, en las que los actores comunes, las ONGs, conciben su labor de manera diferenciada, aunque mantienen una labor protagónica para la continuación de cada movimiento con decisiones estratégicas diferenciadas. Esto ha permitido a cada OMS que desee integrarse, encontrar en uno u otro movimiento, un nicho para trabajar los temas que considera relevantes en la lucha por la soberanía alimentaria.

5.4. Identidad, Configuración Social y Decisiones Estratégicas

Para un observador externo paseando entre los stands de la feria por el maíz en Ciudad Universitaria, uno de los pocos espacios a que ambos movimientos han asistido simultáneamente, visitar el puesto informativo de la Red en Defensa del Maíz y el de la Campaña Sin Maíz no Hay País, puede provocar la impresión de que las diferencias entre ambos movimientos están exclusivamente en las decisiones estratégicas, pues detrás de cada stand hay personal de alguna ONG u organización campesina, que daría la impresión de que la composición social es similar para cada movimiento.

Si bien las estrategias permiten conocer a la sociedad en general los motivos de existir de los movimientos, esto es, sus demandas mediante tácticas particulares, éstas decisiones son el resultado final de los procesos de deliberación, de pasiones,

discusiones y comunicaciones que se dan en las oficinas o las reuniones de varias OMS para construir el movimiento. Hemos revisado ya la configuración social de cada movimiento, pero ha faltado relacionar cómo esta configuración social, el resultado de identidades que enmarcan los problemas de forma distinta y convergen en torno a una serie de objetivos, es determinante en las decisiones estratégicas que de manera tan evidente separan a ambos movimientos, lo cual haré a continuación.

5.4.1. Demandas

Las demandas se corresponden estrechamente con la configuración organizacional o social de cada movimiento, pues si las decisiones son tomadas por los actores más importantes del movimiento, son ellos quienes definirán el enmarcamiento del problema en torno al cual se definirán las arenas contenciosas y las tácticas para solucionarlo.

El enmarcamiento es la delimitación e interpretación cultural y contextual que dan los actores al problema y sobre el cual basan sus decisiones, permite conocer los límites del problema, y entender las decisiones que se toman para solucionarlo. Para Goffman (2006:21), un “marco” constituye un esquema de interpretación que permite a los individuos localizar, percibir, identificar, etiquetar y definir situaciones dentro de su espacio de vida y el mundo en general. El enmarcamiento permite al movimiento clasificar los acontecimientos que tienen lugar dentro de su espacio vital y en el mundo en general, definiendo aquellos que son problemáticos. Los marcos sirven para organizar la experiencia y orientar la acción, tanto la individual como la colectiva, al dotar de sentido a los acontecimientos (Snow y Benford, 2006:85).

Los problemas que se definen y delimitan colectivamente, tienen un carácter interactivo y constructivista que se negocia constantemente; se trata por lo tanto de marcos dinámicos que, con el consenso o la divergencia, pueden modificarse, en tanto que son el resultado de significados y formas de entender que se negocian entre los actores del movimiento (Gamson, 1992 en Benford y Snow, 2000).

Los marcos ideológicos o de significación de los eventos que predominan en un movimiento, le permiten: a) realizar el diagnóstico de algún acontecimiento o aspecto de la vida social como problemático y necesitado de solución; b) pensar la presentación de una solución para el problema diagnosticado que especifique lo que se ha de hacer; y c) hacer un llamado a las armas, es decir, una motivación para

comprometerse en la acción correctiva o de rehabilitación (Snow y Benford, 2006:87-88). Las dos primeras tareas tienen como función producir el consenso y la última la movilización de la acción, es el ímpetu que provoca la participación o movilización del movimiento social.

El marco diagnóstico, para Snow y Benford (2000), se refiere a la delimitación de la injusticia, la forma en la que ésta se define y cómo se describen las afectaciones que el problema tiene para los miembros del movimiento, y la sociedad en general. El marco diagnóstico que hace un movimiento, resulta en una serie de demandas y en una narrativa particular, con la que el movimiento exhibe sus causas al resto de la sociedad, para conseguir simpatías y adherencias.

Toda demanda presenta un argumento, esto es, una explicación coherente y delimitada que permite sostener ante sí, como individuo, organización o movimiento, que el problema existe, además permite pensar de manera acotada en qué aspectos de la vida afecta y cómo los afecta; el argumento es el marco elegido que, en términos discursivos, apela a una legitimidad de la demanda, empleando datos científicos, legales, morales o de otra índole que le den énfasis y sustento. El argumento permite llegar a la audiencia o al público objetivo y comunicar un sentido de objetividad y de realidad que atraiga simpatizantes o bien logre el cambio deseado.

La demanda, que se sustenta en el argumento, es la manifestación concreta del problema que convierte a los integrantes del movimiento, por lo menos, en víctimas de un grupo particular; ésta puede cambiar constantemente, adaptándose a los momentos de la lucha, a las negociaciones internas, a la cambiante realidad, a la intención de conseguir más logros o de recuperarse de éxitos malogrados por tácticas mal aplicadas o por demandas mal estructuradas en momentos anteriores del movimiento. Las demandas cambian también, porque al cambiar la realidad cambian los procesos de enmarcamiento, se reconfiguran y re-ajustan.

Para la Red en Defensa del Maíz las demandas giran en torno a la no privatización de los recursos naturales, incluyendo el material genético del maíz y su patente. Aunque normalmente se identifica a la Red con la demanda única de “no al maíz transgénico”, ésta en realidad conlleva una defensa integral del territorio ante los embates de transnacionales y gobierno que pretenden introducir una serie de paquetes tecnológicos mediante la apertura a la privatización de recursos forestales, hidrológicos y genómicos. Esta demanda de la Red, si bien es una constante, no ha sido la única a lo largo de su historia.

La Red y la Campaña presentan procesos diferenciados de cambio en sus demandas, de acuerdo con los cambios en las políticas agrícolas, y a los momentos sociales y políticos por los que ha pasado cada movimiento. Estos momentos han sido comunes, pero las reacciones estratégicas han sido diferentes.

En el 2002, como resultado del primer seminario en defensa del maíz⁸⁷, la Red exigía al gobierno de México: 1. Acciones de política interna: declarar al maíz como recurso estratégico de seguridad nacional, revisión del capítulo agrícola del TLCAN, políticas de precios y subsidios para compensar la pérdida de rentabilidad del maíz, suspender las importaciones de maíz transgénico, detener las siembras de cualquier grano transgénico en México, limitar importaciones de maíz a situaciones de emergencia post-venta de la cosecha nacional, establecer y vigilar cuotas arancelarias, expulsión de empresas multinacionales que emplearan grano transgénico, limpiar los espacios contaminados de transgénicos, mecanismos de protección de semillas nativas, autodeterminación de los pueblos indígenas y su participación en la elaboración de leyes agrícolas y pecuarias. 2. Acciones de política exterior: a la FAO, reconocer el concepto de soberanía alimentaria, resarcimiento de los daños por la contaminación transgénica, incluir el tema de la contaminación transgénica en las Cumbres de la alimentación, obligar a una moratoria global de liberación de transgénicos hacia los centros de origen y diversidad de cultivos, ratificación del Protocolo de Cartagena.

La Red se oponía contundentemente a la legalización de siembra de maíz transgénico pero tenía una diversidad importante de demandas que incluían negociaciones con gobierno y demandas políticas y presupuestales para los campesinos, en un momento cuya primera conformación incluía a organizaciones campesinas como la ANEC y el FDCh, quienes perfilaban ya la conformación del frente amplio del MECNAM.

Ciertamente, la Red en ese momento no se visualizaba como un movimiento, sino como un colectivo que, a partir de una reunión, había hecho demandas para el gobierno mexicano y organismos internacionales encargados de dar lineamientos para la elaboración de políticas agrícolas y alimentarias a nivel mundial; sin embargo, el avance continuo, durante los meses siguientes al seminario, de los permisos gubernamentales para cultivos de algodón y soya transgénica, así como el

⁸⁷ <http://www.ceccam.org.mx/ConclusionesDefensa.htm>

levantamiento en los hechos de la moratoria nacional para la introducción de maíz y la aprobación por la cámara de senadores de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGEM), hicieron que la Red se volviera a reunir, esta vez endureciendo su postura: para 2003, cuando el MECNAM ya estaba dando sus primeros pasos en la movilización, sacó de su agenda todas las demandas que no estaban relacionadas con la introducción de transgénicos; la naciente configuración campesina que aglutinaría al MECNAM, hizo más fuerte la necesidad de dejar de lado las demandas que ahora serían llevadas al gobierno por el movimiento campesino. Las organizaciones participantes en la Red decidieron separar la iniciativa del movimiento campesino, como un proceso de índole distinta al movimiento, resaltando la presencia indígena.

La Red, que poco antes del MECNAM, se adhería a la propuesta de ANEC para entablar una demanda anti-dumping contra las importaciones de maíz de EEUU⁸⁸, decidió retirar ese posicionamiento, inicialmente de manera estratégica, pero posteriormente, ante los eventos y evaluación de resultados del MECNAM, de manera definitiva.

De esta forma, el MECNAM conservó la demanda de renegociar el TLCAN y de negociar mayores y mejores presupuestos –participativos- para el campo. Las organizaciones del MECNAM, como ANEC y ONGs aliadas que en un primer momento asistieron al Seminario en Defensa del Maíz, decidieron abandonar la iniciativa y concentrarse en cohesionar un movimiento campesino nacional y sólido, al cual incorporaron la demanda, aunque de manera tangencial, de no permitir la introducción de transgénicos al país, también incorporaron demandas del movimiento indígena exigiendo que se respetaran los Acuerdos de San Andrés⁸⁹.

A partir del segundo seminario en Defensa del Maíz en 2003, cuando la Red se configuró como tal y decidió consolidarse haciendo de las reuniones asambleas en vez de seminarios, lo cual implicaba un proceso con acuerdos y seguimiento, el tono o matiz de las demandas se modificó: Si bien seguían dirigiéndose al gobierno en total rechazo a los transgénicos, exigiendo retirar la iniciativa de la Ley de Bioseguridad de la cámara de diputados, mantener la moratoria y hacer públicos los

⁸⁸ <http://www.ceccam.org.mx/ConclusionesDefensa.htm>

⁸⁹ Demanda que no fue apoyada por el movimiento indígena, que consideraba una traición total del gobierno, al emitir y reformar una Ley Indígena que no conservaba el espíritu de los Acuerdos Firmados, en 2001. El EZLN y CNI consideraron que las demandas del MECNAM surgían en mal momento, diez años después de la firma del TLCAN y por tanto realmente tenían intereses presupuestales que no aportaban al movimiento por las autonomías indígenas.

resultados de estudios sobre contaminación transgénica, se asumía al interior del colectivo que el gobierno no haría caso a las demandas, por lo tanto también se asumía que la tarea de impedir el paso de transgénicos “*quedaría en los pueblos indígenas y campesinos, custodios, restauradores y generadores de la integridad del maíz. No es posible ver otras alternativas realmente efectivas*⁹⁰”.

Las demandas comenzaban a tener un nivel discursivo, más que de exigencia real al gobierno. Esto se acentuó en los años siguientes; para 2007⁹¹, la Red consideraba que el gobierno y las grandes empresas “*tienen decretada una guerra contra los modos de vida campesinos, la cultura indígena y los maíces nativos para apropiarse de nuestros territorios....esta guerra busca someternos al imperio del mercado, con reformas, leyes y programas para privatizar la tierra y los recursos naturales, dividiendo a las comunidades....el TLCAN es un ataque directo contra la economía de los agricultores mexicanos y le abrió la puerta al maíz transgénico*”. Los talleres-asambleas que se llevaron a cabo durante 2004, 2005 y 2006, se enfocaron a reflexionar la mejor forma de enfrentar, desde lo local, los efectos de la inminente introducción de transgénicos, pues la legislación para permitir la introducción de transgénicos, así como la de certificación de semillas, estaba aprobada por las cámaras parlamentarias y por tanto existía ya riesgo al aceptar apoyos o programas procedentes del gobierno, que intentaran levantar censos agrícolas, introducir paquetes tecnológicos o certificar los terrenos a campesinos de manera individual.

La Red declara, para 2007, que se trata de un proceso que trabajará desde la autonomía en la defensa integral de los territorios, incluyendo recursos naturales y formas culturales. La Red elimina también las demandas a manera de exigencias al gobierno, se limita a hacer declaraciones que expresan nítidamente el enmarcamiento diagnóstico del problema y la solución, reivindicando los cultivos nativos, las formas culturales de gobierno y de economía comunitarias, rechazando las plantaciones comerciales y las relaciones de cualquier índole entre campesinos indígenas e insumos procedentes de compañías agrícolas, incluyendo la posibilidad de emplear agroquímicos⁹². La Red en este momento deja de direccionar demandas específicas

⁹⁰ <http://www.endefensadelmaiz.org/La-contaminacion-transgenica-del.html?artpage=6-6>

⁹¹ <http://www.endefensadelmaiz.org/Taller-Defensa-Territorial-del.html?artpage=3-4>

⁹² Si bien las organizaciones y comunidades indígenas que participan constante y activamente en la Red tienen una producción predominantemente orgánica, organizaciones que asisten de manera irregular no necesariamente se adhieren a estos principios, por lo tanto tampoco tienen una

al gobierno, pues consideran redundante seguir hablando a un gobierno que no está dispuesto a escuchar sino a las empresas transnacionales.

Las demandas se reducen en lo sucesivo, convirtiéndose en meras expresiones narrativas de los puntos de política agrícola que se consideran injustos y problemáticos para la vida de los actores primordiales del movimiento: comunidades indígenas. Las demandas, además adquieren un carácter integral, es decir, ya no se trata únicamente de una oposición a los tratados comerciales, sino a leyes y reglamentos concretos encaminados a la privatización de recursos naturales para el establecimiento o la generación de “empresas rurales”, encaminadas a la producción comercial en gran escala.

Las demandas se convierten en argumentos para que la sociedad civil y el gobierno entiendan el posicionamiento o marco diagnóstico de la Red en torno a las políticas agrícolas que afectan la vida de los actores indígenas, no para que exista una adherencia o una respuesta, pues no se busca la negociación, ni se considera viable una respuesta para modificar las políticas que ocasionan el agravio contra los indígenas, puesto que *“una vez decretada la Ley de Bioseguridad, cualquier acuerdo que apunte a lograr pequeñas modificaciones, no detendrá la estampida que ésta ya ha permitido y que valida todos los demás pequeños pasos dirigidos a implementarla de manera efectiva....negociar dentro de los límites de la ley no es ninguna victoria, es aceptar una derrota”* (Ribeiro, comunicación personal).

La composición predominantemente indígena y comunitaria en la Red, orienta la elaboración de las demandas a evitar el cambio que *“desestructura la identidad y la acción comunitaria en la que se basa la reproducción de la cultura indígena”⁹³*. Las demandas y sus argumentos, en este mismo sentido, se elaboran para servir a las comunidades y pueblos indígenas, en el marco de un proyecto de autonomía y libertad para la producción, el desarrollo y la vida en formas culturalmente adecuadas para la reproducción de la sociedad indígena.

La forma organizacional de la Red, aún cuando sean las ONGs quienes mantienen viva a este movimiento, la convocan y la invocan constantemente, supeditando sus proyectos de trabajo a las necesidades y acuerdos de las

permanencia en este movimiento y, a menudo, al ver que se trata de un proceso que no tiene como objetivo gestionar proyectos para el apoyo a la producción, se retiran del espacio social después de la primera o segunda reunión a la que asisten (Evangelina Robles, comunicación personal).

⁹³ Eutimio Díaz Bautista, GIPA, comunicación personal.

comunidades, favorece que sean éstos últimos los actores más importantes de la Red y aquellos alrededor de quienes se estructura la acción estratégica del movimiento.

La CSMNHP ha también ha tenido demandas variadas en el tiempo, dependiendo de las etapas mismas que ha marcado esta rama para su acción, iniciada como respuesta a la apertura de las cuotas de maíz en el marco del TLCAN y el alza en los precios de tortilla en 2007.

En la Campaña, la toma de decisiones para hacer el diagnóstico de los momentos adecuados para accionar, la deliberación sobre las acciones más adecuadas a emprender y la forma como se presentarán y justificarán al público las acciones del movimiento, se hace al interior del equipo coordinador, donde ONGs con residencia en la Ciudad de México junto con los representantes o responsables de organizaciones campesinas de membresía nacional en la Ciudad, negocian las demandas y argumentos que presentarán a las audiencias en medio de una diversidad de intereses temáticos y de marcos organizacionales para delimitar los problemas que aquejan a cada actor colectivo y que los motivan a ser parte del movimiento. Como en la Campaña no se identifican actores más importantes para la toma de decisiones, es la presencia y la fuerza de las ideas o el consenso en torno a las mismas, el elemento decisorio para elaborar una agenda de demandas y de argumentos. Cada organización habla a título propio de la problemática que identifica y eso genera debates continuos para decidir las demandas más importantes a posicionar en cada momento político que se identifica.

En la Campaña las demandas se estructuran en función de gran diversidad de intereses de trabajo, para distintos “tipos” de actores: ONGs de desarrollo y derechos humanos, organizaciones campesinas y académicos, que entienden distintas necesidades en el terreno de la soberanía alimentaria y atienden a conseguirla desde los frentes de su acción: derechos humanos, políticas de apoyo al campo y mercados para la producción (cadenas productivas).

Cada OMS en la Campaña enmarca, desde la óptica temática e ideológica de su trabajo, el problema de los transgénicos, de la falta de políticas de apoyo al campo y de las políticas de apertura comercial y agrícola a las grandes empresas, que constituyen los tres conflictos alrededor de los cuales se estructuran las demandas. De esta forma, si bien los transgénicos constituyen un eje central en momentos de cambios en las políticas de apertura para este tipo de cultivos, como ha sucedido durante 2010 y 2011, no son el único eje para la acción.

A diferencia de la Red, que ante la imposibilidad de impedir la promulgación de leyes y reglamentos para permitir la siembra de transgénicos se volcó a la acción para resistir desde lo local estos cambios, las demandas de la Campaña apuntan a lograr el cambio para minimizar los impactos de esta legislación.

De esta forma, en materia de transgénicos, las demandas emplean el estrecho marco de acción –logrado por las acciones de la Campaña misma- que brindan las leyes y políticas aprobadas, para exigir más mecanismos que permitan minimizar los impactos de los transgénicos en lo local, como sucedió con la demanda por el Régimen de Protección Especial del Maíz, durante la discusión en la cámara de diputados para la aprobación de la LBOGM. Los argumentos y la constante participación de las organizaciones de la Campaña lograron incluirlo como un fundamento legal para impugnar las solicitudes de siembra experimental de maíz transgénico. Así, la Campaña demanda que la ley en materia de bioseguridad proteja lo más posible a las semillas nativas y a los productores, mientras que la Red, en una total oposición a la existencia de ley para regular sobre transgénicos en México, rechaza su existencia.

La demanda de la Campaña en torno al maíz transgénico, que en un inicio era un rechazo total, se ha ido matizando y adaptando los avances que ha tenido su introducción por la vía de reformas legislativas, con lo cual, pese a que en el discurso se sigue manejando el “No a los transgénicos”, las ONGs del eje transgénicos han ocupado espacios políticos para disminuir su impacto o introducir mecanismos de restricción para ciertas zonas, lo cual hace ver que han aceptado la entrada de los mismos, como una realidad inminente.

El eje de transgénicos es impulsado principalmente por ONGs, y apoyado por todos los actores de la Campaña en momentos clave, sin embargo cada actor tiene sus prioridades y las impulsa para posicionar demandas ante el público, en esto se ha acuñado el lema “la Campaña es de quien la trabaja”, implicando que sólo con la presencia constante de las organizaciones interesadas, es posible posicionar e impulsar un aspecto o tema de interés dentro de la Campaña.

Los transgénicos, para la Red implican un atentado contra semillas preservadas y logradas durante siglos de intercambio local de maíz, logrando semilla adaptada a cada entorno. El maíz es un símbolo cultural, además del alimento básico, alrededor del cual se establecen ciclos de vida y rituales comunitarios e intercomunitarios, argumento que apela a aspectos culturales. La intención de

introducir maíz transgénico, que implica semilla que debe de ser comprada para ser sembrada, es un atentado contra el milenario intercambio y conservación de la semilla propia para la resiembra, ante lo cual es necesario resistir desde la autonomía y el refuerzo de las formas tradicionales de comunidad y de gobierno.

La Campaña, constituida por actores completamente diferentes: ONGs con proyectos fuera del movimiento y organizaciones campesinas, no tiene la posibilidad de enmarcar sus demandas apelando a identidades culturales homogéneas, ni de emprender acciones de resistencia desde el territorio, pues la dispersión geográfica – y temática- de las bases de apoyo, no permitiría apelar a cuidar únicamente el maíz. De hecho, muchas organizaciones campesinas han disminuido su participación por no sentirse representadas por el concepto de maíz o de milpa, considerando que lo que realmente necesitan de la Campaña es una lucha para conseguir políticas justas de comercialización para sus productos, que no necesariamente son maíz. Los ámbitos de acción de todos los actores que conforman la Campaña, y la forma en que se toman las decisiones para la acción, no permiten establecer una resistencia desde el territorio, puesto que no todos tienen una relación identitaria con el territorio, ni todos pueden tomar decisiones concernientes a un mismo espacio geográfico, como lo hace la Red con los reglamentos comunitarias, pues las organizaciones indígenas que son parte de las campesinas que integran la Campaña, no tienen una participación constante en el quipo coordinador, para posicionar la defensa integral como demanda y táctica de lucha.

De esta forma, las demandas más constantes en la Campaña, además de los transgénicos, giran alrededor de los intereses por políticas de apoyo para el campo y apoyo a la comercialización de los productos campesinos de México. La diversidad de intereses en la Campaña, lleva a que constantemente ésta se encuentre impulsando demandas en respuesta a los cambios políticos que afectan más, por ejemplo, durante 2010 se empleó como marco general la crisis alimentaria y la elevada alza de precios de alimentos desde inicios; con esto, las demandas enfatizan la necesidad de reforzar los apoyos y los mercados para la producción campesina.

Otra demanda reciente de la Campaña, introducida inicialmente por ONGs de derechos humanos ha sido exigir al gobierno la reforma constitucional, en los artículos 4 y 27 para incluir el Derecho a la Alimentación, ésta demanda ha obtenido el apoyo por parte de las organizaciones campesinas de la Campaña, ya que piensan que este derecho, elevado a rango constitucional, obligaría al gobierno a garantizar a

los productores nacionales una participación activa en la provisión de alimentos para el país, pues la Reforma, de ser aceptada, dicta que *“el Estado debe garantizar una alimentación adecuada, con abasto suficiente y oportuno de alimentos básicos para todos los mexicanos, en un marco de desarrollo rural integral, garantizando a la población campesina una participación activa en el desarrollo nacional”*⁹⁴. Para la Campaña, esta demanda brindaría un elemento legal para exigir al gobierno apoyos y mercados para la producción de las organizaciones campesinas.

Para la Red, la idea de impulsar demandas en el terreno de los Derechos Humanos es intolerable con un gobierno como el mexicano, pues se leería desde el concepto de seguridad alimentaria y brindaría mayores argumentos al gobierno para la importación de alimentos y aditivos producidos por las grandes transnacionales, cuyos precios, gracias a los subsidios otorgados por países como Estados Unidos y Canadá, son menores a los costos de producción y compiten, ganando, con los precios que pueden exigir las organizaciones campesinas para sus productos. Para la Red, esta demanda, de ser lograda, no sería ningún triunfo para el movimiento y representaría un riesgo para que el gobierno busque mayor injerencia en los asuntos comunitarios, introduciendo más paquetes asistencialistas de fomento a la producción, con empleo de insumos transgénicos.

Las diferencias en demandas entre ambos movimientos, aún si parecen ser sutiles, implican visiones totalmente diferentes en torno a un mismo problema identificado: el avance de las políticas que permiten a las grandes empresas transnacionales y agroindustriales, ocupar espacios y mercados de producción, facilitando la apertura de mercados internacionales y privatizando los recursos necesarios para la producción. Para la Campaña, el repertorio táctico y las arenas de batalla, incluyen la lucha directa ante gobierno y sociedad civil para posicionar el papel de los campesinos en la garantía de la soberanía alimentaria; para la Red, el interés de conservar los espacios de producción agrícola y reproducción cultural indígena, convierte las demandas en narrativas de exposición de motivos dirigidas a conseguir mayor soporte de la sociedad civil en el ámbito rural-indígena, para lo cual los repertorios tácticos y las arenas llevan a una resistencia territorial, a los avances del gobierno y las empresas en la búsqueda de tecnificar la producción y a los productores.

⁹⁴ www.sinmaiznohaypais.org

5.4.2. Arenas

Para Benford y Snow (2000), las arenas son también una parte del marco diagnóstico, y atienden a la identificación de la fuente del problema, esto es, a la definición de los actores que son culpables del problema que pone en riesgo aspectos de la vida de los integrantes del movimiento, o del conjunto de la sociedad. Para Meyer y Staggenborg (2008), las arenas se refieren a los ámbitos de actuación que el movimiento decide emplear para solucionar la situación de injusticia en que se encuentra inserto.

En el movimiento que nos ocupa, ambas dimensiones de lo que es una arena, la definición de la fuente del problema y la decisión de un ámbito para luchar contra esta fuente, no se corresponden, por lo que hay que entender una división teórica entre la arena contenciosa (aquella que señala al culpable), y la arena de acción o incidencia (aquella en la que se libra la lucha).

Las arenas contenciosas, se refieren a los actores a quienes se culpabiliza por el problema que se enfrenta, en nuestro caso, la falta de soberanía alimentaria es una consecuencia directa de acciones gubernamentales que permitieron la apertura de cupos para la importación de alimentos baratos, aceptaron reducir los programas de apoyo al campo e impulsaron el uso de paquetes tecnológicos que implican dependencia para la producción. Estos dos aspectos de política agrícola y comercial, para la Campaña afectan en dos frentes: a los campesinos les impiden insertarse económicamente en los mercados nacionales, de manera competitiva y con producción natural (libre de agroquímicos), y a los consumidores acceder a alimentos nutritivos y nacionales con precios adecuados, pues los alimentos más económicos son aquellos importados o producidos en gran escala por empresas agroindustriales. Estos dos problemas se refieren a la arena política como culpable, pero con afectaciones en dos ámbitos distintos de la sociedad: las organizaciones campesinas como productoras y la sociedad civil como consumidora y ciudadana afectada por los productos de baja calidad y políticas que deprimen al grueso de la sociedad. Cada uno de estos ámbitos tiene una representación clara en la Campaña: las organizaciones campesinas velan por los intereses productivos de sus representados y las ONGs por el grueso de la sociedad; este último elemento permite que si bien la arena contenciosa sea también arena de incidencia, el gobierno como culpable y responsable de solucionar el problema, se abra la necesidad de incidir también en

otra arena, la sociedad civil, que indirectamente, con sus decisiones de consumo, agrava la situación y también es capaz de modificarla para bien. La diversidad de temas e intereses en la Campaña, permite actuar efectivamente en estas dos arenas.

Para la Red, son las mismas políticas de gobierno que, mediante un paquete de regulaciones para la gradual privatización de los recursos naturales, abren espacios para la desaparición de la cultura y la autonomía indígena, al intentar certificar la semilla y abrir espacios de cultivo para germoplasma transgénico que, de llegar a polinizar el maíz nativo, propiciaría la pérdida de las variedades que cada comunidad considera mejores para la alimentación, además implicaría demandas a los productores y, en el peor escenario, la homogeneización para la producción de pocas variedades de maíz cuya patente está en manos de grandes transnacionales. Para la Red, la pérdida del maíz es pérdida de un elemento cultural indispensable, sin embargo, dado que el gobierno mismo es quien fomenta esta situación, no se trata de negociar para evitarla, sino de resistir para impedir su avance. Para la Red, los afectados por esta situación son principalmente los indígenas que ven amenazada su forma de vida basada en el territorio y en la independencia para la producción, y en un segundo plano, la sociedad global, que al perder variedades de maíz producidas a lo largo de miles de años de domesticación local, pierde una parte de la diversidad de este cereal, además de estar condenada a consumir productos transgénicos cuyos efectos en la salud humana todavía no están comprobados.

La arena contenciosa, aquella que delimita al responsable por el problema que enfrenta el movimiento, tanto para la Campaña como para la Red es el gobierno o la sociedad política que, permitiendo la introducción para la producción y la comercialización, de grandes productores y empresas agroindustriales de corte transnacional, ha fomentado una competencia desleal en precios y formas de producción, ha menguado la posibilidad de campesinos e indígenas para tener una vida digna a partir de la producción y comercialización de sus cultivos, con el empleo de formas tradicionales de producción, con semilla culturalmente adecuada y alimentos apropiados a las áreas de cultivo y a las preferencias alimentarias de las diferentes regiones de México. Ambas iniciativas contienden con el gobierno por orientar la política agroalimentaria hacia el libre comercio y la competencia desleal, con impacto directo en las formas de vida y reproducción de comunidades indígenas y campesinas en México.

Por otro lado, las arenas de incidencia son diferentes, pues si bien la Campaña pretende incidir en ámbitos de gobierno para minimizar los impactos de las políticas y evitar la mayor entrada de transgénicos en México, también pretende impactar a la opinión pública de la sociedad civil urbana para conseguir adherentes y apoyo que muestre al gobierno una amplia base de apoyo. La Campaña lleva a cabo múltiples actividades para que la sociedad civil, en calidad de ciudadanos, pero también de consumidores, tomen acción para exigir cambios en las políticas al gobierno, y en los productos de consumo para abrir más espacios de comercio a la producción nacional.

La Red, en cambio, emplea como arenas de incidencia únicamente a la sociedad civil, con un énfasis mayor a la sociedad civil de carácter indígena en las áreas rurales de México, para conseguir que más comunidades u organizaciones rechacen las políticas y paquetes agrícolas, a manera de resistencia y que, junto con la Red, emprendan tácticas contenciosas mediante el refuerzo de instituciones y reglamentos tradicionales indígenas. Si bien la Red emite pronunciamientos o declaraciones, y estas se circulan para su conocimiento por parte de la sociedad civil en general, la posibilidad para los ciudadanos urbanos o no indígenas de participar directamente con la Red, es muy escasa, en tanto que ésta no busca una mayor diversidad temática para tener fuerza ante instancias gubernamentales, sino reforzar el tipo de lucha que ha decidido emprender, desde el territorio. El tipo de adhesiones que la Red busca, es para ampliar la base de actores colectivos y comunitarios que sean “guardianes” del patrimonio cultural y genómico de México, para ampliar la resistencia de corte antisistémico que ha optado por entablar. La configuración social de la red y la estructura que tiene para la toma de decisiones, permite que esto se haya definido así por parte de los grupos indígenas que la forman, siendo las ONGs encargadas de presentar las propuestas para su aprobación.

Para la Red, cuya táctica es la resistencia, la comunicación de demandas a la sociedad civil –nacional e internacional- es importante, pero no determinante, no se trata del ámbito de mayor importancia para conseguir sus objetivos de defensa integral del territorio. Recientemente, se ha tomado la decisión de presentar, junto con la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA) y la Vía Campesina de Norteamérica, una denuncia frente al Tribunal Permanente de los Pueblos, lo cual amplía la arena de incidencia a la sociedad civil internacional, en la búsqueda de atraer atención a los prejuicios que las políticas de libre comercio tienen para las culturas y formas de vida indígenas y campesinas. Las comunicaciones de la Red

para obtener opinión favorable de la sociedad civil nacional, son realmente escasas, y se limitan al uso del suplemento “Ojarasca” del diario “La Jornada”, curiosamente el mismo diario que publica “La Jornada del Campo” coordinado por organizaciones de Campaña, y a la publicación de sus resolutivos en la página de Internet, rara vez actualizada a lo largo del año.

Las arenas contenciosa y de incidencia han sido las mismas para la Campaña a lo largo de su existencia, que desde un inicio se planteó la necesidad de incidir ante gobierno para exigir un mejor trato económico y social a los campesinos, y ante la sociedad para conseguir apoyo a las demandas presentadas ante gobierno, además de buscar influenciar las decisiones de consumo de la gente para exigir mayores y mejores mercados a la producción campesina.

La Red ha modificado sus arenas de acción a lo largo del tiempo, pues si bien en un primer momento, cuando la diversidad de actores era mayor, incluyendo a organizaciones campesinas y ONGs que posteriormente simpatizarían mas con la Campaña, se dirigían a exigir al gobierno modificaciones en materia de políticas agrícolas y de comercio, buscando además la adhesión de la sociedad civil a sus comunicados y demanda en contra del gobierno por permitir la introducción de transgénicos; conforme la Red se definió como un colectivo de comunidades indígenas para salvaguardar el maíz nativo y las formas de producción comunitarias, la arena de incidencia se modificó hacia la sociedad civil identificada como indígena, en el ámbito rural, pues ya no se buscaba cambiar las leyes o minimizar su efecto, sino resistir desde el territorio, sumando a más actores comunitarios para reforzar una lucha de corte antisistémico y resistir los embates de la política.

Para la Red, la posibilidad de configurar la lucha de otra forma, se hizo impensable a partir de los eventos del MECNAM, y los pobres resultados que trajo consigo el ANC, sobre todo para las organizaciones más locales adscritas a las grandes coordinadoras nacionales, quienes se vieron más beneficiadas con la firma del acuerdo.

Esta evaluación se hizo al nivel de ONGs, quienes tuvieron la posibilidad de conocer el panorama completo, por estar basadas en la Ciudad de México y tener contacto con las directivas organizacionales. Para las organizaciones y comunidades indígenas, la posibilidad de emplear la vía legal estaba rechazada desde antes, desde que el CNI a partir de la “traición de la Ley Indígena” que no reflejaba los Acuerdos originales de San Andrés, declaró un rechazo total a las negociaciones con gobierno.

Ambos movimientos tienen claridad en la necesidad de tener mayor respaldo social, sin embargo, las arenas de incidencia para conseguirlo son diferentes: la Campaña busca en la sociedad civil adherentes para mostrar al gobierno un respaldo a sus demandas y consumidores para, en los hechos, apoyar la producción campesina. La Campaña tiene un fuerte componente de interés en llegar a la sociedad civil, por lo que emplea medios variados de comunicación, de manera constante, incluyendo un suplemento en el periódico “La Jornada”, radios comunitarias, Internet y folletos distribuidos públicamente.

La Red busca ampliar territorialmente sus tácticas de resistencia, sumando comunidades u organizaciones indígenas comunitarias al colectivo para ampliar el impacto de los reglamentos mediante los cuales se impide la entrada de paquetes y formas empresariales de agricultura. La Red también busca incidir en la opinión pública internacional, pero con la presentación de un caso ante instancias populares, no mediante el empleo de comunicaciones constantes generales, lo cual, a decir de Evangelina Robles, de Colectivo Coa, *“tiene que ver más con que no nos damos a vasto con todo el trabajo que hay que hacer, sobre todo las ONGs, no se trata de que no queramos, sino de que no podemos”*.

5.4.3. Tácticas. Lucha vs. Resistencia

Las tácticas de cada movimiento han sido variadas y los procesos internos de decisión para llegar a ellas no han estado exentos de tensiones. Las controversias entre organizaciones para decidir las tácticas, han provocado rupturas entre los activistas en diferentes momentos, incluso antes de que el movimiento se separara en dos ramas, o más bien, ocasionando la división en dos ramas; los quiebres en las relaciones, derivados de decisiones diferenciadas, ante la imposibilidad de lograr consensos para la acción, han llegado a ser irreconciliables.

La invitación a Beatriz Paredes por parte del director de la ANEC, aunada a los procesos de negociación con gobierno que desembocaron en la firma del ANC, y la posterior aceptación de una diputación local por parte de la misma persona, fueron tácticas –y arenas- que, predispusieron negativamente a las ONGs de la Red para colaborar en lo subsecuente con esta organización, pues estos eventos indicaban elementos de la acción que claramente se contraponían con los principios de acción de la Red: *“no sólo por la ANEC, sino por el hecho de que su director decidiera a*

nombre de todos lo que era mejor, aún después de que habíamos deliberado que no...significa una falta de respeto hacia las bases y hacia el colectivo, no se puede trabajar con personas y con organizaciones que tienen tendencias protagónicas de ese tipo”, comenta un académico de la Red, en referencia a la invitación a Beatriz Paredes para clausurar el Foro por la Soberanía Alimentaria.

Las rupturas por diferencias en las decisiones tácticas más adecuadas, han moldeado la sucesiva configuración social de cada movimiento, definiendo afinidades y, en este sentido, configurándose de manera diferenciada. De esta forma, la configuración de cada movimiento, ha sido resultado de convergencias o afinidades en la toma de decisiones estratégicas, particularmente las referentes a tácticas, y por ello, para cada movimiento, éstas han variado, junto con la configuración de actores sociales, a lo largo del tiempo, hasta llegar a un punto de estabilidad en que los actores más afines han decidido permanecer en una u otra.

La Red, por ser de anterior formación y haber incluido en un primer momento a ONGs y organizaciones campesinas que posteriormente formarían la Campaña, ha variado más sus tácticas, al igual que sus arenas y demandas. En 2002, se unió a la demanda interpuesta por GEA y la ANEC contra el gobierno mexicano por permitir la introducción de transgénicos sin regulación, haciendo referencia a aquellos que propagaron el trans-gen a los cultivos de la Sierra de Juárez, en Oaxaca. En esta misma época, la Red consideraba válidas las tácticas de denuncia en el marco de la legislación, empleando argumentos que apelaban al marco legal vigente, para impedir la entrada de transgénicos; también, en los dos primeros años, las demandas de la Red eran más amplias, incluyendo demandas productivas y presupuestales, lo que implicaba el uso de la vía legal y la negociación con instancias gubernamentales.

La Red también contempló, en un primer momento, hacer bancos comunitarios de semilla, para conservar ejemplares de cada variedad de maíz empleada localmente, sin embargo esta idea fue rechazada por las comunidades, quienes declararon que *“la idea de banco viene del capitalismo, no podemos pensar así nosotros también si es de lo que estamos en contra, además, los bancos son las milpas mismas, no tenemos por qué encerrar materia viva como en cárceles, se trata de conservar usando, y seguir enriqueciendo”* (Eutimio Díaz, GIPA). La Red decidió entonces, para conservar y enriquecer la semilla, promover las Ferias de Semillas, espacios donde los campesinos indígenas de distintas comunidades convergen para vender o intercambiar semilla local de la cosecha para el próximo ciclo de cultivo. Se

intercambia también información valiosa para entender las propiedades de cada variedad de maíz, y comentarios sobre el “desempeño” de semilla comparada o intercambiada el año anterior entre los mismos productores, de esa forma se evalúa la pertinencia de continuar mezclando ciertas variedades, porque incrementan la productividad o bien se descartan cruza subsecuentes.

Para la Red, lo que se necesita para defender al maíz, al trigo, al arroz, a las semillas nativas en su integridad —contra la contaminación genética y la creciente reducción de variedades por parte de las transnacionales que promueven las grandes plantaciones, *“es apoyar la restauración de aquellos sistemas y ciclos de cultivo que crearon y mantuvieron diversos a muchísimos cultivos y sus semillas durante tantos siglos, junto con los saberes que personas y comunidades, fueron intercambiando con cariño y respeto mutuo. Ninguno de esos procesos es posible sin la permanencia de los pueblos indígenas y campesinos que los pusieron en marcha”*⁹⁵.

La defensa integral del territorio, que implica conservar la autonomía para la toma de decisiones de gobierno mediante asambleas comunitarias, es la táctica principal para la acción por parte de la Red. La participación de comunidades y organizaciones comunitarias es indispensable para esto, pues los acuerdos de mantener un cerco a la introducción de maíz —u otras semillas— cuya procedencia no sea conocida, respaldada por un agricultor conocido, se toman al nivel comunitario y son parte de los reglamentos. La defensa del territorio implica no sólo del maíz o los granos de cultivo, sino de los sistemas naturales y los elementos culturales que le rodean; la introducción de maíz transgénico implica un paquete tecnológico que incluye agroquímicos para evitar el crecimiento de otras plantas que no sean maíz, eliminando la posibilidad de conservar una sistema de milpa, diverso en plantas comestibles para una alimentación integral al nivel familiar.

El nivel comunitario permite que las milpas vecinas se cultiven de manera tradicional, lo que crea una barrera para proteger a los cultivos del centro de transgenes, y entre más comunidades se integren a la red, mayor el área de protección.

Para la Red, se trata de una resistencia desde las comunidades contra políticas de apertura y privatización del gobierno con las empresas agroindustriales, y si bien el gobierno mexicano y la FAO han dejado de ser objetivos para la incidencia, puesto que las leyes que permiten la entrada de transgénicos han sido aprobadas y

⁹⁵ Ojarasca 69, enero de 2003

reforzadas de manera constante en reuniones bilaterales, la Red no ha renunciado por completo a tener logros que permitan denunciar a los transgénicos y los paquetes tecnológicos como un “crimen de lesa humanidad” cometido por el gobierno contra la sociedad mexicana, particularmente los pueblos indígenas, con el objetivo de evidenciar las consecuencias del libre comercio en la agricultura, además de un mandato hacia el gobierno, que haga reversible el daño hecho a los pueblos indígenas al priorizar a las transnacionales y sus productos sobre los pueblos originarios y la alimentación nutritiva y culturalmente adecuada para los mexicanos.

El plan táctico actual más importante de la Red, está orientado a construir un caso para presentar ante el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), un organismo internacional no gubernamental establecido en 1979, como institución de la sociedad civil con la misión específica de transformar en permanente la función de los Tribunales Russell sobre Vietnam (1966-1967) y sobre las dictaduras de América Latina (1974-1976): garantizar un espacio de visibilidad, de toma de palabra, de juicio a las violaciones masivas de los derechos humanos, individuales y colectivos, y a los derechos de los pueblos, que no encuentran respuestas institucionales a nivel nacional o internacional.

El TPP es un espacio donde los pueblos pueden tomar la palabra y presentar sus casos de violaciones de derechos por parte de gobiernos y transnacionales. El TPP no tiene una agenda preconstruida, deriva su programa de trabajo en base a solicitudes fundamentadas de los movimientos sociales, organizaciones ciudadanas o pueblos originarios.

El valor del TPP es relevante para los movimientos en tanto que la Corte Penal Internacional ha excluido de su competencia los crímenes económicos, lo que significa la imposibilidad de considerar muchas y quizás la mayoría de las acciones que se producen o coinciden con la violación de los derechos a la vida, para los cuales no existe la posibilidad de formular juicios que tengan efectividad. El jurado del TPP se conforma en cada caso de manera distinta, pero siempre por personas reconocidas socialmente como personajes eminentes, entre ellos varios premios Nóbel.

Las sentencias o deliberaciones del TPP no son legalmente vinculantes para los Estados, pero representan juicios de valor importantes para el conjunto de la sociedad civil global, sobre todo en tanto que los casos aceptados deben cumplir con una fuerte carpeta de evidencias y testigos para proceder. El carácter de “opinión”

del TPP explica los límites de su actividad: no puede ejercer ninguna influencia más allá de la que la opinión pública (es decir el sentido y el apoyo operativo de los pueblos) le puede garantizar; pero su misma existencia, que pone en evidencias las lagunas de las prácticas del derecho a nivel nacional e internacional, subraya su legitimidad, en cuanto expresión de la soberanía de los pueblos del mundo y de los organismos de la sociedad civil, fuente única de la autoridad de los mismos Estados.

El foro en Guadalajara “Los transgénicos nos roban el futuro”, constituyó, para la Red y la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, la “Primera audiencia para presentar el caso del maíz transgénico ante tribunales internacionales” la cual se tituló “*Contaminación transgénica en México centro de origen: crimen de lesa humanidad*”.

Para ello se hizo un juicio popular en la plaza pública de la Universidad de Guadalajara, en donde integrantes de la Red y de comunidades rurales pertenecientes a la ANAA, expusieron ante la audiencia y un jurado compuesto por investigadores y activistas internacionales que asistieron al evento, las experiencias que han tenido por la introducción de paquetes tecnológicos cerca de sus campos de cultivo. A esta asamblea, además, se invitó a la Vía Campesina Norteamérica, que accedió participar con la Red y la ANAA en la documentación del caso, pues muchos campesinos canadienses y estadounidenses de la Vía, han enfrentado ya demandas por parte de empresas como Monsanto y Syngenta, por encontrar trans-genes en cultivos de canola y soya, haciéndoles perder su patrimonio al no poder demostrar, como mandan leyes internacionales –y nacionales- que se trató de contaminación incidental, y no de robo de patentes genéticas

Las tácticas empleadas por la Red para conseguir su objetivo, en las arenas comunitaria y de la sociedad civil se pueden resumir en:

- Construcción de comunidad, trabajo y apoyo comunitario
- Desarrollo e implementación de técnicas de monitoreo de trazas transgénicas en milpas de las comunidades participantes en la Red
- Encuentros entre pueblos para conocer diferentes estrategias, formas de siembra, variedades y estructuras de milpas.
- Promoción de los reglamentos comunitarios de asamblea para impedir la entrada de paquetes tecnológicos con transgénicos
- Invitación constante a comunidades y organizaciones indígenas para sumarse a la Red.

- Junta de firmas para el posicionamiento de la red, con la intención de legitimar socialmente las demandas, ante la sociedad civil internacional o el TPP cuando se presente el caso.
- Realización de ferias regionales de maíz nativo en comunidades indígenas, difundiendo los riesgos de aceptar el monitoreo oficial (gubernamental) de las milpas campesinas.
- Búsqueda de alianzas con pueblos indígenas del norte del país, para forjar mayor resistencia comunitaria por regiones ante la próxima apertura de siembras piloto de maíz transgénico en 2011.

La Campaña tiene una variedad más amplia de tácticas, encaminadas a posicionar demandas más diversas y a llegar a audiencias más amplias en la sociedad civil y política.

El trabajo en ejes de la Campaña, la estructura para tomar decisiones y la variedad de formas asociativas y temáticas de las organizaciones que la integran, han resultado en un repertorio estratégico más amplio para esta iniciativa. La Campaña define sus tácticas como “lucha en diversos frentes”, con tácticas dirigidas a lograr adhesiones por parte de la sociedad civil, para incrementar la base de apoyo social que respalda sus demandas; con este objetivo se realizan juntas de firmas, en eventos públicos o bien por Internet; se realizan ferias campesinas de semillas que, a diferencia de las convocadas por la Red, se ubican en centros de fácil acceso para la gente de las ciudades en los Estados, para visibilizar la diversidad de semillas y cultivos de las milpas, concientizando a la sociedad sobre la importancia de tomar acciones de exigencia al gobierno para impulsar la producción campesina; se llevan a cabo foros, conferencias, mesas redondas y talleres sobre los temas de trabajo de la campaña, invitando a académicos y personajes públicos que son parte de la comunidad del movimiento; a menudo se realizan conferencias de prensa ante acciones o comunicaciones del gobierno que conciernen a los temas de la Campaña, ya sea causando mayor daño o bien permitiendo logros al movimiento; las expresiones artísticas y eventos públicos son también una táctica empleada y que ha conseguido muchas adhesiones de gente de la sociedad civil, incluso organizaciones que se suman a la comunidad o al movimiento mismo, con la realización de ayunos o veladas y conciertos, ferias y exhibiciones de películas o documentales en las ciudades; la Campaña también estableció el “Día Internacional del Maíz” como fecha simbólica de la cosecha de las milpas, y como un día de celebración “diversa como la

milpa” para festejar al maíz nativo y a los campesinos que lo siembran en México, realizando eventos en distintos Estados de la República, durante los que se juntan firmas.

Las tácticas anteriores no sólo consiguen adhesiones a las causas del movimiento, también permiten a la sociedad pensar en sus decisiones de consumo y el impacto de estas sobre los campesinos de México, con la posibilidad de ampliar una base de consumidores que exijan al gobierno y a las cadenas comerciales más productos nacionales. De esta forma, la sociedad representa para la Campaña base social de apoyo que se puede asumir como representada por el movimiento, y potenciales consumidores que manifiesten sus preferencias a las tiendas de abasto.

Otras tácticas se enfocan más a tener logros en el ámbito político-legislativo: La Campaña ha organizado marchas masivas en los Estados y principalmente en la Ciudad de México, cuando cerca de un millón de campesinos procedentes de todos los Estados asistieron al D.F, junto con una cadena de tractores, a exigir la exclusión de maíz y frijol del TLCAN, las marchas son importantes para la Campaña porque *“permiten que todos recordemos por qué estamos ahí”*, comenta Adela San Vicente, de Semillas de Vida A.C, además permiten al movimiento saber cuanta gente externa o de la comunidad comulga con sus causas; la táctica de incidencia en la sociedad política, o “cabildo” implica asistir a las cámaras parlamentarias y dialogar con personajes políticos para posicionar las demandas, es una de las tácticas que menos resultados ha dado, sin embargo ocupa una parte importante de la participación de algunas organizaciones, principalmente de derechos humanos. Esta táctica implica la participación en espacios de gobierno y ha sido la más controversial en la historia de la Campaña y de las relaciones con la Red, pues la participación de OMS de la Campaña en el comité mixto de la CIBIOGEM, fue para la Red el momento que definió la incompatibilidad en las formas de buscar solucionar un problema común, pues la CIBIOGEM discutía el reglamento a la LBIOGEM, por lo tanto entra implicaba aceptar negociar en los términos de la ley. Al interior de la Campaña, esta táctica fue también evaluada de manera negativa después de dos años, pues implicó *“que se usara la asistencia de las organizaciones de la Campaña para validar ante la sociedad civil un reglamento que fue negativo y lleno de trampas...mientras “nos concedían” el introducir el régimen de protección especial del maíz en el segundo punto de la Ley, se reunían por otro lado para anularlo en el reglamento de*

operación, de tal forma que fue un juego nuestra participación y por eso nos decidimos salir” dice Catherine Marielle de GEA.

La incidencia también ha sido empleada para posicionar el debate sobre el derecho a la alimentación como principio constitucional, esto se ha logrado gracias a que personas que previamente pertenecían a organizaciones del movimiento social, ahora laboran como asesores parlamentarios; la Campaña invitó al Relator Especial de las Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, para la realización de un Foro y reuniones que permitieran a las organizaciones exponer la situación de México en materia de políticas agrícolas y alimentarias que impiden garantizar el Derecho a la Alimentación a la sociedad, para posicionar este punto en la agenda de la siguiente visita oficial del Relator a México; otra táctica para incidir en materia política, es el uso de instrumentos legales para presentar una denuncia contra “*los actos violatorios de la normatividad en materia ambiental, de bioseguridad y de vida silvestre, entre otros, afectando cuestiones de orden público e interés general, al ampliar la situación de riesgo o amenaza de contingencia ambiental en México y poner en peligro inminente la integridad de varios ecosistemas y agroecosistemas y su biodiversidad*”⁹⁶; esta denuncia también fue una decisión táctica controversial y tuvo consecuencias en la reconfiguración de la Red, pues si bien esta última rama se sumó en 2002 a una denuncia similar presentada por la ANEC, el viraje estratégico de la Red implicó el desplazamiento de este espacio de GEA, organización que tomó la iniciativa de interponer la demanda, haciéndolo a título personal y no de la Campaña, para que esto no impidiera la adhesión de organizaciones de la Red; la evaluación de las ONGs de la Red al respecto fue que la demanda reconocía la existencia de leyes adversas a su causa, al invocar el documento emitido por la CCA (comisión de cooperación ambiental derivada de los acuerdos del TLCAN), en donde recomendaba impedir la siembra de transgénicos por las implicaciones culturales que traerían estos consigo. Para las ONGs de la Red, encargadas de analizar la información sobre la cual se toman decisiones estratégicas, este recurso implicaba reconocer un aparato legal contra el cual se está generando la resistencia, y por lo tanto era rechazable y también la organización proponente era adversa al marco en el cual se entabla la lucha para esta rama. Es interesante notar, en este último punto, que fueron organizaciones campesinas de la Red quienes, en 2002, solicitaron a la

⁹⁶ Denuncia Popular interpuesta ante la Profepa en 2010.

CCA la revisión en materia de riesgos por la introducción de transgénicos. La recomendación fue favorable para las organizaciones solicitantes, pero fue ignorada por el gobierno. Posteriormente la Red abandonó hacer referencia a esta recomendación como argumento, por haber sido emitida por una instancia derivada del TLCAN, acuerdo que valida, en su totalidad, las leyes de apertura al libre comercio, a la privatización de recursos y a la biotecnología que son el punto de partida para el movimiento antisistémico de la Red.

Para la Campaña, la lucha debe darse en distintos frentes, tantos como puntos de vista sobre los problemas en materia de soberanía alimentaria existen entre las OMS que la integran. La estructura para la toma de decisiones en la Campaña, permite que en efecto ésta sea de quien la trabaje, esto es, quien con su participación constantes posicione los temas relevantes para su organización, consiguiendo el respaldo de las demás OMS a cambio de ofrecer el suyo en otros momentos. Las ONGs tienen un papel protagónico, por su posibilidad de participación en el Distrito Federal; para las organizaciones campesinas de base, este motivo implica que participen mediante un representante encargado de la oficina central, que posiciona las demandas más generales de la organización, o aquellas enfáticamente mandatadas por las asambleas de su organización, pero poca posibilidad real de impulsar una defensa territorial con tácticas de resistencia, pues la Campaña no cuenta con fondos, ni con proyectos, para trasladarse constantemente a apoyar actividades puntuales en los Estados, lo cual genera tensiones y a menudo deserciones o abandono del espacio.

Las organizaciones más locales han manifestado sus deseos de que la Campaña se descentralice, al mismo tiempo que entable tácticas similares a las de la Red, con una defensa integral del territorio, sin embargo las imposibilidades para costear los viajes y la estructura misma de la Campaña, en la que cada organización participa desde sus proyectos particulares, impiden una colaboración más estrecha como la que requeriría el trabajo desde lo local-rural.

5.5. Decisión estratégica y configuración social

La Campaña y la Red se constituyeron a raíz de discrepancias en las decisiones estratégicas, a lo largo de trayectorias comunes de organizaciones en el marco del movimiento campesino, principalmente, y en el movimiento indígena, de forma secundaria. Los actores que han compartido más momentos, ya sea convergiendo en decisiones o bien con diferencias importantes de opinión, han sido las ONGs, presentes como OMS en el movimiento campesino y en alianzas estratégicas para iniciar un movimiento por la soberanía alimentaria.

Las formas de trabajo de cada ONG han sido determinantes para definir afinidades con organizaciones sociales, campesinas o indígenas y afianzar alianzas que definieron a cada movimiento como tal. Los problemas identificados por la invitación de Beatriz Paredes al Foro por la Soberanía Alimentaria, la decisión de firmar el ANC y de aceptar una diputación local justo al finalizar el MECNAM y a pocos meses de la firma del ANC, fueron decisiones tomadas por la ANEC y evaluadas por un conglomerado de organizaciones como negativas, lo que profundizó gradualmente las diferencias, que terminaron de hacerse evidentes con la participación en el Congreso para la emisión de la LBOGEM.

Es importante destacar que la detección de diferencias entre la Campaña y la Red es evidente, en el caso de la Red, únicamente para las ONGs, pues la mayor parte de organizaciones indígenas (a excepción de GIPA y UNOSJO) manifestaron desconocer las diferencias que existen con la Campaña, o incluso desconocer de qué se trata ésta, pues al constituirse ésta última por organizaciones campesinas nacionales, y trabajar en el ámbito urbano de la capital, su información no llega a las organizaciones más locales. Aquí nuevamente es la configuración y la forma de trabajo que define los alcances de la información para conseguir adherentes.

En el caso de la Campaña, las organizaciones campesinas manifestaron conocer a la Red, y, a diferencia de las ONGs que conocen la fuente y el contenido de las diferencias entre ramas, consideran que un trabajo como el de la Red, de la defensa territorial, sería altamente benéfico para las organizaciones campesinas menores que se unen a la Campaña desde lo local, pero sin posibilidad de participar de forma real en su construcción.

Las diferencias, entonces, son comprendidas, emprendidas y construidas principalmente por las ONGs y cúpulas de las organizaciones campesinas, que desde

las afinidades y convergencias construidas en cada movimiento, identifican de manera distinta el problema y la forma en que afecta a los actores clave (en la Campaña desde el trabajo de cada organización, en la Red desde la afectación concreta a las comunidades indígenas), y a la sociedad en general. También difieren en la forma como exponen el problema (demandas) y la solución que deciden tomar para arreglarlo (tácticas). Si bien ambos movimientos entienden la necesidad de buscar mayor respaldo social para la causa, también visualizan a la audiencia de manera diferenciada (la Campaña en la sociedad civil y la Red en el ámbito rural-indígena).

Las diferencias en la configuración que se reflejan en diferentes entendimientos de la estructura de funcionamiento para cada movimiento (horizontalidad en la Campaña y supeditación de las ONGs en la Red), hace que se evalúen los logros de manera distinta, de acuerdo con los marcos que delimitan el problema y su solución. Un ejemplo reciente, que desembocó en una ruptura definitiva entre ramas, asumida como tal por ambas partes, permita entender la profundidad de las diferencias estratégicas:

En febrero del 2011, ante la autorización de siembras piloto de transgénicos en el norte del país, otorgadas a Monsanto y Syngenta, se emitieron en dos Estados, Tlaxcala y Michoacán, leyes estatales para la protección del maíz criollo. En el caso de Tlaxcala, la iniciativa fue impulsada por la organización campesina Vicente Guerrero, que se adhiere a la Campaña pese a que nunca ha participado activamente, y en Michoacán por diputados locales. Ninguna de estas leyes fue discutida por la Campaña aunque se apoyaba su promulgación, que al suceder se consideró como triunfo de la organización, mas no del movimiento.

Ambas leyes tienen como objetivo “Autorizar el almacenamiento, distribución y comercialización de organismos genéticamente modificados (OGM) del maíz”, para lo cual crean un consejo municipal o estatal que vigile el cumplimiento de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM), emitiendo los permisos o negándolos, para el almacenamiento, distribución y comercialización de OGM.

Para la Campaña, estas leyes constituyen un avance, pues por un lado, los consejos, al tener representación campesina, fungirán como impedimento para la autorización de introducir transgénicos, y por otro lado, dado que como ley estatal se

remite a la LBOGEM, brindan la posibilidad de declarar como “zonas libres de transgénicos⁹⁷” las parcelas de los agricultores, aunque esto se tenga que hacer de manera individual.

La aceptación de las leyes de Tlaxcala y Michoacán conlleva implícitamente aceptar la LBOGEM en toda su extensión, además de sus reglamentos derivados. Para la Campaña esto es inevitable, en tanto que la ley federal ya fue decretada y por lo tanto *“cambiar las cosas es un asunto de correlación de fuerzas, en un lucha larga e ininterrumpida, con logros y avances graduales hasta crear/propiciar las condiciones para logros mas estructurales y cambios de modelo. Así lo hemos creído en la Campaña Sin maíz no hay país⁹⁸”*.

Si bien la Ley declara el maíz criollo como patrimonio originario y alimentario en diversificación constante, mencionando en todo momento que el objetivo de la ley es proteger y fomentar el maíz libre de OGMs, la regulación que establece es para la distribución y almacenamiento del grano, no realmente para sus siembra, supeditando las decisiones en materia de prohibición de transgénicos a un comité de decisión en cuya constitución solo hay cupo para un campesino o indígena y a la LBOGEM, cuyos requisitos de documentación para impedir la entrada de maíz transgénico son difíciles de cumplir para las comunidades campesinas, pues implican el pago de estudios técnicos de alto presupuesto que demuestren que las variedades de maíz que se siembren sean poblaciones de los parientes silvestres del OGM que se pretende introducir⁹⁹, además, el maíz que se encuentra ya sembrado y que se desea proteger debe de estar certificado como orgánico y comercial para que aplique el establecimiento de la zona libre de transgénicos¹⁰⁰; esta certificación es costosa y bastante difícil de obtener para campesinos de subsistencia. Además, quien solicite la certificación como zona libre de transgénicos debe de demostrar científica y técnicamente que la coexistencia con los transgénicos que se pretende introducir no es viable puesto que se dejarían de cumplir los requisitos para la certificación orgánica original.

⁹⁷ Figura permitida por la LBOGEM en su artículo 90.

⁹⁸ Victor Suárez, comunicación personal, 26 de marzo del 2011.

⁹⁹ Es importante recalcar que el flujo genético entre maíces es posible incluso tratándose de razas diferentes, por lo que si se introduce maíz transgénico, aún si no es similar al sembrado, puede ocurrir un intercambio y por ende el fenómeno considerado “contaminación”, en tanto que el trans-gen fertiliza de manera involuntaria al maíz silvestre, lo cual se considera por parte de las compañías, un robo de patente y es penalizado para los productores cuyo maíz fue involuntariamente polinizado, y por tanto, contaminado.

¹⁰⁰ http://www.pidaassa.org/documentos/Ley_Maiz_TlaxcalaDiarioOficial.pdf

Las leyes estatales en realidad no mencionan las regulaciones aplicables para la siembra de transgénicos, lo que ha llevado a que los secretarios estatales de agricultura sigan considerando viable la introducción de transgénicos cuando estos sean liberados para siembra comercial.

El decreto de estas leyes estatales, para la Campaña implica encontrar aquellos espacios para la lucha empleando el marco regulatorio vigente, puesto que éstas en realidad establecen los órganos consultivos para poder regular, tanto positiva como negativamente, la introducción y el cultivo de maíz transgénico a las regiones de cada entidad, lo que permitirá, según la Campaña, una coordinación comunitaria eficiente y un marco para impedir la entrada de transgénicos, por la posibilidad de decretar el territorio estatal como zona libre.

Para la Red, se trata de un mecanismo que promueve el registro, la patente y otras formas de propiedad intelectual sobre el maíz criollo, pues la formación de fondos de semilla en manos de los gobiernos estatales es un peligro que implica la clasificación y certificación del germoplasma, y puede ser empleado como insumo para los mecanismos dispuestos en la Ley de Producción, Certificación y Comercio de Semillas, para ilegalizar la libre circulación e intercambio de semillas¹⁰¹. Estos fondos de semilla se consideraron un equivalente a los bancos de semilla que en un primer momento fueron considerados por la Red pero rechazados por las comunidades.

Un segundo argumento de la Red en contra de estas leyes, es que la simple aceptación implícita de la LBOGEM es reprobable, en tanto lleva la al movimiento a un terreno de permitir mecanismos que, si bien en el papel parecerían ofrecer restricciones para la introducción de transgénicos, en los hechos son muy difíciles de implementar para las comunidades indígenas, por los recursos financieros, humanos y técnicos que implican. Los consejos estatales del maíz, que se presentan como la nueva panacea, tienen una integración mayoritaria de funcionarios oficiales, con algunos académicos y ONG. En Tlaxcala aceptan también un indígena y un campesino, y en Michoacán, cuatro productores de maíz por podrían incluir industriales maiceros. Pero en cualquier caso, son solamente *consultivos*. Las decisiones quedan en manos de las secretarías de agricultura de cada estado.

¹⁰¹ Ribeiro, Silvia. Fuego amigo contra los pueblos del maíz. La Jornada, 09 de abril del 2011.

Este desacuerdo final entre las arenas y tácticas avaladas para cada movimiento representa “un punto de ruptura para el movimiento por la soberanía alimentaria, que fue discutido en los medios impresos y al interior de cada iniciativa, llegando cada una a la conclusión de que “si no podemos ver estos logros como tal y entender que el camino es difícil pero esta es una ganancia, será imposible tener puntos de encuentro en el futuro, pues mas allá de usar la vía legal o no, se encuentra una capacidad de reconocer los esfuerzos y los espacios ganados” comenta Martín Velázquez de AMAP.

Para Silvia Ribeiro, al respecto, no queda más que *“Lamentar profundamente que las leyes nos roben la palabra, no nos permitan dialogar desde lo profundo y nos traten de imponer en este caso la ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados y sus derivados, como el único camino legal para defender nuestro derecho de de vivir como pueblos de maíz, siendo que dicha ley nos impide esa defensa¹⁰²”*.

¹⁰² <http://www.jornada.unam.mx/2011/04/26/index.php?section=opinion&article=014a1pol>

6. Conclusiones

Para Diehl y Mc Farland (2010), el movimiento es el lugar desde donde se confronta a las estructuras sociales. La forma de organización de los movimientos sociales no es exactamente “instrumental” hacia sus objetivos, sino –también- un objetivo en sí misma; esto es, la estructura del movimiento es la base para la identidad colectiva interna del sistema, pero también para un enfrentamiento simbólico con el sistema, en tanto que el movimiento mismo como medio, en su estructura es un mensaje (Melucci, 1999).

La configuración social, entendida como los tipos de actores que son parte del movimiento, y que se definen en torno a su identidad o función social, así como las formas organizativas que deciden adoptar y que incluyen jerarquías para la toma de decisiones, son determinantes para la orientación estratégica, pues reflejan las identidades y las jerarquías en el “mundo o sociedad ideal” que se quiere lograr con las acciones derivadas de las decisiones estratégicas. Estas jerarquías implican designación en la toma de decisiones, para definir las arenas, tácticas, demandas y momentos en la actuación del movimiento.

El tipo de vínculos sociales que dan estructura organizativa y jerárquica al movimiento son resultado de formas de pensar las relaciones sociales que se tejen en el andar; escenifican, o intentan escenificar, el ideal de sociedad que se persigue. El movimiento tiene dinámicas sociales internas específicas, relaciones mediante las que se define a los actores más importantes y aquellos que toman las decisiones que orientan al movimiento estratégicamente. La configuración social y las formas de vinculación al interior del movimiento, son elementos internos que posibilitan la toma de las decisiones estratégicas que comunicarán el mensaje del movimiento hacia el exterior. Estos elementos también restringen las condiciones en las cuales se decide efectivamente, pues cuando las decisiones recaen en un actor específico, éste atiende a intereses y repertorios acotados, aún si el funcionamiento del movimiento es ampliamente participativo.

La Campaña y la Red tienen constituciones sociales un tanto diferenciadas, pues si bien en ambos movimientos participan actores rurales campesinos, en la Red participan empleando su identidad étnica y en colectivo comunitario-indígena, diferente al nivel organizacional-campesino que otros actores han decidido usar al participar en la Campaña. Esto no implica que en otros momentos –y espacios- los

actores rurales de la Red o la Campaña participen con la identidad contraria, de la cual también pueden hacer uso en la mayor parte de los casos, pues los participantes campesinos del movimiento por la soberanía alimentaria, son campesinos indígenas en el nivel más local; la identidad que emplean al momento de relacionarse con otros actores colectivos, es estable al momento de participar en un movimiento, pero puede ser variable en otras relaciones.

Otro elemento configuracional en común para ambos movimientos, es la participación de ONGs, cuya diferencia más evidente podría ser la presencia de ONGs de derechos humanos en la Campaña y su ausencia en la Red, sin embargo, es la forma de relacionarse de estas organizaciones con el resto movimiento lo que realmente dota de particularidades de funcionamiento a cada movimiento. Las identidades diferenciadas de los actores rurales y su relación con las ONGs permiten ver la influencia de las configuraciones sociales y la estructura organizativa sobre las decisiones estratégicas: en la Campaña, se intenta escenificar una democracia en la forma de construir el movimiento, dando a cada organización el mismo peso y permitiendo una votación mayoritaria para la elección de las mejores estrategias en los momentos adecuados. En la Red, si bien las ONGs ejercen una influencia mayor para la toma de decisiones que aquella que la mayor parte de organizaciones está dispuesta a reconocer, es la asamblea, y principalmente el voto de las comunidades indígenas, que direcciona no sólo al movimiento, sino a los proyectos de base que son necesarios en momentos de latencia para mantener y reforzar la resistencia territorial.

Las ONGs en ambos casos participan con el aporte de conocimientos técnicos y profesionales para apoyar a los movimientos, sin embargo los proyectos de estas organizaciones como actores independientes, aquellos que caracterizan a una ONG de otra, se encuentran ausentes en la Red, pues todas ofrecen apoyo –ciertamente diferenciado técnicamente- para el gran proyecto indígena de construcción de comunidad sin transgénicos. Para la Campaña, el papel de apoyo técnico que fungen las ONGs en la Red, es el elemento de su función social que se encuentra más ausente y se limita a momentos específicos de convivencia técnica, fuera de la movilización. En la Red, el conocimiento profesional de las ONGs de investigación y su capacidad de acceder a novedades mundiales y nacionales, relevantes para el movimiento, las obliga a menudo a reaccionar a título de representantes, sin lograr el consenso, o bien a dirigir las discusiones de la asamblea a temas y problemas nuevos,

no planteados en la agenda y por lo tanto no discutidos previamente por los representantes indígenas con sus comunidades, sin embargo rara vez proponen o deciden elementos estratégicos en materia de arenas, demandas o tácticas de incidencia, estos aspectos son puestos a discusión y decididos por los integrantes indígenas del movimiento, como sucedió con el caso ante el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP).

Las ONGs de la Campaña, por el contrario, que participan con uno –o varios– de sus proyectos individuales en la acción colectiva, ofrecen, además de su conocimiento sobre novedades y temas de actualidad en los ámbitos de interés del movimiento, su repertorio estratégico al resto del movimiento, ampliando las opciones de esta índole. Además, dado que las ONGs son de los actores sociales más constantes en el equipo coordinador, tienen un peso importante en decisiones estratégicas que orientan la acción de este movimiento. Las organizaciones de la Campaña concuerdan en que la diversidad de proyectos da fuerza y amplía los frentes de lucha, para ser más global. Esto necesariamente descentraliza la lucha y permite que el espacio sea una “caja de resonancia” para los proyectos, muy a pesar de las organizaciones mas locales, en muchos casos indígenas, que quisieran ver mayor apoyo en el ámbito territorial por parte de las ONGs, considerando que estas proporcionarles un buen apoyo técnico para solucionar efectos locales de las políticas nacionales. Sin embargo, la estructura operativa define que el espacio se trabaje ocupándolo constantemente, lo cual es una tarea que requiere esfuerzos presenciales constantes que no todas las organizaciones pueden hacer.

En ambos movimientos, es la función social que cada ONG percibe para sí, así como la percepción que los demás actores tienen sobre el “deber ser” de las ONGs, lo que permite definir las afinidades y acomodar la configuración social del movimiento de forma armónica para lograr una estructura operativa funcional.

Claramente, la Campaña ha sido más enfática y exitosa en ampliar el marco de las afectaciones o problemas que afectan al sector agrícola, saliendo de la victimización de los meros integrantes del movimiento y ampliando los argumentos de la afectación hacia la sociedad en general, movilizando argumentos científicos, técnicos y de derechos humanos para incluir a la ciudadanía como tal y como consumidora. La Red, si bien implica estas mismas afectaciones en el caso ante el TPP, concentra su marco de acción en una resistencia localizada a la cual las adherencias, si no son de comunidades, poco pueden aportar. Ambas formas de

enfocar el problema y la solución, derivan de los intereses de los actores que configuran cada movimiento: para las comunidades indígenas que no pertenecen a ninguna organización amplia que apoye sus necesidades productivas, es importante reforzar el espacio autonómico comunitario, en apego a los resolutivos del CNI; para la Campaña, la diversidad de intereses que tienen como común denominador hablar a nombre de amplios sectores (ONGs de derechos humanos) o de múltiples organizaciones estatales campesinas (organizaciones campesinas), hace indispensable que las demandas se amplíen y tengan eco en varios potenciales sectores sociales y políticos de apoyo.

El énfasis de la Red en concentrarse en una lucha territorial, atendiendo a las necesidades manifestadas por los actores de base, ha llevado a la construcción de una lucha de corte antisistémico, en donde la resistencia es la táctica más importante. Se trata de una oposición total a las políticas neoliberales por los problemas que éstas acarrearán a la reproducción de la cultura y las formas de vida indígenas; la resistencia es contra los cambios mediante la reproducción constante de una defensa de las tradiciones, incluyendo el material de siembra y sus formas tradicionales. Por ello, pese a que los transgénicos son el eje temático del movimiento, en derredor suyo se tejen hilos argumentales múltiples que ponen al maíz y las tradiciones a su alrededor, en el centro.

Para la Campaña, la diversidad de actores y las necesidades productivas de los actores de base, las comunidades campesinas, es inevitable la lucha en la arena política, buscando constantemente la negociación que se traduzca en políticas de apoyo para la producción y el comercio de las organizaciones campesinas. La lucha parte de pensar en el avance de las políticas adversas, también definidas como neoliberales, como algo inevitable y en las cuales es indispensable intentar incidir, ocupando espacios, como una guerra de posiciones en el más puro estilo gramsciano.

Las formas de enmarcar el problema para hacer un diagnóstico y plantear las posibles soluciones para lograr revertirlo, se definen en terrenos distintos: la Red cuestiona, en lo más profundo de su lógica movimentista, los fundamentos mismos de una supuesta democracia nacional, cuestionando los códigos culturales que sustentan la elaboración de política y de inclusión de la sociedad civil indígena en la construcción del Estado. La lucha de la Red, de corte antisistémico, implica una lucha simbólica a través de la cual se crean y recrean mensajes y significados sociales, buscando la creación de un nuevo proyecto de sociedad en el ámbito rural,

de índole autonómico, en el cual el problema que cohesiona al movimiento sea excluido de la vida social de las comunidades indígenas.

En la acción de la Campaña subyace un supuesto de país democrático que requiere de un impulso contundente por parte de amplios sectores de la sociedad civil, para ampliar su inclusión y lograr un desarrollo integral. Bajo el supuesto de un país democrático con debilidades en diferentes ámbitos de su desarrollo y en la participación del sector rural, la campaña busca tener influencia para colocar temas en la agenda legislativa, inclusión de la sociedad civil en los espacios de discusión para la generación de agendas, e impulsar una política de reforma para modificar la legislación vigente que afecta a los productores en el campo y a los consumidores en el país; la Campaña también busca influir a la sociedad civil apelando a aspectos identitarios y económicos, con lo cual el modelo de acción de la Campaña es muy similar al propuesto por Cohen y Arato (2001), que encuentran una política de acción dual en la orientación de los movimientos sociales contemporáneos. El proyecto de la Campaña es más incluyente e implica la transformación de la sociedad para incorporar a los campesinos excluidos en un modelo de desarrollo apegado a los estándares definidos por la modernidad.

Las diferencias estratégicas, si bien son producto de estructuras organizativas diferentes que son evidentes para el observador externo, son el resultado de relaciones sociales que requirieron de tiempo para definirse como afinidades o como divergencias. La convocatoria inicial a la Red, primer movimiento que se gestó, tuvo afluencia de organizaciones campesinas y no gubernamentales que posteriormente se asentaron en la Campaña, pero cuya separación del contingente que formó la Red fue gradual, definiéndose a base de eventos en las relaciones, decisiones diferenciadas y adscripciones a proyectos sociales diferentes. Para las comunidades campesinas, que se perfilaron como actores prioritarios en la lucha contra los transgénicos desde el principio, era importante construir un proceso desde la base, en torno a la cual deben canalizarse todas las fuerzas para accionar de manera territorial la resistencia. Las ONGs que concordaban con este proyecto, permanecieron en este movimiento.

La convocatoria inicial de la Campaña reunió igualmente a actores diversos y plurales, pero el corte de las organizaciones campesinas convocantes y las afinidades formadas durante el Movimiento el Campo No Aguanta Más, tuvieron mayor peso en que la lucha incluyera negociaciones con gobierno, lo que también permitió agregar a ONGs de incidencia, como las de derechos humanos. Al mismo tiempo, otras

organizaciones que concordaban con la idea de ampliar los frentes de lucha, encontraron cobijo en las posibilidades de este movimiento.

Sin embargo, no todas las afinidades se definieron a partir de proyectos colectivos, también existieron diferencias en las aproximaciones estratégicas de actores concretos, de esta forma, los eventos que en un primer momento sirvieron para fracturar las relaciones entre la ANEC como organización campesina de gran importancia para el movimiento campesino, con múltiples actores del movimiento indígena, principalmente ONGs comprometidas con éste como proyecto institucional, sirvieron para asentar las afinidades. Las organizaciones campesinas decidieron mantener las alianzas generadas en el MECNAM, encontrando en la Campaña un espacio adicional al CONOC para enarbolar demandas de corte político y económico, mientras que las organizaciones indígenas continuaron aprovechando y construyendo un espacio que les permitía definir colectivamente una resistencia orgánica a sus formas culturales y a los lineamientos del Congreso Nacional Indígena;

Las ONGs pudieron ubicarse en el espacio más afín a sus formas de trabajo, a sus ideas de función social y del “deber ser” de su relación con actores de base, con lo cual encontraron posibilidades múltiples.

Los últimos acontecimientos, las diferencias de opinión –y manifestación pública- ante las leyes estatales contra los transgénicos, reiteran mi aserción de que se trata de dos movimientos, y no de un movimiento dividido, como suponía al inicio de mi investigación. Si bien tanto la Campaña como la Red forman colectivos que reaccionan ante fracasos, percibido por ambos lados, de los arreglos institucionales existentes, también buscan responder a las necesidades de grupos y categorías sociales excluidos de la estructura política que se definen a sí mismos en términos distintos: étnicos en la Red, contra productivos en la Campaña. Los proyectos de soberanía alimentaria son diferentes, en tanto que implican arreglos sociales y políticos diferentes, tanto al interior del movimiento como en sus acciones estratégicas; además, aunque en ambos movimientos la demanda de “no” a los transgénicos es común, incluso la lucha en torno a este punto se vive y se escenifica de forma distinta: la Campaña busca incidir para minimizar los impactos de las leyes federales y estatales en la introducción de transgénicos, mientras que la Red busca ampliar el mensaje de los impactos de estos cultivos para conseguir que, en los hechos, los campesinos indígenas impidan su paso a las milpas.

Considero que, aunque muchas de las organizaciones del movimiento social de ambos movimientos, tienen ideas similares con respecto a lo que debe de ser el papel de los campesinos en el desarrollo del país, la mirada de cada movimiento es distinta, y quizá si la Red decidiera entrar en temas campesinos, mas allá de lo indígena, su postura con respecto a la negociación y a la forma de entablar las demandas en arenas políticas sería similar, sin embargo esta discusión es ajena a los intereses actuales de la Red. Por otro lado, la posibilidad de actuar mediante la resistencia, y con una oposición contundente a las políticas de corte neoliberal en materia agrícola del gobierno, son contrarias a la razón de ser de las organizaciones campesinas, que requieren de mantener un diálogo constante, como sector, con el gobierno para presionar por presupuestos de apoyo al campo.

Si bien, ambos movimientos tienen una actividad contenciosa continua, la Campaña está orientada al cambio, mientras que en el caso de la Red a la resistencia y reafirmación de la tradición; la actividad contenciosa se piensa y se evalúa en términos totalmente distintos.

En cada movimiento se definen solidaridades y redes de trabajo y colaboración basadas en una jerarquización distinta de los tipos de actores colectivos que conforman el movimiento. Pese a que las ONGs son actores comunes, se diferencian en cuanto a la función social que piensan para su trabajo, y en la función que les es asignada por los otros actores colectivos, que se encuentra en correspondencia para posibilitar el trabajo y el enmarcamiento de los conflictos en torno a los cuales se define la lucha. Las configuraciones sociales resultantes no son gratuitas, se han definido gradualmente a lo largo de trayectorias con eventos específicos en las relaciones sociales, que han permitido a las organizaciones o movimientos pensar y aprender de los resultados, construyendo diferentes aproximaciones ante situaciones políticas similares.

Las afinidades permiten visualizar al movimiento como un espacio en el cual se modela el ideal simbólico de sociedad que se persigue, por lo que se asignan funciones diferenciadas a los actores que participan, con estructuras jerárquicas y operativas que designan de manera distinta a los actores protagónicos y en función de los cuales se entabla la lucha; los actores que deciden lo hacen en términos y terrenos opuestos: étnicos y territoriales contra productivos y de clase. La asignación y autopercepción de funciones distintas para cada tipo de actor organizado, lleva a la creación de modelos culturales para la operación interna que son una ganancia en sí

mismos, como modelos en las relaciones sociales y las solidaridades logradas, independientemente de los logros institucionales, políticos o sociales externos para el movimiento.

Las diferencias en los proyectos de cada movimiento están asociadas con las configuraciones sociales y las redes sociales que cohesionan a cada colectivo. Estas diferencias han sido definidas a lo largo de historias comunes y de aprendizajes, pero más allá de éstas está el hecho de que para cada uno de estos movimientos subyace una idea de sociedad y de soberanía alimentaria diferente, que se refleja en sus decisiones estratégicas, por lo que la lucha en común está fuera de la discusión para ambos. Ambos valoran de forma distinta las experiencias que han vivido los diferentes actores, así, mientras que la experiencia política de un personaje de liderazgo es relevante para la Campaña, para la Red esta misma es motivo de rechazo. Mientras que la diversidad es riqueza y la vida misma para la Campaña, para la Red es recurso potencial pero no latente en la orientación de su acción actual.

Por último, el enmarcamiento diferenciado en torno a las soluciones para contribuir a la soberanía alimentaria, permite realmente entender dos proyectos distintos que terminan por definir a dos movimientos sociales con características sociales, ideológicas y culturales distintas, con repercusiones en su dinámica interna y en sus formas de lucha. Si bien algunas organizaciones del movimiento social son afines y participan a título individual en otras iniciativas de la sociedad civil, como el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, la orientación diferenciada del colectivo, impide que esta participación se haga a título del movimiento, principalmente por parte de la Red en Defensa del Maíz, pues, por ejemplo, la iniciativa mencionada implica el diálogo con el gobierno para modificar políticas de seguridad social.

En realidad, la visión diferenciada de las arenas de incidencia, así como las tácticas necesarias para ejercer un proyecto de soberanía alimentaria también diferente en sus objetivos, dificultan la convergencia de ambos movimientos; a lo anterior se suma una fractura en las relaciones sociales que, según lo manifestado por los integrantes de la Red en Defensa del Maíz, es irreconciliable porque ha roto la posibilidad de confiar en que los intereses colectivos puedan predominar sobre el interés de cada organización. Para las organizaciones de la Campaña, por su parte, la reacción de la Red en torno a las leyes estatales de Tlaxcala y Michoacán, a las cuales consideran una ganancia valiosa para impedir la entrada de maíz transgénico a

los Estados, ha mostrado grandes divergencias en torno a los hechos que pueden ser considerados como logros por el movimiento. El rechazo de la Red hacia las Leyes, implica para la Campaña una ruptura definitiva que aclara la divergencia de proyectos ideológicos y de las estrategias necesarias para avanzarlos.

Bibliografía

- Alonso, Jorge. 2010. Las Convergencias, Instrumento de los Movimientos Sociales. In *Primer Coloquio In Memoriam Andrés Aubri*. San Cristóbal de las Casas: CIDECI.
- ALOP. 2009. *Mito y Realidad de la Ayuda Externa*. Asociación Latinoamericana de Organizaciones del Desarrollo. México: ALOP.
- Álvarez-Buylla, Elena. 2002. Aspectos Ecológicos, Biológicos y de Agrobiodiversidad de los Impactos del Maíz Transgénico, editado por CCA: Documento preparado para el reporte de la CCA sobre los efectos del maíz transgénico en México.
- . 2004. Aspectos Ecológicos, Biológicos y de Agrobiodiversidad de los Impactos del Maíz Transgénico. In *Alimentos Transgénicos. Ciencia, Ambiente y Mercado: un Debate Abierto*. Editado por J. M. Rubio. México: Siglo XXI.
- Andrews, Kenneth T. y Bob Edwards. 2004. Advocacy Organizations in the U.S. Political Process. *Annual Review of Sociology* 30:479-506.
- Arditi, Benjamin. 2005. *¿Democracia Post-Liberal? El Espacio Político de las Asociaciones*. Editado por B Ardití. Barcelona: Anthropos.
- Averill, James. 1980. A Constructivist View of Emotion In *Emotion: Theory, Research and Experience*, Editado por R. Plutchik y H. Kellerman. New York: NY Academic Press.
- Balser, Joann Carmin y Deborah B. 2002. *Selecting Repertoires of Action in Environmental Movement Organizations: An Interpretive Approach*. *Organization and Environment* 15 (4):365-388.
- Barkin Rappaport, David. 2003. La Soberanía Alimentaria: El Quehacer del Campesinado Mexicano. *Estudios Agrarios* 3 (22).
- Bartra, Armando. 1985. *Los Herederos de Zapata. Movimientos Campesinos Posrevolucionarios en México*. Mexico, D.F: ERA.
- . 2000. Sur Profundo. In *Crónicas del Sur: Utopías Campesinas en Guerrero*, Editado por A. Bartra. Mexico: ERA.
- . 2003. Los Ríos Crecidos: Rústicas Revueltas del Tercer Milenio. *Cuadernos Agrarios ¡El Campo No Aguanta Más! (Número Especial)*:13-26.
- . 2004. Rebellious Cornfields: Toward Food and Labour Self-Sufficiency. In *Mexico in Transition: Neoliberal Globalism, the State and Civil Society*, Editado por G. Otero. Londres: Zed Books.

- . 2004. *Rebellious Cornfields: Towards Food and Labour Self-sufficiency*. In *Mexico in Transition: Neoliberal Globalism, the State and Civil Society*, Editado por G. Otero. Londres: Zed Books.
- Bartra, Armando y Gerardo Otero. 2008. *Movimientos Indígenas Campesinos en México: la Lucha por la Tierra, la Autonomía y la Democracia*. In *Recuperandola Tierra. El Resurgimiento de Movimientos Rurales en África, Asia y América Latina.*, Editado por Sam Moyo y P. Yeros. Buenos Aires: CLACSO.
- Beaucage, Pierre. 2007. *Zapatismo, Iglesia, ONG en Chiapas: La Construcción de un Nuevo Imaginario de lo Indio*. *Revista del Centro de Estudios Superiores de América Latina* 10 (8):75-94.
- Bebbington, Anthony. 2004. *Donor-NGO Relations and Representations of Livelihood in NGOs and Governmental Aid Chains*. *World Development* 33 (6):937-950.
- . 2008. *Social Movements and the Dynamics of Rural Development in Latin America*. *World Development* 36 (2).
- Bello, Walden. 2002. *The Oxfam Debate: From Controversy to Common Strategy*. *Focus on the Trade* 6 (78).
- Bendaña, Alejandro. 2006. *NGOs and Social Movements. Civil Society and Social Movements*. *Programme Paper UNRISD* (22).
- Benford, Robert y David Snow. 1988. *Ideology, Frame Resonance and Participant Mobilization*. *International Movement Research* 1:197-217.
- . 2000. *Framing Processes and Social Movements. An Overview and Assessment*. *Annual Review of Sociology* 26:611-639.
- Berkhout, Remko. 2010. *The Dynamics of NGO Collaboration, Civil Society Building In Civil Society Building Knowledge*, Editado por H. I. f. C.-o. w. D. Countries. Netherlands: Humanist Institute for Co-operation with Developing Countries.
- Berrios Navarro, Pilar y Manuel Canto Chac. 2007. *Nuevos Enfoques, Nuevos Actores del Desarrollo Social*. Editado por la Universidad Autónoma Metropolitana. México: UAM.
- Borras Jr, Saturnino M. 2008. *Re-examining the "Agrarian Movement-NGO" Solidarity Relations Discourse*. *Dialect Anthropology* (32):203-215.
- Brewer, Marilyn B. 2001. *The Many Faces of Social Identity: Implications for Political Psychology*. *Political Psychology* 22 (1):115-125.
- Buechler, Steven M. 1996. *Social Movements Perspectives and Issues*. In *Social Movements Perspectives and Issues*. Editado por Steven Buechler y S. Cylke.

New York: McGraw-Hill.

- Calva, José Luis. 1988. La Economía Nacional y la Agricultura de México a Tres Años de Operación del TLCAN. In *TLC y Agricultura ¿Funciona el Experimento?*, Editado por Rita Schwentesius. y. M. Gómez. México: Universidad Autónoma de Chapingo.
- Canto Chac, Manuel. 1998. *De lo Cívico a lo Público. Una Discusión de las Organizaciones Civiles. Red Mexicana de Investigadores sobre Organizaciones Civiles*. Editado por CESC-A.C. México.
- . 2002. Las Organizaciones Civiles en la Transición. In *La Sociedad Civil ante la Transición Democrática*, Editado por L. Álvarez. México: Plaza y Valdés.
- Carton de Grammont, Hubert y Horacio Mackinlay. 2006. Las Organizaciones Sociales Campesinas e Indígenas frente a los Partidos Políticos y el Estado. *Revista Mexicana de Sociología* 68 (4):693-739.
- Quist D. e Ignacio Chapela. 2001. Transgenic DNA Introgressed Into Traditional Maize Landraces in Oaxaca, Mexico. *Nature* (414):541-573.
- Concheiro B Luciano, María Tarrío G y Sergio Grajales. 2007. El TLCAN al Filo de la Navaja: Notas para una Propuesta de Renegociación. *Revista de Estudios Sociales y Humanísticos* 5 (2):103-126.
- De Ita Rubio, Ana. 2004. Maíz Transgénico en México: Apagar el Fuego con Gasolina. In *Alimentos Transgénicos. Ciencia, Ambiente y Mercado: un Debate Abierto*, Editado por J. M. Rubio. México: Siglo XXI.
- De la Cueva, Héctor. 2003. La Batalla de Cancún: Balance de una Victoria. *OSAL* 4 (2):281-3297.
- Diani, Mario. 1992. The Concept of Social Movement. *Sociological Review* 40 (1):1-25.
- Diaz-Polanco, Héctor y Consuelo Sánchez. 2002. *México Diverso. El Debate por la Autonomía*. Editado por Siglo XXI. México.
- Donagan, A. 1987. *Choice: the essential element in human action*. New York: Routledge.
- Dreiling, Michael y Brian Wolf. 2001. Environmental Movement Organizations and Political Strategy: Tactical Conflicts over the NAFTA . *Organization and Environment* 14 (4):34:54
- Durán, Ramón Fernández. 1996. *La Explosión del Desorden*. Madrid: Fundamentos.
- Dussel, Enrique. 2010. Poder Político y Transformación de las Instituciones. In *Primer Coloquio Internacional In Memoriam Andrés Aubry*. San Cristobal de las Casas, Chiapas: CIDECI.

- Dyer A. George, J. Antonio Serratos-Hernández, Hugo R. Perales, Paul Gepts, Alma Piñeiro-Nelson, Elena Alvarez-Buylla. 2009. Dispersal of Transgenes through Maize Seed Systems in Mexico. *Plos one* (5).
- Eduards, Bob y Michael Foley. 2002. Social Movement Organizations Beyond the Beltway: Understanding the Diversity of one Social Movement Industry. *Mobilization* 8 (1):85-105.
- Ellingson, Stephen. 1995. Understanding the Dialectic of Discourse and Collective Action. *American Journal of Sociology* 101:100-144.
- Fahey, V.K. Narayanan and Liam. 1982. The Micro-Politics of Strategy Formulation. *Academy of Management* 7 (1):25-34.
- Fine, Gary Alan. 1995. Public Narration and Group Culture: Discerning Discourse in Social Movements. In *Social Movements and Culture*. Editado por Hank Johnston y B. Klandermans. Minnesota: University of Minnesota.
- Fisher, William F. 1997. Doing Good? The Politics and Antipolitics of NGO Practices. *Annual Review of Anthropology* 26:439-464.
- Fowler, Alan. 2000. NGO Futures: Beyond Aid: NGDO Values and the Fourth Position. *Third World Quarterly* 21 (4):589-603.
- Fox, Jonathan y Luis Hernández. 1992. Mexico's Difficult Democracy: Grassroots Movements, NGOs, and Local Government. *Alternatives* 17 (2):165-208.
- Freeman, Jo. 1982. A Model for Analyzing the Strategic Options of Social Movement Organizations. Disponible en <http://www.uic.edu/orgs/cwluherstory/jofreeman/socialmovements/analyzesoc.htm>.
- Frijda, N. H. 1986. *The Emotions*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Fritscher, Magda. 2002. Del Estatismo al Libre Comercio: los Dilemas del Sector Agrícola en México. *Estudios Sociedades e Agricultura*. 3 (19):146-171.
- Gamson, Charlotte Ryan y William. 2006. The Art of Reframing Political Debates. *Contexts* 5 (1):12-20.
- Gamson, William A. 1988. Political Discourse and Collective Action. In *From Structure to Action: Social Movement Participation Across Cultures*. Editado por Bert Klandermans, H. Kriesy y S.Tarrow. Greenwich: JAI Press.
- . 1991. Commitment and Agency in Social Movements. *Sociological Forum* 6 (1):27-50.
- . 1995. Constructing Social Protest. In *Social Movements and Culture*. Editado por J. a. Klandermans. Minnesota: University of Minnesota.
- Ganz, Marshall. 2000. Resources and Resourcefulness: Strategic Capacity in the

- Unionization of California. *The American Journal of Sociology* 105 (4):1003-1062.
- Garner, Roberta. 1996. *Contemporary Movements and Ideologies*. New York: McGraw Hill.
- Gerlach, Luther. 1999. The Structure of Social Movements: Environmental Activism and its Opponents. In *Waves of Protest: Social Movements Since the Sixties*. Editado por Jo Freeman y V. Johnson: Rowman and Littlefield.
- Goncalves, Carlos Porto. 2001. *Geo-Grañas. Movimientos Sociales, Nuevas Territorialidades y Sustentabilidad*. México: Siglo XXI.
- González Figueroa, Gerardo. 2002. Sociedad Civil, Organismos Civiles y Movimientos Populares en Los Altos y a Selva de Chiapas. UAM-Xochimilco, México.
- González Figueroa, Gerardo. 2004. De Gulliver a Cencicienta. ONG Chiapanecas y e Conflicto Armado de 1994. Anuario del CESMECA-UNICACH. Chiapas.
- Goodwyn, James, Jasper J. y Polleta F. 2001. Introduction: Why Emotions Matter. In *Passionate Politics: Emotions and Social Movements*, Editado por James Goodwyn, J. Jasper y F. Polleta. Chicago: University Press of Chicago.
- Gordon, Sara. 1997. La Cultura Política de las Organizaciones No Gubernamentales en México. *Revista Mexicana de Sociología* 59 (1):53-67.
- Gusfield, Joseph R. 1966. Functional Areas of Leadership in Social Movements. *Sociological Quarterly* 7 (2):137-156.
- Harnecker, Marta. 1999. *Haciendo Posible lo Imposible. La izquierda en el Umbral del Siglo XXI*. México: Siglo XXI.
- Hernández Navarro, Luis 1995. Notas sobre las ONGs, la Democracia y el Desarrollo. *El Cotidiano* (71).
- Hunt, Scott, Robert Benford y David Snow. 1998. Marcos de Acción Colectiva y Campos de Identidad en la Construcción Social de los Movimientos. In *Los Nuevos Movimientos Sociales. De la Ideología a la Identidad*, Editado por Enrique Laraña y J. Gusfield. Madrid: CIS.
- Hunt S., R. Benford y D. Snow. 1994. Identity Fields: Framing Processes and the Social Construction of Movement Identities. In *New Social Movements: From Ideology to Identity*, Editado por Enrique Laraña, H. Johnston y J. Gusfield. Philadlphia: Temple Press.
- Ibarra, Pedro. 2005. *Manual de Sociedad Civil y Movimientos Sociales, Serie Ciencias Políticas*. España: Edit. Síntesis.
- Jasper, James M. 1998. The Emotions of Protest: Affective and Reactive Emotions in and Around Social Movements. *Sociological Forum* 13 (3):397-424.

- Jo Reger, Daniel J. Myers, Rachel Einwohner. 2008. Introduction. In *Identity Work in Social Movements*. Editado por Jo Reger, D. Myers y R. Einwohner. Minnesota: Minnesota University Press.
- Johnston, Hans. 1995. A Methodology for Frame Analysis: From Discourse to Cognitive Schemata. In *Social Movements and Culture*, Editado por Hank Johnston y B. Klandermans. Minnesota: University of Minnesota.
- Johnston, Hank. 1995. A Methodology of Frame Analysis: From Discourse to Cognitive Schemas. In *Social Movements and Culture*, Editado por Hank Johnston y B. Klandermans. Minnesota: University of Minnesota Press.
- Kane, Anne. 1997. Theorizing Meaning Construction in Social Movements: Symbolic Structures and Interpretation During the Irish Land War. *Sociological Theory* 15:249-276.
- Klandermans, Bert. 1992. The Social Construction of Protest and Multiorganizational Fields. In *Frontiers in Social Movement Theory*, Editado por A. D. Morris y C. M. Mueller. New Haven: Yale University Press.
- . 1993. A Theoretical Framework for Comparisons of Social Movement Participation. *Sociological Forum* 8 (3):383-402.
- Kokogiannis, Kostas. 2010. Researching the Emotions in Social Movements: Do the Emotional Experiences Amplify the Action for Change. In *Transforming Researching Communities*. Seville, Spain: European Society for Research on Education of Adults.
- Lister, Sarah. 2003. Legitimacy: Technical Issue or Social Construct *Critique of Anthropology* 2 (23):175-198.
- Lofland, John. 1996. *Social Movement Organizations. Guide to Research on Insurgent Realities*, Aldine de Gruyter Series of Text and Monographs. New York: Aldine de Gruyter.
- Mackinlay, Horacio y Gerardo Otero. 2004. State Corporatism and Peasant Organizations: Towards New Institutional Arrangements. In *Mexico in Transition: Neoliberal Globalism, the State and Civil Society*, Editado por G. Otero. Londres: Zed Books.
- Mackinlay, Horacio y Juan de la Fuente. 1996. Pronasol y el Campo: ¿Un Viraje Motivado por los Sucesos de Chiapas? In *ChiaPaz y la transición democrática: libertad, justicia, democracia*, Editado por Grupo Parlamentario del PRD. México: Cámara de Diputados.
- Mahoney, James. 2004. Comparative-Historical Methodology. *Annual Review of Sociology* 30:81-101.
- Marielle, Catherine y Lizy Peralta. 2007. *La Contaminación Transgénica del Maíz en México. Luchas Civiles en Defensa el Maíz y de la Soberanía Alimentaria*. México: Grupo de Estudios Ambientales A.C.

- Marrullo, Sam. 1988. Leadership and Membership in the Nuclear Freeze Movement: A Specification of Resource Mobilization Theory. *The Sociological Quarterly* 29 (3):407-427.
- Martínez-Torres, María Elena y Peter M. Rosset. 2010. La Vía Campesina: the Birth and Evolution of a Transnational Social Movement. *The Journal of Peasant Studies* 37 (1):149-175.
- McCarthy, John D. y Mayer N. Zald. 1977. Mobilization and Social Movements: A Partial Theory. *The American Journal of Sociology* 82 (6):1212-1241.
- McCarthy John D., Mark Wolfson. 1996. Resource Mobilization by Local Social Movement Organizations: Agency, Strategy and Organization in the Movement Against Drinking and Driving. *American Sociological Review* 61:1070-1088.
- McAdam, Doug, John D. McCarthy y Mayer N. Zald. 1996. *Comparative Perspectives on Social Movements: politica Opportunity, Mobilizing Structures and Cultural Framings*. New York: Cambridge University Press.
- McAfee, Kathleen. 2008. Beyond Techno-Science: Transgenic Maize in the Fight Over Mexico's Future. *Geoforum* (39):148-160.
- McCarthy, Bob Edwards y John D. 2004. Strategy Matters: The Contingent Value of Social Capital in the Survival of Local Social Movement Organizations. *Social Forces* 83 (2):621-651.
- Melucci, Alberto. 1995. The Process of Collective Identity. In *Social Movements and Culture*, Editado por H. J. y. B. Klandermans. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- . 1999. *Acción Colectiva, Vida Cotidiana y Democracia*. México D.F: El Colegio de México.
- Meyer David S., Nancy Whittier. 1994. Social Movement Spillover. *Social Problems* 41 (2):277-301.
- Meyer David S., Suzanne Staggenborg. 2008. Thinking About Strategy. In *Annual Meeting of the American Sociological Association*. Boston.
- Mirtafab, Faranak. 1997. Coqueteando con el Enemigo. Desafíos de las ONGs para el Desarrollo y el Empoderamiento. *Sociedad Civil. Análisis y Debates* 2 (1).
- Narayanan V.K., Liam Fahey. 1982. The Micro-Politics of Strategy Formulation. *The Academy of Management Review* 7 (1):25-34.
- Oberschall, Anthony. 1973. *Social Conflicts and Social Movements*. New Jersey: Prentice-Hall Inc.
- Olson, Mancur. 1965. *The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory*

of Groups: Harvard University Press.

- Olvera, Alberto. 2007. Notas Sobre la Participación Ciudadana desde la Óptica de las Organizaciones de la Sociedad Civil. In *Agenda Ciudadana de Políticas Públicas para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil*. Editado por F. Hevia. México: INCIDE Social.
- Ortiz-García, S., Exequiel Ezcurra, B. Schoel, F. Acevedo, J. Soberón y A.A snow. 2006. Transgenic Maize in Mexico. *BioScience* 56 (9).
- Petras, James. 2007. Debate sobre las ONGs parte IV. ONGs y Movimientos Sociopolíticos. *Rebelión* Abril (71).
- Petras, James y Henry Veltmeyer. 2000. *The Dynamics of Social Change in Latin America*. Londres: Mc Millan.
- Polletta Francesca , James M. Jasper. 2001. Collective Identity and Social Movements. *Annual Review of Sociology* (27):283-305.
- Rabotnikof, Nora. 2002. Sociedad Civil: Cambio Político y Cambio Conceptual. In *La Sociedad Civil ante la Transición Democrática*, Editado por Lucía Álvarez. México: Plaza y Valdés.
- Reger, Joanne y Suzanne Staggenborg. 2006. Cycles of Activism in Local Movement Organizations: Organizational Strategies in the National Organization for Women. In *Annual Meeting of the American Sociological Association*. Atlanta Hilton Hotel.
- Reygadas Robles Gil, Rafael. 2002. Retos en el Horizonte de las Organizaciones Sociales en México. In *La Sociedad Civil ante la Transición Democrática*. Editado por Lucía Álvarez. México: Plaza y Valdés.
- . 2006. Abriendo Veredas. Publicado en: http://vinculando.org/sociedadcivil/abriendo_veredas/ (Accesado el 10 de marzo del 2011).
- Reygadas Robles, Rafael. 2005. Aportes de las Organizaciones Civiles al Desarrollo Local. *Revista Electrónica Futuros* 3 (11):22-27.
- Ribeiro, Silvia. 2004. El Día que Muera el Sol. *Biodiversidad* (41).
- Robles, Evangelina. 2007. Folleto del Maíz. In *Cuadernos Internos de Discusión Colectivo COA*. Guadalajara.
- Rojas, Carlos Aguirre. 2010. *Movimientos Antisistémicos: Pensar lo Antisistémico en los Inicios del Siglo XXI*. México: Ediciones Prohistoria.
- Rosset, Peter. 2010. La Guerra por la Tierra y el Territorio. In *Primer Coloquio Internacional In Memoriam Andrés Aubri*, Editado por Centro de Derechos Indígenas. San Cristóbal de las Casas: CIDECI.

- Rosset, Peter y María Elena Martínez. 2004. Camino a Cancún. In *OMC, Estación Cancún: El Descarrilamiento*, Editado por CECCAM-UNORCA. México.
- Rubio, Blanca. 1996. Las Organizaciones Independientes en México: Semblanza de las Opciones Campesinas ante el Proyecto Neoliberal. In *Neoliberalismo y Organizaciones Sociales en el Campo Mexicano*, Editado por Hubert Carton de Grammont. Mexico: UNAM/Plaza y Valdés.
- . 2003. *Explotados y Excluidos, los Campesinos Latinoamericanos en la Fase Agroexportador Neoliberal*. México: Plaza y Valdés.
- . 2006. Territorio y Globalización en México ¿Un Nuevo Paradigma Rural? *Comercio Exterior* 56 (12).
- Ruiz Hernández, Margarito y Areceli Burguete Cal Y Mayor. 2003. *Derechos y Autonomía Indígena, Veredas y Caminos de un Proceso. Una Década 1988-1988*. Editado por la Comisión Nacl de Derecho Indígena. México: CNDI.
- Salinas Callejas, Edmar. 2003. Balance General del Campo Mexicano. *El Cotidiano* (124).
- Sánchez Albarrán, Armando. 2004. Del Movimiento ¡El Campo No Aguanta Más! A las Movilizaciones Sociales en la Cumbre de la OMC en Cancún. Dependencia o Soberanía Alimentaria: Esa es la Cuestión...Agraria. *El Cotidiano* (124).
- Sánchez, Consuelo. 1998. Los Pueblos Indígenas: del Indigenismo a la Autonomía. México D.F: Siglo XXI
- Scholte, Jan Aart. 1996. The Geography of Collective Identities in a Globalizing World. *Review of International Political Economy* 3 (4):565-607.
- Serna, Eva, Alejandra Valero y Lucio Díaz. 2010. De Sobrevivientes y Guardianes. Luchas Campesinas en México. *Revista Rebeldía* (68):24-38.
- Sewell, William H. 1996. Historical Events as Transformations of Structures: Inventing Revolution at the Bastille. *Theory and Society* 25 (6):841-881.
- Smithey, Lee Alan. 2002. Strategic Collective Action and Collective Identity Reconstruction: Parading Disputes and Two Northern Ireland Towns, Faculty of the Graduate School, University of Austin Texas, Texas.
- Smithey, Lee A. 2010. Social Movement Strategy, Tactics and Collective Identity. *Sociology Compass* (3):658-671.
- Sogge, David y Gisela Dütting. 2010. The Dynamics of NGO Collaboration. In *Civil Society Building Knowledge Programme*, Editado por Humanist Institute for Co-operation with Developing. Countries. Holanda.
- Staggenborg, Aldon Morris y Suzanne. 2002. Leadership in Social Movements. In *The Blackwell Companion to Social Movements*, Editado por David A. Snow, H. Kriesi: Blackwell Publishing.

- Staggenborg, Jo Reger y Suzanne. 2006. Patterns of Mobilization in Local Movement Organizations: Leadership and Strategy in Four National Organization for Women Chapters. *Sociological Perspectives* 49 (3):297-323.
- Staggenborg, Suzanne. 1998. Social Movement Communities and Cycles of Protest: The Emergence and Maintenance of a Local Women's Movement. *Social Problems* 45 (2):180-204.
- Stockemer, Daniel. 2009. Explaining the Membership and Trajectories of Social Movement Organizations: A Comparative Study between Germany and France, Political Science, University of Connecticut, Connecticut.
- Stoecker, Randy. 1995. Community, Movement, Organization: The Problem of Identity Convergence in Collective Action. *The Sociological Quarterly* 36 (1):111-137.
- Suárez Carrera, Víctor. 2008. Políticas Públicas para la Agricultura Mexicana con Base en el Consenso y la Certidumbre: el Caso de la Ley de Planeación para la Soberanía y la Seguridad Agroalimentaria y Nutricional. , Departamento de Economía Agrícola, Universidad Autónoma de Chapingo, México.
- Tilly, Charles. 1999. From Interactions to Outcomes in Social Movements. In *How Social Movements Matter*, Editado por Marco Giugni, D. McAdam y Ch. Tilly. Minnesota: University of Minnesota.
- Touraine, Alain. 2000. *¿Podremos Vivir Juntos?* México: Fondo de Cultura Económica.
- Turner, John.C. 1985. Social Categorization and the Self Concept: A Social-Cognitive Theory of Group Behaviour. En *Advances in Group Processes: Theory and REsearch.*, Editado por E. J. Lawler. Greenwich: JAI Press.
- Veltmeyer, Henry. 2004. Civil Society and Social Movements, Editado por United Nations Research Institute for Social Development: UN.
- . 2004. Civil Society and Social Movements. The Dynamics of Intersectoral Alliances and Urban-Rural Linkages in Latin America. In *Civil Society and Social Movements*, Editado por United Nations Research Institute for Social Development: UN.
- Vera Herrera, Ramón. 2005. En Defensa del Maiz (y el futuro): una Autogestión Invisible. In *Informe Especial*, Editado por P. d. I. Américas. Silver City, NM: Interhemispheric Resource Center.
- Villareal, Nelson. 2000. Las ONG y las Políticas Públicas. *La Onda Digital* (19).
- Villaseñor, Elio. 2006. *La Sociedad Civil como Actor de Interés Público. Experiencias y Reflexiones.* México: Deca Equipo Pueblo.
- Wadell, Neil and Ed Cairns. 1986. Situational Perspectives on Social Identity in

Northern Ireland. *British Journal of Social Psychology* 25:25-31.

Whaites, Alan. 2000. *NGO Challenges and Ambiguities*. Editado por A. Whaites. Seattle: World Vision.

Wolf, Michael Dreiling y Brian. 2001. Environmental Movement Organizations and Political Strategy: Tactical Conflicts Over NAFTA. *Organization and Environment* 14 (1):34-54.

Wyatt, Marilyn. 2004. *A Handbook of NGO Governance*. Place Published: European Center for Not-for-Profit Law (accessed).

Yúñez-Naude, Antonio. 2000. Efectos de la Desaparición de la CONASUPO en el Comercio y los Precios de los Cultivos Básicos. *Estudios Económicos* 15 (2).

Zurita, Úrsula. 2006. La Experiencia Reciente de las ONG Mexicanas de Derechos Humanos. *Defensor* Número Especial: Democracia y Derechos Humanos (6).

Glosario

AMAP Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos

AMUCSS Asociación Mexicana de Crédito del Sector Social

ANC Acuerdo Nacional para el Campo

ANEC Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras

ANIPA Asamblea Nacional Plural por la Autonomía

BID Banco Interamericano de Desarrollo

BM Banco Mundial

CAP Consejo Agrario Permanente

CASIFOP Centro de Análisis Social, Información y Formación Popular

CCA Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte

CECCAM Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano A.C

CENAMI Centro Nacional de Misiones Indígenas

CEOIC Consejo Estatal de Organizaciones Indígenas y Campesinas

CIBIOGEM Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados

CIOAC Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos

CNA Congreso Nacional Agropecuario

CNC Confederación Nacional Campesina

CNOC Consejo Nacional de Organizaciones Cafetaleras

CNPA Coordinadora Nacional Plan de Ayala

CNPI Consejo Nacional de los Pueblos Indios

CNI Congreso Nacional Indígena

CNPI Consejo Nacional de los Pueblos Indios

COCOPA Comisión para la Concordia y la Pacificación

CODUC Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas

CONABIO Comisión Nacional para la Biodiversidad

CONOC Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas

CONPAZ Coordinación de Organizaciones no Gubernamentales por la Paz

ESPAZ Espacio para la Paz en Chiapas

EZLN Ejército Zapatista de Liberación Nacional

FAO Food and Agriculture Organization/Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación

FMI Fondo Monetario Internacional
FDCCh Frente Democrático Campesino de Chihuahua
FNDCM Frente Nacional en Defensa del Campo Mexicano
GEA A.C Grupo de Estudios Ambientales A.C
GRAIN Genetic Resources Action International
Grupo ETC Grupo de Acción contra la Erosión, Tecnología y Concentración
LBIORG Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados
MAIZ Movimiento Agrario Indígena Zapatista
MAREZ Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas
MECNAM Movimiento el Campo No Aguanta Más
OMC Organización Mundial del Comercio
ORAB Organización Regional de Agricultores Biológicos de Oaxaca
PROCEDE Programa de Certificación de Derechos Ejidales
Red Mocaf Red Mexicana de Organismos Campesinos Forestales
RMALC Red Mexicana de Acción Contra el Libre Comercio
SAGARPA
TLCAN Tratado de Libre Comercio de América del Norte
UCCS Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad
UNOFOC Unión Nacional de Organizaciones de Forestería Comunitaria
UNORCA Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas
UNOSJO Unión de Organizaciones de la Sierra de Juárez, Oaxaca